Trust
El valor de la confianza

Diseño, construcción e implementación de escenarios subregionales

Documento elaborado para ECOPETROL S.A

Contrato No. 5213126

Diciembre 2014

Los escenarios subregionales y sus Narrativas

Resumen Ejecutivo

Tabla de Contenido

I. LAS NARRATIVAS 4
1. CAQUETA 5
2. CASANARE 16
3. CATATUMBO 26
4. COVEÑAS 36
5. GUAJIRA 47
6. MAGDALENA MEDIO 57
7. META 69
8. NARIÑO 80
9. PUTUMAYO 90
10. REGION DEL SARARE 100
11. VICHADA 110
II. LOS ESCENARIOS POR SUBREGION 121
SUBREGION CAQUETA 122
SUBREGION CASANARE 133
SUBREGION CATATUMBO 152
SUBREGION COVEÑAS 165
SUBREGION GUAJIRA 177
SUBREGION MAGDALENA MEDIO 186
SUBREGION META 203

PRESENTACION

Estas crónicas son en gran parte ciencia ficción como toda historia que se quiera contar sobre el futuro. Son producto del conocimiento, la inteligencia y el aporte de personas de múltiples procedencias, con distintas vocaciones e intereses diversos así como de estudios e investigaciones que consultan fuentes directas y acreditadas. El diálogo de esos saberes, en once regiones del país hace posible inferir, con algún grado de certeza, rasgos de su porvenir. Y también ayuda a reconocer las grandes incertidumbres que hay tras la espesa bruma de lo desconocido y de lo imprevisible.

Los que corren en Colombia son tiempos de transición. Como viajando en un tren bala aunque no se perciba desde la cabina, se va a velocidad de vértigo. Poco puede hacerse para controlar la propulsión, por lo que es necesario identificar las palancas que permiten gobernar el rumbo, o al menos no descarrilarse antes que se imponga. Ir al futuro deja ver el tren en panorámica y en el contexto de los múltiples caminos que, imbricados en la encrucijada del presente, pueden conducir o pueden alejar de las metas esperadas.

Desde el aquí y el ahora, la llave que abrió la puerta a esa reflexión fue una pregunta: "¿Cuáles son los desafíos que tendremos que enfrentar, durante los próximos 15 años, en la transición hacia un eventual fin del conflicto armado?" Ese cuestionamiento, que invita de inmediato a más preguntas, retó las propias convicciones, permitiendo la imposición de las incertidumbres sobre los deseos. Hecha esa misma pregunta en cada una de las regiones, sus respuestas han permitido establecer mucho de lo que podrá ser común y al mismo tiempo de lo que serán las diferencias.

Los "pasados" aquí descritos en breves historias contadas desde el 2030, no buscan configurar el futuro deseado, no son prospectivas. Son más bien notas de cronistas que solo intentan narrar, en lenguaje parroquiano, lo que ven por el retrovisor de lo que para entonces será el pasado. Consignan los futuros posibles, más no los deseables.

Para cada región se narran tres historias. En su orden, la primera define un escenario de finalización del conflicto armado en el que mejoran las condiciones de gobernabilidad y desarrollo; la segunda describe la historia de la finalización del conflicto armado, pero con un deterioro de las condiciones de gobernabilidad y desarrollo, y la tercera, con los principales rasgos de la coyuntura da cuenta de un escenario en el que sin finalizar el conflicto se mejoran de manera progresiva esas condiciones.

Poner fin o no al conflicto armado por la vía del diálogo es una variable crítica para Colombia y su futuro. También lo es crear o no mejores condiciones de gobernabilidad y desarrollo

en las regiones. La encrucijada de estos caminos ofrece para cada región los futuros aquí descritos.

Además de poner un punto común en el horizonte de los líderes de estas regiones, la mayor contribución de este ejercicio es identificar algunas de las fuerzas que determinarán el futuro; aquellos factores que actuarán como agentes causantes o condicionantes del camino hacia adelante. Anticipando la calma o las tormentas se podrá equipar mejor la nave y sus tripulantes estarán más dispuestos y preparados.

Más allá de neutralizar a los grupos insurgentes, por la razón o por la fuerza, los grandes determinantes de un postconflicto que se encamine hacia la construcción de una paz estable y duradera son otros. Por mencionar los desafíos más recurrentes en las regiones de Colombia pueden listarse los siguientes: la resolución de los conflictos entre centro y "periferias"; la legitimación del Estado en las poblaciones; la transparencia y eficacia de las instituciones, la superación del desarraigo, la desorganización y la baja representación comunitaria; el aislamiento y el déficit de infraestructura de movilidad y conectividad, o la usurpación de las funciones de Estado por parte de grupos ilegales.

Ecopetrol quiso prender esta linterna en la penumbra por una razón obvia y contundente. La obtención de sus objetivos y el logro de sus metas dependerán en mucho de las condiciones del camino. Ver de él lo que se puede, y sospechar de él lo que no se ve, asegura que se irá más y mejor dotado de lo que se requiere para recorrerlo. Y eso aplica para todo aquel que, como la Empresa, vincule su destino al destino de estas regiones.

Se trata de territorios, vale decirlo, que además de la riqueza de su gente y de sus recursos, se caracterizan por haber sufrido gravemente los rigores del conflicto armado. En ellos mucho de lo que ocurre trasciende las fronteras de la actividad del Estado.

I. LAS NARRATIVAS

1. CAQUETA

"ARPA! QUE EL JOROPO ES LARGO Y LAS ALPARGATAS NUEVAS"

Con la firma de los acuerdos del proceso paz muchas cosas cambiaron en el Caquetá. Tantos años de abandono del Estado habían calado profundamente en el espíritu de los pobladores y lo primero que buscaron fue autonomía. Nadie mejor que las caqueteños para navegar los ríos del departamento y dirigir el timón de los bongos. El buen manejo de las regalías sirvió para tomar decisiones que beneficiaran no solo a los petroleros sino a la población civil. El incremento en los recursos financieros públicos y la buena rentabilidad que se percibía, sirvió para jalonear con integridad la región. Por fin se vio la plata cuando los cambios en infraestructura y en servicios públicos beneficiaron a todos.

Por las selvas y los caños, desde las montañas hasta la sabana se construyeron vías primarias, secundarias y terciarias alternativas y al pie de las carreteras también se veía el desarrollo de líneas de interconexión eléctrica propias. Cuando en las casas prendieron la luz, los departamentos vecinos y el Ecuador pudieron ver que estaba pasando en el Caquetá. Motivados por el cambio se dinamizó el comercio entre vecinos. La autonomía económica que había adquirido el departamento del mejor manejo de las regalías y de la distancia de las políticas agrícolas y económicas con las del Gobierno Central, permitió empezar las reivindicaciones sociales urgentes.

Los grupos insurgentes de Caquetá adhirieron al acuerdo de fin del conflicto armado. Las organizaciones estructuradas de los antiguos grupos armados se formalizaron en el trajinar de lo político. Los excombatientes pudieron poner sus cartas sobre la mesa a través de procesos electorales, en organizaciones de la sociedad, conformando gremios sectoriales o asociaciones de pobladores. Definieron una ruta y un mapa de transición con la Alta Consejería para la Reintegración y aprovecharon los tiempos de transición para participar en las elecciones locales. Los ex-guerrilleros lograron democráticamente obtener representación en la gobernación, las alcaldías y las instituciones del Gobierno. Los principales bastiones políticos de la ex-guerrilla son Cartagena, Montañita y San Vicente del Caguán.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y las Naciones Unidas acompañaron con esfuerzos de rehabilitación psicosocial los procesos de desarme y desmovilización. Como en la década del noventa cuando se reintegraron los

guerrilleros del M-19, el fin del conflicto armado abrió oportunidades a los nuevos desmovilizados, que centraron su agenda política en la educación, la salud y el empleo. Las Dirección General para la Reinserción y las agencias internacionales de cooperación apoyaron el proceso de reinserción mediante iniciativas de capacitación profesional. En 2030, los residentes del departamento ya no se definen como ex-guerrilleros o ex-paramilitares sino solamente como caqueteños. A pesar de las grandes diferencias que pudieran existir se concluyó que empuñando el azadón se sembraba y se cosechaba más que empuñando el fusil.

La colaboración de los grupos antes armados en el problema del cultivo y el tráfico de coca fueron muy importante. Promovieron la prohibición de cultivos ilícitos en Caquetá y apoyaron las instituciones de Estado para los procesos de erradicación del narcotráfico. La producción y la exportación se redujeron al mismo paso que la criminalidad, los índices de homicidios y la corrupción de políticos y funcionarios. Los caqueteños prefirieron plantar y trabajar proyectos agropecuarios alternativos que igual tenían un alto valor comercial. En vez de sembrar coca y cosechar sangre ahora florecían cultivos de hierbas aromáticas y cacao.

Con el caballo bien ensillado y las herraduras puestas, la situación atrajo nuevos inversionistas y mano de obra al departamento. Con la llegada de gente se fortaleció la identidad del colono caqueteño y aumentó el compromiso de lo público con las etnias indígenas por parte de los residentes. La presión de las poblaciones desplazadas en zonas urbanas fue disminuyendo y las guacamayas volvieron a los nidos y los caqueteños a sus tierras. El apoyo de las instituciones a las víctimas del conflicto se tradujo en capacitación, capital semilla para micro-empresas, restitución de tierras y soporte psicosocial. El retorno de familias desplazadas a sus regiones fue un pasó muy importante para ir reparando las fibras rotas del tejido social.

La presencia del Estado permitió organizar una explotación sostenible de los maderables sin consecuencias ambientales para la enorme riqueza que el departamento tiene en flora y fauna. Los logros en seguridad territorial permitieron desarrollar plantaciones comerciales de maderables nativos como el caucho y el cacao. Y es que pocos saben cuántos pájaros duermen en la selva. La penetración de agencias de protección del medioambiente fomentó la expansión del sistema de certificación de maderables del Forest Stewardship Council. Los empresarios de la madera que desarrollaban su actividad en armonía con el medio ambiente y con la comunidad percibieron precios superiores a los de los maderables sin certificación. Además se controló la deforestación que generaba la ganadería intensiva.

Cuando los caqueteños se empoderaron de su presente, diseñaron para el futuro una política agraria que específicamente representaba los intereses regionales. En

el piedemonte se remplazó la ganadería por varios tipos de agricultura que tenían mayor acceso al mercado gracias a las nuevas vías. La variedad de las actividades económicas generó más empleo y mayores ingresos para los pobladores. El encadenamiento productivo aumentó el PIB del departamento.

Los recursos financieros de las autoridades locales aumentaron y permitieron responder técnicamente al problema de la destrucción ambiental. En el 2013 contaron 66 mil kms2 de bosque caqueteño que fueron protegidos con la paciencia y el cariño del jardinero. Nadie se imaginó que la selva pudiera dar plata si se dejaba quieta, pero el sector industrial para compensar sus emisiones de gases pagó los "bonos de carbón".

Los guerrilleros tantos años andando la selva de noche aprendieron los caminos a las madrigueras de los tigres, la dirección del vuelo de las guacamayas y los claros de los ríos donde mejor se pescaba. Los programas de reinserción los convirtieron en guardabosques de las zonas donde antes se ubicaban. Con la multiplicación de las Reservas Naturales se generaron más empleos y los trámites para la protección de la figura ambiental se volvieron más fáciles. Dada la tranquilidad de los tiempos de paz y el mejoramiento de la seguridad en el Caquetá, investigó exhaustivamente la geología del departamento. Se revelaron muchos yacimientos de minerales. Los recursos naturales se aprovecharon siempre mirando al horizonte y construyendo los pasos necesarios para no desorientar el rumbo.

La importancia que se dio a la educación fue una de las bases para construir desarrollo integral y futuro caqueteño para el departamento. Los nuevos recursos públicos abrieron oportunidades de trabajo y ayudaron a tecnificar las actividades económicas tradicionales. El sistema de creencias y virtudes del ancestral conocimiento de los indígenas, aportó piezas muy importantes para la reconstrucción del tejido social. Los árboles más viejos y los ancianos son los que más han visto y de las arrugas de sus cortezas es de donde más se aprende. Los organismos de cooperación internacional ayudaron a desarrollar las vocaciones de sus profundos conocimientos en medicina y alimentos.

También se inició la comercialización en las grandes cadenas nacionales de distribución de productos naturales nativos. Así se fomentó la creación del sello de calidad "Bio nativo de Colombia". Esto sacó a la luz un negocio sostenible e inclusivo para las comunidades y también permitió mejor cuidado de las cuencas hídricas, la fauna y la flora de la región.

A las industrias extractivas les exigieron capacitar y emplear a los residentes y las políticas de "contenido local" promovieron las compras en el departamento. Al

promover las compras se generaron procesos productivos alrededor de los productos locales, el sentido de pertenencia aumentó y además, el Caquetá pudo autoabastecerse. Las mejoras en las condiciones de trabajo y todas las acciones públicas que trajo el posconflicto sirvieron de incentivo para que los jóvenes caqueteños no volvieran al fusil y a la cultura del narcotráfico.

La firma de los acuerdos de Paz y la ejecución de las políticas del posconflicto fueron los vientos necesarios para que la flauta del Caquetá volviera a sonar en armonía con la selva. Los caqueteños tomaron las decisiones en la algarabía de las guacamayas y los micos y en la sabiduría de las ceibas y los helechos. Nunca más el silencio del Estado les quitó las palabras de la boca."

"A LA SOMBRA DE LOS BUENOS, VIVEN LOS MALOS"

Las expectativas de los pobladores del Caquetá y los combatientes de los antiguos grupos armados tenían la altura del vuelo de las flechas. Pero la firma de los acuerdos de paz no estuvo acompañada de apoyo institucional, psicosocial o económico necesario. El gobierno había prometido incentivar el desarrollo regional pero no cumplió. Los índices de empleabilidad, satisfacción a las necesidades básicas y salvaguarda de los derechos se mantuvieron como si nada hubiera pasado. Y como las flechas cuando alcanzan vuelo, del tamaño de las expectativas fue el tamaño de las frustraciones.

El ingreso de capitales para actividades industriales productivas se enfrentó a la influencia socio-económica que los grupos armados habían promovido en las regiones. La gente no le creía a los privados y nuevamente se presentaron inconvenientes de orden público, movilizaciones de la población y ataques a las operaciones de las empresas.

Muchos de los desmovilizados decepcionados por la pérdida de sus ingresos, del estatus y el reconocimiento en varias partes de la población, integraron o constituyeron bandas criminales para no perder los viejos contactos y seguir manteniendo las redes de narcotráfico.

El fin del conflicto armado tampoco se acompañó de un mejoramiento de las condiciones de gobernanza del departamento y además falló en generar un mayor compromiso del colono caqueteño con su territorio. La población seguía sin saber del altísimo valor de los recursos ambientales y de la importancia de confiar y creer en el vecino.

Los grupos armados de extrema izquierda impusieron sus visiones políticas y económicas que construyeron grandes barreras, legales y técnicas, a las grandes inversiones productivas en el Caquetá. Las estructuras organizativas de los grupos armados se formalizaron en gremios sectoriales y asociaciones de la sociedad civil pero no pudieron promover la agenda política y la reforma económica.

A pesar de que los grupos armados ilegales desmovilizados apoyaron la prohibición de los cultivos ilícitos en el Caquetá firmada en el acuerdo "Solución al problema de las drogas ilícitas", los campesinos y pobladores no encontraron mejor negocio que el cultivo de coca. Sin otras opciones agrícolas se volvió a cosechar sangre.

Sin un desarrollo económico que mejorara la situación de la población y las necesidades básicas desatendidas, se multiplicaron los grupos armados que tenían nexos de producción y transporte de drogas. Por los ríos que se pensaba iba a bajar más pescado, seguían bajando las "voladoras" cargadas de coca y fusiles.

El departamento siguió desconectado del resto del país repitiendo las historias de antaño, la deficiente infraestructura vial mantuvo el silencio de las instituciones. La falta de inversiones que fomentaran la satisfacción de las necesidades de la sociedad aumentó el sentimiento de aislamiento de los caqueteños. Los líderes alzaron las banderas de la autonomía y la independencia de los intereses del gobierno en Bogotá.

Ni las instituciones ni las actividades económicas se repensaron con el fin del conflicto armado. Las regalías se seguían manejando igual, impidiendo el acceso a los recursos económicos de la nación para el desarrollo del departamento. Nadie coordinó ni controló el desembolso de regalías y los políticos corruptos se quedaron con la plata que hubiera servido para mejorar la infraestructura y la prestación de servicios públicos. Todo el mundo oía que el petróleo traía riqueza pero solo se veían salir los tubos del fondo de la tierra llevándose el oro negro porque no había carretera para que volviera nada.

La falta de oportunidades laborales, la ausencia de las instituciones y lo poco rentables que eran los proyectos sin tecnificar alimentaron la cultura mafiosa. De las vocaciones tradicionales y culturales de la tierra, en el caso por ejemplo de los indígenas solo fue quedando el recuerdo. Y las nuevas generaciones lo fueron olvidando.

El equilibrio del ecosistema se vio amenazado por la impunidad que favoreció la explotación indiscriminada de los recursos naturales, redujo las capacidades de las tierras agrícolas y mantuvo tasas insostenibles de deforestación.

El acuerdo de fin del conflicto armado impulsó una expansión de las actividades extractivas al 50% del territorio considerado apto para la exploración de petróleo. Sin nadie que supervisara el daño que se le estaba haciendo al medio ambiente, ni el daño social que generaban los proyectos no inclusivos, se mantuvo el impacto adverso para el desarrollo del departamento. El panorama fue el de la contaminación de los recursos hídricos, las migraciones laborales insostenibles y el aumento de la intermediación ilegal en la contratación de bienes, servicios y mano de obra.

Sin controles medioambientales de las instituciones a empresas privadas, y la falta de conciencia de la población frente a los daños irreparables de la deforestación

descontrolada, la posibilidad de poner sobre la misma mesa vocaciones productivas compatibles con esfuerzos de reforestación nunca aterrizó.

Las instituciones volaron independientes y desarticuladas y las políticas que explicaban las necesidades del medio ambiente se desemplumaron en el vuelo. El desorden sobre el rol de las instituciones y de los entes reguladores a las actividades económicas legales e ilegales fue la regla.

La explotación intensiva del piedemonte caqueteño, particularmente por la ganadería, siguió su desarrollo insostenible cortando monte para abrir potrero y alambrar. Nadie pensó que sí se podría acabar con muchas de las especies endémicas de la Amazonía. Y hasta el armadillo gigante y el mono araña se convirtieron en recuerdos. La explotación ilegal de maderables es decir cortar y robar árboles en zonas protegidas y de conservación fue la opción de los desplazados para construir sus casas y cocinar. La deforestación por siembra de cultivos ilícitos fue la gota que rompió el cántaro.

La violencia tampoco se redujo con el acuerdo político para el fin del conflicto armado y la concentración de poblaciones desplazadas en cascos urbanos siguió presionando para que se les solucionara el problema de la prestación de servicios públicos. El descontento de las poblaciones aumentó las estadísticas de delincuencia urbana.

A pesar de que se firmaron los acuerdos de Paz para darle fin al conflicto armado, las soluciones al conflicto social nunca llegaron porque no había carretera. La falta de políticas públicas de educación que propusieran un plan de desarrollo económico integral y la desatención a las necesidades sociales del departamento trajeron resultados negativos. Si antes agobiaba el silencio de las instituciones, ahora el silencio de la selvas sin plumas ni algarabía pesaba más en el espíritu de los caqueteños.

"DONDE SE SACA Y NO SE ECHA PRONTO SE ACABA LA COSECHA"

Cuando las negociaciones de Paz en la Habana se frustraron las Fuerzas Armadas recuperaron el territorio. Las ofensivas contra los grupos armados ilegales y la nueva articulación de las instituciones permitieron la llegada de inversiones privadas y un mayor apoyo de la cooperación internacional al departamento. Las expectativas antes de las negociaciones habían sido muy altas y los caqueteños no estaban dispuestos a perder otra vez.

Las nuevas dinámicas económicas regionales, fomentaron esquemas de micro-crédito para los campesinos que a su vez atrajeron guerrilleros y día a día disminuyeron las filas de la insurgencia. Las estructuras administrativas e institucionales del departamento se fortalecieron gracias a una mejor capacidad y recursos adicionales. El "vacío de Estado" que los grupos armados habían tratado de llenar en otra época, lo asumieron las instituciones.

Cuando las instituciones se reforzaron, las condiciones de salud, educación y satisfacción de necesidades básicas de la población aumentaron notablemente. Y la influencia de los grupos armados en las instituciones públicas también disminuyó con notoriedad.

Los refuerzos a la lucha contra la corrupción y la imposición del Estado de derecho fueron golpes duros contra las estructuras de narcotráfico en el Caquetá. Las instituciones acompañaron con capacitaciones, apoyo en la estructuración de cooperativas agropecuarias y préstamos el desarrollo de vocaciones productivas alternativas. Casi todas esas tierras y grandes superficies de cultivos ilícitos se convirtieron en planeaciones y cultivos legales. Además, la despenalización o legalización de la droga en varios países de América Latina impuso una competencia devastadora a los narcotraficantes de los países donde se prohibía como Colombia. Fueron muchos los factores que desarticularon el cultivo de coca y amapola en el departamento.

Cuando el departamento empezó un proceso de crecimiento integral y las instituciones respaldaron los intereses de los caqueteños el sentido de pertenencia y de arraigo en la región, hasta en los lugares más apartados de los centros tradicionales, creció también. El desarrollo regional y las mejoras en la

gobernabilidad fueron las pruebas de fe que convencieron a los caqueteños de volver a confiar en las instituciones. Cada vez menos gente se sintió atraída por los ideales de la guerrilla y se redujo la base social que los respaldaba.

A pesar de la falta de acuerdo en el fin del conflicto armado, el Caquetá tomó las riendas de su desarrollo económico y humano. Si el gobierno nacional había dejado las bestias ensilladas fue decisión de los caqueteños el rumbo que seguiría el departamento. Con apoyo de agencias internacionales la gente sintió que no necesitaba del gobierno regional ya que el departamento podía abastecerse a sí mismo. Bogotá se veía cada vez más lejos, más enclavada en la montaña y la relación de los pobladores con el Gobierno Central se volvió hostil.

Si bien las modificaciones al Sistema General de Regalías permitió que el departamento obtuviera más recursos de la nación y la buena relación entre las autoridades departamentales y el gobierno fue la responsable de las mejoras en la infraestructura vial y los servicios básicos, los líderes aprovecharon la buena situación para promover las banderas de lejanía y distancia con la capital.

La mentalidad de los colonos fue muy importante para recuperar las zonas que antes controlaban los alzados en armas. El apoyo al asociativismo permitió el desarrollo de clústeres productivos, y de construcción de infraestructura para el uso compartido de varios grupos de la población del departamento.

Cuando se recuperaron los territorios y se mejoraron de las condiciones de orden público se pudo explotar los recursos naturales del Caquetá. La riqueza mineral ya agropecuaria se utilizó en función del crecimiento de toda la región. Cada vez los grupos ilegales se fueron aislando más y los atentados a instalaciones industriales y los secuestros de personal se detuvieron.

La industria extractiva implementó buenas prácticas sociales, ambientales y económicas en línea con los estándares y las prácticas internacionales.

A pesar de la frustración en los acuerdos de paz, la población caqueteña se había unido a la movilización nacional que buscaba un mejor futuro para el país. Cuando los pobladores se dieron cuenta que podían rechazar pacíficamente el conflicto y que independientemente de lo que las FARC y el Gobierno dijeran el departamento podía crecer, la actitud frente a los actos violentos fue de rechazo. La presión que se había ejercido sobre la posibilidad de un futuro pacífico obligó a los grupos guerrilleros a definir una nueva política de prohibición de cortes maderables en zonas de conservación. Para todos los locales, sobre todo para los indígenas y colonos de la región, el tema de la protección del medio ambiente fue de suma

importancia y de gran cuidado. Los caqueteños bien sabían que si los monos araña y las guacamayas abandonaban el monte la soledad de la lejanía se sentirá más pesada.

Cuando los insurgentes se relegaron a zonas determinadas la deforestación por siembra de cultivos ilícitos se redujo y los territorios empezaron los procesos de reconversión económica de la ganadería a la siembra de maderas nativas de gran valor, de frutales y cultivos aromáticos. Los bosques del Caquetá siguieron siendo el refugio de la algarabía de los pájaros y los santuarios de la diversidad.

Cuando la seguridad mejoró sus riquezas naturales empezaron a brillar internacionalmente. Los ríos, las cuevas, los dibujos rupestres y el sinfín de especies de pájaros y de plantas convirtieron al departamento en un destino de ecoturismo. Este nuevo sector económico no solo empleaba a los locales que eran los que mejor conocían los caminos sino que ayudó a la protección de los bosques caqueteños.

La disminución de la violencia política bajó la presión de las poblaciones desplazadas en las zonas urbanas agobiadas. El Estado y la sociedad civil apoyaron a las víctimas de la violencia con capacitaciones, préstamos para empezar micro-empresas y soporte psicosocial. Las familias desplazadas retornaron a sus regiones y parcelas sin miedo a la oscuridad del camino.

Las inversiones económicas privadas y la presencia del Estado mejoraron los niveles de educación escolar, ocupacional y cívica. Cuando se crearon proyectos productivos comunitarios y la calidad de la educación se mejoró, comunidades indígenas y caqueteños se integraron en la construcción de un tejido social más profundo. Los pobladores del Caquetá a pesar de la frustración del proceso de Paz, se dieron cuenta que el azadón y la determinación sembraban más que el fusil y que se podía elegir entre cosechar sangre y cosechar frutos."

2. CASANARE

"DELE EL LLANO PA´ QUE CAMINE"

Con la firma de los acuerdos de Paz entre el gobierno nacional y las guerrillas sentimos el fresco de la tierra después de la lluvia. Con el horizonte limpio, vimos cuales eran nuestros problemas de fondo. Cuando madrugamos el gobierno, las empresas y la sociedad y nos sentamos en la mesa del respeto y la igualdad a compartir el café cerrero pudimos plantear entre todos las estrategias para abordar la llanura.

Desde Arauca bajaron los desmovilizados de las FARC y del ELN. Esta nueva condiciona alentó que movilizaciones ciudadanas, y nuevos y variados grupos sociales se incluyeran a la actividad política de la región. Cuando los frentes dejaron las armas y el camuflado, los empresarios locales de la mano del gobierno aportaron recursos para los procesos de reincorporación y reconciliación. El orden y la cultura local no se vieron afectados por la inclusión de excombatientes. Por el contrario los resultados que pudimos ver cuando abrían nuevas plazas de trabajo fueron alentadores y reconocidos a nivel nacional.

Las comunidades y las autoridades concluimos que para asegurar el éxito económico de la región había que acercar las asimetrías de poder, distribuir el capital como distribuíamos el tinto y asignar el gasto público como el dulce que no se gasta todo en el café sino que se guarda para la preparada. Surgieron nuevos líderes que fueron al Congreso en Bogotá llevando las banderas de representación para el Casanare y atención del fisco nacional para los intereses regionales.

Las expectativas de la sociedad casanareña se cumplieron cuando nos sentamos a participar en el dialogo social. Los nuevos voceros fomentaron el verdadero desarrollo social que implicaba la transformación de instituciones y la toma de decisiones en el respeto y la igualdad.

La firma del fin del conflicto trajo consigo proceso de reconstrucción de la verdad. Pudimos visibilizar la amistad de los paramilitares con los viejos políticos. Al ser conscientes de la importancia de nuestros votos pudimos ir eligiendo nuevos líderes y así paulatinamente ir depurando las instituciones. A mayor control y veeduría ciudadana les quedaba difícil quedarse con el pan y con el queso.

Cuando los grupos armados se desmovilizaron otros trataron de quedarse con los negocios que los lucraban. Se desato una lucha por el control de los negocios

ilegales que antes dominaban los frentes de la FARC. Varios ex movilizados se asociaron con carteles de drogas para seguir delinquiendo. Sin embargo la violencia en la región tiene que ver con la delincuencia común en los cascos urbanos y al mejorar nuestros índices de gobernabilidad es posible contener las acciones de los delincuentes.

El fin del conflicto nos concientizó sobre los mecanismos de participación no violentos: salimos más a movilizaciones sociales pacificas incrementando un mayor nivel de protesta. Los hechos de protesta contra la industria minero-energética disminuyeron cuando las instituciones y la sociedad civil nos concientizamos de la necesidad de "despetrolizar" la economía madurando otro tipo de proyectos. Clusters, proyectos de infraestructura y turismo fueron el fruto del nuevo tejido empresarial.

El turismo y nuevas industrias palmeras y ganaderas se convirtieron en los principales aportantes del PIB departamental. El SENA, las Universidades, la Cámara de Comercio del Casanare y otros actores se pusieron las pilas en formar capital humano. Es decir, empezamos a estudiar y profesionalizar nuestros oficios y la vocación de nuestras riquezas.

La lejanía de la sabana nos enseñó que podíamos construir a largo plazo. Cuando todos nos involucramos en el desarrollo y competitividad de la región, las nuevas ideas y la manera de desarrollarlas unificaron el horizonte. La fórmula para llegar más lejos sin cansar mucho el caballo era combinar innovación y sostenibilidad. Los proyectos de infraestructura necesarios para jalonar la competitividad departamental se concretaron. Aeropuertos, autopistas, distritos de riego y puentes, sumados a las nuevas oportunidades de trabajo produjeron una "segunda ola migratoria" de gente del interior y del norte del país. También inversionistas de otros países principalmente asiáticos vinieron motivados por el crecimiento integral del departamento a adelantar proyectos agroindustriales.

El sistema de producción ambiental y sostenible que se ha venido desarrollando ha sido el ideal para que garzas, garrapateros y alcaravanes sigan volando libres como el espíritu del llanero. Las autoridades del gobierno se encargaron de definir políticas que preservaran la flora y la fauna de la región entendiendo cuales eran sus roles y competencias. El sector agroindustrial y de hidrocarburos asumió este sistema de producción ambiental sostenible y el llano siguió siendo de los chigüiros, las dantas y el tigre.

El Casanare cuenta hoy con planes de gestión del riesgo ante las eventualidades ambientales que diseñamos entre la comunidad que conoce los incendios y el

ganado flaco del verano, y los actores públicos. Construimos los distritos de riego de Cravo Sur y Rio Cravo teniendo en cuenta procesos sostenibles de irrigación y el resultado fue estar siempre preparados para las emergencias el Sol del verano. Ya el verano no nos cogía sin agua y sin pasto. Los municipios beneficiados impulsaron el sector agrícola cuando percibieron los frutos de la unión de esfuerzos. Las iniciativas juveniles de emprendimiento, basadas en la sostenibilidad, permanencia y visión conjunta de desarrollo fueron impulsadas por los empresarios y el gobierno. Los jóvenes criados en el Llano tuvieron mucho por decir y muchísimo más por hacer.

El futuro del agua se convirtió en un tema que nos unió a todos los que estábamos interesados en el desarrollo real del Departamento. Construimos estrategias para la administración de los acuíferos de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y de las empresas. Se hicieron estudios y diagnósticos científicos sobre la provisión de agua. Concluimos que la conciencia ambiental que habíamos adquirido sumada a los procesos de gobernanza del uso del agua era la fórmula para no padecer ni de sed ni de escases.

Los pocos incidentes de derramamiento de hidrocarburos que se presentan fueron atendidos inmediatamente por el gobierno y las empresas. Llegan a tiempo y lo hacen bien. Además de que hay más control en los procedimientos, los bomberos, los organismos de voluntariado y socorro en los municipios petroleros cuentan con los equipos necesarios y con los planes de riesgo más seguros. Socorro, Aguazul, Tauramena y Yopal ahora cuentan con implementos y capacidades adecuadas para atender las dificultades del desafiante tiempo del Llano.

Tal vez lo más importante de los acuerdos de paz en el Casanare fue la amplia agenda que construimos para solucionar los históricos problemas de concentración de tierras y mal uso de los suelos. Los procesos de restitución de tierras le han devuelto a los legítimos dueños las propiedades que los violentos les habían quitado. Municipios que en el pasado habían tenido alta presencia paramilitar como Aguazul, Tauramena, Chameza, Sabanalarga y Monterrey ahora se destacan por los exitosos procesos de restitución de tierras y bienes a los antiguos dueños. Sentimos finalmente la región más justa y equitativa cuando la Reforma Agraria convirtió a cientos de campesinos del Casanare en propietarios. Todas esas tierras que antes eran improductivas y ociosas hoy están en manos de pequeños y medianos propietarios que a golpe de joropo y azadón convierten al Casanare de la mano de los proyectos agroindustriales en la "despensa" de alimentos de Colombia.

Y es que si uno combina paz y desarrollo "déle el llano pa' que camine"…

"UNA SOLA VEZ COMO LA LAPA"

Con el fin del conflicto los frentes armados de las FARC se desmovilizaron del Oriente colombiano pero el desarrollo del entorno regional se quedó estancado. El gobierno no supo qué hacer cuando el café estuvo listo y no pudo adaptarse a las nuevas expectativas sociales ni a la rápida disminución de las reservas de crudo y gas en el Casanare. Si bien los acuerdos que pusieron fin a la guerra plantearon estrategias de descentralización política, fiscal y administrativa, el caballo del post-conflicto se quedó ensillado y el café cerrero se enfrió servido.

Tantos años de dependencia de la economía en el petróleo no se pudieron equilibrar con otros proyectos productivos y los recursos que nos estaba mandando el estado disminuyeron. No se pudieron implementas modelos eficaces de crecimiento que pudieran beneficiar a toda la población y las apuestas que se hicieron para mayor competitividad del sector ganadero, palmero y turístico dieron pocos resultados.

Alguna vez pensamos que los recursos renovables serian infinitos pero hoy vemos como el departamento se enfrenta al agotamiento de petróleo y la industria presionada por las comunidades para la contratación de mano de obra local sufre mayores paros y bloqueos. Hasta el horizonte crece la desconfianza en las instituciones. Cuando las expectativas de los pueblos nuevamente se frustraron los políticos se disfrazaron de salvadores, apoderándose de las críticas ambientales y de carácter laboral contra los petroleros.

También se frustraron las ideas de tener políticos que representaran los intereses reales de la comunidad. El sistema político tradicional que favorecía los intereses de pocos permaneció igual. Los viejos políticos del Casanare son señalados por su pasado paramilitar y siguen trabajando en sus agendas personales. Los recursos de todos es decir los del erario se siguen manejando de forma irresponsable, los contratos de las obras públicas se los dan a los amigos de los políticos. Los mismos trabajando con los mismos y nosotros con las bestias amarradas en el bramadero.

Las expectativas que teníamos eran muy altas y del mismo tamaño es la frustración de la sociedad civil al ver el bajo desarrollo y la poca gobernabilidad que imperan en toda la sabana. Las petroleras tuvieron que disponer de sus ganancias para suplir las demandas sociales que el Estado no cumplía. Es distinto sentir la soledad del llano caminando descalzo al Sol y al Agua que andarla a caballo.

La desmovilización de los alzados en armas no conllevó un proceso armónico de desarrollo. Cuando los excombatientes de las FARC abandonaron el uniforme, el fusil y las zonas que controlaban, se desató una disputa frontal de los grupos criminales buscando ocupar el vacío de poder, quedarse con los cultivos de coca y las rutas de contrabando de gasolina en la frontera con Venezuela. Muchos municipios volvieron a ser ocupados por bandas criminales y carteles de droga.

Las instituciones no pudieron adaptarse a la nueva realidad regional. Los antiguos conflictos sociales y económicos se recrudecieron cuando las nuevas organizaciones sociales canalizaron la frustración en las protestas comunitarias.

A lo largo y ancho del departamento las organizaciones sociales se levantaron en paros y bloqueos. La protesta anti-petrolera ha aumentado y la imagen que todo el mundo tiene de Ecopetrol como sustituto del estado sigue siendo la regla. La gente reclama sobre los daños al ambiente pero la distancia entre los directivos de las empresas y la comunidad o la falta de compromiso de los industriales con el desarrollo de la región, obstaculizan el dialogo y la única manera que hemos encontrado para hacer oír nuestra voz gritando duro y haciendo fuerza.

Como nadie se puso de acuerdo y tampoco se presentaron propuestas nuevas, los planes para "despetrolizar" la economía también se frustraron. Recuerdan los viejos con el dicho que "una sola vez como la lapa" fueron los años de bonanza petrolera y que se dejó pasar la oportunidad de aprovechar el momento para jalonar otro tipo de negocios. A todos nos preocupa la etapa final de los campos de Cusiana y Cupiagua ya pasaron diez años y seguimos sin definir un modelo para el desarrollo de sectores alternativos a la industria extractiva.

El problema de no definir para donde vamos todos es que nadie tiene muy claro que le toca hacer y problemas que podrían solucionarse crecen al sol y al agua. Por ejemplo cuando hay derrames no se atienden a tiempo porque las autoridades ambientales regionales no tienen bien definidos sus roles y responsabilidades. El impacto reputacional que afecta a las empresas y el daño ambiental que nos afecta a todos, se habrían podido evitar si hubiéramos concretado planes de control para el manejo de emergencias y protocolos entre las industrias y las autoridades.

En el Casanare hay suficiente agua para disponer, pero como todo, los asentamientos y reservorios no se encuentran donde pudieran favorecernos mejor a todos. En la sabana muchos meses a las doce del día es intenso el verano y el ganado y el pasto se mueren de escases.

Al desatender el asunto importantísimo del agua el activismo alrededor del recurso ambiental aumento. Un número amplio de pequeñas organizaciones regionales y municipales de carácter ambiental se opusieron a las actividades extractivas. Las sísmicas apercolladas contra la pared por argumentos sin criterio ni técnico ni científico abandonaron las actividades de exploración necesarias para el hallazgo de nuevas reservas.

El panorama al horizonte sigue siendo igual: grandes latifundios improductivos, alta dependencia de transferencias nacionales, malas prácticas agrícolas y mal uso de los suelos. Ni los acuíferos ni los humedales o las zonas de protección pudieron ser administrados. Cada día el rechazo a las actividades de exploración petrolera ha ido aumentando. La inversión asiática que había generado otro tipo de expectativas tampoco logro acoplarse armónicamente a la región. Más que el desarrollo económico que pudiera generar la tierra, la simple tenencia seguía siendo un factor fuerte de poder. Si el primer problema fue que la tierra era de muy pocos el segundo y mucho más grave fue que no se hacía nada con las grandes extensiones: la improductividad. Generando pocos recursos para las municipalidades y pocos empleos locales el modelo agrícola que sigue imperando desde antaño es el de repartir pobreza.

A pesar del estancamiento de las instituciones y la caída de las reservas de petróleo siguió llegando gente de interior y de afuera. La migración de población fue engrosando el crecimiento de los municipios del sur del Casanare. Pero ni la población ni las instituciones estaban preparadas para recibir a los nuevos colonos y hoy los habitantes dicen que la llegada de gente de la costa, del centro, los asiáticos y los indios, solo han traído problemas. Por ejemplo Yopal ha sido una de las ciudades que más han crecido en Colombia en los últimos años y no hay planes viables para proveer servicios básicos a los nuevos habitantes.

Ni los casanareños ni las instituciones estábamos preparadas para enfrentar los retos después del proceso de paz. Después de las frustraciones acomunadas no nos dieron ni ganas de madrugar el café cerrero a las cuatro de la mañana. Hoy recordamos con nostalgia cuando desaprovechamos la oportunidad de crecer de la mano de la bonanza petrolera. Hay que reconocer como buenos cazadores que "fue una sola vez como la lapa" y que va a ser muy difícil meternos al moriche a buscar la oportunidad perdida.

"EL MICO NO CARGA CHINCHORRO PERO NO DUERME EN EL SUELO"

A pesar de que el Gobierno y las guerrillas no llegaron a ningún acuerdo la violencia no detuvo el progreso del Casanare. Cuando los casanareños nos empoderamos de nuestras decisiones y como sociedad civil nos comprometimos con el desarrollo regional logramos implementar un modelo de crecimiento económico balanceado entre las actividades tradicionales y la explotación petrolera.

Aunque los grupos armados siguen controlando grandes territorios de la sabana e intranquilizando el clima de seguridad, el Departamento siguió creciendo a tasas considerables y pudo reclamar mayor autonomía departamental y descentralización política. El espíritu a caballo que libertó a Colombia materializado en la vocación independentista de la región volvió a aflorar. En los últimos años nos hemos sentido en la capacidad de solicitarle al gobierno nacional mayor autonomía fiscal y administrativa.

Ha sido muy difícil cambiar de los cargos públicos a los viejos políticos que solo trabajan por sus intereses. A través de procesos de formación de competencias ciudadanas y modernización de las instituciones estamos tratando de construir una sociedad más abierta y responsable de sus decisiones. Cuando los casanareños empezamos a meterle la mano con responsabilidad a la política los nuevos líderes fueron ocupando los cargos de los viejos y lentamente vamos depurando la clase política del Casanare.

A pesar de que el conflicto armado persiste complicando las cosas en muchas zonas de la región, las instituciones han madurado en estos últimos quince años. Los recursos transferidos por el Gobierno nacional al Departamento se fueron invirtiendo de mejor forma. Cuando las comunidades nos organizamos los recursos del gobierno pudieron satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía local. Cada vez se robaban menos plata que antes llegaba a los bolsillos de los grupos ilegales.

Después de la frustración de los diálogos de paz los casanareños entendimos que nuestro futuro dependía de nosotros mismos y que siendo recursivos podríamos salir adelante. Se recordaba el dicho del moriche "El mico no carga el chinchorro pero no duerme en el suelo". A pesar de la inseguridad urbana y la situación del

vecino Arauca, el Casanare sigue creciendo a medida que crecen las aspiraciones de los llaneros.

La "despetrolización" de la economía fue el eje del nuevo motor económico y hoy en día crecen grandes proyectos agropecuarios. Con la llegada de inversionistas foráneos y nacionales, la conformación de clústeres, las decisiones de los gobiernos locales y el desarrollo incluyente de la comunidad, el Casanare se convirtió en la "despensa" nacional y además en exportadora de alimentos y ganado.

Las alternativas productivas a la economía minero-energética fueron importantes pilares para "despretrolizar" la economía. La creación de empresa pensando a largo plazo y de manera creativa fue el aporte más importante de los sectores más educados y tecnificados de la población del Casanare. Se construyeron distritos de riego para impulsar el crecimiento de la industria arrocera y los ganaderos tecnificaron sus tierras hasta que volvimos a ser la región rica en agricultura que habíamos sido antes de la bonanza petrolera.

Los nuevos proyectos agrícolas fueron amigables y cuidadosos de la fauna y la flora de la región. Los alcaravanes, los gabanes y las garzas contrastaban con los impresionantes atardeceres del llano. Hay que decir que fueron los paisajes los que primero atrajeron los turistas pero el crecimiento de la economía de turismo se dio gracias a la modernización del aeropuerto de Yopal, la construcción de autopistas interdepartamentales, la mejora en la dotación de la infraestructura de transporte y la capacidad instalada que tienen los hoteles.

Pero cuando hay mucho dinero los problemas que surgen son grandes. Las actividades económicas que contratan muchos trabajadores y generan muchos recursos atrajeron dificultades en materia de delincuencia común en Yopal y los municipios cercanos. Ladrones y extorsionistas aprovecharon los buenos tiempos para hacer de las suyas. Hay que decir que los grupos armados ilegales siguen en guerra por el control de las rutas de narcotráfico y los territorios para cultivos. A pesar de la dificultad de llevar a cabo un proceso efectivo de restitución y desconcentración de la propiedad rural en medio del conflicto, muchos de los campesinos y de los legítimos propietarios han vuelto a las tierras que los ilegales les habían despojado. Los grandes latifundios improductivos se destinaron al desarrollo de proyectos agroindustriales que hoy generan muchísimas opciones de trabajo.

A pesar del conflicto seguimos madrugando al café cerrero de las cuatro de la mañana para discutir los temas de mayor trascendencia. A través del dialogo social se logró administrar incluyentemente el agua y los centros poblacionales y

municipios pudieron contar con reservorios para las épocas de escasez. Así, protegiendo los ecosistemas las empresas mejoraron la capacidad de respuesta ante posibles crisis ambientales sobre todo las relacionadas con el derrame de hidrocarburos. Las empresas de la mano de las autoridades locales desarrollaron planes de emergencia y protocolos de seguridad para estar bien preparados.

Como el llano es grande, el rápido crecimiento poblacional de ciudades como Yopal, Tauramena y Aguazul, trajo más expectativas en torno a Ecopetrol. Sin embargo en estos años de madurez del departamento la protesta anti petrolera ha disminuido mucho.

Hoy en el Casanare las economías tradicionales como la ganadería, la siembra de arroz y el cultivo de frutales muestran mejores nivel de tecnificación y competitividad que equilibran la economía regional ante los primeros síntomas de agotamiento de Cusiana y Cupiagua.

Del fracaso del proceso de Paz los casanareños recatamos la renovación de las instituciones. Cuando el gobierno asumió buena parte de sus responsabilidades y los casanareños nos responsabilizamos de los asuntos de nuestra región pudimos aprender de los antiguos errores. El buen clima económico y la determinación para asumir recursivamente nuestro futuro liberaron muchas de las tenciones sociales. Porque el llanero es recursivo y trabajador, si "el mico no trae el chinchorro, tampoco duerme en el suelo".

3. CATATUMBO

POR ACÁ SÓLO LA TIERRA TIEMBLA

El fin del conflicto armado abrió las posibilidades para que El Catatumbo, tan marginado de los servicios del Estado, comenzara a sentir una mayor y más efectiva presencia institucional y una mayor articulación entre la Nación y sus entidades territoriales. En un ambiente de mayores libertades, los pobladores de la región comenzaron a organizarse y a participar de manera progresiva en las decisiones sobre los temas que lo afectan. Esa participación ha sido clave para asegurar la transparencia y la efectividad de las instituciones.

Surgieron nuevas opciones sociales y políticas, conformadas por ciudadanos que, superado el temor, encontraron nuevas condiciones para expresarse. A esa nueva dinámica se sumaron organizaciones surgidas del proceso de desmovilización de los grupos insurgentes. Gracias a todo eso ahora existe una creciente confianza de las comunidades hacia sus autoridades, una mejor calificación de los funcionarios públicos, mayor competencia de opciones políticas, así como la proliferación de formas asociativas de producción rural, varias de ellas muy promisorias.

Uno de los aspectos que explica el mejoramiento sustancial de las condiciones de El Catatumbo en estos años es que muchos de los esfuerzos se concentraron en fortalecer las capacidades de su propia gente. Se impulsó la planeación, se estimuló la innovación, se hizo un esfuerzo extraordinario en materia de fortalecimiento institucional y asistencia técnica y eso ha permitido una creciente apropiación del territorio, en procura de consolidar comunidades autónomas y autogestoras. Sin duda la educación ha sido un factor decisivo del éxito.

Y a este notable y sostenido mejoramiento de las capacidades propias se ha sumado la solución progresiva al aislamiento físico de la región, uno de los más graves problemas que sufrieron sus moradores. Hoy hay una decente conectividad vial, que sumada a la tranquilidad que se respira al haberse resuelto la violencia, ha permitido el flujo de personas, de productos y de inversiones. Es impresionante cómo se han acortado los tiempos de desplazamiento y se han reducido los costos de comercialización. Por esas razones El Catatumbo ha logrado incrementar los ingresos de sus campesinos, ha podido desarrollar su vocación agraria, forestal y piscícola y ha visto crecer la actividad petrolera.

Es muy alentador ver ahora que esas actividades se han planificado bien, con un claro, riguroso y bien aplicado marco regulatorio, con un adecuado ordenamiento territorial, con un énfasis en la protección y realización de los derechos de la

población campesina, y que gracias a eso se han administrado muy bien sus efectos sobre la soberanía alimentaria y el medio ambiente. Es muy bueno ver las mejorías que en esos dos campos se han dado por la reducción de los cultivos de uso ilícito.

Hoy, por suerte, los mayores riesgos para este territorio no son los que provienen de la violencia del hombre. Son los que pueden derivarse de la fuerza de la naturaleza. En El Catatumbo tiembla, y aunque nadie lo puede evitar, el fin del conflicto armado ha permitido que las instituciones se ocupen de temas como este, cruciales pero aplazados. Hoy hay para esta región un sistema de gestión del riesgo de desastres que es ejemplo mundial.

Estos cambios de los últimos años tienen una importancia trascendental para la región y para el país en términos de la soberanía, la unidad nacional y la integridad territorial. Haber resuelto el olvido de esta región y haber abierto las opciones para su integración a las dinámicas institucionales, sociales y económicas con el resto del país, fortaleció los vínculos de identidad y redujo la dependencia de sus comunidades a las oportunidades que ofrece Venezuela.

Para estos tiempos tenemos una sana y activa relación binacional que, pese a las limitaciones, dificultades y diferencias propias de ambos países, se expresa en mejores políticas de frontera, un intercambio comercial más constructivo, una más efectiva política social y un mejor control sobre actividades ilegales que en el pasado constituyeron el sustento para muchos. Hoy, sin la interferencia de la violencia política, ambos países cooperan mejor y aplican con rigor la no intervención en los asuntos internos.

Aunque no fue fácil vencer las desconfianzas, el desarrollo de un proceso pedagógico efectivo, el progresivo cumplimiento de compromisos, y el favorable cambio en las condiciones de seguridad en la región, permitieron que la gente comenzara a creer en el proceso de negociaciones que puso fin al conflicto armado y abrió las puertas a la búsqueda de una paz duradera.

Uno de los aspectos que fue crítico, pero que por suerte se anticipó y se atendió oportunamente, fue evitar la mutación de la violencia y el incremento de nuevas organizaciones criminales o formas de delincuencia común. Por suerte las instituciones de seguridad, defensa y administración de justicia fortalecieron su actividad para contener este peligro. Y hay que reconocer que en esta materia fue muy importante la colaboración de Venezuela en el control del narcotráfico y las diferentes modalidades de contrabando.

Pero, lo que finalmente hizo que la población del Catatumbo respaldara en forma decidida este proceso para poner fin al conflicto armado, fue constatar que se le quitó el estigma de "zona roja" que por décadas la condenó a la soledad. Qué bueno ver tanto turista recorriendo sus paisajes y compartiendo con su gente.

PESCANDO DESILUSIONES

Pensar en que el fin del conflicto armado iba a conllevar automáticamente a que las cosas mejoraran en El Catatumbo fue cuanto menos una gran ingenuidad. Como el que cree que la fiebre está en las sábanas, quienes tuvieron bajo su responsabilidad el desarrollo de ese proceso, durante los últimos cinco lustros, limitaron sus expectativas a la desmovilización insurgente y el cumplimiento formal de los acuerdos firmados con ellos. Condiciones necesarias, pero insuficientes frente al desafío y la oportunidad de construir una paz duradera.

Como resultado de ese proceso se irrigaron ingentes recursos económicos en la región, materializados en proyectos de beneficio social y en la afluencia de inversiones privadas en grandes proyectos productivos, de los cuales poco queda hoy. Esa abundancia, ni creo riqueza ni trajo paz. Dicen que es fácil ser profeta del pasado, pero eso no obsta para indagar sobre las razones de semejante paradoja.

Tal vez la causa raíz de este descalabro haya sido pensar que la solución de los problemas de la región estaba en la plata, sin reparar en el desarrollo de su capital humano y social. Se concentró la atención en con qué financiar el postconflicto, pero sin reflexionar a fondo y con sentido estratégico en los objetivos y los criterios que deberían haber orientado las inversiones.

En la deliberación, decisión y ejecución de las inversiones no estuvo incluida la gente de la región. Se decidió por ella y se delegó la gestión de los recursos en agentes externos. Ni se consideraron ni se consolidaron las capacidades endógenas de la región, sus reales vocaciones y potencialidades.

Los recursos se destinaron a satisfacer necesidades fraccionadas, de personas, familias o grupos –incluidos los excombatientes-. Pero no a resolver las restricciones que por décadas han impedido estructuralmente a las gentes de El Catatumbo capturar las oportunidades que surgen de su riqueza. Ese modo de proceder puso a todo el mundo a competir por los recursos y fracturó aún más las ya frágiles comunidades y sus organizaciones. Muchos terminaron excluidos y muchos de ellos resentidos.

No fueron pocos los que pensaron que estar por fuera de la ley paga. Por eso esa plata terminó hundida en el pantano de las necesidades en lugar de haber nutrido el jardín de las oportunidades.

No se ofreció ni la posibilidad ni el tiempo necesarios para la construcción de un consenso sólido entre las instituciones nacionales, regionales y locales, y menos aún entre estas y las comunidades, acerca de las prioridades de inversión. A la economía le faltó política.

La anemia institucional continuó siendo una constante. El centralismo en la gestión del postconflicto desconoció esa institucionalidad, erosionó aún más su precaria legitimidad y en vez de habilitarla la debilitó aún más. La escasa capacitación y poco empoderamiento de los líderes políticos y sociales regionales justificó a quienes, desde una visión tecnócrata y efectista, pensaron más en los fines que en los medios, ignorando que en esta ocasión eran lo mismo: el reconocimiento y la inclusión de las comunidades y sus líderes como agentes de desarrollo y no como meros beneficiarios de una débil oferta institucional.

El anuncio del fin del conflicto armado atrajo las inversiones. Llegaron nuevas empresas y con las empresas más gente. Todo el mundo detrás de un trabajo, todos persiguiendo una oportunidad. Pero no hubo trabajo para tanta gente, ni menos aún infraestructura social para albergarla. "Costos del éxito", dirían algunos, pero la verdad es que las autoridades locales se han visto en serios aprietos para responder a esa afluencia migratoria. Más gente, en torno a actividades extractivas, en una región que sigue aislada, pues pese a los recurrentes anuncios aún se está a la espera de las vías que la destaponen, que permitan la movilidad, el acceso a mercados y su salida del cajón del olvido. Esa era, sin duda, la tarea inaplazable.

Más actividad económica extractiva, única capaz de competir pese a las barreras, pero en medio de la misma y famélica institucionalidad. No hay quien controle y por eso tanto estrago ambiental y desorden poblacional.

Todo el mundo en la fila india del petróleo y cada vez menos gente en la faena agrícola y ganadera. La precariedad de la infraestructura y la inseguridad han reducido aún más la competitividad del sector rural, en especial de medianos y pequeños productores. Lo que es más grave, muchos sueños frustrados y un gran sentimiento de derrota entre quienes pensaron alguna vez que pondrían sus productos en mercados regionales, nacionales o internacionales. No hay quien le compita a los salarios petroleros, las empresas agroindustriales importan sus trabajadores y de resto nadie quiere ir a trabajar al sol y al agua por un jornal.

Con la necesidad vigente y un sentido de oportunidad, otro sector de la población terminó alimentando las dinámicas de contrabando de combustibles y el narcotráfico. Varios de ellos, amparados en la falta de institucionalidad, están nuevamente vinculados a la producción de cultivos de uso ilícito, ahora controlados

por excombatientes de las guerrillas y de bandas criminales, los cuales se han asociado para continuar con el negocio. Por sus características geoestratégicas, tristemente esta región se ha perpetuado en esa condición, estimulada además por la porosa y descuidada frontera con Venezuela.

Como es obvio, la gente se organizó. Y nuevos líderes emergieron. Pero una vez más para oponerse, para pelear y para exigir el acceso a las decisiones públicas y sus beneficios. Repitiendo en la historia, la gente en conflicto con la autoridad. Por eso se ve tanta presión contra las instituciones nacionales, por eso tanto paro y saboteo a las empresas que permanecen en la región. Las autoridades locales, conscientes de su propia incapacidad e incompetencia, a la vez que echan mano de los recursos para su propio beneficio, patrocinan y se suman a las protestas contra el gobierno central.

Hay mucha frustración y sobre esta florecen la corrupción y populismo.

Y de lo importante poco. Tal vez un día el temblor sea más fuerte que de costumbre, tome a todo el mundo por sorpresa y sin tener idea de que hacer. Mientras tanto el Río Catatumbo seguirá enfermo y la pesca de crecientes desilusiones.

Así sigue trascurriendo la vida, cada cual subsistiendo con lo suyo, bajo la premisa de "sálvese quien pueda". El llamado postconflicto fue una bonanza más, efímera y hechiza, como la coca. El conflicto social permanece, la paz es frágil y la violencia está latente.

A TRANCAS Y MOCHAS

Fueron muchas las esperanzas que se llegaron a tener en que Colombia lograría poner fin al conflicto armado por el camino del diálogo. En Catatumbo de manera especial, por ser una de esas regiones en que con mayor intensidad se vivieron los rigores de la confrontación. Cuando esa posibilidad se esfumó, y ante en hastío de la violencia, nadie quiso supeditar de nuevo su destino al querer o el creer de quienes optaron por el camino de las armas. Sobre el supérstite conflicto armado, logró imponerse una dinámica de construcción del Estado y sus instituciones en esta zona geoestratégica del país.

Visto en retrospectiva, el aspecto que ha determinado que esta región y sus comunidades progresen, aún sin resolverse el conflicto armado, no ha sido sólo, ni principalmente, la contención militar y la persecución judicial a los integrantes de los grupos insurgentes.

Lo que permitió el mejoramiento de las condiciones de desarrollo fue la decisión del Gobierno Nacional y los gobiernos de los entes territoriales de actuar eficazmente en la remoción de las causas que permitieron el nacimiento y la perpetuación de los grupos ilegales. De alguna manera, el Estado comprendió que, si bien había logrado contener eficazmente la acción de las guerrillas, estaba lejos de lograr la confianza y la adhesión de la población a las instituciones. El desafío, desde entonces, fue ganar la legitimidad institucional.

Junto con la presencia y actividad de la Fuerza Pública, era indispensable definir y desplegar una acción institucional integral, que atendiera principalmente tres frentes: la infraestructura vial, la economía campesina y los servicios sociales para la población rural.

Para todos era claro que el aislamiento físico marginó a los habitantes de la región, los condenó a vivir bajo formas ilegales de poder y sirvió por décadas de pretexto para la ausencia de los servicios del Estado. De allí que se pueda decir que uno de los mayores logros para el Catatumbo ha sido la construcción de la infraestructura vial. La buena carretera que hoy une a Catatumbo con Cúcuta le abrió las compuertas al flujo de personas, productos, servicios e inversiones. Produjo un cambio en las condiciones socioeconómicas, mejoró la competitividad regional y generó un cambio en el ánimo de los habitantes, que tienen ahora mayor acceso al resto del país y miran más hacia adentro que hacia afuera.

Sin embargo, por la propia violencia, por la necesidad de aplicar mayores recursos a la seguridad y por el bajo nivel de uso, está aún aplazado el mejoramiento y la ampliación de la red vial secundaria y terciaria. Ante ese rezago las comunidades presionan a las empresas petroleras, pues saben que la solución institucional está lejos de materializarse.

Es bueno recordar que aún ahora en el 2030 hay restricciones a la movilidad derivadas del temor que genera el hecho de que aún operan grupos insurgentes en la región y que, por su propia debilidad, insisten en sus actividades extorsivas, atracos y también en la destrucción de la infraestructura petrolera, en especial la más expuesta y vulnerable, como los ductos y los camiones. El Estado ha reforzado la seguridad de esta industria debido a su importancia estratégica para el país, lo que ha redundado también en una mayor seguridad de otros agentes económicos del Catatumbo, como las empresas agroindustriales y forestales. Lástima que, por esas mismas circunstancias, las instituciones no cuenten con la capacidad de vigilar cabalmente que estas empresas cumplan rigurosamente la normatividad ambiental.

A ese esfuerzo de conectividad física hay que sumarle otro avance de estos últimos quince años, que es la recuperación de la economía campesina. El Catatumbo ha asegurado su soberanía alimentaria y ha logrado hacer competitivos algunos de sus productos agrícolas y pecuarios en los mercados locales y regionales. En esto, además de las vías, ha sido determinante la asistencia técnica y la reducción del costo de los insumos de producción. Hay que destacar el papel que han jugado en esto los nuevos liderazgos campesinos. Una nueva generación de dirigentes abiertos al diálogo, con una visión moderna y sin cargas ideológicas que impidan la búsqueda conjunta de soluciones. Y no hay que desconocer otro factor que ha contribuido a ese mejoramiento de la actividad rural, que es la contundente represión a los cultivos de uso ilícito.

No obstante todo esto, hay que decirlo claro, el crecimiento de la economía rural es muy exiguo si se piensa en el que habría podido registrarse si se hubiera puesto fin al conflicto armado en su momento. Aunque el país sea más seguro no necesariamente esta región lo es y eso lo saben los inversionistas. Los capitales se han ido a otras regiones. De todo eso se vale aún la insurgencia para mantener un discurso político, lo cual es paradójico, pues los campesinos permanecen bajo el asedio de esas guerrillas y, ni pueden ni quieren, en estas circunstancias, hacer los esfuerzos de mejoramiento de los suelos. Para blindarse de las presiones extorsivas de la guerrilla o de las bandas criminales, los campesinos del Catatumbo prefieren seguir siendo pobres.

Por otra parte, la sobrevivencia de las guerrillas desprestigia la idea de las reservas campesinas, pues existe una prevención obvia en las instituciones y en la opinión pública sobre las motivaciones y el verdadero uso que los insurgentes puedan llegar a imponer sobre ellas. Por todo esto, aunque los campesinos no se revelan abiertamente contra las guerrillas, cada día más les hacen pistola con los dedos de los pies.

La continuación del conflicto armado ha implicado que los grupos ilegales consoliden el territorio venezolano como una zona estratégica para evadir el control militar. Eso hace que siga habiendo tensiones fronterizas e interferencias en la relación diplomática binacional. La capacidad militar del Estado para reprimir la acción insurgente y la progresiva descomposición de los ideales y la estructura de esos grupos ha conducido a un incremento de la delincuencia también al otro lado de la frontera. Uno de los fenómenos de estos últimos años ha sido la atomización y bandolerización de las guerrillas.

Aunque en términos generales la región ha mejorado, no ha logrado quitarse de encima su estigma de ser un lugar peligroso al que no se debe ir. Quienes van lo hacen empujados por una necesidad, pero no en busca de un placer o de un mejor futuro.

4. COVEÑAS

"QUIEN BUEN NORTE TIENE, SEGURO VA Y SEGURO VIENE"

Los compromisos que los coveñeros asumieron derivados del proceso de paz sirvieron de Norte para que volvieran a navegar los ríos de Sucre y nuestro mar Caribe. Primero se necesitó que los faros de las instituciones, tantos años iluminando los intereses de los grupos armados, volvieran a representar los intereses regionales. El proceso de Paz impulsó esta importante dinámica de transformación institucional y de cultura política.

Cuando se organizaron los grupos de la sociedad civil el juego político y electoral se normalizó. Pudieron elegir los actores que los representaban y velar porque no se repitieran esos viejos modelos de hacer política. Con el Norte claro los líderes de la región fueron asumiendo los retos y de la mano del Estado y las entidades académicas pudieron construir una cultura política distinta. Se alejaron de los desgastados vientos clientelistas y los políticos que antes representaban los intereses de los Grupos Armados Ilegales fueron arrinconados y visibilizados en la cultura de rendición de cuentas. Ahora los políticos tienen que responder dónde se cocina el pescado. Fue muy importante esta organización para por fin inhibir la cultura de la corrupción y de intereses personales que lastraba la región.

Hay que decir que se pudo ver bien para dónde iba la región cuando las luces de instituciones como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo volvieron a iluminar el panorama. Con un gobierno legítimo que representaba los intereses de la sociedad civil y nuevas clases de liderazgo que promovieron formas diferentes de la administración pública y la organización de partidos, se tuvo una carta de navegación para volver a salir de las costas donde los pobladores habían visto cómo se hundían las oportunidades en el horizonte.

Si bien ya se había realizado un proceso de desmovilización de los paramilitares en el 2006, la presencia de los grupos de autodefensa y de las bandas criminales solo se desvaneció en forma significativa a medida que la comunidad y el Estado comenzaron a tripular el mismo barco actuando como unidad. Los coveñeros ejercieron su derecho de denuncia y rechazo a cualquier acto de guerra o violencia y fue a partir del trabajo comunitario que se puso fin a la impunidad criminal en la región. Los gobiernos municipal y departamental se unieron en esfuerzos con dirección al esperanzador horizonte. Implementaron políticas ambientales y

tributarias para erradicar la minería ilegal y otras fuentes de enriquecimiento de los grupos armados. El viento empezaba a soplar en calma. Los coveñeros volvieron al mar y al sol cuando las aguas de las playas se amainaron y las noches se despejaron y en la claridad azul del mar y del cielo pudieron mirar en dónde estaban los viejos desaciertos y cuáles eran los asuntos más urgentes.

El Estado concentró mayores recursos para la buena aplicación de la Ley de Victimas y de Restitución de Tierras. Tantos años de conflicto armado, de víctimas y de despojo de tierras hacían urgente que se dictaran medidas de atención, asistencia y reparación integral. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas y los Comités Territoriales de Justicia Transicional articularon sus intervenciones garantizando una restitución eficiente de los predios a las verdaderas víctimas y así lentamente como las olas en tiempo tranquilo se retornó a la tierra.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural permitieron un reasentamiento durable y productivo de las familias expulsadas por los guerrilleros y paramilitares. El Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural regularizó la transparencia de las intervenciones en predios de origen baldío, la asignación de tierras a los campesinos y la redistribución de la propiedad.

Y es que si en el interior piensan que sus pobladores solo viven de pargo y camarones se les olvida que son agricultores y ganaderos productivos y que las tierras que inunda el Sinú son de las más verdes. Fue muy importante en esta redistribución de la tierra que los funcionarios que anteriormente habían favorecido las prácticas e concentración o fragmentación abusiva de terrenos fueran sancionados por las autoridades públicas. Incluso aquellos que habían desviado información confidencial sobre las víctimas. Cuando las viejas prácticas se contuvieron, se construyó una nueva estrategia productiva de transformación económica, política y social para la población rural.

Se modernizó e incorporó la economía campesina hasta que lograr exportar alimentos, y como en los tiempos sin guerra, la agricultura volvió a ser el eje principal del desarrollo de la región. Ahora es nuevamente reconocida por la vocación de sus suelos, las posibilidades de sus usos, el acceso a la tierra y la distribución de la propiedad. Las tierras de Sucre se sembraron de hierbas aromáticas y vegetales de mayor costo para poder exportar. Cada vez que los terrenos recuperados se hacían productivos, la disminución en los cultivos ilícitos les cortó la billetera a los antiguos fortines políticos del narcotráfico. La influencia de la plata de los narcos se redujo y comenzó a verse reducida la impunidad.

Con las velas bien puestas y la tranquilidad resuelta los pobladores volvieron a arrastrar los navíos de madera para remontar los ríos, los manglares y el Atlántico. Cuando volvieron a confiar como sociedad y los inversionistas y empresarios podían venir sin miedo de la guerra, el gobierno nacional y el local vieron qué paraíso existía aquí al Norte de Colombia y quisieron venir a conocer la Ciénaga de San Marcos, las playas de Coveñas, el Golfo del Morrosquillo, San Benito Abad y hasta los manglares en las islas de San Bernardo.

Organizaciones académicas, la población misma que aprendió cómo hacerlo y el Estado, desarrollaron opciones de capacitación del sector turístico para los residentes. Cuando se enriqueció el proceso educativo integral se logró impactar fuertemente la economía turística de la región. Se promocionó la provisión de empleos locales, bienes y servicios. Aquí es tan tranquilo cuando sopla y suenan los cocoteros que a la gente le dan ganas de quedarse y esta expansión en la oferta del turismo fue la oportunidad para que mejorara la infraestructura regional. Y fue así que modernizaron los aeropuertos, los barrios, las escuelas y los centros de salud, el acueducto y el alcantarillado.

Uno que sabe puede decir que andando se conoce lo que es bonito de Sucre. Las gobernaciones y las alcaldías junto con la Corporación Autónoma Regional de Sucre destinaron recursos y esfuerzos de capacitación para la conservación de la biodiversidad local desarrollando profundos y actualizados diagnósticos ambientales. El Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible ejecutó planes para mitigar la erosión del Golfo del Morrosquillo.

Y es que no fueron los pequeños agricultores los únicos que regresaron a sus tierras. Las organizaciones ambientalistas regionales y las nuevas prácticas agrarias llenaron los nidos del Golfo de Mariamulatas, Guacamayas y loros. El tigre volvió a los montes de María de día y a cazar de noche en la Sabana y de la pesca deliberada se regresó a la artesanal.

Las organizaciones sociales indígenas, de fuerte tradición artesana y arraigo en el territorio se fortalecieron y multiplicaron con el esfuerzo de ONGs que representaron eficazmente sus intereses. Los grupos económicos asumieron el histórico compromiso de considerar los costos que la actividad empresarial tiene cuando se usan los recursos ambientales y contribuyeron eficientemente en los manejos del agua, la energía y los deshechos.

Desde que en Coveñas todos van en el mismo barco resuena ese viejo refrán de marinos: "Quien buen Norte tiene, seguro va y seguro viene".

"¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!"

Cuando se firmó el proceso de paz los coveñeros pensaron que desde la Habana vendrían mejores vientos. A pesar de la negociación, no fue prioritario para las administraciones implementar los planes de desarrollo territorial que jalonarían la región en el postconflicto. El Plan Departamental de Desarrollo de Sucre y de Córdoba que se construyó como carta de navegación se quedó en un cajón de algún funcionario.

A pesar de ver por televisión las declaraciones solemnes de la clase política celebrando con los comandantes guerrilleros el acuerdo de paz, aquí las cosas siguen como antes. Con esas viejas políticas de pocos y para pocos. Los poderosos de siempre siguen evadiendo impuestos, y en complicidad con el narcotráfico el tráfico de influencias y la manipulación de procesos de rehabilitación y de restitución de tierras siguen siendo el pan de cada día. El sistema judicial ineficiente acentuó la corrupción administrativa. La falta de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia permitió que los viejos políticos se siguieran escondiendo en una nube oscura y nadie supo dónde era que cocinaban el pescado.

Sin el conflicto el gobierno central destinaría más plata para la inversión local, pero como ocurrió con las iniciativas de restitución de tierras, los recursos se quedaron dando vueltas por las oficinas de la vieja administración. Las víctimas del despojo ahora eran víctimas de los intereses de la mala administración y los coveñeros nunca vieron la plata de la inversión local porque se quedaba otra vez a la sombra de los corruptos.

Y es que ya se había vivido una situación de postconflicto similar cuando en el 2005, en el gobierno de Uribe Vélez se desmovilizaron varios bloques de los paramilitares. Hay que reconocer que los dos procesos disminuyeron los ataques terroristas contra la población civil y muchos de los desplazados pudieron volver a sus tierras. Pero pasó lo mismo de hace un par de años, si bien la guerra había disminuido costando menos sangre y menos dolores, surgieron otros problemas que no se previeron generando más conflictos sociales de los que había. Se pudieron sacar de las costas las embarcaciones con menos miedo, pero igual no había dónde pescar.

El conflicto social que subyacía las diferencias no terminó. Como el camaleón sólo cambió de naturaleza, de piel. Las AUC no desaparecieron sino que se atomizaron en bandas criminales que siguen hoy en día ejerciendo presión sobre el poder de la tierra y acuden a la minería ilegal y la extorsión para llenar sus bolsillos. Y el fin de

la negociación de Santos con las guerrillas en el 2014 dio el resultado que la comunidad temía: la repetición de los conflictos resueltos a medias. Como si el Estado central no hubiera aprendido nada de los procesos anteriores, se fue haciendo agua en el fondo del bongo.

Como en los tiempos cuando nada se había negociado, la falta de gobernabilidad y de presencia estatal no fue coherente con la situación del postconflicto. Por eso es que los grupos armados en la región continuaron con los asesinatos selectivos de líderes comunitarios, la extorsión a los empresarios que querían invertir en la zona, siguen los ataques a la infraestructura del sector de hidrocarburos, continúan las amenazas a las organizaciones y a sus dirigentes. Como si el viento no volviera la región se quedó estática como antes y es difícil imaginarla como zona en postconflicto.

Y ahora ¿cómo creerles a las instituciones? Si negociando con unos y negociando con otros las cosas siguieron igual. ¿En qué confiar? El acuerdo de paz con las guerrillas ni solucionó el problema del despojo de tierras ni permitió a las victimas (las amparadas por la ley) tener acceso suficiente a los mecanismos previstos para su reparación.

Las bandas criminales controlaron los retornos de desplazados para seguir trabajando en sus empresas ilegales. La intención de ayudarse solidariamente construyendo tejido social fue inútil: la violencia contra las víctimas que reclamaban sus tierras despojadas y la situación de inseguridad para los líderes sociales golpearon los sectores más vulnerables de la población. Los que sufrieron en carne propia la sed con el mar al frente.

Los únicos que vinieron a ayudar con lo que podían fueron esos organismos internacionales que de vez en cuando desarrollan programas de protección a la infancia, alimentación, empleo, agricultura, reforma agraria, educación o derechos humanos. El Estado no logró tomar las medidas necesarias para que se restablecieran los derechos de las víctimas.

Por otro lado las escasas alternativas productivas en una región altamente agrícola no permitieron reducir el narcotráfico. Los corredores de droga seguían controlados por los alzados en armas y donde persistía la inseguridad se limitó el desarrollo de proyectos turísticos y de reorganización de la propiedad rural. Y es que la ausencia de instituciones ha sido el foco de oscuridad.

Las expectativas de los empresarios del turismo, los de interior y los oriundos de la región que conocen la hora de los manglares, fueron muy altas cuando se firmó la

paz. Esperaban mostrar las playas de Coveñas, los pájaros continentales durmiendo en las islas del Golfo de Morrosquillo, las canoas trazando la cartografía de la Ciénaga de San Marcos. Sin embargo el gobierno local se quedó cortico con estas aspiraciones y los proyectos de mejoramiento de infraestructura vial, salud o restauración de playas afectadas por la erosión se quedaron amarrados en el puerto.

Parece que se hubiera olvidado que el gran grueso de la población vivía en serias condiciones de pobreza y atraso. Nacionalmente reconocidos con los peores estándares de cobertura y calidad en servicios públicos, los planes de desarrollo no pensaron el turismo como la opción alternativa de desarrollo más viable. Cada cual trabajaba con sus manos y no se podía percibir el sudor de cada uno.

Como los problemas nunca faltan los gobiernos locales volvieron a la vieja práctica de ir solucionando los del día sin pensar en los de mañana. El agua, el aire, la fauna y la flora (patrimonio ambiental de toda la región) se vieron seriamente afectados; habría que pensar en el mañana y en propuestas más ambiciosas para preservar las tres especies de mangle, los nidos de las tortugas en las playas y en las copas de los arboles los de las guacamayas.

Al salir a la playa a mirar los cargueros entrar al puerto por petróleo y cemento el panorama tampoco había cambiado. El vertimiento de aguas servidas, la inadecuada disposición de residuos sólidos, los derrames de hidrocarburos, la emisión de partículas nocivas, la explotación de canteras de piedra caliza para la producción de cemento gris y cal y la utilización de arados y agroquímicos en las actividades agrícolas y pecuarias seguían afectando el desarrollo ambiental sostenible.

Sin nadie gobernando la vela mayor y en el desaliento de la ausencia estatal las comunidades étnicas sintieron el agua en los tobillos y hay gente que dice que en Coveñas hay tiburones. "Sálvese quien pueda" fue la orden que se sintió cuando se empezó a hundir el barco. Las comunidades indígenas de San Antero marcharon rechazando los proyectos del sector minero-energético, si el Estado los abandonaba y las empresas asumían las responsabilidades del gobierno, la sociedad no estaba siendo representada en sus intereses reales. Y así se sentía en el imaginario colectivo.

La realidad es que ni los coveñeros ni las instituciones estaban preparados para los procesos de postconflicto. Cuando se montaron todos en el mismo barco sonó la voz de emergencia: "¡Sálvese quien pueda!"

"SIN PAZ, TOCÓ PONERSE LAS PILAS"

Fueron muchísimos años de dejar la canoa enterrada por el miedo a salir. A pesar de que la región ha sido históricamente muy afectada por la presencia de grupos armados ilegales cuando el proceso de paz entre el Presidente Santos y las guerrillas fracasó la población decidió que dependía de ella, y no de los actores armados, impulsar el desarrollo de la región. El fracaso era el aliciente para volver a salir a pescar.

Desilusionados de los viejos políticos y de ese juego de manejar lo de todos para pocos, los empresarios locales y los líderes comunitarios decidieron empoderarse de la vela mayor. Ya estaban cansados de que se gastaran la plata. La malversación de los recursos públicos fue sancionada en las elecciones cuando los políticos tradicionales fueron preguntados sobre dónde cocinaban el pescado y no supieron responder.

Como sociedad civil se fortalecieron en dinámicas de asociatividad. Cuando todos reman para el mismo lado se siente la fuerza para reclamarles a los viejos políticos en rendiciones de cuentas periódicas dónde está la plata y sancionar a los funcionarios culpables que no sepan responder.

Aquellos que representaban los intereses de la población fueron observados con mucho juicio para que no volvieran a recaer en las viejas prácticas. Por ejemplo las campañas locales de "auditorías ciudadanas" de proyectos de inversión fueron una manera de garantizar que los recursos – incluso los de las regalías - se emplearan para el beneficio de todos. Cuando la comunidad estuvo pendiente, las decisiones públicas satisficieron mejor las necesidades básicas de la población. El control que ejercían sobre sí mismos generó por ejemplo un crecimiento de los servicios públicos.

Los avances en veeduría ciudadana, gobernabilidad y transparencia por la presión de los coveñeros sacaron de las instituciones a los representantes de los intereses de los violentos y a los individuos corruptos. Eso en los pueblos grandes. En la sabana y en los manglares, con el fin de proteger las inversiones industriales y de infraestructura el Estado sigue invirtiendo sumas importantes de dinero para ampliar el pie de fuerza del ejército y de la policía mandando militares e infantes de marina para que patrullen.

Desde entonces están por toda la región y pudieron desarticular el accionar de los grupos armados ilegales porque además de en lo militar, a las bandas se les golpeó en lo financiero. La presencia del Ejército creó una sensación de seguridad y autoridad, una calma tensa. Menos extorsiones y menos meterle la mano a los recursos públicos les fue cortando a los narcos la billetera.

Cuando se recuperaron los territorios que antes les habían quitado los grupos armados pudieron desarrollar las vocaciones productivas tradicionales de los suelos como la agricultura y la ganadería. Además descubrieron el turismo como una actividad alternativa de desarrollo que podría convertirse en el eje central de la economía de la región.

Aburridos de tener miedo y de tantos años atrapados entre el fuego cruzado de guerrilleros paramilitares y criminales, victimas del despojo y del desplazamiento forzado, los pobladores exigieron su derecho a permanecer fuera del conflicto y denunciaron a viva voz la corrupción administrativa.

El gobierno, a pesar del fracaso, proporcionó mayor apoyo administrativo a los procesos de reparación previstos por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y día a día el apoyo que algunos grupos violentes tuvieron se fue perdiendo al contrastar la realidad de las víctimas con los intereses de los victimarios.

Cuando los procesos de restablecimiento y restitución en la propiedad rural se leyeron transparentes, las empresas inversionistas los apoyaron beneficiándose también en mayor seguridad jurídica para los títulos de constitución de plantaciones y operaciones productivas.

La decepción que siguió del fracaso de paz fue la gota que rebozó la taza. El narcotráfico muchos años había arrinconado a la región causando casi todas las muertes violentas en la zona. La inseguridad que venía con los Urabeños, los Rastrojos y los grupos guerrilleros fue controlada por la presencia permanente y visible de la Fuerza Pública respaldada por la comunidad. No volvieron ni por Tolú, ni Coveñas ni San Onofre ni Sincelejo, tampoco los vieron por San Marcos ni por el Majagual ni por Guaranda.

La estrategia militar para sacar a los insurgentes fue cortándoles los ingresos que venían principalmente de la minería ilegal y del narcotráfico. Se enfocaron en debilitar los recursos económicos de las guerrillas. Como el conflicto no terminó, los gobiernos locales decidieron implementar una estrategia de desarrollo que incluyera

la generación de empleos locales y se destinaron apoyos institucionales al sector del turismo.

Al volver a navegar la ruta de Cartagena a San Bernardo del Viento se recordó cómo las playas y bosques tropicales secos eran tal vez el principal capital de la región. El turismo se convirtió en la mayor fuente de recursos para el departamento. Se implementó el modelo de ecoturismo de Costa Rica (país líder) que certificaba nacional e internacionalmente a Coveñas en prácticas ambientales y sociales. Programas de créditos y micro-créditos para los industriales de los hoteles y los hospedajes mejoraron la infraestructura y la oferta de servicios. Cuando se escogió el rumbo del viento aumentó el crecimiento macroeconómico y los indicadores sociales mejoraron. Turistas del interior e internacionales vinieron a ver los desoves de las tortugas y los festivales de gaiteros.

El Estado estuvo de acuerdo en que el eje central de la agenda pública tendría que ser el fomento y apoyo de economías sostenibles y respetuosas del medio ambiente. La dinámica de deforestación que alcanzaba todos los años 5.000 hectáreas para explotación maderera y de producción agropecuaria se frenó con la quilla enterrada en el fango. La tierra que antes había servido para cultivos extensivos e intensivos de alimentos y desoladísimas fincas de ganado, pudo ser recuperada gracias al apoyo institucional y financiero. En Los Palmitos, San Pedro y Buenavista ya se cultivaba sin agroquímicos y los suelos, el aire, el agua que corre por dentro y la que corre por fuera, los samanes y toda la flora, las mariamulatas y toda la fauna, fueron tratados con procesos productivos respetuosos.

Los que más habían sufrido el conflicto en la región habían sido definitivamente las minorías: los indígenas y las negritudes. Tristemente con el fracaso de las negociaciones de paz tuvieron que abandonar la esperanza de que las luces de las instituciones iluminaran sus necesidades y apoyaran sus proyectos. La opción para las comunidades fue concientizarse de su situación y mirar si el agua ya les pasaba los tobillos. Reclamaron transparencia y profesionalismo de parte de quienes los representaban. Los resguardos y tierras comunitarias desarrollaron programas de crecimiento económico sostenible e inclusivo, que implicaron la explotación sostenible de recursos ambientales.

Cuando ya no hubo de otra sino cazar la vela a pesar del mal tiempo la comunidad entendió que dependía de ella la dirección de la embarcación. El fin del asistencialismo que era la costumbre de esperar que si se dañaba el cielo alguien vendría a jalarlos, fue la consecuencia de fortalecer la identidad sin miedo. En esos años los inversionistas antioqueños y otros inversionistas vieron la oportunidad de trabajar de la mano de las políticas sociales diseñadas por la comunidad. De esta

manera al capacitar y emplear mano de obra local se percibieron los frutos del desarrollo económico.

Pudo enrutarse positivamente el fracaso del proceso de paz cuando se entendió que sólo estaba en las manos de los pobladores si se hundían o si alcanzaban la orilla.

5. GUAJIRA

"BUEN VIENTO Y BUENA MAR"

Después de firmado el acuerdo de paz soplaron vientos de calma y sosiego desde la Alta Guajira. La tranquilidad cambió las condiciones de vida de los pobladores y el vaivén de los chinchorros en la noche y el vaivén de las olas en la pesca matutina fue de paz y no de zozobra. Con el viento y el mar a favor los guajiros pudieron gobernar las velas del departamento y mejorar en aspectos trascendentales para el bienestar de todos. Sobre la mesa, la carta de navegación indicaba atención a los recursos naturales y económicos, a la cultura y a las relaciones entre las personas.

Por un lado la población entendió que de ella dependía cambiar la mentalidad y generar en el presente el futuro de la reconciliación. Por otro lado las autoridades empezaron a buscar la manera de aprovechar los recursos naturales sin afectar el medioambiente. La firma de la paz impulso la transformación de las dinámicas económicas, sociales y culturales del departamento al marco de lo legal. Se reforzó la capacidad de las autoridades y la supervisión por parte de las autoridades centrales. Cuando se dio lugar y opción a actividades productivas sostenibles y legales, la posibilidad de salir de la ilegalidad aumentó. El empleo y la calidad de la educación para los jóvenes aumentaron cuando las condiciones estructurales del departamento mejoraron.

Se trabajó en un programa de inserción de excombatientes en el Ejército Nacional y así fue como ex-guerrilleros se encargaron del control y monitoreo de la frontera entre Colombia y Venezuela para apoyar las acciones contra el contrabando. Las nuevas tropas mantuvieron al margen del departamento de la Guajira y del vecino venezolano de Zulia, a los nuevos grupos paramilitares y a las bandas criminales. La caída del contrabando y los controles lograron que se recaudaran más impuestos de importación, que después fueron reinvertidos en la región.

El apoyo del gobierno de Venezuela al proceso abrió las puertas para la firma de un tratado de delimitación de las áreas marinas y submarinas de los dos países en el Golfo de Venezuela. Dadas las claras relaciones entre vecinos, ambos países formaron un joint-venture para explotar los yacimientos de gas natural que abarcan ambos territorios.

El acompañamiento de las instituciones al proceso de paz y la supervisión de las autoridades sirvió para poder generar un desarrollo económico sostenible e inclusivo en el departamento. El departamento más al norte del país se convirtió en

un faro para pobladores y navegantes. Los inversionistas extranjeros orientaron los ojos al puerto de Riohacha y el apoyo de la comunidad internacional aumento.

El abanico de oportunidades económicas amplió las posibilidades al tamaño del cielo en los atardeceres marinos. Se desarrollaron actividades portuarias y aumentó el comercio por el mar Caribe. Se buscó desarrollar una industria pesquera sostenible controlada por instituciones eficientes. Las nuevas carreteras y el mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios lograron desarrollar el sector del eco-turismo y del etno-turismo. También se expandió el sector agropecuario y el de energía sostenible eólica.

Todas estas posibilidades redujeron la dependencia de la economía en la extracción de recursos naturales no renovables como el carbón y el gas que se redujeron en el PIB del 62,9% en 2011 a menos del 50%. Se diseñaron estrategias para que las empresas extractivas aprovecharan de manera sostenible y armónica con el medio ambiente los recursos naturales a la vez que se distribuían de forma equitativa los capitales y regalías que se percibían.

Todo lo anterior promovió el crecimiento económico y se generaron suficientes de empleos de calidad y se pudo invertir en educación. Los esfuerzos por la diversificación productiva y exportadora se enfocaron en actividades como la cadena ovino-caprinos y de productos lácteos, la producción de melón, patilla y paprika, y la pesca artesanal. Los pobladores de la Guajira sintieron que los nuevos proyectos productivos eran más acordes a la vocación de sus territorios y al espíritu de su cultura.

Todo el mundo a lo ancho y largo del departamento estuvo de acuerdo en que el agua era un recurso de vital importancia y un tema sumamente importante. Se logró desarrollar una estrategia de manejo sostenible que aplicaba los principios de manejo responsable de los recursos hídricos, la protección y conservación de ecosistemas hidrológicos y la claridad sobre cuánta agua se gastaba y como se estaba utilizando. La población se concientizó de la importancia del uso racional y el consumo sostenible del agua. La calidad del servicio se mejoró al mismo tiempo que el acueducto regional se construía conectando los municipios de Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha. La contaminación de ríos, el mar y las aguas en general se disminuyó.

Orgullosas de la tradición de sus pobladores indígenas, las autoridades de La Guajira integraron las instituciones ancestrales dentro del orden jurídico. La importancia de los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos como los que dirigía el "palabrero" wayuu no solamente se reconocí sino que trato de

articularse con el derecho civil. Otro aportes importante a los que se les dio especial valor fueron los provenientes de las comunidades de ascendencia árabe, de las negritudes y de las demás etnias indígenas del departamento.

Otra de las importantes problemáticas que tuvieron atención en este periodo fue la violencia intrafamiliar. Cuando se hicieron diagnósticos sobre el tema los resultados fueron preocupantes y se generó una profunda reflexión al rededor del asunto. Como consecuencia, se reconoció que las mujeres guajiras fueron especialmente victimizadas, porque además haber sido víctimas de la violencia generada por el conflicto también fueron víctimas solo por el hecho de ser mujeres. Se impulsaron programas de educación y se promovió el empoderamiento de la mujer guajira. Desde el punto de vista del derecho las penas por violencia de género e intrafamiliar se endurecieron. Las instituciones se comprometieron con las mujeres y trabajaron para integrar políticas públicas de empleo, inclusión y género hasta que se logró mayor representación y menor sensación de doblegación o inferioridad por parte de las mujeres.

En cuanto a la infancia, los diagnósticos de desnutrición e inseguridad alimentaria en La Guajira que se publicaron en 2014 impulsaron que el ICBF revisara sus operadores para mejorar la seguridad alimentaria. La mejora de las vías ayudó en la solución del problema ya que fue más fácil abastecer de alimentos más baratos y así se fue eliminando la necesidad de los guajiros de comprar productos y suministros de contrabando.

En cuanto a las tensiones entre desplazados y comunidades locales, se trabajó con el apoyo de ACNUR y de las autoridades locales (incluso la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) y nacionales, de modo que los beneficios otorgados a los desplazados se extendieron a las poblaciones más vulnerables del departamento, con lo cual se disminuyeron las reclamaciones en este sentido.

"LA TIERRA DEL OLVIDO"

Se logró la firma de los acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC y el ELN y sin embargo no se tuvieron en cuenta las realidades y necesidades de desarrollo de La Guajira. En el horizonte de las expectativas donde los guajiros habían puesto sus anhelos, se veían nubes de tormenta. La paz no se vinculó a los procesos que traerían beneficios sociales, económicos, políticos ni que promoverían al departamento como comunidad.

El proceso de paz no involucró a todos los actores armados del departamento entonces aquellos que no participaron en los diálogos ni en los acuerdos fortalecieron las organizaciones ilegales y se sembraron la cultura de la ilegalidad en todos los sectores de la vida de la Guajira. La violencia continuó cuando el vacío de las guerrillas en la zona fronteriza fue disputado a muerte por grupos armado ilegales colombianos, venezolanos, mexicanos y dominicanos. Cada vez soplaban menos viento de calma y los problemas se fueron estancando en el calor de las dos de la tarde.

Las autoridades continuaron sin poder controlar las zonas de frontera y los contrabandistas siguieron pasando todos los días como si nada. Los planes de desarrollo que se venían realizando antes de los acuerdos se siguieron efectuando pero no lograron convencer a la sociedad de sus intenciones y los políticos continuaron fortaleciendo la vieja amistad y los fuertes vínculos con los grupos armados ilegales consolidados.

Esta dinámica económica generaba inmensas utilidades que se repartían en negocios legales y se filtraban en ilegales. El gran grueso de la sociedad siguió dándose cuenta y sin darse cuenta trabajando en ello. Tantos años contrabandeando y comprando y vendiendo bienes ilícitos habían consolidado base de la actividad económica regional en el marco de la ilegalidad.

Como las instituciones no se reformaron y los políticos siguieron siendo los mismos, los recursos adicionales del gobierno y de la comunidad internacional para los programas de desmovilización y de reinserción de los ex-insurgentes nunca llegaron al departamento y si llegaron la población no los vio. Además el acuerdo no tuvo en cuenta el problema de los desplazados. Muchos se quedaron en Riohacha empeorando la presión sobre los escasos servicios públicos del departamento. Siguieron la débil ejecución de los planes de desarrollo, la pobre gestión pública con todas las consecuencias para la sociedad.

A pesar de la abundancia de recursos naturales y los importantes montos de regalías que anualmente se transferían al departamento, la pobreza no pudo superarse. La poca articulación económica con los proyectos minero–energéticos y la debilidad institucional fueron obstáculos del tamaño del desierto sin agua que no se pudieron superar

La prevalencia de la economía extractiva en La Guajira, con la explotación de gas y de carbón, siguió creciendo con proyectos adicionales que no generaban empleos a la población porque decían que no estaba capacitada y que no tenía la experiencia profesional necesaria. Otras industrias tradicionales como la empresa emblemática de sal SAMA, en Manaure, continuaron su decadencia, repitiendo el fracaso económico y social de la cooperativa indígena Ayatawacoop, que se encargaba de la distribución de combustible en la Guajira. Ni los pelicanos volvieron a pintar el cielo de Manaure.

La crisis histórica y recurrente del agua se agravó. La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico se ahogó en otras aguas y las instituciones no supieron promover el uso sostenible y responsable. Muchas fueron las causas del fracaso de la estrategia y mucho más graves las consecuencias. Algunas de las razones que concluyeron en el fracaso fueron por ejemplo, el desconocimiento de la normativa ambiental, las diferencias en la priorización de problemas, las dificultades en el acceso a la información por parte de las instituciones, los conflictos relacionados con el uso del suelo y las deficiencias en la prestación del agua como servicio.

Las comunidades de La Guajira siguen arrancando en verano el agua del fondo de la tierra, construyendo sus propios pozos y aguantando a ratos la sed. Nadie se concientizó sobre la importancia del uso responsable del agua y las desviaciones de cuencas por parte de ciertos finqueros tampoco disminuyeron.

El aislamiento de los grupos indígenas de La Guajira permaneció igual. No mejoraron los aspectos sociales y de salud en la población más vulnerable del departamento. Los diagnósticos de desnutrición e inseguridad alimentaria no se tuvieron en cuenta. Las agencias internacionales de cooperación se concentraron en otros departamentos y la Guajira volvió a ser la "tierra del olvido".

Como si no tronara suficiente, el acuerdo de paz no reconoció la victimización particular de las mujeres en el conflicto en un departamento fuertemente machista. Sin diagnósticos sistemáticos respecto a la incidencia de la violencia intrafamiliar y

de género la enfermedad que le dolía a la familia por dentro no se curó y se mantuvo la creencia equivocada de que "los asuntos de familia se quedan en familia".

El nubarrón y los vientos huracanados cogieron más fuerza cuando Venezuela no apoyó ni reconoció el proceso de paz colombiano y además respaldó reivindicaciones territoriales sobre el territorio colombiano. Siguieron acusando a Colombia de las supuestas "infiltraciones" de paramilitares al territorio Venezolano. La guardia y las tropas fronterizas se involucraron más en el contrabando con La Guajira y esto debilitó aún más el control de la frontera por las autoridades colombianas. A los Wayuu ni siquiera les reconocían el pasaporte colombiano y se vieron muy afectados cuando las autoridades venezolanas les impidieron el comercio transfronterizo y las migraciones económicas. La Armada de Venezuela incautó varios barcos de pescadores guajiros diciendo que estaban pescando en aguas venezolanas. Las esperanzas de los guajiros se quedaron encalladas en la arena cuando los barcos no volvieron a salir a pescar.

El gobierno Nacional no acompañó a las autoridades regionales a diseñar una ruta y una carta de navegación. Los viejos políticos seguían siendo amigos de los intereses ilegales y no fue prioritario representar los intereses de todos. Sin carreteras, ni alcantarillado, sin agua al lado del mar el déficit de infraestructura y de servicios públicos continuó. No se lograron administrar las riquezas del departamento solidariamente, ni promover proyectos agrícolas más parecidos a la vocación y al espíritu de los guajiros para diversificar las actividades económicas del departamento. Cuando la esperanza se hundió en el horizonte y el departamento quedó relegado a la "tierra del olvido" la pobreza encallo en las playas para no irse.

"LA SED DE AGUA NO SE QUITA CON GUARAPO"

Cuando las negociaciones en la Habana entre el Gobierno Central y las guerrillas fracasaron los habitantes de la Guajira decidieron que solo dependía de ellos el desarrollo de la región. Preocupados por la situación social y humanitaria decidieron desencallar del puerto que los lastraba y gobernar con transparencia las velas del Departamento. Y es que ser el cabo más al norte del continente y con suficientes riquezas para salir adelante solidariamente era un capital que los pobladores supieron explotar. La capacidad y desempeño de las instituciones guajiras mejoró y el manejo responsable de los recursos fue el viento que necesitaba el departamento para salir a soñar el horizonte.

Por fortuna, no lograr el acuerdo de paz no impidió que se pudieran cambiar los viejos políticos amigos de los grupos ilegales por nuevos líderes comprometidos. Se diseñaron nuevas herramientas de gobierno en línea que sirvieron para lograr procesos más transparentes. Las nuevas herramientas permitieron trámites más simples, sistemas de quejas y denuncias eficientes y rendiciones de cuentas en tiempo real. Ahora que los guajiros sabían qué pasaba con la plata, de dónde venía y para dónde iba, los procesos de licitación, contratación y empleo público tuvieron la claridad del agua por la mañana.

La claridad y transparencia mejoró no solamente la percepción de las comunidades sobre la institucionalidad, sino también la confianza en la misma. Los políticos representaban la visión de sociedad y de distribución de los recursos que los guajiros esperaban. Al mejorar la gestión pública, también se generaron programas de capacitación profesional para vocaciones productivas que además se apoyaban por iniciativas de pequeños préstamos. Las inversiones en educación capacitaron a los jóvenes para plantear oportunidades económicas locales y proyectos que integraran sus derechos sociales y culturales

Los que manejaban los recursos del departamento supieron cómo distribuirlo e invertirlo para el bien de toda la comunidad. Si en Bogotá y en Cuba las decisiones no habían sido las más afortunadas, el horizonte de La Guajira se pintaba del color de las intenciones de sus habitantes. Otro acierto fue la formalización de la propiedad rural, que sirvió para reorganizar administrativamente el departamento y

la creación de un centro de atención empresarial acompañada por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Adicionalmente, el sector privado fomentó una mayor inversión en el departamento gracias a una nueva dinámica donde se asociaban y se constituían grupos productivos que compartieron recursos de comercialización y servicios públicos más eficientemente. La cultura del dinero fácil y a toda costa fue disminuyendo a medida que la inversión en salud y en educación y la satisfacción de las necesidad básicas aumentaba. Se oía decir al atardecer que el que rema solo se cansa más que cuando reman varios.

Las industrias de producción de gas, las minas de carbón y otras industrias extractivas apoyaron programas de capacitación en la Universidad de la Guajira y otras instituciones de educación. Las instituciones públicas desarrollaron programas de capacitación a proveedores guajiros para satisfacer las exigencias técnicas del sector extractivo y se fortaleció la oferta de empleo en las operaciones mineras y petroleras. El mar Caribe fue el faro de desarrollo de nuevas vocaciones productivas sostenibles.

Los tratados de libre comercio que Colombia había firmado con México y Venezuela favorecieron a los productores guajiros para importar y exportar con el país vecino. El crecimiento de los negocios lícitos trans-fronterizos disminuyó las viejas tensiones entre los ejércitos colombiano y venezolano y los grupos armados.

La atarraya enredada y el hambre que azotaba a más de la mitad de los guajiros en el 2014 fue un tema muy importante. Los diagnósticos de desnutrición e inseguridad alimentaria habían alarmado a las industrias de alimentos y a las agencias de cooperación internacional que se pusieron las pilas y adelantaron proyectos y programas contra el hambre. Las autoridades indígenas, de la mano de la comunidad internacional, se sumaron al esfuerzo desarrollando programas de salud, aseo y capacitación de la población. Con esto se lograron mejorar notablemente los indicadores socio-económicos de la población más vulnerable. Y es que con hambre cansaba más trabajar.

Otro diagnóstico que afectaba el futuro del departamento era el de los niveles de violencia intrafamiliar. El respeto dentro de la familia era el casco que soportaría el embate del mar y desde la escuela primaria hasta las esquinas más lejanas se fomentaron campañas y programas sobre género y respeto.

Los líderes de las comunidades Wayyu, recordando los valores ancestrales, se declararon en contra de todas las formas de violencia a la mujer y a la familia y

llamarón e iluminaron la cultura del respeto. Los saberes de las comunidades de ascendencia árabe en Maicao y de los indígenas Kogui, Yuco y Barí llenaron de conocimiento la carta de navegación del departamento. Si el proceso de Paz había naufragado en las costas de Cuba, el futuro de La Guajira se lanzaba al mar.

El agua se entendió finalmente como un recurso no solamente de altísimo valor sino también determinante para el desarrollo regional. Las autoridades locales mejoraron la cobertura y la calidad del agua_ y la preocupante situación que vivía el departamento respecto al manejo del recurso se resolvió. Por el desierto y por la sabana pasaba el acueducto y no se podría el agua en los veranos de Riohacha.

Las instituciones públicas y los privados lograron diseñar un manejo sostenible del agua. Protegieron las cuencas de los ríos y los nacimientos y las reservas, diseñaron sistemas de riego y tuberías más moderas y eficientes. También concientizaron a la población de cómo cuidar y por qué cuidar y para qué cuidar el agua. Y cuando explicaron el "cómo" hicieron énfasis en crear hábitos de consumo que permitieran eliminar el desperdicio y disminuir la contaminación del agua. Las cosas en La Guajira cambiaron cuando los habitantes decidieron que la "sed no se quitaba con guarapo".

6. MAGDALENA MEDIO

VAMOS PA' LANTE, MANO

Los colombianos y habitantes de la región del Magdalena Medio se enfrentaron a uno de los mayores desafíos de la historia reciente: la firma del acuerdo de paz en la Habana. La región del Magdalena Medio luego de que este acuerdo se concretara fortaleció su anchura institucional y logró canalizar de manera apropiada el entorno, los espacios y las políticas de integración y desarrollo regional en un Gran Acuerdo Social. Esta iniciativa de desarrollo económico y social a largo plazo nació en Barrancabermeja y se ha expandido por toda la región, haciendo parada en cada uno de los puertos, desde Puerto Nare hasta Regidor al Sur del Bolívar.

El Acuerdo, un plan actualizado periódicamente según el ritmo del acoplamiento de la región, abrió las posibilidades a nuevos temas en la agenda pública y amplió los procesos de participación social, tales como los Consejos de Planeación, los Consejos Municipales de Juventud, las Juntas de Acción Comunal y espacios de análisis y discusión conjunta tales como los Encuentros Regionales para la Paz o el mismo Gran Acuerdo.

Con el fin del conflicto armado también fue acogida una transformación profunda del sistema electoral colombiano y de la concepción de representación política que tradicionalmente se había infundido. La población desarrolló una mayor conciencia de la necesidad de contar con representantes entregados con honestidad y compromiso en las agencias gubernamentales, y rechazó cualquier tipo de presiones electorales. Se formularon políticas públicas articuladas para el Magdalena Medio de cabo a rabo y no únicamente centradas en las regiones urbanas, favoreciendo la integración regional y su representación consolidada en el Congreso nacional.

El Gran Acuerdo Social formulado por las instituciones regionales se enfocó en programas de generación de ingresos, con apoyo a iniciativas productivas y la innovación. Temas que trascendieran la atención del conflicto, como la educación, la asistencia técnica, tecnológica y financiera para que empresas de la región generaran empleos sostenibles, o proyectos de gran impacto regional mejoraron los índices de empleo y la calidad de vida de la población.

Las lecciones aprendidas tras la desmovilización de los grupos paramilitares en 2006, tuvieron como fin la armonía y convivencia de la región particularmente en relación con la reinserción de los desmovilizados en las dinámicas sociales, culturales y laborales y la disminución de la violencia como resultado de vías

efectivas de reinserción. El gobierno central y local fue más eficiente y dedicado en la satisfacción de las necesidades de sectores sociales tradicionalmente marginados, especialmente el sector rural. Se realizó una selección de una delegación de 60 víctimas del conflicto armado que participaron en los diálogos de paz exponiendo y argumentando y también con la creación de una subcomisión de género en búsqueda del reconocimiento de las mujeres y comunidades como víctimas directas e indirectas de la violencia.

El compromiso de paz con las guerrillas apaciguó el accionar de las estructuras insurgentes, incluso del narcotráfico que se encuentra ahora en manos de grupos de delincuencia común. La recuperación institucional controló la penetración criminal de las instituciones locales, y redujo la influencia económica y política del narcotráfico lo que significa un beneficio para nosotros los habitantes del Magdalena Medio ya que la corrupción a nivel administrativo se ha reducido de manera considerable.

La tradición pujante y alegre que caracteriza esta región y que se refleja en la participación ciudadana y el activismo social, consecuencia de los programas y proyectos históricos de paz, impulsó iniciativas de reparación del tejido social y con el aplomo y la pujanza del afluente del Magdalena se generan programas de fomento de competencias y liderazgo empoderando las organizaciones sociales; un ejemplo de estas iniciativas son las implementadas por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Red Prodepaz, frente a los actores que tradicionalmente impedían la participación social, especialmente las hegemonías políticas asentadas en la región.

Se fortalecieron los espacios regionales de planeación participativa, logrando que los debates y decisiones sobre el desarrollo contaran con la legitimación de los diferentes sectores sociales, incluyendo mujeres, jóvenes, campesinos e industriales comprendiendo que en definitiva son las comunidades organizadas las que deben ocuparse por generar los espacios para la reintegración de los combatientes a la vida civil; es una disposición que debe nacer de la comunidad pues parte de lo que enseñó el conflicto es que la autoridad no puede derivarse de las armas sino de una fuerza íntegra, de un ímpetu honesto que se reconoce de manera libre por todos los pobladores.

Esta dinámica de integración política y económica, basada en un consenso sobre el futuro de la región, sus límites territoriales y sus retos compartidos, mejoró la eficiencia de las instituciones. El Magdalena Medio goza hoy de la ampliación de inversión en proyectos de infraestructura vial, aumentando su conectividad. La nueva red de vías terciarias y secundarias mejoró la articulación de los mercados

locales con el país. Beneficiada por su posición geoestratégica la región mejoró la navegabilidad del río Magdalena y se convirtió en un eje central de conexión del país. La construcción e implementación de la Plataforma Logística Multimodal transformó el Magdalena en la mayor ruta de integración entre Venezuela y el Pacífico, y con Cartagena, Barranquilla y Buenaventura.

Barrancabermeja se consolida como el gran centro urbano de la región. Tras la reorganización del presupuesto nacional, y la redistribución de recursos antiguamente reservados al sector de defensa, se incrementaron las inversiones correspondientes a la ciencia y la tecnología. Con la implementación de programas y proyectos ambiciosos se le dio paso a la generación de valor agregado mediante el aumento de la productividad, el trabajo especializado y la innovación. Con ritmo creciente la región se volvió altamente competitiva y productiva, ensanchando sus índices de empleo y logrando conservar a la población económicamente activa, que ahora cuenta con competencias y capacidades de vincularse a las industrias florecientes en la región, tales como la de infraestructura y construcción, la extractiva, la pesquera y la logística.

La formulación de políticas y procesos de recuperación de la agroindustria, y el fortalecimiento de las unidades agrícolas permitieron un crecimiento económico de la región desvinculándola del solo sector extractivo que anteriormente parecía oponerse a la pequeña y mediana economía campesina, ordenando los territorios en función de una sola forma de producción de materias primas. Estos innovadores proyectos consolidaron modelos de producción del agro basados en el minifundio donde los pequeños campesinos tienen la oportunidad de asociarse para la comercialización de sus distintos productos. Los avances tecnológicos de la agricultura contribuyeron a la sostenibilidad alimentaria de la región. Lo que significa que el Magdalena Medio se desenvuelve nuevamente como una región de múltiples oportunidades para el célebre desarrollo del agro.

Es bien sabido que durante años se consideró al Magdalena Medio como el corazón de la actividad petrolera del país, debido al gran desarrollo que durante la década de los 80 y 90 tuvieron Barrancabermeja, Puerto Boyacá y Puerto Triunfo. Con el fin del conflicto armado, la industria petrolera intensificó sus actividades en nuevas zonas como el Vichada, Arauca y Putumayo. Esta situación dio paso al fortalecimiento de otras industrias extractivas como el oro, el carbón, el níquel, el coltán e incluso los maderables, que se encargaron de jalonar el proceso de desarrollo del Magdalena Medio. Paso a paso la región perdió el título de corazón de la actividad petrolera del país, y su dependencia económica en este sector, pero ganó la posibilidad de aprovechar su potencial apostándole a la generación de dinámicas económicas mucho más incluyentes. La recuperación del territorio que

permitió la finalización del conflicto armado amplió la conciencia de los habitantes a favor de la protección del Medio Ambiente y del cuidado de los recursos naturales. El Magdalena Medio, gracias a procesos educativos, logró conservar su biodiversidad, mediante la implementación de proyectos de reforestación y protección de especies en vía de extinción.

La sociedad incrementó sus esfuerzos por el endurecimiento de las normas de protección del medio ambiente y la explotación responsable de los recursos. Como resultado se incrementaron las demandas al gobierno nacional, departamental y sobre las mismas empresas que hacen presencia en la región por el aumento de las áreas protegidas y sanciones más fuertes ante los impactos generados. Así, el Estado endureció sus normativas frente a los sectores extractivos, especialmente la minería, y reforzó su actividad para asegurar su cumplimiento. Todos los municipios de la región han sido testigos de los avances hacia la implementación exitosa de plantas de tratamiento de aguas residuales y la consolidación de un esquema regional de manejo de residuos sólidos.

La región "echó mano" de la coyuntura para concertar el modelo educativo que venía implementando. La educación, un elemento esencial del desarrollo regional, cobró especial importancia en la política pública. Todos los municipios incorporaron la consolidación modelos educativos integrales, articulados con otras políticas sociales que permitieron favorecer la inclusión en el mercado laboral a la población menos favorecida económicamente. Se desarrollaron con ahínco oportunidades para las familias que dependen de la pesca artesanal mediante la creación de esquemas asociativos. Fue fortalecida la Universidad Regional mejorando la educación superior y contribuyendo a la retención de talentos locales pues el medio por el cual se construye una paz sólida y duradera es el acceso de los habitantes a la educación. Así pues con la convicción y la determinación de una paz duradera Vamos pa' lante, mano.

"EL QUE SE VA A CAER, EN LO SECO SE RESBALA"

Aun cuando el conflicto armado en Colombia terminó, el Magdalena Medio, región en que confluyen municipios de seis departamentos distintos, no se logró identificar ni apropiar de una política enfocada en integración económica e institucional a largo plazo. La visión y los objetivos fundamentales del innovador Gran Acuerdo Social, un plan de desarrollo humano integral y sostenible, menguaron considerablemente. Los nuevos gobernantes no dieron importancia real a este programa y su ejecución se limitó principalmente al municipio de Barrancabermeja.

Se ahondó la división entre los diferentes municipios de la región dejando como resultado la dificultad para construir acuerdos y para integrar el potencial de cada uno de los rincones de la región.

Esta región bautizada Magdalena Medio continuó existiendo como un imaginario después de la paz. Existe una inexplicable imposibilidad de avanzar hacia la construcción de maneras para asociar los diferentes municipios. Es desconcertante la forma como prevalecieron los intereses políticos que se esforzaron por mantener la dependencia de los municipios frente a las cabeceras departamentales y en obstruir la oportunidad de formular políticas públicas concertadas en función de las verdaderas necesidades de la población.

Infortunadamente y al contrario de las expectativas de todos, la firma que concretaba el fin del conflicto armado no puso freno al agravamiento de los conflictos sociales y políticos de la región y esto pago su cuota profundizando la fragmentación del territorio. La falta de voluntad para construir que apoyaran el desarrollo y el vacío de comunicación en la región no permitieron visibilizar los avances en aspectos como la optimización y ordenamiento territorial. La inexistencia de consensos entre las administraciones locales generó una competencia entre municipios por los recursos limitados del financiamiento de procesos de desarrollo, lo que incentivó el aumento de las disparidades entre los diferentes municipios de la región.

Todas las iniciativas de desarrollo que fueron implementadas – la reactivación de la industria extractiva y los proyectos de conexión multimodal de la región con el resto del país tales como la navegabilidad del río Magdalena y la Plataforma Logística Multimodal – no lograron ser ejecutadas correctamente, revelando la falta de preparación de sus dirigentes. Los procesos nacionales de participación

ciudadana fomentados después del fin del conflicto fueron focalizados en otros territorios donde las FARC y el ELN tenían mayor presencia.

Como aumentaron las posibilidades de invertir en otras zonas que se muestran más atractivas y el fracaso de macro proyectos de infraestructura de nuestra región, entre ellos la Plataforma Logística Multimodal, la doble calzada de la Ruta del Sol y la Gran Vía Yuma, varias industrias salieron de la región y agudizó de la tasa de desempleo. Además la industria extractiva disminuyó su presencia al mismo tiempo que dejaba una generación entera formada en aspectos técnicos con la casi imposibilidad de vincularse a otro tipo de proyectos.

Magdalena Medio no encontró la forma para incorporar adecuadamente iniciativas de desarrollo, pues no fueron planeados procesos participativos con los habitantes de la región. Con desazón se hace evidente que la oferta educativa de los municipios no se orientó a la preparación de profesionales que se lograran vincular a iniciativas locales.

Además, tras la desintegración de las antiguas estructuras guerrilleras fue dramático cómo algunos de sus integrantes no tuvieron acceso a oportunidades laborales claras y tangibles, volviendo o nunca saliendo, de la criminalidad. Es así como se incrementaron los índices de delincuencia e inseguridad ciudadana. Entonces, frente al temor de que se repitieran los errores del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, la población se volcó al rechazo de las iniciativas de participación social y no actuó con empatía con las personas que se reintegraron a la sociedad, profundizando las divisiones entre población y municipios.

Con desolación la región se convirtió en la retaguardia estratégica de grupos criminales, lo que facilitó que estructuras disipadas valiéndose del aislamiento institucional de la región, desarrollaran con facilidad e impunidad actividades ilegales. No se concretaron esfuerzos para el progreso de la conectividad ni la infraestructura vial de la región con el resto del país.

Esto ciertamente favoreció el que grupos criminales encontraran en los pequeños municipios de la región un abrigo desde el cual continuar cometiendo actos delictivos sin mayores consecuencias, incluyendo por supuesto el uso de las rutas tradicionales para el tráfico de drogas.

Ante la inminente imposibilidad de generar procesos de desarrollo duraderos, la región siguió sometida a la dependencia de las actividades extractivas, que limitó la oferta en materia de formación para el empleo. No se desarrollaron programas alternativos para buscar la inserción laboral en otros sectores de la economía. La

falta de oportunidad y accesibilidad de los programas no se mostró con verdadera importancia su efectividad y la población no se motivó para trabajar en la generación de un cambio sostenible

El Magdalena Medio fue testigo de la depresión de su sector agroindustrial, no solo estancando el desarrollo económico sino también agudizando las problemáticas sociales asociadas, especialmente la crisis alimentaria en las zonas rurales, el ingreso de alimentos desde otras zonas del país, el aumento de los índices de NBI y de mortalidad materna - infantil. El déficit de la productividad y el retroceso de la región solo quedo evidenciado en estrados judiciales, en las entrañas del territorio y en la corriente del gran Magdalena. Esta es la cotidianidad de la vida de familias que construyen la región; familias que continúan siendo la memoria de un conflicto que no descansa, de denunciar las arbitrariedades sociales, económicas y ambientales que padecen.

A pesar de todo el Magdalena Medio continuó siendo referenciado por el Estado central con un potencial enfocado exclusivamente a la industria extractiva. La inseguridad alimentaria, la informalidad económica y la fuga de población económicamente activa en búsqueda de oportunidades se mantuvieron y tienden a aumentar.

Como ya es sabido el sector minero-energético siguió siendo la principal locomotora de desarrollo del Estado, pero éste no se apersonó de regularlo de manera tal que sus actividades no impactaran el medio ambiente y los ecosistemas locales, ocasionando contaminación y desequilibrios ambientales irreversibles. Entonces la región que condensa la mayor riqueza en el país continuó su desaprovechamiento por culpa de la corrupción de orden administrativo y la falta de coordinación entre los entes encargados.

La región no supo aprovechar el contexto del fin del conflicto para ajustar un modelo educativo que permitiera nutrir a las nuevas generaciones para los procesos en marcha. A su vez la población no preparó adecuadamente sus competencias para tomar las ventajas de los procesos de desarrollo emergentes. Los nuevos proyectos no tuvieron el impacto que se esperaba y no contribuyeron a la mejora de las condiciones de la región.

Esto explica cómo en el Magdalena Medio se incrementó el número de jóvenes formados en temas relacionados con la industria extractiva y proporcionalmente aumentó el índice de informalidad y la inevitable migración de población joven hacia el centro del país en búsqueda de oportunidades.

"TODA LECHE DA QUESO Y TODA PENA SE CURA"

Aunque las negociaciones de paz han fracasado, el Gran Acuerdo Social del Magdalena Medio, plan regional de desarrollo humano integral y sostenible, fortaleció la integración de todos los municipios de la región. Los esfuerzos coordinados de las instituciones locales para articular sus políticas públicas les permitieron alinear sus planes de desarrollo al nivel regional siendo esto un ejemplo de gobernabilidad democrática.

El Magdalena Medio adoptó, mediante un acuerdo regional, un enfoque propio de desarrollo endógeno – es decir originado de manera autónoma desde el interior- que se encargó de articular las perspectivas de los diferentes entes territoriales que componen la región. Esta resolución tuvo lugar tras muchos años de desacuerdo y de debilidades de la gestión por falta de un concepto y una visión conjunta de lo que constituye el Magdalena Medio.

Al contrario de lo que se intuía, la continuación del conflicto armado no truncó las aspiraciones locales de contar con un sistema electoral y político más representativo que se encargara de resolver las prioridades regionales. Los sectores sociales y productivos se apersonaron para abrir nuevos canales de diálogo con las instituciones y diseñar los procesos de desarrollo local. Se logró la articulación de diferentes actores como organizaciones sociales, asociaciones campesinas, gremios sectoriales y empresas para reclamar la integración política que tanto bien le hace a la región. Se diseñó y consolidó un modelo que cree en la sostenibilidad, de intervención territorial y de gestión del desarrollo rural para las zonas que hacen parte de la periferia de la región.

Después del fracaso de las negociaciones de La Habana en 2014, el Magdalena Medio decidió no esperar a una finalización del conflicto armado, y adopto una visión optimista del futuro. Los municipios de la región lograron generar un proceso propio de integración que, aunque al margen de los lineamientos nacionales, les ha permitido mejorar la gestión de los asuntos críticos de la región tales como, la infraestructura vial y la atención conjunta de problemáticas sociales, específicamente la pobreza, la inseguridad alimentaria, la escasa cobertura de educación en nivel secundario y la baja calidad del sistema, así como la falta de cobertura y acceso a los servicios de salud. El tratamiento de problemáticas sociales

- consecuencias de un crecimiento económico poco inclusivo en el pasado y carente de políticas sociales, fue la prioridad para las instituciones locales. La principal fortaleza de este proceder residió en la integridad y la multiplicidad de dimensiones del enfoque del desarrollo de la región.

La participación social fue esencial para imponer el mejoramiento de los indicadores sociales en la agenda pública, y recuperar recursos públicos hasta ahora destinados al solo conflicto armado.

Este modelo fue concebido de manera autónoma, sin mayor influencia del gobierno central, quien centró su gestión en políticas de contención del conflicto armado. El Magdalena Medio acabó generando un modelo de integración regional para el país, el cual además fue logrado de manera autónoma. A pesar de no existir un acuerdo formal de paz en la región se ha logrado superar trasversal e integralmente, el desencuentro de sus diversos sectores y regiones, avasallando las secuelas de la violencia armada y los grupos armados ilegales.

A pesar del fracaso de las negociaciones de paz, un escalamiento de las confrontaciones armadas disminuyó la presencia de los grupos guerrilleros, ya debilitados por las numerosas desmovilizaciones que suscitaron las discusiones de la Habana. La pérdida de influencia de la insurgencia incidió en el afianzamiento del narcotráfico, su recurso económico esencial. Ante esta situación, el Gobierno Nacional no se limitó a incrementar los controles en materia de orden público sino que aplicó las políticas públicas de desarrollo económico para aminorar la influencia de las actividades ilegales. Todos estos aspectos posibilitaron el desarrollo sólido y sostenible de esta región; un proceso que pasó necesariamente por políticas públicas de desarrollo y por la necesaria participación activa de la sociedad civil.

Procesos de activismo social y sindical que ya caracterizan la región, abogaron por políticas locales en materia de empleo, adquisición local de bienes y servicios, y aportes al desarrollo regional. Estos procesos contaron con el respaldo de la institucionalidad municipal, departamental y nacional y los conflictos sociales pasaron a ser vistos como oportunidades de construcción de consensos entre la población y no de amenazas. Realidad muy distinta a la que se vivía anteriormente.

Al Magdalena Medio llegaron iniciativas planteadas desde el nivel central que buscaron aprovechar su posición geográfica estratégica para la integración del país, gracias al proyecto de navegabilidad del río Magdalena que fue acogido positivamente por la población. Lo anterior permitió que los habitantes de los diferentes municipios contaran con mejores condiciones para la comercialización de sus productos a diferentes mercados, y se propició la llegada de nuevos sectores

económicos a la región. Es así como desde Barrancabermeja como puerto central se diseminó todo el acervo cultural y productivo que caracteriza nuestra región.

La agroindustria fue uno de los sectores de desarrollo en la región fortaleciendo un esquema de producción en pequeña escala por minifundios. Así, la dependencia al sector extractivo y de producción por monocultivos disminuyó y se dieron pasos importantes para la recuperación de la profunda depresión agroindustrial por la que atravesaba. El crecimiento económico se tradujo en beneficios tangibles para la población, incluso agricultores de predios individuales, al permitir la implementación de modelos sostenibles de producción agrícola que generaran ingresos para las familias campesinas, y el avance de investigaciones aplicadas y procesos de transferencia de tecnología. Esta política incluyente permitió integrar a la población civil en espacios y procesos económicos reduciendo al mismo tiempo la inseguridad y develando un horizonte para la paz, pues la generación de ingresos y la optimización de las condiciones de desarrollo son motores de la creación paulatina de oportunidades.

Las grandes empresas petroleras de la región decidieron implementar procesos de mejoramiento tecnológico para la recuperación de gas que les permitiera aprovechar las facilidades existentes y darles un nuevo impulso. Si bien no aumentó la presencia de la industria en la región, su consolidación en la misma y el aumento de sus ingresos cristalizó su presencia con metas de producción mayores. El aprovechamiento del potencial regional en materia de recursos naturales contribuyó a aumentar la presencia de industrias extractivas como la del petróleo, el carbón, el níquel y los maderables entre otras, apoyadas por la fuerza pública. No obstante inicialmente se incrementaron los impactos y afectaciones negativas al medio ambiente y al río Magdalena, debido a la inadecuada disposición de desechos y vertimientos y la deficiente atención de las autoridades locales.

Pero la normatividad ambiental se robusteció, siguiendo recomendaciones de la OCDE. Gracias a una creciente conciencia ambiental en las comunidades derivada de tendencias globales, el Estado se encargó de fortalecer los controles ambientales a la actividad extractiva, especialmente la minería, para favorecer y proteger la biodiversidad de la región. El esquema de protección del medio ambiente basado en seguimiento eficiente de las autoridades, vigiladas por comunidades locales concientizadas limitó los impactos de sectores como la ganadería y la industria petrolera relacionados a la descarga a fuentes de agua y al deterioro y degradación de los ecosistemas estratégicos.

Aún a pesar del fracaso de las negociaciones de paz los habitantes del Magdalena Medio pueden disfrutar y optimizar el uso de su inmensa riqueza para seguir disfrutando del Fandango y el Bocachico.

7. META

"ES EL ARPA LA QUE LE DA TONO A MI JOROPO"

Después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, el Meta era el departamento donde la luz iba a iluminar más lejos en la sabana. El horizonte se miraba despejado para aprovechar las oportunidades del postconflicto.

Era el departamento que recibía más regalías de todo el país. Y con toda esa plata se fortalecieron los entes territoriales que a través de controles rigurosos pudieron manejar los recursos con mayor autonomía. Cuando se le dio mayor potestad a las instituciones regionales el buen manejo de las rentas fiscales sembró de resultados el horizonte del departamento.

A lo largo y ancho las inversiones en infraestructura que se veían en los puentes y carreteras impulsaron a empresarios privados a ser parte del desarrollo del Meta. El buen manejo que las instituciones le dieron a las regalías afinaron el tiple y el cuatro y los llaneros recordaron que era "el arpa la que le daba tono al joropo".

Todos esos años de abandono del Estado central fueron la bandera para empezar procesos de descentralización económica y política. Al paso de los días y las noches otro de los aciertos de aprovechar los recursos del petróleo fue la posibilidad de formar nuevos líderes nacidos en el llano. Con mayor conocimiento sobre el manejo de los recursos públicos realmente representaban los intereses de las comunidades.

Los nuevos líderes aprovecharon también las inversiones privadas para reestructurar las políticas sociales, económicas y de gestión pública. Todo ese desarrollo económico y el empoderamiento de la comunidad y de las instituciones sobre el rumbo de la región sirvieron para ver con claridad y atender las necesidades que tenían muchas de las poblaciones de la Altillanura. Pero cuando el arpa sonó afinada los llaneros volvieron a creer en los cantos de la Sabana.

El CONPES de la Altillanura fue la partitura que guio el fomento de una considerable parte de la infraestructura vial. La construcción de vías primarias y secundarias facilitó la movilización de insumos y productos por todo el Departamento que además se convirtió en un corredor estratégico. La Altillanura se vio así beneficiada con reducciones de precios a la hora de transportar y comercializar productos e insumos.

Construyeron aeropuertos en lugares estratégicos, mejoraron las vías terrestres y la navegabilidad de los ríos, implementaron nuevas políticas fronterizas. Las instituciones ya no se quedaban enterradas en los bajos y pudieron atender con rapidez y efectividad las necesidades de la población.

En lo político fue la combinación de varias hierbas la que cocinó la contra para acabar con la corrupción que históricamente había sido la regla en el manejo de lo público. Los nuevos requerimientos de las empresas, el control que la ciudadanía ejercía sobre los políticos y los votos para los candidatos que representaban los intereses de todos fueron la fórmula definitiva para el cambio político. La participación de la comunidad en el contrapunto del crecimiento económico fue determinante. Cuando el cuatro llama las prioridades y el rumbo de las regalías, el arpa contesta con proyectos que armonizan la melodía.

La entrada de nuevos capitales y actividades económicas sirvió para disponer de más recursos para la educación. Los habitantes del Meta aprovecharon los empleos que generaron los nuevos proyectos agroindustriales, forestales y hasta la actividad petrolera. Las antiguas tierras que se centraban en la ganadería extensiva y los cultivos intensivos se transformaron en proyectos que durarían largos años sin dañarle la mañana al oso palmero y el cielo a las corocoras.

Las asociaciones entre inversionistas privados que tenían el músculo financiero y el técnico, poblaciones campesinas, indígenas, colonos y excombatientes beneficiaron los proyectos agroindustriales a gran escala generadores de ingresos estables y de posibilidades de acumulación para los asociados. Además de trabajo se pudo ahorrar y no fueron pocas las familias donde la alegría se tradujo en el dicho de los abuelos "El que no ataja en esta casa, enlaza"

La seguridad que se recuperó en lo jurídico y en las instituciones permitió la publicación de certificados de catastro fiables, uno de los principales requisitos del sector privado para garantizar inversiones duraderas.

La buena prestación de los servicios públicos se extendió a lo rural y urbano. Como la región había decidido convertirse en un polo de atracción de nuevos pobladores y administraba sus recursos con planes claros a largo y a corto plazo, los alcantarillados, reservorios y el cableado de luz se veían desde lejos.

Con el panorama claro la gobernabilidad que adquirió el Meta gracias al compromiso de sus habitantes se materializó en migraciones laborales al departamento, generando un ambiente propicio para el arraigo de la población flotante y garantizando la calidad de vida de los habitantes.

Cuando se acabó el conflicto los frentes de la guerrilla que no se desmovilizaron trataron de quedarse con los territorios que antes controlaban para seguir lucrándose de la plata que dejaba el narcotráfico. Sin embargo, además de la satisfacción de las necesidades básicas, la presencia constante del Estado recuperó la tranquilidad y las condiciones de seguridad y convivencia. La tranquilidad en centros poblacionales como Villavicencio, Puerto Gaitán o Puerto López estuvo a la altura del vuelo de los alcaravanes.

Las instituciones se concentraron en iluminar las necesidades de los desmovilizados y de las víctimas. Los procesos de verdad y reparación permitieron que los excombatientes respondieran por las heridas que seguían doliendo. Las victimas del despojo de tierras recuperaron sus propiedades y el acompañamiento de proyectos productivos que se desarrolló en el proceso de devolución de tierras fue uno de los pilares del crecimiento inclusivo del Departamento.

Organismos Internacionales se interesaron y se aseguraron de cuidar la transparencia de los procesos de distribución equitativa que habían quedado planteados en la reforma agraria. Con la historia de corrupción en la región alguien que no estuviera muy involucrado tal vez podría cuidar que los de siempre no se quedaran con lo de todos.

Los grandes resguardos indígenas no perdieron ni la propiedad de las tierras ni el control de sus recursos y además pudieron firmar convenios con empresas de cooperación privada. Las unidades de consolidación territorial se centraron en municipios como Mesetas, Vista Hermosa y Puerto Gaitán donde el impacto de las políticas del postconflicto fue mayor.

Si en las mañanas surgían nuevas actividades económicas, las acciones de las instituciones y la conciencia de sostenibilidad conciliaban en el atardecer las visiones del desarrollo y las nuevas formas de producción. En las formas de los planes de vida estaban los puntos cardinales de los planes de desarrollo. Indígenas nativos del Meta aprovecharon sus conocimientos ancestrales en medicina, en la relación con el medio ambiente y los alimentos para desarrollar proyectos acordes a su vocación. Organismos de cooperación Internacional estuvieron dispuestos a asistir y promover estas iniciativas productivas.

Al problema de la destrucción ambiental también se le dio una solución incluyente. No solo se aumentaron los recursos de las autoridades locales para mejorar la capacidad técnica y responder coordinadamente a las emergencias, sino que además el gravísimo problema del deterioro del medio ambiente se vio como una oportunidad para resolver problemáticas sociales. De esta manera uno de los

programas de reinserción a desmovilizados estableció su capacitación para trabajar como guardabosques y así se generaron muchísimos empleos mientras se protegían las zonas forestales.

Otros pobladores del departamento que también habían sido arrinconados por el conflicto, salieron de sus madrigueras y bajaron del piedemonte para volver a llenar los ríos de chigüiros y de lapas, y la sabana de hormigueros libres.

Con el fin del conflicto armado y la entrada de inversiones económicas se fue resolviendo la seguridad alimentaria a poblaciones vulnerables. Los esfuerzos de las instituciones y de los privados por cuidar el ecosistema dieron como resultado asegurar la calidad y la cantidad del agua potable disponible y la fertilidad de los suelos productivos.

Cuando la población del Meta se organizó y las Instituciones representaron los intereses regionales se afinó el pulso al contrapunto del joropo y hoy en día el departamento nutre al país.

"COPLERO QUE NO PIENSA, EN EL ARPA TARTAMUDEA"

La firma de los acuerdos de Paz benefició regiones que históricamente habían sido afectadas por la guerrilla pero sacó de la lupa departamentos como el Meta donde las cosas no cambiaron para bien. Las vocaciones productivas del departamento no cambiaron a pesar del conflicto armado. Dicen que en los atardeceres ya no se alcanza a ver el horizonte.

La industria petrolera y la dependencia tradicional en el modelo económico extra-activista siguió siendo el panorama de todas las mañanas sin permitir el desarrollo de la región. La falta de instituciones que velaran por los intereses y necesidades de la población y de representación política real son los dos piñones rotos que atrasaron el Meta. Y a falta de problemas los políticos de siempre le echaron la culpa al Gobierno Nacional para lavarse las manos y no cumplir sus responsabilidades.

Cuando se sintió la reducción en las inversiones el sentimiento de abandono se sintió más hondo y la distancia con el estado central más larga. La incertidumbre sobre los derechos reales se mantuvo y sin saber a quién ni cómo se estaba comprando la tierra, se generó un proceso de desaceleramiento de la economía departamental y regional. Las inversiones privadas que todos los días se reducían y la falta de capacidad del Estado para garantizar empleo aumentaron el descontento de la población.

Los recursos y el acompañamiento técnico destinados a departamentos receptores de desmovilizados nunca llegaron a la región como si se hubieran quedado en un derrumbe antes de Guayabetal. Si bien los proyectos que había antes de la finalización del conflicto continuaron, la falta de nuevas inversiones debido a que otras regiones fueron prioritarias, generó un descontento social y empresarial y la sensación de aislamiento parecida a la que había afectado tantos años al llano.

No estar a la altura del postconflicto significó por ejemplo la falta de mantenimiento de la deficiente infraestructura vial, aumentando la vulnerabilidad de la población con altos costos para los insumos y la salida de las inversiones de proyectos económicos que ya existían, además de la permanente incertidumbre sobre la posesión de tierras.

El desinterés del Estado por los procesos en el Meta suscitó volatilidad ante cualquier tipo de afectaciones medioambientales, laborales, salariales, sociales o económicas. Sin controles sobre los salarios o las maneras de contratar y de desarrollar las actividades económicas se volvió a la cultura dañina de "el que pone la plata pone las condiciones" que solo ha generado un aumento en la brecha de desigualdad y el descontento de la sociedad. La actividad petrolera dejó un legado de migraciones a centros poblados como Puerto Gaitán, con grandes necesidades en infraestructura, salud, educación y vivienda digna.

Donde las poblaciones crecían, las relaciones entre los colonos y los nuevos habitantes que traían las petroleras fueron catastróficas. Los colonos sintieron que las empresas venían a sacar el petróleo y ni siquiera contrataban gente de la región y las instituciones públicas colapsaron a la hora de prestar servicios. Los pocos desmovilizados de la guerrilla que estuvieron en el departamento, no vieron ninguna posibilidad para desarrollar una vida digna y de calidad. Algunos se fueron buscando opciones en otros departamentos y otros retomaron las armas y volvieron a la delincuencia.

Los grupos armados desmovilizados que migraron por razones económicas a la región, aprovecharon la situación para aumentar su base social e involucrarse en la toma de decisiones. Las Bacrim que se derivaron de los grupos paramilitares y subversivos tuvieron vía libre en los ríos y en la sabana para seguir traficando con drogas, contrabandeando gasolina y controlando los carteles.

Los nuevos hijos del Llano crecieron lejos de los modelos tradicionales del llanero. Las nuevas generaciones soñaron en la cultura del dinero fácil, el poder y el respeto a costa del miedo. Ya nadie quería ser amansador, agricultor, coplero ni ganadero; ahora todos querían ser "traquetos". Sin poder construir tejido social y con el sentido de pertenencia en el olvido, los abuelos trataban de despabilar a sus nietos recordando que "Coplero que no piensa, en el arpa tartamudea"

A pesar de esto las bajas inversiones para satisfacer necesidades básicas, generaron que la población no solo aceptara sino que se involucrara con los grupos ilegales como única opción de subsistencia. La deficiente gestión pública no ayudó a solucionar fenómenos de corrupción y de impunidad legal, y los tejidos sociales se siguieron desgastando.

La firma del fin del conflicto armado tampoco supuso mejoras frente al despojo y la usurpación de tierras. La falta de institucionalidad significó que las victimas en zonas de baja presencia guerrillera se desatendieran. Todo el mundo sabía quiénes eran

los que habían despojado a los propietarios de las tierras y sin embargo esos delitos quedaron impunes y los responsables nunca respondieron.

Las empresas y terratenientes aprovecharon la ausencia institucional para desarrollar sus actividades económicas sin importar los efectos negativos que tuvieran en el medio ambiente. Si alguna vez se pensó que el fin del conflicto armado serviría para desarrollar proyectos productivos alternativos que fueran favorables a los ecosistemas, la falta de controles medioambientales empezó a desplazar del panorama a los cachicamos, chigüiros y garrapateros. La deforestación para ganadería extensiva o para proyectos agroindustriales y forestales aumentó. Cuando los animales se quedaron sin donde vivir los Grupos Criminales aprovecharon la situación de pájaros y culebras para organizar rutas de tráfico de fauna y seguir engrosando el negocio.

La falta de inversiones estatales aumentó la grave problemática departamental de la inseguridad alimentaria. El desmantelamiento de unidades productivas de pancoger, derivadas del exceso de dinero en el bolsillo que dejaba narcotráfico y la venta de tierras, fue una de las principales fuentes de inseguridad alimentaria para los indígenas del departamento. Además sintieron que personas sin nada de conciencia sobre la interculturalidad les "impusieron" una visión de desarrollo que discrepaba de sus costumbres e intereses generando pérdidas culturales y sociales irreparables.

El horizonte llanero ha cambiado muy poco. Los llaneros concluyeron de los acuerdos de Paz que tal vez el problema era mucho más hondo que el conflicto armado con las guerrillas y todos los días se acostaron a dormir preocupados. Antes se dormía más tranquilo en la soledad, en la soledad de la llanura. Ahora se duerme menos en la soledad, en la soledad del Estado.

> “TODO EL QUE HA SIDO COPLERO AL PIE DEL ARPA VERSEA.

Cuando se frustraron las negociaciones en La Habana se incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas arrinconando a los grupos ilegales a zonas determinadas del departamento. En los últimos dieciséis años se hizo uso adecuado de las inversiones en los proyectos productivos regionales y se registró una temperatura política de buena gobernabilidad. Los pobladores del Meta entendieron que el futuro del departamento dependía del empoderamiento de la sociedad civil. La sensación que quedó del fracaso del proceso de paz fue que habían ensillado sin ir a recoger las bestias.

El desarrollo de inversiones públicas y privadas - que se enfocaron en integrar la sociedad y construir un departamento distinto, acabó con la cultura criminal y así disminuyó el interés de los jóvenes de involucrarse en actividades ilícitas. Más copleros, ganaderos, pequeños empresarios y artesanos y menos raspachines, combatientes y víctimas.

La incursión progresiva de agentes económicos como proyectos agroindustriales y de hidrocarburos no se detuvo. El Estado acompañó la entrada de las nuevas empresas invirtiendo en fortalecer la educación, la salud y satisfaciendo las necesidades básicas. La calidad de vida de la población al igual que la certeza y asertividad del gobierno mejoró todos los días.

A pesar de que no se solucionó el conflicto todos siguieron trabajando y los negociosos continuaron. Los llaneros son recursivos y no se dejan acorralar por filudos que sean los cachos del toro. La prosperidad económica que trajo el comercio, el eslabonamiento en cadenas de valor (petróleo y agroindustria) y las condiciones institucionales que permitieron mejorar la redistribución del ingreso y los recursos públicos fueron la fórmula definitiva para atender las necesidades de la población más vulnerable. Los medianos y pequeños campesinos se asociaron para desarrollar proyectos de agroindustria. Las condiciones de empleabilidad mejoraron y el tejido social se fortaleció. No solo había más trabajo para más gente, sino que se sentía que todos estaban trabajando para todos.

Regionalmente se decidió que uno de los pilares para el desarrollo económico tenía que ser unir convertir el departamento en un punto de conexión nacional. Construyeron enormes proyectos de infraestructura vial, autopistas, puentes,

aeropuertos y mejoraron la navegabilidad de los ríos respondiendo al interés de conectividad nacional. La posibilidad de surcar la sabana rápidamente se sintió primero en la reducción de los costos de insumos, de transporte de personas y de carga. Después se pudo ver en el crecimiento de la industria nacional y finalmente se sintió en el bolsillo cuando mejoró la situación laboral.

Los líderes locales aprovecharon el contexto para tomar las decisiones más convenientes y generar inversiones que trataran las necesidades de la comunidad. La base social se fue construyendo a medida que los líderes representaban los intereses de las poblaciones y decisiones tan importantes como qué hacer con los recursos que venían de las regalías, estuvieron acompañadas por procesos educativos y de tecnificación.

Cuando se buscaron inversiones extranjeras y el desarrollo de políticas públicas, fue muy importante que se plantearan escenarios donde los intereses regionales y los del Estado convergieran. Se había aprendido de los errores de los viejos modelos que habían impactado negativamente en la población y en el medioambiente. El desarrollo económico y las migraciones de gente de muchos lados generaron un sentido de pertenencia Nacional más arraigado que la cultura regionalista. El llano no solo era de "machos" sino de muchos.

Las mejoras en las condiciones de salud, educación, la satisfacción de necesidades básicas de la población y el fomento de micro empresas campesinas generó un rechazo a la cultura criminal del dinero fácil y las filas de los grupos ilegales se fueron reduciendo.

Como el Estado garantizó que las inversiones privadas desarrollaran su actividad económica en armonía con las condiciones sociales, ambientales y productivas de la región, la satisfacción de las necesidades de los habitantes ya fuese por el Estado o por las empresas privadas sirvió para que los grupos ilegales se desinteresaran en buscar espacios de aceptación.

El gobierno concentró esfuerzos en relacionarse con las minorías y en vez de simples compromisos se generaron alianzas para desarrollar proyectos. Cuando ingresaron los capitales extranjeros se incitaron migraciones de mano de obra calificada y no calificada. El buen desarrollo económico generó arraigo y sentido de pertenencia en los nuevos habitantes del llano y en los colonos la satisfacción de ver crecer sus aspiraciones al vuelo de los alcaravanes.

El ingreso de capitales privados redujo la influencia de los grupos ilegales en las zonas pobladas. El desarrollo económico que se pensaba iba a aumentar los

incentivos para que los armados extorsionaran, involucró a la población en actividades productivas, ayudando a mejorar la calidad de vida. La asociatividad aseguró que los pobladores generaran más capital y se beneficiaran de la unión de esfuerzos.

Los grupos empresariales influyeron en el Estado para generar claridad en los derechos reales y sobre la relación de los paramilitares y guerrilleros con el problema de las tierras. Se diseñaron herramientas en las que los pobladores pudieron confiar y la presencia del Estado garantizó el respeto a la propiedad de la tierra.

Como la atención a los problemas de los pequeños y medianos resguardos indígenas fue muy lenta y además se le sumó el uso de la fuerza pública, la bomba de tiempo dejó una permanente división entre colonos e indígenas. Cuando las autoridades retomaron el control de las zonas donde los grupos criminales desarrollaban sus actividades, la deforestación, la ganadería extensiva y el tráfico de fauna dejaron de incrementar el patrimonio de los ilegales y de financiar sus acciones. En cambio la generación de proyectos productivos amigables y sostenibles con el medio ambiente convirtió la Altillanura en una zona de interés eco-turístico.

La inseguridad alimentaria, sobre todo de las comunidades indígenas, fue un gran problema en los primeros años del nuevo milenio. La guerrilla y otros grupos armados utilizaron este discurso para obtener simpatizantes y el gobierno respondió llevando las instituciones a zonas históricamente abandonadas priorizando la seguridad alimentaria.

La generación de empleo, las capacitaciones en actividades productivas y la conciencia sobre el buen uso de los recursos naturales fueron los aperos para ensillar el caballo. El jinete fue el Estado que representaba los intereses regionales y dirigía el galope al horizonte de todos. Si bien las negociaciones fracasaron, las mejoras en gobernabilidad redujeron los incentivos de aceptación a la ilegalidad. En esos tiempos de extraña calma, como evocando que a pesar de las dificultades se puede salir adelante, sonaba al cuatro el viejo decir: "Todo el que ha sido coplero al pie del arpa versea"

8. NARIÑO

¡SI SE PUDO!

Después del acuerdo de paz, la Fuerza Pública dobló los esfuerzos para combatir los reductos de Grupos Armados Ilegales (GAI) presentes en el territorio. Pero los procesos de desmovilización de los frentes de las FARC fueron exitosos, y pocos ex-insurgentes engrosaron las líneas de bandas criminales. Con la pérdida de influencia de la guerrilla, los cultivos de coca y el narcotráfico disminuyeron. Las nuevas oportunidades económicas y el apoyo institucional a la reinserción atrajeron a la mayoría de los desmovilizados a empleos formales a través de la creación de micro-empresas o de contratación preferencial de mano de obra local por las grandes empresas presentes en el territorio.

El fin del conflicto también fortaleció la institucionalidad regional, lo que permitió desarrollar actividades productivas legales en los diferentes territorios. Las nuevas condiciones de desarrollo permitieron un enfoque en la equidad y calidad de vida de todas las poblaciones del departamento. La reducción de la corrupción administrativa eliminó las prácticas clientelistas y politizadas.

Se potencializaron los instrumentos administrativos de seguimiento, planeación y geo-referenciación de las actividades económicas de desarrollo. Procesos de descentralización administrativa y política hicieron un mayor espacio para la participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas. Las regiones se empoderaron, volviéndose las primeras formuladoras del desarrollo local, para evitar la aplicación de planes y políticas estandarizadas que no respondían a las necesidades del territorio.

La capacidad técnica existe hoy en todas las instancias de participación como los consejos comunitarios y las juntas de acción comunal. El plan de competitividad regional ayudo las ciudades principales (Pasto, Ipiales y Tumaco) a generar sinergias económicas inclusivas de todas las poblaciones campesina, grupos indígenas y de negritudes.

La política nacional de reconstrucción regional coordinó adecuadamente el interés local, departamental y nacional a través de planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT, EOT) articulados con las comunidades afectadas, garantizando una presencia estatal uniforme en todo el territorio. La penetración de las instituciones y de los servicios públicos se extendió hasta la zona costera, históricamente aislada.

Ciudades como Tumaco, antiguamente martirizada por la violencia que acompañaba la economía ilegal de contrabando y narcotráfico, reconquistaron los

espacios públicos y la seguridad necesarios para la creación de comercios. La ciudad se convirtió en un puerto animado para exportar la producción agropecuaria local y posicionar sus zonas marítimas como ejemplo del crecimiento de la pesca sostenible. El robo de hidrocarburos, la siembra de cultivos ilícitos y las acciones delictivas pasaron a un segundo plano.

Los cuatro principales sectores de la economía del Nariño (café, lácteos, hortofrutícola y turismo) se volvieron motor de un desarrollo económico inclusivo, y de una mayor integración comercial con el vecino país de Ecuador. En las áreas de llanura costera y en sus zonas montañosas, se fortalecieron cultivos de coco, cacao y café. La cadena de comercio de productos nariñenses fue asegurada, fomentando un mayor abastecimiento interno y una creciente exportación de la producción a los países vecinos.

El Tratado de Esmeraldas sobre el tránsito de personas y vehículos entre Ecuador y Colombia impulso un crecimiento de las dinámicas comerciales transfronterizas reciprocas.

La brecha de infraestructura estratégica se mejoró, con la vía panamericana a doble calzada conectando Ecuador con Ipiales, Pasto y Popayán, el eje vial Mocoa - Pasto - Tumaco. La construcción y el mantenimiento de vías secundarias y terciarias crearon verdaderas arterias para dinamizar la conectividad comercial del departamento con sus mercados nacionales e internacionales.

Los flujos migratorios laborales de colombianos a Ecuador en cultivos agrícolas y floricultura aún persisten, sin embargo Ipiales se convirtieron en una región prospera debido al impulso de la floricultura y la facilidad de sacar el producto, ya sea por Ecuador o por la gran arteria vial hacia el puerto de Tumaco.

El papel histórico de Corponariño para proteger al medio ambiente del Nariño, un departamento con gran variedad de climas en sus zonas andinas, marítimas y de bosque amazónico, se vio reforzado por un mayor apoyo del Ministerio del Ambiente. La recuperación de los bosques, la sostenibilidad acuífera y la soberanía alimentaria fueron las prioridades de las autoridades ambientales nacionales y departamentales. Proyectos de restablecimiento de especies marinas renovó el sector pesquero en la región costera, y preservo los manglares amenazados. Tomando el modelo Ecuatoriano, se establecieron zonas de veda y áreas de arrecifes artificiales para la cría de especies endémicas y zonas especiales para el cultivo sostenible del camarón.

La Ley 2 de 1959 (sobre la conservación de recursos naturales renovables) dejo de ser una talanquera para la consolidación de la región. El eco-turismo incrementó en la región, dinamizando los sectores comerciales, hoteleros, de restaurantes y atractivos culturales.

Las empresas que llegaron al departamento buscaron sinergias con las regiones para desarrollar operaciones sostenibles, apoyando programas de recuperación ambiental y productiva en regiones devastadas en el pasado por las actividades ilegales. Las grandes plantaciones de palma se restringieron a zonas de amortización, para frenar la descontrolada expansión de la frontera agrícola, factor principal de deforestación.

Una mayor supervisión de las empresas extractivas y sus impactos permitió que la explotación minera fuera controlada. El Pacto Intersectorial por la Madera Legal, convenio interinstitucional creado en el 2012, otorgo los lineamientos necesarios para que las comunidades respetaran la explotación de este recurso. Hoy la tala de bosques es controlada y respeta los ciclos ecosistémicos y frecuencias de reforestación.

Herramientas y recursos de monitoreo y planeación adicionales transformo Nariño - antiguamente el departamento con el mayor número de especies amenazadas – en un territorio líder en prácticas de conservación y de actividades productivas sostenibles en sus áreas rurales.

SALIDA EN FALSO.

Tranquilizado por el éxito del proceso de paz con los grupos insurgentes, el gobierno nacional no emprendió una estrategia de fortalecimiento institucional en las zonas de frontera del país. A pesar de que las FARC se desmovilizaron, muchos de sus integrantes terminaron migrando a otras bandas criminales (Bacrim) presentes en la región. Sin oportunidades económicas alternas, los productores de coca siguieron el negocio. La mayor injerencia de estas bandas en la región se presentó debido a la débil presencia del Estado que no extendió programas y proyectos económicos para desincentivar las actividades ilegales en el territorio.

Las acciones de la Fuerza Pública no se adaptaron a estas nuevas amenazas, y las problemáticas de seguridad y convivencia en el departamento se acrecentaron. La subregión de Telembí, por ejemplo, sigue siendo una zona que vive de esa actividad ilegal. La débil presencia institucional acrecienta otras problemáticas de orden público. El robo de hidrocarburos al Oleoducto Transandino (OTA) entre Orito (Putumayo) y Tumaco se incrementó.

El proceso de paz pretendía la consolidación de sus regiones, pero la débil presencia institucional no logro la tan anhelada consolidación en una región tan diversa como Nariño. La política nacional de reconstrucción regional, centralizando los recursos en la capital del departamento, fracasó por falta de fondos y apoyo central.

La institucionalidad en general siguió politizada y clientelista. El gobierno nacional sigue formulando políticas nacionales desde el centro. Las instituciones municipales siguieron en crisis, permeadas por los grupos armados ilegales y la corrupción. En el departamento aún no existen suficientes instrumentos de seguimiento y planificación regional.

La población sigue eligiendo a líderes que no representan a la comunidad y a sus diversos intereses. El gobierno nacional tampoco tiene en cuenta los grupos étnicos para la planeación y las apuestas del desarrollo nacional y regional. No se consultó a los campesinos para la toma de decisiones en las zonas rurales. La consulta previa para los grupos étnicos no garantiza el mayor interés de las poblaciones afectadas por grandes proyectos de infraestructura. Los procesos fueron utilizados como modo extorsivo en más del 75% del territorio nariñense que es territorio colectivo, tierras de comunidades negras y resguardos indígenas.

Se incrementó la diferencia entre los indicadores sociales y económicos de la región de cordillera y la costa pacífica. La región pacifico azotada desde tiempo atrás por la ilegalidad sigue siendo fortín de las Bacrim. Los motores del desarrollo humano como la educación, la salud y los servicios públicos siguen siendo víctimas de la corrupción administrativa y de la influencia de los grupos armados. La calidad de vida de la población costera es cada vez peor, y la crisis sanitaria viene acompañada de la devastación de los recursos naturales de la zona.

La red vial departamental y nacional quedó paralizada en procesos paquidérmicos por el abandono institucional y la corrupción. Las necesidades de infraestructura estratégica del departamento, como el puerto de Tumaco y su carretera, o el eje vial Mocoa - Pasto – Tumaco, nunca fueron una prioridad del gobierno nacional o local. Por ejemplo, el potencial de la región de Ipiales para el cultivo de flores no se materializó debido al regazo de la conectividad.

Al nivel local los esfuerzos de desarrollo participativo de políticas públicas no contaron con la capacidad técnica suficiente. Consejos comunitarios y juntas de acción comunal no lograron profesionalizarse para un mayor entendimiento de sus entornos y retos. Las comunidades étnicas siguen marginalizadas.

Las relaciones con el vecino ecuatoriano siguen tensas, y no se logró una agenda de discusiones más allá del tema de la seguridad que afecta ambos países. El conflicto armado continúa con las Bacrim, y estas ocasionan desplazamiento poblacional en condición de refugiados de colombianos en Ecuador. Las políticas transnacionales no fortalecieron las dinámicas comerciales. Los comités técnicos binacionales de pesca artesanal se siguen haciendo en Bogotá sin lograr mayor avances en el territorio.

Debido a la debilidad institucional, las actividades como el cultivo de coca y la minería ilegal se desbordaron, afectando los recursos ambientales del territorio, ya amenazados. La deforestación por los cultivos ilícitos o los cultivos intensivos (como la palma) siguieron dañando los ecosistemas de las diferentes regiones. Las reservas naturales de bosque, de agua y la soberanía alimentaria entraron aún más en conflicto con la expansión de las actividades del sector minero-energético, por falta de alineamiento y de unas alianzas estratégicas con las empresas que llegan al territorio.

La conservación de entornos como bosque de niebla, paramos y zonas forestales no se definió claramente en el departamento. Las posibilidades de impulsar el ecoturismo en la región no contaron con el apoyo y respaldo de las autoridades

departamentales y nacionales. Nariño sigue siendo el departamento con mayores especies amenazadas.

La ampliación de la frontera agrícola, ganadera y cultivos ilícitos va en aumento. Los complejos de páramo se están acabando. El Pacto Intersectorial por la Madera Legal, convenio interinstitucional creado unos años atrás para responsabilizar el sector de la madera, tuvo poco impacto en la región. Las Bacrim incrementaron el negocio maderero como otra actividad más en la cadena de la ilegalidad, incrementando el riesgo ambiental.

En la zona costera, el deterioro de los manglares avanza, y el cultivo de camarón solamente satisface los intereses económicos de unos pocos. Sin control de las autoridades ambientales se acabó con una gran parte del lecho marino, afectando la diversidad de fauna en el Pacifico y los ingresos de los pescadores en la costa. La paz no salvo Nariño de sus maldiciones.

¡PARA ATRÁS NI PARA COGER IMPULSO!

A pesar de la permanencia del conflicto armado, el gobierno nacional implementó una estrategia de fortalecimiento institucional eficiente después del fracaso de las negociaciones de paz en 2014. La nueva gobernabilidad de las regiones fortaleció el desarrollo de vocaciones productivas alternativas, que incluso atrajeron a la mano de obra de los campos de coca.

Los actores armados ilegales, incluso las FARC que no firmaron la paz, siguen queriendo ejercer control territorial. Pero la pacificación del territorio por la vía armada - a costo de constantes enfrentamientos con los grupos armados ilegales (GAI) - aisló la violencia. La estrategia del gobierno de llegar a todos los rincones del país por medio de su presencia institucional en las regiones fronterizas, siendo la Fuerza Publica su punta de lanza, triunfó.

La avalancha de programas y proyectos por parte del gobierno nacional fue un obstáculo para que los grupos armados puedan recuperar su control en el territorio. Los GAI intentaron oponerse al desarrollo, manteniendo las afectaciones ambientales que resultan de sus actividades ilegales. Pero la lucha contra los cultivos ilícitos, apoyada por programas de sustitución y proyectos agrícolas asociativos, fue exitosa y ralentizó la deforestación del departamento.

Tentativas de los GAI para impedir la ejecución, el control y seguimiento de este tipo de programas comunitarios de desarrollo fueron derrotadas en enfrentamientos con la fuerza pública y por la presencia creciente del Estado en la región. El Frente 29 de las FARC disminuyó sus acciones y ataques a la infraestructura estratégica de la región, por falta de recursos. El Oleoducto Transandino (OTA), que los GAI ven como un proveedor de insumos para el procesamiento de coca, además de un objetivo militar de bajo costo, está afectado por menos ataques y robos de hidrocarburos. La disminución de los atentados a la infraestructura reducen los derramamientos de crudo en el territorio.

La disminución de influencia de los grupos al margen de la ley también mejoró la confianza en las regiones, en cuanto a la movilidad y la creación de nuevos procesos productivos que dinamizaron la economía en la región. Los programas de sustitución de cultivos de coca por el café y hierbas aromáticas de valor añadido competitivo

fueron un éxito, gracias a las obras de infraestructura que permitieron un acceso fácil al mercado nacional, y a posibilidades de exportación por la región costera.

En la costa, una de las regiones más vulnerables del departamento, el desarrollo del puerto de Tumaco y su carretera dinamizaron la economía, ofreciendo un eje de exportación internacional a la producción del departamento. Los ejes viales departamentales que conectaron con Ecuador y el Putumayo apoyaron los procesos económicos en la región. La investigación agropecuaria permitió alterativas productivas que dinamicen la economía en la región.

Aunque el proceso de paz no llegó a buenos términos, la Nación impulsó el fortalecimiento de las instituciones de todos los rincones del país. El cambio de estrategia del gobierno nacional dinamizó los escenarios de participación en la región, empoderando a los gobernantes y a sus comunidades en el desarrollo de programas y proyectos adecuados para el territorio. La sociedad civil de Nariño apoyó esta nueva institucionalidad protectora de las vocaciones productivas licitas del departamento.

Esta mayor gobernanza descentralizada se basó en el fortalecimiento de instrumentos de seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas por parte de la población. Este mayor control de los administrados fue un elemento importante para blindar a las administraciones departamentales y municipales de los actores armados ilegales.

La consolidación territorial siguió, a pesar de unas acciones dispersadas de los grupos armados ilegales en la región costera, donde manejan la exportación de drogas. Sin embargo, el gobierno nacional y departamental llega a todos los rincones del departamento, y la continuidad del conflicto armado no sigue siendo un obstáculo para el desarrollo y crecimiento económico de la región.

El gobierno nacional también implementó una estrategia de descentralización de los procesos de planeación del desarrollo, donde las mismas regiones son las formuladoras de su visión y destino. Los Planes y las políticas responden a las necesidades del territorio.

La población campesina y los diferentes grupos étnicos presentes en la región aprovecharon el nuevo espacio de debate y deliberación para definir sus propios procesos de desarrollo regional. El alineamiento de las políticas de desarrollo de la zona fronteriza por Ecuador y Colombia fue clave para el desarrollo en la región. Se fortaleció la presencia institucional de ambos lados de la frontera, quitándole aún más espacio a los grupos armados ilegales que siguen en la región.

El fortalecimiento de convenios trasnacionales con Ecuador ha dinamizado nuevas actividades en el territorio, como el avance del sector pesquero en las costas de Tumaco y el Pacifico colombiano. El gobierno, consciente que el desarrollo regional es la sinergia entre lo económico, los recursos ambientales y agropecuarios, impulsó una mejor conservación de entornos como bosque de niebla, paramos y zonas forestales.

Por otra parte, el Pacto Intersectorial por la Madera Legal, convenio interinstitucional que pretende volver sostenible y transparente el negocio de los maderables logró asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y utilizada en Nariño provenga exclusivamente de fuentes legales. Las comunidades se acogieron voluntariamente a estos lineamientos para conservar los bosques y el ecosistema.

9. PUTUMAYO

UNA NUEVA CASA PARA TODOS

Cuando se emprendió el camino que finalmente llevó al fin del conflicto armado en Colombia los habitantes del Putumayo vivían en una gran incertidumbre. Para nadie eran muy claras las implicaciones de una decisión de esa naturaleza ni los efectos que tendría sobre el orden público y sobre las condiciones de la vida diaria. Allí se había vivido por muchos años bajo la influencia de la insurgencia, y, pese a las sucesivas bonanzas, que incentivaron el poblamiento de este departamento, la fragilidad de las instituciones era asombrosa. ¿Qué pasaría si los insurgentes abandonaban las armas? ¿Sería eso suficiente para que el Estado y sus instituciones finalmente se consolidaran en esta región?

Salvo las comunidades ancestrales y las familias de mayor tradición, pocos años atrás casi todo el mundo era forastero. Pocos se habían resuelto a desocupar del todo y para siempre las maletas. Más que colonos, en el Putumayo había nómadas. Llevados por Reyes, el caucho o la quina los más viejos, otros por el petróleo y los más recientes por la coca, las expectativas de los pobladores se habían centrado casi sin excepción en llenar las alforjas o cuanto menos los bolsillos, siempre con los ojos en el terruño y con la expectativa de retornar. Pero alforjas y bolsillos parecían desfondados. Lo que se hacía de día se acababa de noche. Aunque pocos eran del Putumayo y no muchos querían dejar sus huesos en él, por una suerte de embrujo las esperanzas se preservaban y no se emprendía el retorno a casa. Así, a suerte de permanecer, restañar sueños rotos y comenzar a mirarse a los ojos, se estaba edificando, poco a poco y de manera imperceptible, una sociedad de putumayenses por adopción y una nueva casa para todos ellos.

Tal vez por esa razón, cuando se anunció el fin del conflicto y pese a los múltiples interrogantes que esto planteaba para la región, líderes y comunidades resolvieron poner un punto común en el horizonte de todos, reemplazaron su expectativa de satisfacer intereses individuales por una reflexión sobre los bienes comunes y, ese nuevo sentido de lo público, en gran medida, explica que hoy, quince años después, esta sea una región próspera y que se gobierna así misma con apego a las instituciones y cumpliendo una legalidad que tiene mayor legitimidad.

Para los putumayenses resultaba claro que la consolidación de ese proceso y la construcción de una paz estable y duradera no iba a depender ni solo ni fundamentalmente del dinero. Por allá se había visto circular, y mucho, de fuentes

lícitas e ilícitas, pero sin instalar los bienes públicos ni mejorar la calidad de la vida. Gracias a eso se formuló, entre el departamento, sus municipios y el Gobierno Nacional -que por suerte decidió definir las prioridades del postconflicto mediante una estrecha consulta y articulación con las regiones-, un plan consensuado para la consolidación de la paz que no se quedó en un mero plan de inversiones.

Por fin empezó a haber una buena planeación del desarrollo y no, como en otros tiempos, un derroche de recursos en medio de la confusión. Y eso fue clave para lograr el fortalecimiento de las capacidades y de la transparencia de las instituciones locales y departamentales. Hoy es satisfactorio ver que los planes de desarrollo tienen objetivos claros y complementarios y que las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y las propias comunidades tienen una visión común sobre las vocaciones de la región y saben cuál es la hoja de ruta para desarrollarlas. Una palabra clave que sustenta el éxito alcanzado es organización; gracias a esta se ha podido hacer más con menos y más para más.

Con el fin del conflicto la población fue perdiendo el miedo, en especial en las áreas rurales, con lo cual comenzó a deliberar, a expresarse y a participar activamente en la política. Surgieron nuevas iniciativas ciudadanas, nuevos liderazgos y más gente interesada en ocupar los cargos de elección popular. Y ahora sin la interferencia o los pretextos que creaba ese factor, las administraciones locales están más comprometidas y son más cercanas a la población.

Sobre eso un aspecto muy destacable es el progresivo mejoramiento de la seguridad ciudadana. Haber contado con una mejor policía, próxima y confiable para las personas, permitió mejorar la percepción de tranquilidad y ver crecer el comercio y los espacios para el esparcimiento. Desde hace ya rato nadie teme ir al rio ni salir a caminar en la noche.

La academia jugó y sigue jugando en esta materia un liderazgo fundamental. Gracias al fortalecimiento de sus universidades e institutos, en sus roles de investigación, desarrollo tecnológico y por supuesto educación, existen y se han podido aprovechar en el Putumayo la información y el conocimiento necesarios sobre sus potencialidades ambientales, culturales y económicas. Los programas académicos de las universidades Pública y del Amazonas en asuntos ambientales, de agroecología, de biocomercio y de zootecnia son un verdadero referente nacional. Es muy satisfactorio ver que en los trece municipios hay presencia de estos centros académicos.

La gran diversidad biológica y los recursos de la selva son ahora una fuente muy importante de desarrollo social y productivo del departamento. Para su

aprovechamiento se establecieron modelos productivos y comerciales cooperativos y participativos. La base de esa nueva realidad económica fue la construcción de la conciencia sobre valor y la conservación del patrimonio ambiental y cultural del territorio y la población, lo cual no habría sido posible sin el gran esfuerzo pedagógico que se desarrolló entre niños, jóvenes y viejos en estos últimos años.

Si en algo fue notorio ese cambio de mentalidad fue en el desarrollo del Pacto Contra el Tráfico Ilegal de Manera en el sector de Villa Garzón y en el municipio de Puerto Asís, que, por el entusiasmo de diferentes ONG, transportadores, fabricantes y comerciantes del sector maderero, logró controlar la explotación ilegal de manera y aseguró la recuperación de los bosques afectados por la deforestación.

Hoy existe una actividad productiva equilibrada y sostenible, que asegura el pan coger y genera ingresos estables a los campesinos. Se ha aprovechado bien la agricultura, la piscicultura y la actividad forestal. Uno de los factores que hizo esto posible fue la visión que se logró definir para la administración de los recursos derivados de la actividad petrolera: el impulso a la diversificación de las fuentes de la economía con base en sus capacidades endógenas. Putumayo está en condiciones de certificar el origen de productos de su selva y sus culturas ancestrales, que tienen un alto valor agregado en los mercados externos debido a su carácter amazónico. Y esa marca, con el talante de lo exótico, atrae ahora turistas de todas partes.

Si en el pasado la situación en la frontera era tensa, hoy hay acuerdos de cooperación con Ecuador y Perú que incentivaron la industria, el comercio y el turismo, al tiempo que definen las áreas comunes protegidas y la conservación de la biodiversidad.

¿Y de la coca qué? Imposible no preguntárselo. La historia enseñó su lección y dejó en claro que su uso ilícito creaba riquezas efímeras sin mejorarle a nadie la calidad de vida. Todo el mundo concluyó que la solución a este problema no vendría del cielo –desde las avionetas-, sino del cambio de mentalidad y de la forma de comprender las soluciones. La aplicación de lo previsto en los acuerdos que llevaron al fin del conflicto armado fue coherente con esa nueva manera de ver las cosas. Por eso Putumayo celebra tanto el nuevo abordaje global al problema mundial de las drogas.

COMO EL AGUA ENTRE LOS LÍQUENES

Mientras avanzaba el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y las élites insurgentes para poner fin al conflicto armado en el Putumayo la gente del común albergaba un optimismo moderado. Tal vez -se pensaba-, el desenlace de ese proceso podría ser el desmantelamiento de los altos mandos de la insurgencia, pero sin que necesariamente eso conllevara la definición de la suerte de sus jefes regionales y sus bases, ni mucho menos la solución de los problemas sociales y políticos que permitían la reproducción de las violencias. Curtidos por la experiencia, los habitantes del Putumayo advertían, incluso frente a esa trascendental coyuntura, la repetición del mal crónico de la Nación: la pretensión centralista de controlarlo todo; y con ello la exclusión.

Por ese entonces la gente comentaba, con algo de sorna, sobre lo bien escritos que iban quedando esos acuerdos. Pero, ¿se hundirían sus contenidos en la realidad?, ¿tendrían una expresión concreta en los territorios? O simplemente serían palabras que se llevaría el viento, a merced de la indolencia, de la frivolidad y de la miopía. Si algo estaba claro para los putumayenses era que, aunque la solución al conflicto armado dependía de quienes tenían en sus manos el uso de las armas, las garantías de irreversibilidad de esa conquista y la construcción de la paz sostenible implicarían poner en el centro de las decisiones a la gente, como su protagonista y como su beneficiaria.

Lamentablemente estas incógnitas no fueron infundadas; terminaron transformándose en dolorosas profecías. La euforia duró lo que efervese un Alka Seltzer. Y en medio del pantano, un centralismo de tecnócratas que por enésima vez y con lente cóncava vislumbraron mal el desafío: un postconflicto para financiar; una caja de galletas para repartir. Ni siquiera se acudió a la historia reciente para advertir el barril sin fondo en que fácilmente puede convertirse una región a la que se irrigan recursos sin una planificación adecuada e ignorando el insumo fundamental del verdadero progreso, que es la propia gente, sus expectativas, su conocimiento y su inteligencia colectiva. Había que ir a la base, pero se prefirió decidir en el vértice.

El postconflicto se convirtió en un dar, y al dar, en una nueva manera de excluir. Cada cual hizo la fila, con su propio proyecto debajo del brazo, sin que se crearan los espacios y los procesos para decidir primero sobre lo que habría que hacerse entre todos y para todos. Como con el otrora llamado Plan Colombia, que en su

componente social había inyectado abundantes recursos económicos, por falta de visión política las platas del postconflicto corrieron como el agua entre los líquenes; nada las retuvo, y al final regresó la sequía y con esta un nuevo abandono. No se entendió que en la construcción de la paz la meta era el camino y que el camino era la inclusión.

Hoy, aunque liberado de la violencia del conflicto armado, pero entre el desorden del final de la fiesta, Putumayo en el fondo sigue siendo el mismo de siempre. Extraviada en el desarraigo, sin descubrir aún sus vocaciones y carente de una visión común, la gente que lo habita sigue procurando la satisfacción de sus propias necesidades, no logra organizarse, ni consolidar una identidad.

Eso expresa claramente en la situación de sus instituciones. Ignoradas por la mayoría, vistas por una minoría creciente como alternativa laboral, y aprovechadas por algunos otros para "comisionar" de la contratación, estas no han logrado legitimarse ni constituirse en el referente de las reglas del juego para la regulación de la vida en la comunidad. La gente no confía en las instituciones, no acude a ellas para la gestión de sus intereses y, en esa soledad se fermenta la corrupción -en la que buena parte de los recursos del postconflicto quedaron enredados-. Y es que es obvio. Si la gente no se interesa por lo público pues elige a incompetentes o a veces a corruptos para el ejercicio de cargos públicos y, por esa misma razón, se desentiende y no controla ni los desempeños ni los resultados de las administraciones locales.

Y todo esto ha ocurrido bajo el manto de una supuesta "autonomía" de la región para la determinación de su desarrollo, que más bien ha terminado siendo el pretexto para perpetuar el mutuo abandono de la Nación y los entes territoriales. El resultado es más pobreza, empeoramiento en la prestación de los servicios públicos y abusos de poder, mientras se engorda la burocracia.

Esa frágil relación de los ciudadanos con sus instituciones y de los ciudadanos entre sí, que no se abordó como asunto central al término del conflicto armado, redujo dramáticamente las posibilidades de organizarse alrededor de proyectos que aseguraran la soberanía alimentaria y una economía sostenible del departamento. Los proyectos productivos duraron lo que lo hicieron los recursos. Claro, cómo no comprender el fracaso de los encadenamientos productivos o las formas asociativas de producción, cuando se piensa que se formularon desde los escritorios sin consultar esa necesidad de tejer los lazos entre individuos solitarios. Incluso para aquellos casos que se trataron de manera específica, fue torpe pensar en que la mera condición compartida de "víctimas" o de "reincorporados" bastaría para crear la cooperación entre ellos.

Fue equivocado creer en la competitividad regional sin desplegar las energías en la investigación y la tecnología, en construcción de la infraestructura y en la definición de los modelos de producción, transporte y comercialización. Sin ello, lo que se sembró se sembró en la arena.

Y entonces quedó lo obvio: petróleo, minería, madera y coca, como únicas fuentes legales e ilegales, perpetuas, de una economía extractiva que, cuando carece del intangible más valioso, del capital social, crea recursos pero no riqueza; cosecha para hoy pero no siembra para mañana. Depreda. Basta con mirar la degradación de los recursos naturales. Y de lo básico todo importado, hasta las frutas.

En esta especie de Torre de Babel que se fue construyendo en Putumayo, los tiempos de postconflicto han sido más bien los de la mutación y reproducción de los conflictos. Si la gente no se ha organizado para construir, al menos se ha juntado para reclamar. Si no ha encontrado el reconocimiento y el acceso a las buenas, ha buscado hacerse sentir a las malas. Por eso tanto paro y tanto bloqueo. La gente sabe que, aunque lejos del cerebro, apretar el nervio en esa extremidad genera su reacción. Y en esto el que lleva el peso es el petróleo.

Para paralizarlo ya no vuelan el tubo, pero ahora basta con que un par de niños suban una pita. Y en esto no sobran los intermediarios, que, buscando el favor político o un interés económico, encausan esa inconformidad; lideran la gresca, polarizan.

Otros, con menos escrúpulos, vieron el espacio vacío y resolvieron llenarlo, creando nuevas formas de dominación de territorios y comunidades, validos de las armas que por allá proliferan. Con el postconflicto el territorio cambió de dueños, dicen en voz baja los taxistas a los escasos visitantes. Y esos nuevos dueños descansan allende la frontera, con lo cual los problemas fronterizos no se resuelven y la integración binacional es una absoluta quimera.

TIGRES DE PAPEL

Cuando se fue al traste la posibilidad de concretar de manera negociada el fin del conflicto, en Putumayo la gente no creyó en el cuadro del apocalipsis que algunos grupos políticos y formadores de opinión quisieron pintar en el horizonte. Aunque la noticia generaba preocupación, pues podría implicar que una vez más la población terminara pagando los platos rotos, tampoco era como para postrarse.

La polarización del país alrededor de la forma y condiciones para resolver el conflicto, la contumacia de la insurgencia en el ejercicio de la hostilidad armada y la renuencia de facciones insurgentes para actuar bajo las lógicas de la negociación y el cumplimiento de lo acordado, todos ellos expresados en Putumayo de forma particular, constituyeron los ingredientes de un coctel envenenado que acabó con las esperanzas de poder construir la paz. Pero en Putumayo, a punta de repetir la historia, se había aprendido a resistir, a adaptarse e incluso a progresar en medio de la adversidad. Podrían alebrestarse los violentos, pero por bravos que se pusieran, la anemia en sus objetivos, el desprestigio de los métodos y la ausencia de todo respaldo había ya condenado la guerra a su final.

Con o sin ese conflicto anacrónico con la guerrilla, el real meollo del asunto era otro. Lo que se necesitaba de verdad en el Putumayo era construir, sobre los escombros, una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos. En efecto, el abandono, la estigmatización y hasta el desprecio habían fermentado hondos rencores y extensas grietas de división entre el uno y los otros durante años.

Por suerte hubo quienes, en el Gobierno Nacional y en los entes territoriales, decidieron abocar esa tarea sin pretextar más como impedimento la interferencia de la violencia y sin postergarla en espera de un nuevo escenario de negociación con ella. Y amén de esa voluntad oportuna, fue determinante la creación de una alianza de la nación y la región, basada en la participación activa de sus comunidades en la identificación de los objetivos de desarrollo y la definición de las prioridades de inversión.

Porque los hechos son tozudos y el realismo político se impuso, tras la ruptura, lo que había sido la agenda de las negociaciones para poner fin al conflicto armado, sirvió de fundamento un plan institucional de consolidación de la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible en las regiones, que tuvo un particular despliegue en el Putumayo. La razón para esto era obvia: allí, más que en ninguna otra región, resultaba oportuno gestionar de manera integral los desafíos de la

inclusión política, el desarrollo rural y la solución al problema de las drogas ilícitas, tres de los aspectos medulares, si no de la negociación frustrada, sin duda de la paz duradera.

Sorteando las dificultades, con base en esa carta de navegación se han registrado avances en la región. Y aunque los insurgentes se mantienen en armas, les queda ahora muy difícil oponerse a la realización de políticas institucionales que surgieron de sus propias reivindicaciones. Como quien dice, mataron el tigre y se asustaron con la piel.

Claro está, eso no habría sido posible sin el mayor esfuerzo a que se vieron obligadas las instituciones de la fuerza pública y la administración de justicia, cuyos presupuestos debieron ser aumentados, pagándose además el costo de oportunidad de no haberlos destinado a la política social. Si durante el proceso de negociaciones insurgentes en la región pensaron que podían hacer de las suyas, ante su fracaso se les terminó la guachafita y volvieron a recibir la acción contundente del Estado. Pese a la ausencia de paz, en todo caso habría seguridad. Y debido al cambio de política en el combate a los cultivos de uso ilícito también anda empobrecida. Eso sí, esa debilidad tiene un efecto crítico en la actividad y la infraestructura petrolera, pues la guerrilla trata de hacerse sentir y le pega a lo que le queda más fácil, que es el tubo.

La alianza institucional en el Putumayo ha tenido un impacto muy positivo en el mejor uso de los recursos, que ahora están condicionados a la legitimación social de las inversiones. Hay más ojos puestos sobre las prioridades, los dineros y la contratación y el que quiera robar ya lo piensa dos veces porque puede acabar en la cárcel.

Putumayo construyó su catastro. Eso tuvo efectos positivos pues fue el punto de arranque de un proceso en el que se identificaron mejor las vocaciones productivas de los suelos, se pudo ordenar mejor el territorio y se creó una base de información predial que antes no existía. Al ampliarse la base impositiva ha comenzado a darse una mayor generación de rentas propias. Asumiendo los dolores del crecimiento, el departamento se volvió mayor de edad.

Con esta base de información, fue más certero el establecimiento de la frontera agrícola y la definición y preservación de las zonas de reserva. Al conocerse mejor el territorio y el estado de su patrimonio ambiental se han podido generar programas y proyectos de desarrollo agrícola pertinentes. Y se dio en el clavo al priorizar la producción de alimentos. La coca daba billetes pero no comida. La gente, que sufrió la escasez en su momento, es consciente como nunca de asegurar los tres golpes.

Otros proyectos que han tenido éxito aprovechan los recursos de la biodiversidad, la selva y los usos y costumbres de sus comunidades ancestrales.

La infraestructura vial mejoró mucho. Hoy Mocoa se comunica muy bien con el Valle del Guamuez por una carretera excelente y de allí la integración regional es buena. Eso ha permitido reducir los costos de comercialización de los productos.

Debido al hastío de la violencia, a la incredulidad en quienes la ejercen dizque para hacer la revolución, así como a la política de gobernabilidad y desarrollo regional que han liderado los gobiernos, en Putumayo hay ahora más oferta política, nuevos movimientos y más gente interesada en ejercer sus derechos políticos. Gracias a eso el departamento se representa mejor y encuentra canales de acceso a los centros de decisión, con lo cual hay menos rabia. Eso sí, la gente se ha dado cuenta de la efectividad de la acción colectiva y recurre a marchas y hasta a paros para asegurar que sus intereses son considerados. Eso se ha aprendido a manejar bien tanto por las comunidades como por las instituciones, e inclusive por el sector petrolero, que sigue siendo el florero de Llorente. Haber dejado de ver tras cada protestante a un guerrillero fue la base de ese nuevo activismo, que aunque engorroso, hace parte del ejercicio de la democracia.

En Putumayo es mucho más efectivo echar pata que echar bala. Por eso los cambios los ha venido logrando es la población. Los guerrilleros, que decían ser revolucionarios, son más anti diluvianos que nunca y, por su voluntad, son los únicos excluidos. No quisieron tomar el tren a tiempo.

10. REGION DEL SARARE

PÁJAROS LIBRES QUE LIBRES VUELAN

Miedo. Miedo a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Miedo a quienes ejercían con una u otra insignia el poder, sin límite distinto al de su propio capricho. Miedo a expresarse, miedo a asociarse, miedo a relacionarse, miedo a circular, miedo a creer, miedo a confiar. Para vivir en el Sarare se necesitaba una "metodología": la auto restricción en el ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas.

Mientras las guerrillas imponían el orden reclamaban del Estado la política social. Aseguraban su dominación con las armas. Mejor dicho, con el uso selectivo de las armas. Con eso y por eso influían en la vida de la sociedad. Ahuyentaban, mantenían el aislamiento. Aseguraban así sus privilegios en una región privilegiada. Esa era la única realidad residual y práctica de la revolución que predicaban.

Poner fin al conflicto en ese piedemonte significaba para la población la posibilidad de no temer más. Ni a quienes por estar allí mandaban, ni a quienes sin haber estado querían mandar. Silenciar las armas implicaba por encima de todas las cosas respetar el derecho individual y colectivo de la gente a ejercer su libertad, sin miedo y sin estigmas.

Qué bueno que ese haya sido el curso de los acontecimientos. Haber logrado que los acuerdos entre el Estado y las guerrillas se materializaran allá en asegurar que el poder, sin perjuicio de quién llegase a ejercerlo, tendría en adelante y para siempre su origen y sus límites en la ley. Los acuerdos para poner fin al conflicto significaron la primera piedra del Estado de Derecho en esa maravillosa orilla en que convergen Arauca, Norte de Santander y Boyacá.

Soportada en eso, la región ha visto florecer las opciones políticas y la gente ha podido, no solo elegir entre estas a sus autoridades, sino también organizarse genuinamente para hacer oposición. En uno u otro lado han estado incluso algunos de quienes renunciaron a las razones de la fuerza para convencer con la fuerza de las razones. Es muy afortunado que esa diversidad de opciones políticas haya podido y pueda hoy competir en un ambiente de seguridad y amplias garantías.

Algo que fue definitivo para Sarare fue la alianza entre el nivel central y las autoridades departamentales y locales para concebir y desarrollar un plan de

desarrollo territorial, que mirara más allá de las fronteras imaginarias y respondiera a las vocaciones físicas, económicas, sociales y culturales que hacen que esta región pueda definirse como tal.

Eso no solo contribuyó a asegurar que en el Sarare el poder se ejerza exclusivamente por la vía de las instituciones y a que estas tengan un claro mapa de navegación. Esa alianza, soportada en una comunidad organizada, activa, y abierta a los disensos, permitió profundizar la democracia, acercar al Estado y los ciudadanos, definir canales para la participación ciudadana y para la rendición de cuentas, con lo cual hay más transparencia y mayor eficiencia en las administraciones. Eso ha permitido que desde entonces los recursos de la actividad petrolera impacten realmente y de manera muy positiva en la calidad de vida de la gente. Democracia y recursos son hoy la base de una real autonomía en la definición y ejecución de las opciones de desarrollo de la región.

El fin del conflicto armado tuvo un efecto importante en el relacionamiento de las entidades nacionales, departamentales y municipales con las autoridades y las diversas comunidades indígenas que habitan en la región. Gracias a eso los planes de desarrollo y los planes de vida se concibieron y se ejecutan de manera coherente. A partir de ello y sin las interferencias de la violencia también se ha logrado conciliar el respeto y promoción de los derechos de las comunidades indígenas con el desarrollo de la industria petrolera. Además de haber surtido consultas previas exitosas, hay ahora un diálogo intercultural permanente y con garantías para todos.

En un mejor contexto de gobernabilidad y de imperio de la ley, el Estado ha fortalecido la presencia y la efectividad de las instituciones y agencias responsables de ejecutar la política social. Es bueno constatar el notable mejoramiento de los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, que registran un descenso constante en los últimos 15 años. Las cifras de hoy permiten concluir que en la región se erradicó la pobreza extrema. Sin el miedo de por medio, Sarare integró soluciones de suministro eléctrico y agua potable, con lo cual, como por entre las venas, se alimentan los emprendimientos.

Las instituciones han hecho lo suyo, pero las cosas también han mejorado gracias a que la economía de la región se reactivó. Sin esa hostilidad del pasado por fin todo el mundo pudo trabajar. La gente vio el sol y comenzó a volar. La industria petrolera, que al igual que los demás vivía encerrada, abrió sus horizontes y se propuso apoyar una nueva dinámica productiva, a la que se eslabonaron múltiples empresarios locales. La gente, con su tenacidad, visión y buenos socios, desarrolló pequeñas y medianas empresas que han logrado dinamizar una vocación agrícola y ganadera

de alto potencial. Y a ese empresariado rural se han sumado también las comunidades indígenas, que aseguran lo suyo y aprovechan los excedentes.

Todo eso ha permitido que donde no había ahora haya empleo, mercados y capacitación técnica. El fortalecimiento del conocimiento tradicional vigorizó los mercados para el trueque y preservó el modelo de agricultura tradicional.

Si a cualquiera de allá le preguntan, dirá que en el Sarare hay instituciones, culturas, economía, pero también paisaje. Y aunque al esconderse el sol las sabanas parecen infinitas, las montañas recuerdan que hasta el Llano tiene límites. Por eso los recursos naturales se cuidan más. Ya nadie tiene que llorar sobre el petróleo derramado, hay un celoso sistema de prevención y control de derrames por fallas técnicas y una recuperación total de los afluentes contaminados por la guerra del pasado.

Hablando de límites, pues, aunque imaginaria, en la región también hay frontera con Venezuela. El fin del conflicto sí que ha contribuido a eliminar las discordias que perturbaron la amistad entre los parientes, al igual que entre los amigos a los que allá de cariño se les dice también parientes. La gente se colabora y por eso comercia de manera muy activa, las instituciones cooperan, se controla mejor el contrabando, quienes tienen autoridad tratan mejor a los paisanos y ya no hay tapo porque ya no hay lleva.

Qué alivio que en el Sarare ya nadie ande persiguiendo a nadie. Qué bueno que la gente hoy no esté condenada a elegir a quien saludar. Qué bien que en el Sarare se haya consolidado la acción de la Fuerza Pública y que tanto militares como policías puedan concentrarse en proteger a la gente y sus derechos, sin tener que andar embolatados en cuidar tubos. Qué bueno que ahora en esta región, de la cual con Rondón salieron los lanceros que le entregaron la libertad a Colombia, sea el Estado y solo el Estado el que impone el orden y garantiza las libertades.

EL PARRANDO QUE TERMINÓ EN TRISTEZA.

Muchos eran campesinos que se uniformaban de guerrilleros y no, como se frivolizaba en los cocteles, unos cuantos guerrilleros disfrazados de campesinos. Por esa escasa comprensión de la realidad, la ejecución de los acuerdos para poner fin al conflicto armado careció de la tenacidad y la perseverancia que requería en el Sarare. Es verdad que la presencia de las guerrillas era sofocante hasta la asfixia; que todo el mundo estaba hastiado de sus promesas -incumplidas como las del Estado-, y que se aborrecía su manera de dominar, de imponerse y de librar sus batallas intestinas. Pero, eso no debilitaba el espíritu de rebeldía de sus viejos y sus nuevos pobladores, hacia un "establecimiento" excluyente y hacia gobiernos centrales indolentes. Con lo bueno y con lo malo, allá querían autonomía. Y, por rabia o por ideología, muchos de los del Sarare tenían algún primo la insurgencia armada.

Desde cuando apareció el petróleo en la región las distancias entre centro y "periferia" se hicieron más profundas. En Bogotá llegó a hablarse de "Arauca Saudita", receptora de recursos que resolverían sus problemas. Allá tras las montañas, esa música celestial facilitaría su "soberanía", y a la postre su condena. Y en el vacío que dejó el mutuo abandono se instalaron los guerrilleros, para capturar la abundancia y, con algo de ella, para hacer la revolución.

Para la gente en el 2015, trascender del fin del conflicto, a la construcción de la paz, debía significar el cierre esa larga y honda brecha.

Han trascurrido quince años desde que las insurgencias comenzaron a desmantelar sus estructuras armadas en cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno. En Sarare eso constituía para esos grupos una prueba de fuego. Se vería si la gente que había vivido por años bajo su influencia estaría en disposición de reconocer sus nuevas expresiones políticas y delegarles la autoridad bajo los parámetros de la democracia. Esas fuerzas querían salir de la guerra, pero también mantener y extender su influencia en la política, la económica y la sociedad. Muchos de esos líderes de las guerrillas temieron a que los votos no les dieran lo que creían poder obtener con las balas. Cada tanto, desde entonces, hay un ciclo más de violencia selectiva; de crímenes por cobardía.
No es tan claro de dónde vienen los tiros. Incluso el espanto de grupos de autodefensa aún ronda en las disputas de poder. Nadie muere en combate y no hay cadáveres con uniforme –si lo contrario definiera la guerra, desde hace décadas allá

no se habría librado una-. Justos o pecadores, quienes caen son civiles indefensos. Y aunque las balas no son de todos los días ni de todos los meses, lo cierto es que en la región todo el mundo sabe que hay quienes permanecen dispuestos a usar las armas. La zozobra sobrevivió a la guerra y la gente sigue esclava del temor.

Varias de las instituciones departamentales y locales están en manos de políticos que respaldan su proselitismo en la violencia y transan las decisiones de su administración con los grupos que ahora dominan en la región. Son un poco una mezcla de los mismos de antes, solo que ahora sin banderas, sin himnos y sin discursos. Los motiva lo de siempre, hacerse a las rentas petroleras, que retornaron en su mayor parte al control de los entes territoriales de las áreas productoras como consecuencia de las tensiones que creó la reforma que buscaba su repartición. Y a eso le sumaron los presupuestos del postconflicto, pues toda la discusión sobre la paz se concentró en cuánto más dinero recaudar, bien sea del fisco o bien sea de las petroleras que se mantienen en el territorio.

Mientras el Gobierno Nacional gira y los mandatarios de la región recogen, uno y otros se inculpan mutuamente por la poca efectividad en la implementación de las reformas en materia de desarrollo rural, participación política, solución al narcotráfico, reparación a víctimas de la violencia, reincorporación de insurgentes a la vida civil y, en fin, todos aquellos proyectos derivados de los acuerdos y que por su propia letra debieron haber sido ejecutados de manera descentralizada. Insólito, para gastarse la plata del postconflicto se reprodujo el divorcio entre la Nación y la región, con lo cual se intenta apagar el fuego con gasolina. Y cuáles derechos humanos, si la base de su respeto, garantía y realización es una institucionalidad que se tribute a los ciudadanos y sujete su poder a la ley. Y cuál política social, si la plata se va en despilfarro o a los bolsillos de quienes la administran.

Y mientras tanto la gente sufriendo. Una en silencio, sin atreverse ni a protestar; otra protestando cuando alguien lo ordena, y otra, que ha tratado de unirse, para ser más y más fuerte, pero cuya voz no llega muy lejos, tal vez porque no hay nadie que la quiera oír. El miedo aísla e incomunica. La del Sarare es ahora y pese a que formalmente terminó el conflicto armado, una sociedad de sordomudos.

Cada quién busca lo suyo, sobrevive como puede, se junta cuando se lo permiten pero sin el entusiasmo de la libertad. Hay mucho beneficiario de proyectos productivos, impulsados por las instituciones que funcionan y por las empresas y fundaciones petroleras. Pero no hay auténticos empresarios ni emprendimientos locales. Solo unos cuantos inversionistas se han atrevido a poner la carne en el azadón. Nada significativo si se piensa en el potencial de las extraordinarias tierras que conforman el Sarare. Hay apenas para sobrevivir, mucha desnutrición entre la

gente del campo, falta de agua potable y un acceso muy restringido a los servicios públicos domiciliarios.

Los indígenas también han resuelto callar al constatar que no hay quien quiera oír. Nadie en su momento les preguntó sobre lo que habría de hacerse para resolver el conflicto armado y construir una paz duradera. Y es precisamente por la falta de más diálogo, más relación y más cooperación, allá en el territorio y entre sus protagonistas y actores sin armas, que sobreviven y se acrecientan los "conflictos del postconflicto".

Como no hay diálogo constructivo todo es transacción. Como no hay cooperación lo que hay es competencia. Hasta en las consultas previas, que habrían de servir para asegurar el patrimonio humano y cultural de las comunidades indígenas, lo que se ve es una especie de trueque en el que lo que debería ser lo de más acaba siendo lo de menos.

Luchas por el poder, mutaciones de la violencia, aislamiento de los ciudadanos, falta de actividad productiva, aislamiento intercultural, que saldo tan doloroso de lo que comenzó siendo un parrando. Como si fuera poco, pues lo que si aprovecharon algunos fue el desorden fronterizo para fomentar el contrabando. Y como no hay muchas alternativas, nadie se atreve a patear ese hormiguero.

UNA ESCALERA AL CIELO

Como si la gente fuera lo de menos y se le pudiera condenar perpetuamente a aguantar los sufrimientos de la violencia, no hubo una explicación para los pobladores del Sarare sobre los motivos por los cuales se jaló el mantel sobre el que se estaban ensamblando los acuerdos para poner fin al conflicto armado. Pero esta vez tacaron burro. La gente ya estaba hastiada de escuchar el disco rayado de la revolución por venir. Nadie creía en la síntesis de una dialéctica de contradicciones que solo se alimentaban y reproducían a sí mismas, destruyendo todo y sin edificar nada. Por fuerte que se arengara las palabras eran mudas. No había razones que justificaran el uso de las armas. Los poderes armados estaban famélicos.

De la mano los pobladores comenzaron a salir de su trinchera de silencio. Sabían que la manera de ser libres del miedo sería ejerciendo la libertad. Temían por los costos de hablar, disentir y condenar, pero también sabían que, después del fracaso de los diálogos entre el gobierno y las guerrillas, la mayoría de sus líderes locales y regionales eran colosos con pies de barro. No es que el Estado fuera allá muy legítimo, pero había llegado la hora de hacer una apuesta a fondo por él.

Menos mal a nadie en el Gobierno Nacional le dio por reaccionar ante ese fracaso convirtiendo de nuevo esta región en un "teatro de guerra". Desde hace muchos años los propios oficiales militares venían advirtiendo que las soluciones estructurales a la violencia de esta región eran políticas y no armadas. Se requería la inclusión de la gente en los beneficios de la gobernabilidad y desarrollo. Había que ir por ellos, sacarlos del medio del fuego. Se requería confianza, y para la confianza presencia.

Por suerte así lo comprendió el Gobierno Nacional. Con o sin negociaciones, era claro que sentar edificar el andamio de la paz implicaba en Sarare construir una nueva institucionalidad, en y con sus bases sociales. Hacia ese propósito se encausaron los esfuerzos del programa integral de acción institucional que se construyó para la región. Su orientación política era clara: la unidad nacional, la inclusión de la gente en las decisiones y en los beneficios, la habilitación para la autonomía. Por suerte la política se concentró en relacionarse y no simplemente en dar, como otras veces, además con la actitud de quien le tira carne a las fieras.

Hoy existe un aparato institucional que goza de mayor legitimidad. Junto con el Gobierno Nacional, alcaldes y gobernadores se han asociado de manera activa y

protagónica a este proceso de participación comunitaria, en el que se definen con adecuada información los proyectos de desarrollo, se establecen las prioridades de inversión y entre todos se vigila la gestión pública. El sector privado ha encontrado allí una oportunidad y un rol complementario para la realización de su responsabilidad social, apoyando e impulsando las dinámicas de esa alianza y aportando a sus proyectos en un marco de corresponsabilidad.

Y para lo que se acuerda hay recursos, pues ese fue finalmente el criterio que terminó por imperar para la inversión de las regalías en la región. El CONPES de frontera y los Contratos Plan, han sido instrumentos complementarios y muy útiles con los que el Estado ha incursionado en el territorio. Instituciones como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) articularon sus intervenciones, han robustecido sus funciones en el territorio y han logrado en especial bajar los indicadores de desnutrición y mortalidad infantil.

Ese alineamiento de los actores políticos, sociales y económicos de la región se ha institucionalizado de manera muy fuerte. El consenso blinda las decisiones por eso ahora la gente tiene mayor tranquilidad para lanzarse a sus emprendimientos, a transformar las ideas en acciones. Hay menos parálisis, más economía, más asociatividad, más cooperativismo. Las fuentes económicas se diversifican y hay un gran consenso sobre el desafío que representa asegurar el desarrollo sostenible en una era post petrolera. La unidad es el gran factor de protección contra la violencia. Son muy escasos y pobres los argumentos para oponerse y menos aún para atravesarse con la intimidación de los fusiles.

Esa alianza se ha extendido, no sin dificultades, hacia las comunidades indígenas del territorio. Ese diálogo nunca ha sido fácil, pues además de las complejidades propias de una relación entre actores culturalmente diversos y con visiones opuestas sobre temas críticos, se suma la pretensión de los insurgentes en intermediar esas relaciones. Lo bueno es que ese diálogo es ahora directo y permanente, y que ha arrojado beneficios concretos para estas poblaciones, en especial en el mejoramiento de los indicadores sociales básicos. El control sobre sus territorios, la protección ambiental, el reconocimiento y valoración de la identidad cultural, la participación activa y relevante en las decisiones que las afectan y la configuración de un modelo de administración adecuado a sus instituciones tradicionales son aspiraciones que se vienen haciendo realidad.

Por supuesto que en todo esto han sido esenciales las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Tocó trabajar mucho para consolidar su confianza con las poblaciones, en

especial de las áreas rurales. Y eso comenzó a lograrse cuando se entendió que aunque la gente quisiera respaldar su actuación, la volatilidad de su presencia y los prejuicios existentes implicaban que esa actitud implicara poner en riesgo la propia vida. Policías y militares tendrían que llegar para quedarse, para proteger a los ciudadanos y sus derechos, por sobre el combate a los enemigos. En consecuencia, puede decirse que los acuerdos del Estado con los ciudadanos están blindados por las instituciones de la seguridad y la defensa.

La región del Sarare se ha vuelto mucho más visible en el escenario nacional. Y no por sus malas noticias, sino por las buenas. Aunque por allá sigue habiendo individuos armados la población se ha sacado el miedo del cerebro y se ha resuelto sacar la región del aislamiento. Hay una gran promoción del turismo, se ha puesto mucho esfuerzo en la exaltación del patrimonio cultural, se incrementa la actividad comercial en nuevos mercados y todo eso ha hecho que también los foráneos pierdan el miedo de visitar ese asombroso territorio.

Y si antes a nadie le importaba de a mucho en la región la hostilidad contra la infraestructura petrolera hoy esa realidad es muy diferente. En la medida en que la población ve de manera tangible y directa sus beneficios, derivados de la buena administración de las regalías, pues hay una mayor condena ciudadana frente a estos hechos de violencia y a los daños que general en la sociedad y el medio ambiente. Y aunque la guerra siguió, cada día son más los guerrilleros que renuncian al camino de las armas. Ya no encuentran espacios, ni en Venezuela, ni en su propia conciencia. Se vienen sumando a las mayorías que en la región han emprendido juntas la construcción de la escalera al cielo, sin importar de a mucho si se llega a él.

11. VICHADA

CONTRAPUNTEO

Para cuando se formalizó la finalización del conflicto armado algunos pensaban en Vichada como un territorio promisorio para la generación de actividades económicas muy competitivas. Para otros, en especial los campesinos y los indígenas, los sentimientos fluctuaban entre el optimismo moderado y la desazón. Mientras los primeros veían en el horizonte vastos territorios para conquistar, los segundos vislumbraban una tempestad de inversiones capaces de transformar el paisaje, el ritmo de los días, la duración del crepúsculo y con ello todo aquello que constituía su manera de vivir, su concepto de felicidad y su forma de definir el desarrollo.

Aunque extensa y lejana, esta "tierra de hombres para hombres sin tierra" podría terminar siendo campo fértil de nuevos conflictos o cementerio de los usos y las costumbres de sus habitantes de siempre y de los colonos. Y, entre los unos y los otros, no eran pocos los que profetizaban que una vez más esas indómitas sabanas se tragarían pronto las ilusiones de los muy entusiastas y poco recios extranjeros. Para estos todo volvería a su lugar, incluida la inmemorial ilegalidad con que se cohabitaba en esas lejanías.

Menos mal la historia de estos años no le ha dado la razón del todo a nadie. Es cierto que el fin del conflicto armado movilizó importantes emprendimientos económicos en la región, pero también lo es que las instituciones actuaron eficazmente, no solo en la definición de políticas, estímulos y regulaciones para asegurar la protección y la promoción de los derechos de los lugareños sino además en lo indispensable: el arbitraje de una relación equilibrada entre actores sociales, políticos y económicos con diversidad de comprensiones sobre el desarrollo y la prosperidad. Así, los opuestos y competidores, sin renunciar cada cual a lo suyo, comenzaron el contrapunteo y, a fuerza de rimar, a construir una armonía entre distintos.

Hoy en el Vichada hay cantidades de proyectos agroindustriales, que para ser exitosos implicaron la destinación de importantes inversiones en la adecuación de los suelos pero que se basaron en un modelo de asociatividad con campesinos, con lo cual se ha creado una estabilidad en la generación de sus ingresos, en su seguridad social y en sus posibilidades de acumulación. Y, quién lo creyera, como resultado del diálogo intercultural ahora las comunidades indígenas se han asociado a estas nuevas formas de aprovechamiento agropecuario. Eso sí garantizando ante todo su propia alimentación, pues los indios aprendieron de su dolorosa experiencia con la coca que desmantelar las chagras los condena al hambre. Hoy protegen y aprovechan mejor sus tesoros.

Como hablando se entiende la gente, lejos de arrasar con las culturas, la nueva dinámica económica ha sido clave para reivindicarlas y salvaguardarlas de la violencia, la ilegalidad y el abuso de los poderes. Ha generado transformaciones en ciertos hábitos de la vida, en especial productiva, pero ha traído grandes beneficios a su patrimonio colectivo.

Se ha necesitado mucho del Estado para fomentar modelos económicos inclusivos en la región, pues siempre en los empresarios ha existido la tentación de llegar a comprar las tierras, entregando a sus propietarios un cheque, pero que termina por ser el tiquete del bus que viaja hacia el infierno. En eso los más amenazados eran los campesinos, quienes no son gregarios ni cuentan con instrumentos para la defensa de sus derechos, a diferencia de los indígenas que tienen las consultas previas. De allí que fuera tan acertada la exigencia de vincularlos como propietarios de un porcentaje de los proyectos como condición para el acceso a la propiedad de tierras y para el acceso a beneficios fiscales.

Hay que decir que la razón esencial por la cual se logró esa actividad económica organizada fue el esclarecimiento de los derechos de propiedad, posesión y tenencia sobre la tierra, de la definición legal de la manera de adquirirla y de la restitución de aquellas que fueron despojadas durante el conflicto armado.

Un poco bajo la lógica de hacer camino al andar, muchos de quienes establecieron proyectos forestales, caucheras, palmeras o cultivos de alimentos, lo hicieron apostando a que en la región se resolverían las graves restricciones de infraestructura vial y de transporte, como resultado de la inversión pública y también como una necesidad derivada de la exploración y producción de petróleo, al cual le "chuparían rueda". Aunque eso no ha sido del todo así, lo cierto es que en los últimos quince años se ha logrado mucho en ese terreno. Hoy Puerto Carreño está conectado a Puerto Gaitán mediante una carretera pavimentada que además imprimió mayor dinámica al crecimiento de La Primavera y Santa Rosalía. Y a eso hay que sumarle el mejoramiento en las condiciones de navegabilidad del rio Meta, lo que ha permitido optimizar los costos de transporte de tanta madera que se está cosechando.

Y si se tiene en cuenta que como resultado de tanta afluencia y movilidad de personas se creó el servicio de transporte aéreo, bien puede decirse que hoy Vichada tiene un sistema multimodal de transporte de carga y pasajeros. Suele decirse que ser pobre sale caro, y es verdad. Por acá un pasaje en yate por el río resultaba antes más caro que lo que ahora sale viajar por avión, y eso sin considerar

que lo que antes eran trayectos de un día se hacen ahora en media hora. Se acortaron los tiempos y las distancias y eso le ha mejorado la vida a todo el mundo.

Y el cierre de esa brecha también es virtual. Gracias al acceso pleno a las tecnologías de la información y la comunicación ahora la gente se tele transporta, bien sea para hacer sus trámites o para hablar con los suyos. Es genial ver cómo padres y madres al menos ven ahora crecer a sus hijos en los internados diariamente y no solo en cada navidad.

Nuevas fuentes socio productivas, mejores vías y mayor acceso, supusieron más gente y transformaron la geografía humana. Hoy Vichada sigue teniendo sus cuatro municipios, pero han proliferado nuevos poblados, que albergan a nuevos trabajadores, en su mayoría propietarios asociativos de proyectos y dueños de sus propias viviendas. Ese sentimiento de propiedad ha creado un vínculo de la gente al territorio, cuya consecuencia adicional ha sido un mayor compromiso ciudadano con las instituciones y con los bienes públicos. Y eso también ha contribuido a controlar los efectos inflacionarios que ocurrían en la economía de la región como consecuencia de los excesos de dinero, pues al sentirse de ahí la gente ya no derrocha tanto ni consume sin control, sino que entiende la importancia del equilibrio. Más que plata en las alforjas lo que la gente quiere es un mejor modo de vivir.

Acostumbraban pensar los capitalinos que Vichada era muy lejos. Ahora hay mayor consciencia de justamente lo contrario. Lo que está lejos es la capital, allá arriba enclavada en las montañas. Aguas abajo, por el Meta o el Orinoco y por todo ese sistema circulatorio que irriga esa maravillosa región, Colombia encuentra una vieja nueva ruta de integración, no solo con Venezuela, sino con el mundo a través del Caribe. Y lo que hay para exportar, alimentos y recursos naturales, se produce ahí mismo. Eso sí, por suerte el contrabando de narcóticos, de gasolina y de fauna, que tanto aprovechó esa ventaja, está mucho más controlado y se ha reducido de manera sustancial. Ahora se ven más gringos y cachacos, o con cañas de pescar, o enterrados en cuatro por cuatros buscando aventuras, contemplación y deportes en esos cien mil kilómetros cuadrados en los que termina la selva y comienza la sabana.

Por supuesto hay discusiones infinitas como la de la responsabilidad ambiental. Por suerte esta discusión ha sido más objetiva, más racional y muy transparente, en virtud del involucramiento de la academia y la comunidad científica. Han sido sus argumentos la fuente de legitimación de los proyectos y en especial de equilibrio en el ordenamiento del territorio y la protección del patrimonio ambiental. Más

instituciones y más agentes económicos visibles han conducido a una mayor regulación y a mejores prácticas de las empresas en esta materia.

Y obvio, el caparazón que protege esta hicotea de buenas cosas en la región, es la seguridad que ofrecen de manera permanente las instituciones de la Fuerza Pública. Por ahí permanecen en los ríos, los caminos y las calles, se relacionan mejor con la gente, con lo cual se vive más tranquilo.

VORÁGINE

Cuando por allá se supo que Gobierno y guerrillas acordaron poner fin al conflicto armado, lo que la gente pensó fue que ni en el espacio, ni en el tiempo, ese que se libraba y se resolvía era el conflicto que ocurría en el Vichada. Aunque el uno y las otras se habían aparecido a veces por esas tierras, su influencia allí era escasa, y en cambio los poderes reales mucho más contiguos. En Vichada se imponía el más fuerte; el más fuerte de los que estuviera y eso excluía a los de la foto.

Al indagar sobre algún efecto de esos acuerdos en la región los paisanos sospecharon más de los nocivos que de los positivos –y aun cuando se diga que los llaneros son desconfiados el tiempo terminaría dándoles la razón-. Mientras se sentenciaban estas premoniciones llaneras, al otro lado de la luna muchos empresarios animados por el nuevo amanecer, extendían en sus mesas de junta pliegos con dibujos más de planos que de mapas y pinchaban metadatos en ellos con la ilusión de poner una pica en Flandes - hechizados por un espectro que más tarde sería un espanto, pensarían las brujas que los esperaban.

La historia en resumidas cuentas es esta: el cierre formal del conflicto armado movilizó la atención y los recursos del "postconflicto" hacia territorios y poblaciones distintas, pero los vichadenses siguieron sin recibir casi nada, o, mejor dicho, nada que no fuera palo. Para quienes firmaron los acuerdos fue menester priorizar el cumplimiento de sus compromisos en las zonas del país en que su presencia y su influencia fue relevante o en los que se jugaban sus apuestas políticas. Y Vichada, tan extenso, tan lejano y con tan pocos votos no era su prioridad. Se calculaba, además, que el trabajo del Estado terminaría haciéndolo el sector empresarial, necesitado de infraestructura, de fuerza laboral, de bienes y servicios y obligado a cumplir su "responsabilidad social".

Qué ironía: tras el fin del conflicto en el Vichada se consolidó un Estado paralelo. El "orden" lo imponen bandas criminales a punta de miedo y con nuevos brazaletes. Y la escasa "política social" la ha tenido que aportar el sector privado, cada vez más amainado. Las instituciones, aunque ahí en los edificios, silban hacia el techo, pero ni actúan ni se legitiman en la mente de los ciudadanos.
El panorama ahora es muy sombrío. Los anuncios del cese de la guerra llevaron a Vichada un caudal de inversiones agrícolas y petroleras que dejó a su paso una estela de gente en el territorio. Pero bastaron pocos inviernos para que el entusiasmo sucumbiera en el fango. Ni en el subsuelo se encontró mucho ni en el suelo se enraizaron las plantas; mucho menos las personas.

Aunque hubo con qué sembrar no hubo con qué mantener, ni para quién cosechar. Solo unos pocos sobrevivieron a la cruda realidad de ver desde el oasis el desierto. Y no es que los suelos sean tan pobres como suele decirse; lo que es realmente pobre es la actividad estatal, que es un insumo igual de necesario a la tierra.
Relegada de su lugar en los planes de desarrollo, nunca llegó la infraestructura vial ni se creó el corredor fluvial que integrarían estos territorios al resto del país y a Colombia con el Caribe por el corredor del Orinoco. No era de extrañarse, advertiría el anciano que llevó allá el primer bus, pues desde principios de los ochenta se está esperando el Caterpillar con que se va a construir la autopista, como lo prometió el Presidente ese día que pasó por Puerto Carreño.

Y de las vías secundarias y terciarias ni hablar. Si en algún momento se pensó que los petroleros tendrían que encargarse de abrirlas y mantenerlas, la realidad geológica y tecnológica ha sido implacable en desestimular la exploración y producción de petróleo allá, donde es tan lejos y tan difícil. En esto todo el mundo se quedó viendo un chispero, incluidos los empresarios de la agroindustria, que ven enterrarse sus expectativas como se entierran las tractomulas. Aunque sea duro reconocerlo, la ausencia de actividad petrolera relegó aún más la presencia del Estado y la oferta de las instituciones.

Los indígenas de Vichada siguen ahí luchándola, restableciendo las chagras que una vez desmantelaron embrujados por la coca, tratando casi en vano de mantener sus culturas y de resistir a los encantamientos que les ofrecen los foráneos, especialmente a los jóvenes. La vida es cada vez más difícil para ellos, al menos a la manera en que lo dicta su forma de ver el mundo. Como si Vichada fuera un pañuelo, pareciera que los que llegan sacaran a los que están.

De los campesinos, de esos colonos que resumen en su figura la semblanza de los llaneros, de los héroes descalzos de la poesía, los que temprano con su buena puntería matan al tigre, más tarde liberan con su machete a la mujer del güio, al atardecer retan a duelo al vecino y por la noche apuestan con él a los gallos, pues de esos van quedando más bien pocos. Pese a que se expidió en la Capital una ley de tierras en la región no hubo quien la hiciera cumplir. A las buenas o a las malas la gente ha ido vendiendo sus tierras y quienes lo han hecho terminan sin su rostro deambulando entre el cemento. Por suerte hay entre ellos varios sabios, que no caen en engaños y saben que desde el chinchorro la felicidad es inigualable.

Quienes hicieron la fila india para trabajar en la legalidad tuvieron que regresar a buscar las opciones en la ilegalidad. Si la soledad y el abandono marchitaron la primera, entonces tendrían que volver a ser el alimento de la segunda. Por eso de nuevo la bronca de la gente contra el Estado, que reprime en nombre de la ley pero

que no brinda opciones para vivir bajo sus dictados. Por eso la gente se aguanta a los ilegales y cohabita con ellos, unos mirándolos y otros esquivando la mirada. Quien conoce los llaneros sabe que mirar a los ojos es aceptar. En otras palabras, en Vichada la ley y la legitimidad no coinciden.

De los sueños prometidos tras el fin del conflicto, de los anhelos de paz, el desenlace ya lo conocemos: como a Arturo Cova y los suyos, "¡los devoró la selva!"

MÁS VALE PASO QUE DURE QUE TROTE QUE CANSE

En la historia de las últimas décadas han sido muchas las caravanas de emprendedores que han viajado hacia el este con ánimo conquistador. También han sido varios los abandonos de quienes envejecieron prematuramente y retornaron derrotados por la inclemencia del Llano profundo. Es que Vichada es un paraíso, pero hay que saber vivir en él, respetarlo y amoldarse en lugar de intentar doblegarlo. No es para todo el mundo. Menos para los que piensan que en sus maletas llevan el progreso y no reparan en que en esas llanuras ese concepto tiene una definición propia, como la tienen la idea de felicidad o de desarrollo, o el tiempo y el propio espacio. Casi todos los que llegan van con afán fracasan, pues del afán no queda sino el cansancio. Allá en el llano más vale paso que dure que trote que canse. Los que se quedaron y tuvieron éxito son los que así lo entendieron oportunamente.

Al conocerse el fracaso de los esfuerzos por terminar el conflicto armado nadie en Vichada se rasgó las vestiduras. Apostar al surgimiento de una realidad mejor en la región como consecuencia de su éxito era como ir a buscar el ahogado río arriba. Claro, mejor habría sido lograrlo, pero la verdadera transformación de las condiciones tendría que darse en la realidad y no en los papeles. Menos en los papeles de quienes por allá eran o por degradación o por ausencia tan poco relevantes.

Para entonces ya se sabía que la realidad de Vichada, para lo bueno y para lo malo, estaba condicionada por el éxito de los emprendimientos de la agroindustria y del petróleo. Por su carácter estratégico para el país, estos sectores económicos serían los únicos capaces de movilizar la voluntad política y la actividad institucional hacia la región, asegurar su permanencia y construir su legitimidad. Esa ha sido la tendencia en los últimos años: un importante flujo de inversiones económicas que, al provenir de empresas con una reputación para proteger, han impulsado y apoyado también la construcción del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley.

La primera y más crucial expresión de esa nueva realidad institucional fue el incremento en la presencia de las instituciones de la Fuerza Pública, esencial para contener los delitos y crear un ambiente de tranquilidad tanto para los habitantes como para los transeúntes. Aun cuando subsisten grupos ilegales, asociados en

especial al contrabando, su acción es cada día más restringida, por el simple hecho de que las instituciones han llenado el vacío que ellos antes ocupaban.
Algo muy positivo en la nueva realidad de la región es que no se delegaron en las empresas los roles ni las cargas que son propias del Estado, sino que las instituciones acercaron su oferta a las demandas de los ciudadanos, con lo cual se ha transformado positivamente una relación que era de mucha desconfianza. Muy paradójicamente eso tiene que ver con el hecho de que los resultados de la exploración petrolera no fueron los esperados.

Pese a que en su momento mucha gente se llegó a entusiasmar, nuevas tecnologías y lugares del país con mejor prospectiva cambiaron el rumbo a los taladros. No hubo entonces un exceso de recursos y todo el mundo ha tenido que ser más diligente y cuidadoso en el uso de los que hay. Se ha ido sembrando y se ha ido cosechando. Hoy el crecimiento de la región tiene raíces. Y eso se ve hasta en las instituciones locales, pues no existe esa avidez que crean las bonanzas en los políticos. Ahora la gestión de las autoridades está orientada por planes de desarrollo pertinentes a las vocaciones del territorio y es más transparente.

Por supuesto no todo es color de rosa. Aunque se despejó el incierto panorama jurídico sobre los derechos reales -lo que abrió las puertas a las inversiones que estaban represadas-, muchos de los nuevos empresarios llegaron a comprar fincas y a consolidar en ellas proyectos muy competitivos, pero dejando a un lado y transformando la vida de los campesinos que fueron sus propietarios o poseedores. Eso ha traído un impacto cultural y lamentablemente la exclusión de muchos de quienes debieron estar incluidos en esas actividades agrícolas. Hay otros que dan ejemplo y usan los recursos y beneficios de la ley para llevar como socios en sus negocios a los llaneros.

Algo similar ha ocurrido con los indígenas. Se ha asegurado la realización de su derecho a la consulta previa, con lo cual los impactos de las actividades económicas sobre sus culturas se han gestionado relativamente bien, pero eso no ha trascendido hacia una genuina relación de alianza, como habría podido ocurrir, para generar proyectos empresariales con mutuos beneficios. Hoy estas comunidades tienen asegurada su soberanía alimentaria y el respeto a sus derechos. Pero de respetar a garantizar hay un paso grande, y en eso tanto las instituciones "blancas" como las indígenas enfrentan desafíos. Hoy estas poblaciones siguen amenazadas por la gran dificultad de preservar su identidad y cultura frente a las dinámicas de la globalización y del desarrollo. Menos mal sus autoridades entienden que la solución no está en impedir el desarrollo sino en ponerlo a su favor y por suerte los empresarios han asumido en esto una actitud responsable. A partir de eso

comienzan a avizorarse soluciones, en especial para la preservación y aprovechamiento de los saberes tradicionales.

En la medida en que las plantaciones en el Vichada han ido creciendo ha llegado más gente. Y como el territorio es tan extenso y las vías tan sinuosas, ha sido necesario crear nuevos centros poblados. Por suerte eso ha ocurrido de manera ordenada y en un ritmo controlable tanto para las instituciones públicas como para las empresas que los motivan. Ya no hay esos enjambres de migrantes que en otros tiempos llegaron a raspar coca, ni tampoco los que suelen ir tras el petróleo. Los que han llegado a sembrar echan más rápido sus propias raíces.

Hoy Vichada enfrenta la necesidad de resolver mejor sus serias restricciones de conectividad física. A pesar de que en medio de las dificultades se lograron llevar las semillas y los insumos, lo que hay ahora son árboles que hay que cosechar y sacar de allá. En estos años las vías han mejorado por esa misma actividad económica, pero siguen siendo muy precarias en ciertas épocas del año, en especial para llegar a las principales de Puerto Gaitán a Puerto Carreño y de Puerto Gaitán a Cumaribo, que por fin están pavimentadas, así como al Río Meta, que ahora es navegable todo el año.

Por muchos años se ha venido hablando de la fragilidad ambiental del Vichada y de los riesgos del desarrollo e impactos de los proyectos económicos. Por suerte ha habido tanto activismo en esa materia, pues eso ha llevado a que se tome muy en serio la gestión ambiental, tanto por parte de las empresas como por parte de las instituciones. Ha sido muy bueno que su actividad ha llevado además a una mayor conciencia ambiental de las comunidades, que ahora cuidan lo que antes estaba descuidado e incorporan nuevas tecnologías en su producción, incluida la ganadera, con apoyo del propio gobierno. Es bueno que de eso se siga discutiendo y más bueno aún que se haya contenido tanta ilegalidad que depredaba la región.

¿Guerrilleros? Pues por ahí deambulan a veces unos cuantos, como también otras bandas que se siguen amparando en la inmensidad del territorio. Hoy es muy difícil distinguir a unos y otros, pues aunque poquitos andan esencialmente en lo mismo. Pasando de un lado al otro droga, gasolina o cualquier cosa ilegal que les de plata. Menos mal en Venezuela se les acabó también el descanso y la mayoría de esa gente se aburrió de seguir perseguida y extraviada en esas lejanías sin saber para dónde coger. Y qué bueno que en eso la reinserción que impulsan las instituciones funciona bien.

II. LOS ESCENARIOS POR SUBREGION

SUBREGION CAQUETA

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
Promisorias reservas de recursos naturales	Con el acuerdo para el fin del conflicto armado y el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el Caquetá, se estableció un inventario geológico exhaustivo del departamento, que reveló numerosos yacimientos de minerales. • Las instituciones regionales impusieron una cuota de capacitación y empleo de residentes del departamento en las industrias extractivas, y una política de "contenido local" para promover las compras al nivel local. • El aumento subsecuente de las regalías fue un motor esencial del desarrollo económico y humano del departamento. • Los recursos naturales fueron aprovechados de acuerdo a la sostenibilidad a mediano y largo plazo, enmarcada en el entendimiento del mundo occidental y el mundo indígena. Se generaron procesos productivos alrededor de los productos propios de la región, aumentando el sentido de pertenencia y autoabastecimiento del Caquetá.	El acuerdo de fin del conflicto armado y el mejoramiento de las condiciones de acceso a varias regiones del Caquetá generó una expansión de las actividades extractivas al 50 por ciento del territorio, considerado apto para la exploración de petróleo. • Sin embargo, la falta de supervisión de la industria y promoción de prácticas sociales y ambientales responsables, por parte de las instituciones, mantuvo impactos adversos para el desarrollo del departamento, como la contaminación de los recursos hídricos, migraciones laborales insostenibles y el incremento de la intermediación ilegal en la contratación de bienes, servicios y mano de obra. • El desembolso de las regalías no fue sistematizado, controlado ni coordinado, resultando en mayor corrupción y pocos efectos tangibles	La recuperación del territorio y el mejoramiento de las condiciones de orden público permitieron una mayor explotación de los recursos naturales del Caquetá, tanto mineral como agropecuaria. El aislamiento de los grupos armados en zonas circunscritas limito los atentados a instalaciones industriales, y acabo con los secuestros de personal. • El departamento se benefició de un aumento de las actividades económicas para fomentar inversiones sociales en servicios públicos e infraestructura. • La industria implementó buenas prácticas sociales, ambientales y económicos en línea con los estándares internacionales, como las *Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social* de la IFC (International Finance Corporation), o nacionales como el Lineamiento de Impulso de una *Agenda Empresarial en Materia de Derechos Humanos y Empresa* de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
		para la infraestructura y los servicios públicos. • La impunidad que favoreció la explotación indiscriminada de los recursos naturales amenazó el equilibrio eco-sistémico, redujo las capacidades de las tierras agrícolas y mantuvo tasas insostenibles de deforestación.	2014-2034 del Gobierno de Colombia.
Alta influencia socio-económica y militar de las FARC	Los grupos armados ilegales del Caquetá se adhirieron al acuerdo nacional para el fin del conflicto armado y de desmovilización. Definieron un mapa de ruta de transición con la Alta Consejería para la Reintegración. • Aprovecharon esta transición para juntarse a la competición política en las elecciones locales, aprovechando su experiencia administrativa y sus nexos históricos en el departamento para ganar puestos de representación en la gobernación, las alcaldías y las agencias del gobierno. Cartagena, Montañita y San Vicente del Caguán fueron los principales bastiones políticos de la ex-guerrilla. • El desarme y la desmovilización fueron acompañados por programas de	La firma del fin del conflicto armado generó grandes expectativas en las antiguas filas de los grupos armados ilegales, pero no fue acompañada de apoyo institucional, psicosocial o económico. • Una mayoría de desmovilizados, decepcionados por su pérdida de ingreso y frustrados por su pérdida de estatus y reconocimiento en partes de la población, integraron o constituyeron bandas criminales, aprovechando antiguos nexos para establecer redes de narcotráfico y actividades al margen de la ley. • El gobierno no incentivó el desarrollo regional como fue prometido, manteniéndose bajos índices de	A pesar de la falta de adhesión de los grupos armados del Caquetá al acuerdo nacional de fin del conflicto armado, el departamento tuvo: • una recuperación del territorio por parte de las Fuerzas Armadas, quien aumentaron sus ofensivas contra los Grupos Armados Ilegales; • una dinámica nacional que aseguró una re-articulación de las instituciones regionales, una llegada de inversiones privadas y un mayor apoyo – coordinado – de agencias internacionales de cooperación; • un nuevo dinamismo económico regional, fomentado por esquemas de micro-crédito beneficiando a campesinos, atrajo guerrilleros que disminuyeron las filas de la insurgencia;

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	rehabilitación psicosocial, apoyados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y las Naciones Unidas. • Al igual que para la década de 1990 se hizo la reintegración del M-19, el fin del conflicto armado abrió oportunidades a los nuevos desmovilizados, centrando sus banderas políticas en la educación, salud y empleo. • La reinserción fue apoyada por iniciativas de capacitación profesional lideradas por la Dirección General para la Reinserción y agencias internacionales de cooperación. En 2030, los residentes del departamento ya no se definen como ex-guerrilleros o ex-participantes a otros grupos, sino solo como caqueteños.	empleabilidad, satisfacción a las necesidades básicas y salvaguarda de los derechos. Desmovilizados no encontraron alternativas de ingresos. • El desarrollo de la región y el ingreso de capitales para actividades industriales productivas se enfrentó a la alta influencia socio-económica de grupos armados, lo que suscitó inconvenientes de orden público, movilizaciones de la población y ataques a las operaciones de las empresas privadas.	• una mejora de las condiciones de salud, educación y satisfacción de necesidades básicas de la población generó una reducción de la influencia social de los grupos armados.
Alta influencia del narcotráfico	Al firmarse el fin del conflicto armado, los grupos armados ilegales promovieron la prohibición de los cultivos ilícitos en el departamento del Caquetá, y apoyaron las instituciones estatales para la erradicación del narcotráfico. • La incidencia del narcotráfico disminuyó tanto en cuanto a la producción y exportación de estupefacientes que en relación con la	Luego de firmarse el fin del conflicto armado, los grupos armados ilegales desmovilizados apoyaron la prohibición de los cultivos ilícitos en el departamento del Caquetá, en aplicación del acuerdo “Solución al problema de las drogas ilícitas” firmado por el gobierno colombiano y las FARC en 2014.	Mediante refuerzos a la capacidad institucional, la lucha incrementada contra la corrupción y la imposición del estado de derecho, se dieron golpes sustanciales a las estructuras de narcotráfico en el Caquetá. • El desarrollo de vocaciones productivas alternativas, con apoyo económico de las instituciones (micro-crédito, capacitaciones,

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	criminalidad oportuna, los homicidios y la corrupción de agentes del estado. La siembra de cultivos ilícitos fue remplazada por plantaciones de productos agropecuarios alternativos de alto valor comercial, como el cacao y las hierbas aromáticas.	Pero el departamento no vio atendidas las necesidades de su población, ni una promoción eficiente de su desarrollo económico que generará mejorías regionales. Esto incentivó la creación de grupos armados atomizados - recreando lo sucedido con paramilitares en la década de 2010- que persiguieron con el narcotráfico, preservando los antiguos nexos de producción y trasporte de drogas ilícitas. La población campesina del departamento no encontró alternativas rentables y viables a los cultivos ilícitos.	apoyo estructural a cooperativas agropecuarias) convirtió la mayoría de superficies de cultivos ilícitos en áreas de cultivos legales. La despenalización y/o legalización de los estupefacientes en varios países de América Latina impuso una competencia devastadora a los narcotraficantes de países prohibicionistas, dando como resultado una disminución sustancial de los cultivos ilícitos en Colombia.
Colonización histórica e identidad de colono	El acuerdo del fin del conflicto armado y la estabilización del orden público en la mayor parte del departamento fue un factor de atracción de nuevos inversionistas y de mano de obra en Caquetá. Esta migración resultó en un fortalecimiento de la identidad del colono caqueteño, una mayor implicación en la vida pública por parte de los residentes, y un mejor relacionamiento con las etnias indígenas del Caquetá.	El fin del conflicto armado no se acompañó de un mejoramiento de las condiciones de gobernanza del departamento, y falló en generar un mayor compromiso ciudadano del colono caqueteño con su territorio. La identidad local siguió caracterizada por una falta de consciencia de la fragilidad del medio ambiente, y valores cívicos débiles.	A pesar de la permanencia de grupos armados en partes del territorio, la mentalidad de los colonos fue instrumental en la recuperación de zonas anteriormente controladas por actores ilegales, para el desarrollo de actividades productivas. Un mayor impulso de asociativismo permitió el desarrollo de clústeres productivos, y de consolidación de infraestructura para el uso

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
			compartido de las poblaciones del departamento.
Capacidad de organización de las FARC	Las estructuras organizativas de los grupos armados se formalizaron a través de éxitos electorales y la constitución de gremios sectoriales o asociaciones ciudadanas, en organizaciones de la sociedad civil, que promueven su agenda política.	Las estructuras organizativas de los grupos armados se formalizaron en gremios sectoriales y asociaciones de la sociedad civil, pero disfrutaron de pocos éxitos en la promoción de su agenda política y de reforma del statu quo económico.	Las estructuras administrativas e institucionales del departamento se fortalecieron gracias a una mejor capacidad y recursos adicionales, y llenaron el "vacío organizativo" creado por la debilitación de la capacidad de organización de los grupos armados.
Deforestación por ganadería extensiva	La deforestación intensiva del Caquetá que resultó de la colonización del departamento por ganaderos, fue controlada por medio de una presencia institucional reforzada en el territorio. • Una mayor capacidad técnica y el aumento de recursos financieros de las autoridades locales permitió organizar una respuesta coordinada a la destrucción ambiental. • Los 66 mil kms2 de bosque caqueteño contados en 2013 [1] , esenciales para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, fueron adicionalmente protegidos por el desarrollo de esquemas comerciales de "bonos de	Los grupos armados del Caquetá se adhirieron al acuerdo nacional para el fin del conflicto armado, pero no perdieron el control de sus zonas de influencia en el departamento. • La deforestación por siembra de cultivos ilícitos continúo. • Unos elementos de la insurgencia se negaron a vincularse al fin del conflicto armado, y se atomizaron en bandas criminales. En estas zonas, la deforestación continua por las actividades ganaderas, fuente de activos "móviles" que	La falta de adhesión de los grupos armados del Caquetá al fin del conflicto armado incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas, que circunscribieron los insurgentes a zonas delimitadas del departamento. • Lo que permitió limitar la deforestación por siembra de cultivos ilícitos. • La disminución del control territorial por grupos armados al margen de la ley facilitó una reconversión económica de la ganadería (fuente de activos móviles) a la siembra de maderas preciosas y de especies agro-frutícolas nativas,

[1] "COMPROMISO POR EL CAQUETÁ: CERO DEFORESTACIÓN Y RECONVERSIÓN GANADERA", instituciones nacionales y regionales, Junio 17 de 2013

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	carbón", vendidos al sector industrial para compensar sus emisiones por terratenientes sembrando especies nativas en sus praderas. • Indígenas nativos del Caquetá desarrollaron, con la asistencia de organismos de cooperación internacional especializados, vocaciones productivas aprovechando sus conocimientos médicos y alimentarios ancestrales. La comercialización de productos naturales nativos del departamento (incluso hierbas aromáticas y medicinales) en las grandes cadenas nacionales de distribución, fomentado por la creación de un sello de calidad "Bio de Colombia", se reveló un negocio sostenible e inclusivo para las comunidades del departamento. También permitió un mejor cuidado de las cuencas hídricas, la fauna y la flora de la región. • Programas de reinserción de insurgentes capacitaron a desmovilizados para volverse guardabosques, encargados de la protección de zonas forestales donde se ubicaban antes del fin del conflicto armado. La multiplicación de Reservas Naturales de la	se pueden desplazar para evitar la presencia criminal. • A pesar de la firma del fin del conflicto armado, la falta de controles medioambientales por las instituciones a empresas privadas, y la insuficiencia de conciencia de la población frente a las afectaciones de la deforestación sin control, limitaron la dinámica de reconversión del departamento a vocaciones productivas compatibles con esfuerzos de reforestación.	disminuyendo las presiones sobre los bosques del Caquetá. • El mejoramiento de las condiciones de seguridad en el Caquetá fomentó el desarrollo del departamento como destino de ecoturismo internacional, especialmente para las iniciativas de ornitología aprovechando la biodiversidad única de la región. Este nuevo sector económico apoyó la protección de los bosques caqueteños.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	Sociedad Civil, por la simplificación de los trámites requeridos para beneficiar de esta figura de protección ambiental, generó fuentes de empleos adicionales.		
Cooptación, cohabitación y competencia de las instituciones con las FARC	*Cf Variable 1, "Promisorias reservas de recursos naturales".*	Las instituciones regionales implementaron las visiones políticas y económicas de grupos armados de extrema izquierda, instituyendo barreras legales y practicas a grandes inversiones productivas en el Caquetá.	El reforzamiento de las capacidades institucionales en el departamento, con mayor amplitud para imponer un estado de derecho, neutralizó la influencia de los grupos armados en las instituciones públicas.
Zona de alto interés para autonomía regional en post-conflicto	La búsqueda de una autonomía se generó en el marco del cansancio por el abandono del gobierno central. La mejora en las condiciones de gobernanza permitió una mayor autonomía en el manejo de las regalías del Caquetá, redirigidas por el gobierno central a las instituciones regionales. • Se aprovecharon no solamente un incremento de recursos financieros públicos, sino también una mejor rentabilidad de estos recursos, con impactos visibles en la infraestructura y los servicios públicos. • La estabilización del territorio permitió un	Si bien se firmó el fin del conflicto armado, la falta de inversiones que fomentaran la satisfacción de las necesidades de la sociedad, aumentó el sentimiento de aislamiento de los Caqueteños, volcando su pensamiento a la búsqueda de una autonomía e independencia de los intereses del gobierno en Bogotá. • Las estructuras de los grupos armados ya desmovilizadas aprovecharon está situación para aumentar la aceptación social con	El desarrollo regional y las mejoras en la gobernabilidad permitieron que el gobierno incentivara el sentido de pertenencia de las poblaciones más alejadas de los centros productivos tradicionales. Dejando a la guerrilla con una reducida base social que se sintiera atraída a sus ideales, pero manteniendo poderío económico y cierto control territorial. • A pesar de la falta de acuerdo nacional en el fin del conflicto armado, el Caquetá promovió su desarrollo económico y humano de manera endógena, con apoyo de agencias internacionales más bien que de las

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	incremento del comercio con los departamentos vecinos y con Ecuador. • La construcción de vías primarias, secundarias y terciarias alternativas, tanto como la construcción de líneas de interconexión eléctrica propias fueron prioridades. • La ubicación estratégica del departamento como la puerta de Colombia a la Amazonia, permitió generar procesos productivos diferenciados a otras regiones. Esta autonomía económica adelanto reivindicaciones políticas para un manejo exclusivamente al nivel departamental de la totalidad de las regalías caqueteñas, y una distanciación con las políticas agrícolas y económicas del gobierno central.	la que contaban y llegar a inmiscuirse en la toma de decisiones públicas. • La deficiente infraestructura vial mantuvo las condiciones que históricamente habían mantenido el bajo desarrollo del Caquetá. Aumentando la búsqueda de autonomía y empoderando a líderes que sostuvieran dichas banderas políticas. El manejo de las regalías continuó siendo complejo y altamente burocratizado, impidiendo el acceso a los recursos económicos de la nación para el desarrollo del departamento.	instituciones nacionales, suscitando un sentimiento de autosuficiencia regional y de hostilidad al gobierno central. Unas modificaciones al Sistema General de Regalías permitieron al departamento obtener recursos de la nación. La paulatina mejora en infraestructura vial y de servicios básicos, conllevo a una mejor relación entre el departamento y la nación. Aun así, líderes económicos y políticos aprovecharon la situación de autosuficiencia para buscar el manejo propio del Caquetá por parte de los caqueteños.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
Desarrollo agropecuario avanzado en el piedemonte	Una política agropecuaria desarrollada al nivel regional por expertos del Caquetá permitió un mejor ordenamiento de las actividades económicas en el piedemonte caqueteño. La ganadería fue en parte remplazada por varios tipos de agricultura que beneficiaron de un mayor acceso a los mercados urbanos por las obras de infraestructura construidas a continuación del acuerdo del fin del conflicto armado. La diversificación de las actividades agropecuarias (*ver Variable 3*) generó empleos e ingresos para una mayor parte de la población, desarrollando encadenamientos productivos que aumentaron el PIB del departamento.	El fin del conflicto armado no se acompañó de un reordenamiento de las instituciones y actividades económicas. • La explotación intensiva del piedemonte caqueteño, particularmente por la ganadería, siguió su desarrollo insostenible y mantuvo las incidencias de deforestación. • La disminución de oportunidades económicas en el piedemonte provocó olas de emigración de mano de obra poco calificada a los cascos urbanos.	La pérdida de influencia de los grupos armados en el piedemonte caqueteño permitió la diversificación de las actividades agropecuarias en la región. El desarrollo de nuevos cultivos redujo las presiones de la ganadería en los recursos hídricos y disminuyo la deforestación.
Concentración de población en cascos urbanos por violencia	El fin de la violencia política disminuyó la presión de las poblaciones desplazadas en zonas urbanas agobiadas. El apoyo institucional a las víctimas del conflicto (capacitación, obtención de capital semilla para micro-empresas, restitución de tierras y soporte psicosocial) permitió un retorno de familias desplazadas a sus	El acuerdo político para el fin del conflicto armado no disminuyo la violencia en el departamento, y la concentración de poblaciones desplazadas en cascos urbanos siguió imponiendo presiones insostenibles en servicios públicos insuficientes, y alimentando las	La disminución del fin de la violencia política disminuyó la presión de las poblaciones desplazadas en zonas urbanas agobiadas. El apoyo de la sociedad civil a las víctimas del conflicto (capacitación, obtención de capital semilla para micro-empresas, restitución de tierras y soporte psicosocial) permitió un retorno de

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	regiones de asentamiento originales.	estadísticas de delincuencia urbana.	familias desplazadas a sus regiones de asentamiento originales.
Explotación ilegal de maderables	La reconstrucción de la presencia institucional en el territorio estructuró el sector legal de los maderables del Caquetá. • Los logros de seguridad territorial permitieron el desarrollo de plantaciones comerciales y sostenibles de maderables nativos como las especies Caucho (*Hevea*) y Cacaos (*Theobroma cacao y T. grandiflorum*). • La consolidación de la capacidad de agencias de protección del medioambiente, fomentó la expansión del sistema de certificación independiente de maderables del Forest Stewardship Council (mecanismo hasta entonces dormido en Colombia), asegurando una explotación sostenible y precios superiores a los maderables sin certificación.	La firma del fin del conflicto armado no fue acompañada por una articulación intensiva entre las instituciones de protección del medio ambiente del Caquetá. • No se generaron políticas que entendieran sus necesidades y potencialidades, lo cual mantuvo un desorden de competencias y entes reguladores a las actividades económicas legales e ilegales que incrementaron la afectación del medio ambiente, acabando con grandes cantidades de especies endémicas de la Amazonía. • Siguió la explotación ilegal de maderables, es decir el corte y robo de árboles en zonas protegidas y de conservación. • Aumentó la explotación no sostenible de maderables para usos de construcción y de cocción de desplazados, ahora asentados en nuevas áreas recuperadas	A pesar de la falta de adhesión de los grupos armados del Caquetá al acuerdo para el fin del conflicto armado, la dinámica nacional de reconciliación dio un peso mayor a las presiones de la opinión pública caqueteña en las políticas y el comportamiento de los insurgentes. Uno de los temas principales fue la protección del medio ambiente, exigido por las poblaciones indígenas y colonas de la región. Los grupos armados definieron una nueva política de prohibición de cortes de maderables en zonas de conservación, que limito la explotación ilegal.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
		con el fin del conflicto armado.	
Educación	Una de las bases fundamentales para la mejora de gobernabilidad y desarrollo integral del Caquetá, fue el papel de los recursos educativos con los que contó el departamento. • El direccionamiento de una considerable proporción de recursos públicos en políticas de educación, mejoro las condiciones de vida de los habitantes, abriendo oportunidades laborales y mejorando la rentabilidad de las vocaciones económicas tradicionales por medio de la tecnificación. • El respeto e integración del sistema de creencias y virtudes indígenas en el departamento, aporto elementos para la reconstrucción de tejido social. • Por medio de acciones públicas, además de la mejora en las condiciones laborales, se redujeron incentivos para que las generaciones de relevo interactuaran con el narcotráfico u otras actividades ilegales.	A pesar del fin del conflicto armado, la falta de políticas públicas de educación que propendieran por el desarrollo económico y la atención a necesidades sociales en el departamento trajeron resultados negativos. Se mantuvo una cultura mafiosa alimentada por la falta de oportunidades laborales, las deficientes condiciones para rentabilizar proyectos productivos y el poco acompañamiento institucional alejo a las generaciones de relevo de las vocaciones tradicionales y cultura propia (en el caso de las poblaciones indígenas).	A pesar del fallido fin del conflicto armado, las inversiones económicas privadas acompañadas de la presencia efectiva del Estado en el Caquetá incentivaron mejoras en los niveles de educación escolar, ocupacional y cívica. • El acompañamiento de instituciones públicas a mejorar la mano de obra local, acorde con las actividades económicas mejoró la calidad de vida de la población. • Las inversiones en educación de calidad integraron a comunidades indígenas y colonos caqueteños, llevando, poco a poco, a la generación de tejido social y proyectos productivos comunitarios.

SUBREGION CASANARE

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
Manejo del agua y administración del sistema de humedales	Como resultado de la firma de los acuerdos de paz en La Habana, la sociedad del Casanare se centró en la discusión de sus problemas fundamentales, con base en la igualdad y respeto entre las partes (empresas, ciudadanía, institucionalidad). El futuro del agua se convirtió en un tema vinculante para todos los actores interesados en el desarrollo del Departamento. como resultado se obtuvo: • El diseño de estrategias para la administración de los acuíferos, conforme con los niveles de uso de los usuarios y empresas. • Gracias al dialogo continuado, hoy se puede argumentar que existe una real conciencia ambiental; no se utiliza el cuidado del agua como una forma para la obtención de intereses particulares. • Como resultado de diagnósticos científicos validados por los representantes sociales, academia e institucionalidad, se han diseñado planes de reasentamiento	El fin del conflicto armado se gestó a partir de los pactos de paz de La Habana, sin embargo, ello no trajo un desarrollo sostenido de la región, pues los actores no lograron concretar un dialogo en torno a las necesidades reales del Casanare. • La falta de gobernabilidad histórica en el entorno ha dejado los planes de administración del recurso a un lado, se discuten alternativas y opciones, pero nada se concreta. • Hay suficiente recurso hídrico a disposición en el Departamento, pero los asentamientos no se han establecido en las zonas con oferta continua del líquido, lo que genera escasez durante las épocas de verano intenso en algunas zonas del territorio. • Lamentablemente la falta de administración del recurso ha conllevado a que se señalen como principales responsables a las empresas de la industria petrolera, derivando en altos costos en inversión	A pesar que el fin del conflicto armado se mantiene en el Casanare, hay aspectos positivos que resaltar, uno de ellos ha sido el dialogo social frente a problemáticas que comprometen el futuro del Departamento. • El manejo de humedales y acuíferos, y la administración del líquido, han sido motivo de reunión entre diferentes actores, que han logrado promover iniciativas en pro de la administración del agua, esto se ha basado en el respeto e igualdad entre las partes. • Los problemas de escasez de agua son parte del pasado, a pesar de los ciclos del agua en el Casanare, los centros poblados y los principales municipios cuentan con reservorios para las épocas de escasez y hoy se mantienen acciones para la preservación de los ecosistemas. • Los actores involucrados institucionalmente en el manejo y

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	conforme a la ubicación de las zonas que pueden ofrecer continuidad en la provisión de agua. • La buena calidad educativa de un sector destacable de jóvenes y profesionales en el entorno, es bien aprovechado para el diseño de estrategias de conservación del entorno ambiental. • Se desarrolló un proceso de gobernanza alrededor del uso del agua, en conformidad con sinergias departamentales con Boyacá. • Los diferentes actores, otrora enfrascados en mutuas recriminaciones por los daños a los humedales y cuerpos hídricos, cuentan con líneas de acción para la administración del recurso, como resultado del dialogo continuado entre actores de interés, institucionalidad y Empresa. • Las administraciones del Casanare y Boyacá cuentan con pactos y acuerdos para conservar las fuentes de agua y los nacimientos (páramos, piedemonte) éstos actualmente se ejecutan y son reconocidos por la población y los agentes económicos.	social para viabilizar los proyectos y una mala reputación ambiental de la industria que opera en el entorno. • El factor ambiental (especialmente el relacionado con el agua) lo instrumentalizan organizaciones sociales locales y nacionales críticas de la industria para obtener mayor inversión social. • Los actores que legalmente vigilan y administran el líquido vital, no articulan sus propuestas y políticas. Sus responsabilidades no están claramente definidas. • El activismo ambiental en torno al agua creció en los últimos años. Existe un número amplio de pequeñas organizaciones regionales y municipales de carácter ambiental que se oponen a las actividades extractivas. • En la última década se afirmaron argumentos sin criterio técnico y científico en contra de la actividad sísmica, esto impidió el desarrollo de actividades de exploración necesarias para el hallazgo de nuevas reservas.	administración del líquido vital tienen definidas sus responsabilidades de vigilancia y control. • Se logró la articulación de iniciativas y roles desde las autoridades municipales, departamentales y corporaciones autónomas regionales para la preservación del agua.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	• Los actores de interés y las empresas petroleras reconocen el valor cultural alrededor del agua.		
Sistema de producción ambientalmente no sostenible	Un sistema de producción ambiental sostenible con el entorno se ha venido construyendo gracias a los esfuerzos de diferentes organizaciones sociales, autoridades públicas y empresas del sector hidrocarburos y agroindustriales. • El fin del conflicto armado ha permitido que la movilización social se haya manifestado en el Casanare de forma natural, dando como resultado un complejo dialogo entre las partes, basado en el respeto y la igualdad. Como consecuencia de dicho proceso, hoy todos hablan el mismo idioma en torno a las problemáticas comunes, esto ha permitido la conformación de clústeres e iniciativas auto-sostenibles, como solución a la "despetrolización" de la economía departamental. • La profesionalización de un sector destacable de la población departamental ha sido aprovechado en pro del	Aunque el fin del conflicto armado cesó por medio de la firma de la paz en La Habana entre las FARC y el Gobierno nacional, la inestabilidad política y el lento decrecimiento de la economía departamental, conllevaron a que el Casanare hoy ofrezca un contexto de débil desarrollo y con rasgos de anarquía en la movilización social. La falta de gobernabilidad y la poca transparencia impiden el desarrollo de iniciativas que permitan definir un modelo para el aprovechamiento racional de los recursos naturales de la región. • El protagonismo de diferentes actores y la falta de consenso fueron menguando paulatinamente los esfuerzos por desarrollar un plan para "despetrolizar" la economía casanareña. • Hoy se recuerdan los años de bonanza como una oportunidad pérdida para el desarrollo del entorno. El gran latifundio improductivo, y la alta dependencia de las transferencias	La existencia histórica de grupos armados al margen de la ley no ha menguado los esfuerzos por "despetrolizar" la economía departamental, el oriente del país ha sabido sobreponerse a pesar del conflicto armado. • El dialogo continuado y el consenso frente a los problemas estructurales del entorno, basados en el respeto e igualdad entre las partes, dieron como resultado el diseño de cursos de acción para la "despetrolización" de la economía departamental, los cuales se han venido implementando en los últimos años. Uno de ellos es la conformación de clústeres, los cuales han potenciado el desarrollo en renglones alternativos a la economía minero energético. • Se conformó una visión sostenible de desarrollo en renglones alternativos a la industria extractiva, basados en la innovación,

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	desarrollo de un sistema sostenible. • Los actores involucrados en el desarrollo y competitividad departamental articularon una visión de desarrollo, basados en la innovación y sostenibilidad a largo plazo. • Existe claridad en las competencias y roles de las autoridades ambientales y departamentales. • Los planes de desarrollo municipales articularon líneas de acción para el desarrollo sostenible, en conformidad con el plan de desarrollo departamental. • Empresas y autoridades dieron impulso a iniciativas juveniles de emprendimiento, basadas en la sostenibilidad, permanencia y visión conjunta de desarrollo. • Se conformaron los distritos de riego Cravo Sur y Rio Cravo, teniendo en cuenta procesos sostenibles de irrigación, dando como resultado el impulso del sector agrícola de los municipios beneficiados. • El turismo sostenible viene creciendo en los últimos años, como resultado de la apuesta departamental en este sector.	nacionales son la normal en el Departamento. • Las comunidades y autoridades guardan preocupación por la etapa final de los campos Cusiana y Cupiagua. Después de diez años no se definió un modelo sostenible para el desarrollo de sectores alternativos a la industria extractiva. Imperan las malas prácticas agrícolas y el incorrecto uso de los suelos. • La mala administración de acuíferos, humedales y zonas de protección, redundó en un rechazo generalizado hacia las actividades de exploración en el Departamento. • La llegada de nuevos capitales e infraestructura no implicó un desarrollo armónico con el entorno, imperó la visión de economía de enclave. • La llegada de inversión asiática no implicó un desarrollo sostenible, ni su acoplamiento armónico con el territorio	permanencia y amigables con el medio ambiente. Este proceso se gestó como resultado del dialogo intersectorial y privado, que involucró a jóvenes, comunidades, gremios, empresas e instituciones. • Se definieron las acciones que hoy potencian los sectores más competitivos de la economía regional, basados en criterios de sostenibilidad y adopción de buenas prácticas agrícolas y ganaderas.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
Impacto ambiental por derrames asociados al transporte de hidrocarburos	El Casanare hoy cuenta con planes de gestión del riesgo ante eventualidades ambientales, como resultado de un dialogo continuado entre los diferentes actores (públicos, institucionales, sociales). Las contingencias se atienden a tiempo y no afectan la reputación de la industria. Los impactos adversos se mitigan a tiempo y conforme a los daños. • Las empresas ajustaron de forma incremental sus modelos de gestión ambiental, dando como resultado respuestas oportunas ante derrames. • Como resultado de ajustes en el tratamiento de contingencias, se cuenta con procedimientos preventivos y de mejora continua que han reducido considerablemente los derrames. • Aunque aún se presentan incidentes que provocan el derramamiento de líquidos contaminantes, el gobierno departamental y las empresas, atienden las contingencias de manera oportuna y segura. Existe mayor control en los procedimientos.	La constante movilización en torno a las temáticas ambientales en el Casanare, conllevo a un detrimento paulatino de la reputación de la industria petrolera. Los impactos ambientales afectan aún más la reputación de las compañías petroleras. • Pese a las iniciativas privadas, no se han concretado planes de control para el manejo de contingencias y protocolos entre la industria y autoridades. • Las autoridades ambientales son severas al momento de señalar responsables por derrames petroleros, hacen extensiva la responsabilidad al conjunto de la industria. • Las autoridades ambientales regionales no tienen definidas claramente sus roles y responsabilidades. • Las empresas petroleras no solo deben enfrentarse a un deteriorado clima de ingobernabilidad y falta de desarrollo, sino a un severo ojo crítico de las instituciones regionales y organizaciones ambientalistas. • Los derrames asociados a la industria no se atienden a tiempo y en ocasiones generan	A pesar de la persistencia de la violencia armada en zonas alejadas del Departamento, además del constante activismo de organizaciones sociales adversas a la industria, se han logrado articular esfuerzos en torno a la atención de contingencias ambientales. • Los derrames se atienden de forma oportuna y se mitigan los impactos de forma adecuada. La comunidad y la institucionalidad reconocen en la mayoría de los casos cuando las empresas compensan por derrames de hidrocarburos, y a su vez, empresas como Ecopetrol reconocen de forma constructiva sus fallas en la gestión del transporte de hidrocarburos. • Las autoridades locales junto con las empresas articularon protocolos de emergencia y gestión del riesgo para atender derrames e incidentes ambientales. • Las empresas mejoraron considerablemente sus capacidades de respuesta ante crisis ambientales asociadas al derrame de

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	• El cuerpo de bomberos y organismos de voluntariado y socorro en Aguazul, Tauramena, Yopal y otros municipios petroleros, no solo cuentan con planes para la gestión del riesgo, sino con los implementos y capacidades adecuadas para atender las contingencias.	impactos reputacionales y ambientales innecesarios. • Para las organizaciones sociales adversas a la industria, este factor moviliza intereses que son aprovechados para la obtención de bienes particulares, los cuales al final no corresponden a la mitigación de daños por derrames de hidrocarburos.	hidrocarburos, se han articulado planes con las áreas de HSE de las empresas y con las secretarías de infraestructura, desarrollo y planeación municipales y departamentales.
Situación de post-conflicto a nivel de departamento	A través de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, las principales estructuras armadas de las FARC se desmovilizaron. Lo propio sucedió con el ELN en el vecino departamento de Arauca. Esta nueva condición, permitió la irrupción de nuevas movilizaciones ciudadanas y la conformación de nuevos y variados grupos sociales. • La nueva vocería social se pudo canalizar por medio de la transformación de instituciones que fomentaron un verdadero desarrollo social a nivel regional. El ancho de las expectativas de la sociedad del Casanare se cumplieron, a pesar de los tropiezos y dificultades para su desarrollo. Esto se gestó a través de un diálogo continuado entre los	La desmovilización de las estructuras armadas no conllevó un proceso armónico de desarrollo en el Casanare. • Las dificultades mayores se hallaron en el encauzamiento de las expectativas que la sociedad del Casanare tenía frente a la industria petrolera y frente a los acuerdos de paz firmados hace años en La Habana. Se gestaron procesos de diálogo continuo, sin embargo estos no se desarrollaron con base en el respeto e igualdad entre las partes, hubo exceso de protagonismo de actores que a la postre no estaban interesados en el desarrollo de la región. • Debido al bajo desarrollo y la poca gobernabilidad del Casanare, hoy se tiene un panorama negativo	La sociedad del Casanare se acostumbró a la presencia de estructuras armadas ilegales, el fracaso en el proceso de paz frustró las expectativas por la pacificación del territorio. Afortunadamente ello no menguo las esperanzas por un desarrollo armónico del territorio, tanto como económico como institucional. • Actualmente el Casanare crece a tasas considerables, a pesar de los problemas de inseguridad urbana y la situación de su vecino Arauca. La "despetrolización" de la economía del Casanare es un hecho, se adelantan actualmente sendos proyectos agropecuarios por todo el ancho del territorio. Sus instituciones

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	diferentes actores interesados en el desarrollo del territorio, bajo criterios de alto respeto e igualdad entre las partes. • El desarrollo local y el posconflicto fueron de la mano. Se involucraron en la conformación de una visión conjunta para el desarrollo. • La desmovilización de frentes guerrilleros implicó la necesidad de abrir nuevas plazas de trabajo. La opinión pública y la institucionalidad nacional ejercen presión en las empresas para que se involucren con los procesos de reintegración de ex combatientes. • Las empresas aportaron ingentes recursos para el proceso de posconflicto, a través de programas para la reincorporación y reconciliación. Sus resultados son reconocidos por la población y autoridades locales. • Los procesos de reincorporación de excombatientes en el Casanare no afectaron el orden y la cultura local.	sobre el futuro del Departamento. La movilización social no ha podido encontrar canales para su buen encauzamiento, lo que ha derivado en la frustración ciudadana con sus líderes e instituciones. • Las empresas de hidrocarburos hoy son vistas como sustitutas del Estado, buena parte de sus ganancias han terminado por suplir demandas sociales. • La afluencia de nueva población en búsqueda de nuevas oportunidades ha implicado un crecimiento desordenado e insostenible. Ciudades como Yopal han crecido más arriba que las capacidades de la municipalidad para atender necesidades básicas.	maduran y se encuentran adaptándose al nuevo clima de desarrollo económico y social. • Se concilió una visión de desarrollo sostenible en los sectores tradicionales (palma, ganadería, arroz) como resultado del dialogo intersectorial entre actores económicos e institucionales. • Persisten problemas asociados a la criminalidad: extorsión, hurto, asesinatos selectivos.
	El proceso de desmovilización de grupos armados ilegales implicó	Los procesos de dejación de armas en el Casanare por parte de excombatientes de	El fin del conflicto armado no se gestó en los diálogos en La Habana hace 15

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
Vacío de poder transicional (interregno)	una lucha por el control de negocios ilegales que antes dominaban los frentes de las FARC al norte del Casanare. Como resultado surgieron nuevas estructuras armadas, incluso se llegó a argumentar que el conflicto se estaba "mexicanizando". • En sus primeros estadios, aparecieron confrontaciones directas con excombatientes y grupos ilegales emergentes. Afortunadamente este proceso de violencia se contuvo, por la conformación y maduración de nuevas instituciones que hoy canalizan de forma positiva el desarrollo del Departamento.	las FARC, trajo consigo una disputa frontal de grupos criminales que buscaban ocupar el vacío de poder y el control de las economías ilegales, especialmente del tráfico de cocaína a través de la frontera con Venezuela. • Dichas estructuras mantienen hoy el control del transporte de alcaloides, además han capturado el control de organizaciones de base y municipalidades. El control ciudadano y político hoy es precario en el departamento. El dialogo no ha podido encauzarse bajo criterios de respeto e igualdad entre las partes.	años. Hoy grupos armados ilegales se disputan el control del tráfico de drogas con los frentes guerrilleros de las FARC en el Casanare. • En diferentes periodos han hecho alianzas criminales con BACRIM y con el ELN que actúa de forma itinerante en el Arauca en límites con el Casanare. • Pese a la frustración local por el fracaso de los pactos de paz de La Habana, desde hace diez años se ha gestado un cambio institucional que ha transformado la visión que tienen las comunidades frente al papel del gobierno departamental. Hoy han aparecido líderes destacables en el acontecer regional, capturando los espacios que anteriormente usufructuaban actores ilegales y sin calidad de representación social.
Alteración del orden público por conflicto social - incremento de la	El fin del conflicto armado en el oriente del país trajo consigo un mayor nivel de protesta y movilización social. • El Casanare actualmente reclama mayor autonomía en su	La desmovilización de los grupos armados en principio generó alta expectativa y optimismo, sin embargo las instituciones del Casanare no estaban preparadas para encauzar el nuevo contexto de posconflicto.	El Casanare enfrenta importantes retos para la mejora de los niveles de seguridad rurales y de los cascos urbanos. El conflicto armado se mantiene, aunque sus niveles han disminuido

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
protesta pública anti-petrolera	toma de decisiones y mayores recursos por materia de regalías petroleras. Afortunadamente en los últimos años las instituciones han podido madurar y construirse a la par del desarrollo del Casanare, encauzando las expectativas sociales y haciendo del territorio un área donde la actividad petrolera ha podido desarrollarse sin mayores inconvenientes. • Los hechos de protesta relacionados con la industria petrolera han menguado considerablemente, si son comparados quince años atrás. Una de las razones de ello, es la disminución de la presión social sobre la industria minero energética, como resultado de proyectos exitosos en materia agroindustrial, turismo, industrias innovadoras, entre otros. • Los mecanismos de participación se imponen por sobre las vías de hecho. • Si bien hay problemas e inconformidades comunitarias por la presencia de la industria petrolera, se modificó la visión frente a la industria, no ven a las empresas como intrusas, sino como	• La protesta antipetrolera ha aumentado y Ecopetrol ha terminado por incrementar su imagen de sustituto del Estado. • La protesta antipetrolera ha traído consigo una respuesta inadecuada por parte de las instituciones, se sigue observando a la industria petrolera como una intrusa del entorno y su permanencia depende de las inversiones en materia de inversión social. • Los paros y bloqueos de organizaciones sociales son la normal en el Departamento. La institucionalidad ha dejado en manos de las petroleras la atención de problemas que son responsabilidad del Estado. • El paulatino deterioro de la imagen de la industria desde hace años ha convocado toda suerte de marchas contra las empresas de hidrocarburos. Las arengas comunes son los daños al ambiente, la asimetría en las relaciones entre comunidades y directivos y la ausencia de un mayor compromiso de la industria con el desarrollo de la región. • Las comunidades utilizan la protesta para	considerablemente, si se la comparan quince años atrás. • El rápido crecimiento poblacional de ciudades como Yopal, Tauramena y Aguazul, han traído consigo mayores expectativas en torno a Ecopetrol. Sin embargo, el Departamento ha ido madurando; la protesta antipetrolera que en el pasado se destacaba ampliamente entre la opinión pública, hoy ha disminuido considerablemente. • Actualmente las expectativas en torno a la "despetrolización" han dado como resultado acciones que han balanceado la economía del Departamento; lo que a su vez ha disminuido la presión sobre la industria minero - energética. • El gobierno regional asumió buena parte de sus responsabilidades, razón que incidió en la disminución de la tensión social. A ello suma un buen clima económico. El proceso de construcción institucional no ha estado exento de procesos de error y aprendizaje. A pesar de la violencia los casanareños rescatan

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	actores que generan valor para el territorio.	solicitar mayores recursos. La presión social ha hecho que importantes recursos de las empresas se desvíen para contener el descontento.	su proceso de renovación institucional. • Ecopetrol encontró en los últimos años a la institucionalidad y sus pares de la industria como aliados. Comparten experiencias para el manejo del entorno. Esto ha potenciado la capacidad de respuesta ante situaciones críticas que alteran el orden público.
Creación de nuevas estructuras de dominación con ejercicio de la violencia	Tras la desmovilización de los grupos insurgentes, el Casanare debió sortear la irrupción de nuevos grupos delincuenciales. Se llegó a afirmar la inminente "mexicanización" del posconflicto. Sin embargo, las instituciones del Casanare lograron encauzar el desarrollo en torno a la economía petrolera y los nuevos proyectos alternativos a la economía minero – energética. Hoy se puede decir que las instituciones en el Casanare han logrado madurar. • La violencia hoy se centra en la delincuencia común en los cascos urbanos de los principales municipios del sur del Departamento. • Una vez se firmó el fin del conflicto, en el	La desmovilización de las estructuras insurgentes de las FARC en el Casanare y el ELN en Arauca trajo consigo la "mexicanización" del posconflicto. El ajuste de cuentas y la sucesión de líderes delincuenciales que se disputan el tráfico de alcaloides es la normal en el Casanare.	A pesar que el conflicto armado no cesó en el Oriente del país, hoy se registra un mayor optimismo por el "éxito" del Casanare. • Las malas noticias en materia de seguridad están acompañadas de la llegada de inversionistas foráneos y nacionales, que han convertido al Casanare en una "despensa" nacional y exportadora de alimentos y ganado. • Los retos debido al éxito económico son grandes, el desarrollo de nuevas actividades económicas, intensivas en mano de obra y capital, han atraído un mayor accionar de la delincuencia común, especialmente en la ciudad de Yopal y sus municipios cercanos.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	Casanare varios de los ex movilizados se insertaron en nuevas estructuras criminales en asocio con carteles internacionales. • No obstante, un mejor clima de gobernabilidad y desarrollo se apoderó de la región. Lo anterior eclipsó la presencia de nuevas bandas criminales. Los mejores índices de gobernabilidad han podido contener parte del accionar delictivo. • El crecimiento de Yopal creó nuevos retos para la región, entre ellos la atención de la delincuencia común, que tiene amplios lazos con la criminalidad organizada.		
Corrupción e infiltración de paramilitarismo en política	La firma del fin del conflicto armado tras los acuerdos de paz de la Habana trajo consigo un proceso de reconstrucción de la verdad, ello dio como resultado el descubrimiento de los lazos del paramilitarismo en la política tradicional del Casanare. Ello generó una importante conciencia ciudadana en la elección de sus representantes, lo que ha permitido una paulatina depuración de su clase política. • Si bien la infiltración paramilitar en la política fue una constante por	Las expectativas en torno a la depuración de la clase política departamental quedaron frustradas. La firma de los acuerdos de paz con las FARC no se tradujo en procesos de reconstrucción de la verdad de la violencia del conflicto armado. Tristemente el sistema político tradicional del Departamento no se renovó. • Las dificultades institucionales para el encauzamiento del desarrollo se mantienen casi invariables. El Casanare perdió una	A pesar de las difíciles condiciones para depurar la clase política del Casanare, las instituciones se han modernizado y ahora intentan recuperar el tiempo perdido. El conflicto armado persiste en algunas zonas del Departamento, sin embargo esto no ha impedido que las instituciones hayan madurado en los últimos quince años. • Los procesos de formación de competencias ciudadanas, en todos

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	décadas, buena parte de la clase política involucrada en estos hechos hoy está marginada del poder, como resultado de buenos líderes regionales y mayor control y veeduría ciudadana.	gran oportunidad para el desarrollo de su economía en sectores alternos al petróleo. • Hoy la sociedad del Casanare asiste a un lento deterioro de la confianza en sus instituciones. Se registra un alto pesimismo por los pocos hallazgos petroleros en la región. • La clase política del Casanare sigue recibiendo señalamientos por su pasado paramilitar, varios de sus miembros siguen manejando los asuntos públicos por interpuesta persona. • Los recursos del erario se siguen manejando de forma irresponsable, los contratos de obras públicas se otorgan a personas y familias con dudoso pasado en la administración pública de la región.	los niveles de la escala social y territorial (veredas, centros urbanos, caseríos, capital) han permitido la construcción de una sociedad más abierta, dando como resultado una depuración paulatina de la clase política departamental. • Los recursos transferidos por el Gobierno nacional al Departamento actualmente se invierten de mejor forma, satisfaciendo las reales necesidades de la ciudadanía local, anteriormente eran desviados a grupos armados ilegales. • La presencia de grupos ilegales hace difícil contener la captura de las instituciones por parte de ilegales. Sin embargo, las municipalidades del sur del Casanare lograron en los últimos años destacables procesos de veeduría y control ciudadano, acciones que han permitido un mejor control político y eficiencia en el gasto público.
Institucionalidad presente, pero rivalidad entre gobierno local y nacional	La firma del fin del conflicto armado en Colombia permitió la concreción de mayores autonomías al departamento del Casanare. Profundizó los procesos de	Como parte de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado, se concibieron nuevos lineamientos y responsabilidades por parte de las regiones y	Aunque los grupos armados ilegales siguen permeando el clima de seguridad en las zonas del norte del Departamento, el Casanare ha venido

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	descentralización a nivel departamental. Hoy se habla de la creación de regiones, el Casanare junto con el Meta lideran la conformación de la región de la "Orinoquia" conformada por el Arauca, Meta, Casanare y Vichada. • La clase política del Casanare actualmente aboga por mayor atención y representación del Departamento frente al resto del país. Este proceso ha creado fricciones, pero con consecuencias positivas para el entorno a largo plazo. Una de ellas ha sido la creación de mayor conciencia de los habitantes por su territorio, hoy se registra mayor observancia por la correcta inversión de los recursos públicos en el Departamento. • La administración del éxito económico en el Casanare ha conllevado nuevos retos que la administración departamental ha tenido que atender. Se han actualizado viejos problemas. Comunidades y autoridades mencionan asimetrías de poder, incorrecta distribución del capital, mejor asignación del gasto, entre otros. Como	departamentos, en materia de descentralización política, fiscal y administrativa. Sin embargo el Casanare no había madurado lo suficiente para administrar estas nuevas responsabilidades. • El proceso estuvo acompañado de bajo crecimiento económico y un alto clima de ingobernabilidad. La clase política del Departamento ahora reclama mayor atención por parte del Gobierno central, alegan una "*deuda histórica*" con el Casanare. Las fricciones entre el gobierno central y el Departamento son constantes en la realidad local. • El Casanare pese a las iniciativas de desarrollo, no logró concretar modelos eficaces de crecimiento que puedan beneficiar a toda la población, razón que hoy incide en que líderes del Casanare destaquen aún más las asimetrías de poder.	creciendo a tasas considerables, esto ha traído como consecuencia la reclamación por mayor autonomía departamental. • La independencia económica del Departamento ha traído consigo una dinámica que aboga por mayor representación del Departamento y descentralización política. Los antecedentes históricos independentistas del Casanare afloran. • En los últimos años autoridades locales han empezado a solicitar al gobierno nacional mayor autonomía fiscal y administrativa. • Autoridades y líderes esgrimen que deben enfrentar la presencia de grupos armados al margen de la ley sin respuestas adecuadas por parte del Estado central.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	resultado el gobierno departamental riñe con el gobierno nacional, esgrimiendo falta de representación y pocas compensaciones *vs* ganancias petroleras. • En la región durante los últimos años han aparecido líderes con trayectoria nacional en el Congreso de la República. Solicitan más representación para el Casanare y mayor atención del fisco nacional para la región.		
Alta dependencia del sector petrolero	La población y las autoridades se hicieron consientes de la necesidad de "despetrolizar" la economía, para ello, fue necesario concentrar recursos y esfuerzos en el desarrollo institucional, el cual canalizara una nueva forma de desarrollo económico. • No fue fácil encauzar dicho proceso. Las tensiones sociales en el Departamento, fruto de una mayor movilización social, hicieron necesario la apertura de un mayor dialogo con los actores interesados en el progreso regional, ello basado en el respeto e igualdad entre las partes. Luego de surtido el proceso, fueron madurando proyectos en infraestructura,	A pesar que las facciones armadas de las FARC se desmovilizaron en el oriente colombiano, aflorando un clima de optimismo después de dichos sucesos, el desarrollo del entorno se truncó, debido a que las instituciones no se pudieron adaptar a las nuevas expectativas sociales y a la rápida disminución de las reservas de crudo y gas en el Casanare. • La alta dependencia del petróleo no se pudo balancear con otros sectores alternativos, en consecuencia, los recursos públicos disminuyeron notablemente, dando como resultado una baja inversión pública y una economía alterna que no genera recursos	La violencia no detuvo el progreso del Casanare. Los procesos de ganadería y siembra de arroz se tecnificaron notablemente, lo que condujo a que estos sectores económicos fueran reemplazando paulatinamente la preponderancia de la economía minero energética. • El Casanare hoy es un modelo de crecimiento económico balanceado entre las actividades tradicionales y la explotación petrolera. Estos se gestó a través de un proceso de dialogo continuado entre institucionalidad, empresas y ciudadanía, basado en criterios de respeto e igualdad entre las partes. • Los sectores más educados y

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	clústeres y un nuevo tejido empresarial. • La estructura más educada y tecnificada en el Departamento, ha logrado insertarse en otros sectores de la economía, disminuyendo sustancialmente la presión sobre la industria de hidrocarburos. • Se conformaron clústeres alrededor de la industria petrolera, turismo, palma y ganadería. • La mayor parte de los municipios del sur del Casanare definieron sus vocaciones productivas. Hoy se trabaja para hacer de ellos sectores altamente competitivos. • Hay articulación entre la Cámara de Comercio del Casanare, las universidades locales, el SENA, la Gobernación, las municipalidades y otros actores, para formar capital humano en áreas de innovación, tecnificación agrícola o ingenierías. • El turismo y nuevas industrias se empiezan a perfilar con los principales aportantes del PIB departamental. • Se concretan proyectos de infraestructura que hoy jalonan la competitividad departamental (aeropuertos,	propios para el Departamento. • Los proyectos productivos no se han concretado, la apuesta hacia una mayor competitividad del sector ganadero, palmero y turístico ha dado tímidos resultados. • La presión para la contratación de mano de obra local se traduce en mayores paros y bloqueos hacia la industria. • Para ganar respaldo popular en un clima de desconfianza institucional, autoridades municipales y gobernadores movilizan población haciendo uso de discursos críticos frente a la industria, especialmente los de tipo ambiental y laboral. • No hay nuevos hallazgos petroleros relevantes en los últimos años. El departamento se enfrenta al agotamiento del petróleo. Hay incertidumbre. Se presenta alta presión a la industria para contratar personal local ante la debilidad de la economía local.	tecnificados de la población del Casanare también han contribuido en el proceso de “despetrolización” de la economía” creando empresas basadas en la innovación y sostenibilidad a largo plazo. • El turismo en la región es una economía en crecimiento, hay capacidad instalada en hoteles, mejor dotación de infraestructura de transporte (modernización del aeropuerto de Yopal y de las autopistas interdepartamentales). • Se construyeron distritos de riesgo que han permitido potenciar la industria arrocera. • Se consolida una visión de desarrollo regional.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	autopistas, distritos de riego).		
Acumulación de la propiedad de la tierra	Los acuerdos de paz de La Habana culminaron con una amplia agenda para solucionar la problemática de la tenencia y uso de la tierra en Colombia. • Casanare junto con otros departamentos del oriente del país, han tenido problemas históricos de concentración de tierras y mal uso de los suelos; • Afortunadamente el Gobierno nacional destinó los recursos suficientes para atender las problemáticas institucionales que detenían la distribución de la tierra y el uso productivo de la misma. El Casanare dio buenos resultados en la materia. Muchas tierras improductivas y ociosas hoy están en manos de pequeños y medianos propietarios. Los proyectos agroindustriales hoy se alimentan de capitales foráneos y nacionales, haciendo del Casanare una "despensa" de alimentos para Colombia. • La reforma agraria ha convertido a cientos de campesinos del Casanare en propietarios.	Los acuerdos de paz de La Habana, focalizaron amplios recursos y esfuerzos en el problema histórico de la tenencia de la tierra en Colombia. Sin embargo, las reformas legales y las buenas intenciones no estuvieron acompañadas de un cambio real en la conducción de las instituciones. • La tenencia de la tierra en Casanare sigue siendo un factor de poder, más que un factor de desarrollo económico. • El Departamento sigue teniendo amplias problemáticas de tierra en pocas manos, pero el problema real, no radica en el modelo de producción del latifundio, sino en su improductividad, generando pocos recursos para las municipalidades y muy baja creación de empleo local. • Comunidades alegan que sus expectativas se han visto frustradas, imaginaron durante los primeros años del pos-conflicto, que las grandes extensiones de tierra improductivas serian destinadas a	La violencia armada se mantiene, no obstante, la tierra concentrada en el Casanare ha empezado a generar empleos a través de la consecución de nuevos proyectos industriales y agroindustriales. • La "despetrolización" es un hecho, ello ha incentivado la llagada de nuevos capitales (nacionales y foráneos, especialmente asiáticos) que hoy fortalecen sectores tradicionales de la economía del Departamento. • A pesar de las dificultades que conlleva un proceso efectivo de restitución y desconcentración de la propiedad rural en medio del conflicto, varias propiedades en el Casanare han sido devueltas a sus legítimos dueños. También propiedades improductivas del pasado se destinaron al desarrollo de proyectos agroindustriales que hoy demandan alta contratación de personal.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	• Los procesos de restitución de tierras han devuelto a sus legítimos dueños propiedades usurpadas por violentos, se destacan los municipios donde se registró alta presencia paramilitar en el pasado (Aguazul, Tauramena, Chameza, Sabanalarga, Monterrey).	campesinos sin propiedad, y para el uso de actividades alternativas con alta capacidad de contratación de población local.	• No obstante, al paulatino cambio en la propiedad de la tierra en el Departamento, hoy se presume que amplias extensiones de tierra en el Casanare y Meta aún pertenecen a testaferros, narcotraficantes y ex paramilitares.
Migración de nuevos agentes económicos y población al departamento, migración entre municipios	El desarrollo del Casanare en otros sectores alternos a la economía petrolera produjo una "segunda ola migratoria" de personas del interior y norte del país, además de inversionistas asiáticos que hoy adelantan proyectos agroindustriales a lo largo de todo el Departamento. • A la par, la clase política y los ciudadanos, aprendieron a adaptarse a este proceso, conformaron las instituciones adecuadas para encauzar el buen desarrollo del Departamento, con base en un dialogo continuado, basado en los criterios de respeto e igualdad. • La conformación de clústeres, la irrupción del turismo como alternativa y la mejora competitiva de los sectores tradicionales atrajeron nuevos pobladores al territorio,	El departamento del Casanare pese al poco desarrollo de sus instituciones y la caída en las reservas petrolíferas y gasíferas, continúo recibiendo migración de población, la cual fue engrosando el crecimiento de los municipios del sur del Casanare. • La población y las instituciones no se pudieron adaptar a los procesos migracionales. Hoy los habitantes con arraigo en el territorio mencionan que la llegada de personas procedentes de la costa, el centro del país, así como asiáticos e indios, solo ha traído problemas para la región. • Los campos Cusiana y Cupiagua están en su etapa de producción final. Es necesario encontrar nuevos yacimientos en el Departamento.	Aunque los problemas de seguridad asociados al conflicto armado en ocasiones aparecen en las primeras planas de la prensa, el desarrollo del territorio, tanto a nivel económico, como institucional, hoy generan un mayor clima de optimismo entre los casanareños. • Los sectores tradicionales del Casanare hoy pueden mostrar mejores nivel de tecnificación y competitividad. La ganadería, el cultivo de frutales y la siembra de arroz secano hoy balancean la economía que ya siente los primeros síntomas del agotamiento de las reservas gasíferas de Cusiana y Cupiagua. • En los últimos quince años se gestó un cambio institucional, ahora hay un clima de

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	personas venidas de la costa atlántica y del interior del país. Esto supuso en principio una alta resistencia entre los naturales del Casanare, sin embargo, la amalgama de nuevos pobladores no trastocó los valores culturales del Departamento. • El desarrollo uniforme y el acompañamiento institucional también fueron adaptados para ofertar los bienes públicos suficientes y necesarios para atender a la nueva población.	• Municipios como Yopal y sus vecinos han sorteado en la última década la llegada de más población del norte y centro del país. Yopal ha sido una de las ciudades que más han crecido en Colombia en los últimos años, sin soluciones viables para proveer nuevos servicios básicos a los nuevos habitantes. • Aunque se han conformado nuevos proyectos en torno a la palma, y ha crecido el área sembrada de arroz, es necesario ofrecer alternativas industriales ante el agostamiento de las reservas petroleras. • El arraigo por la tierra del casanareño ya no se mantiene, no estuvo acompañado de un proceso que involucrara nuevos elementos culturales, tanto de los naturales como de los migrantes.	mayor estabilidad política y administrativa. Ello ha permitido la conformación de iniciativas de infraestructura y productivas que han permitido incorporar de forma continua la llegada de nuevos pobladores del centro y norte del país. • La llegada de nuevos agentes económicos nacionales y extranjeros se involucró de forma armónica con el entorno.
Expectativas crecientes	El fin del conflicto armado trajo como consecuencia un crecimiento exponencial de las expectativas frente al desarrollo del Departamento. Estas se centran en nuevas oportunidades económicas, mayor participación en el dialogo social, respeto e igualdad en la toma de decisiones a nivel público.	El fin del conflicto armado trajo como consecuencia el surgimiento de nuevas expectativas en el Casanare. Estas crecieron exponencialmente debido al surgimiento de nuevas expresiones sociales, a través de la formación de nuevas organizaciones sociales y el aumento de la protesta comunitaria. Se intentó un amplio dialogo	A pesar que hace quince años se intentó firmar la paz, durante los últimos años el Casanare se ha venido transformando de forma positiva en torno a nuevos proyectos agroindustriales y en el fortalecimiento del aparato institucional. Lo anterior como resultado de un largo proceso de

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin fin del Conflicto Armado
	De forma paralela al crecimiento de dichas expectativas, las instituciones se fueron fortaleciendo y madurando, con el fin de encauzar el desarrollo de la región, dando como resultado un proceso armónico de desarrollo social, político y económico. • El fin del conflicto armado actualizó viejos problemas: distribución de tierras, autonomías regionales, asimetría de poder, necesidades básicas insatisfechas, entre otros. • El incremento de expectativas estuvo acompañado de un crecimiento económico uniforme en el Casanare. Las expectativas fueron acompañadas de un mayor desarrollo institucional, encauzando el cumplimiento de las mismas.	entre las partes, sin embargo, impero el protagonismo de unos pocos, la ausencia de liderazgo natural y la poca igualdad entre las partes. • Las instituciones no se pudieron adaptar a esta nueva realidad, dejando como resultado la frustración del cúmulo de expectativas ciudadanas. • Como consecuencia, se fortaleció un amplio descontento frente a la industria petrolera y frente a la institucionalidad departamental, lo que ha fomentado la protesta anti-petrolera y la mala imagen de la industria en el entorno. • El Casanare desde hace años ha mostrado una clara tendencia al incremento en el uso de las vías de hecho. Los índices de gobernabilidad se mantienen bajos. Las empresas petroleras desde hace una década han debido sortear el descontento social, a menudo asumiendo responsabilidades estatales para asegurar la continuidad de sus operaciones.	entendimiento entre las partes, basado en el respeto, la igualdad y el diálogo ininterrumpido. Del anterior proceso, las expectativas crecientes de sus ciudadanos se lograron encauzar de forma productiva, el Casanare hoy ofrece un panorama muy distinto si se le compara quince años atrás. • Las expectativas crecientes por mayor inversión social hoy se encauzan por las vías institucionales, situación que ha reducido el clima de tensión social que por años campeó en el Casanare. • La mayor inclusión en el dialogo empresa-comunidad logró notables avances en la última década, esto permitió encauzar las expectativas empresariales y sociales en objetivos comunes.

SUBREGION CATATUMBO

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
Impertinente presencia institucional	Con el fin del conflicto armado, hubo más compromiso de la oferta política y de la comunidad, por tanto, se logró articular la institucionalidad pública para que llegara a las regiones. A su vez, se hicieron concejos participativos, donde los resultados derivaron en proyectos productivos, pertinentes y coherentes, que fueron avalados y legitimados por la comunidad. Los funcionarios públicos de las instancias municipales recibieron preparación técnica que se acoplara con las necesidades de la región en un proceso de postconflicto. Con ello, los entes territoriales contaron con la suficiencia técnica para formular políticas idóneas y poder cooptar espacios de participación y asignación de recursos. Además, las autoridades regionales tuvieron una visión mucho más innovadora para atender a las necesidades que tiene y tendrá la región. En este sentido, los líderes regionales y locales tuvieron un mayor empoderamiento y fueron capaces de asumir roles decisivos y propositivos.	La finalización del conflicto armado focalizó los recursos públicos al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la guerrilla. Sin embargo, el aislamiento de la región se mantuvo a través de los años y las empresas privadas invirtieron los recursos justos para el mantenimiento de las vías que afectaban sus actividades. Por esta razón, estas inversiones se concentraron en obtener un beneficio reducido y movilizar sus recursos e intereses a otros departamentos en los cuales el Estado ha venido garantizando las condiciones del entorno para generar réditos. La carencia institucional continuó siendo una constante en el departamento, más en la región del Catatumbo. Allí no lograron consolidarse programas para mejorar la condición de vida de los habitantes y por tanto aún persisten los altos índices de necesidades básicas insatisfechas. De otro lado, las autoridades municipales no contaron con la visión necesaria para enfrentar los retos que trajo consigo el postconflicto, por	La continuación del conflicto armado implicó que el Gobierno Nacional implementara programas que contrarrestaran los argumentos estructurales de los grupos subversivos, por tanto, volcó gran parte de los recursos destinados al postconflicto hacia el fortalecimiento institucional y la efectiva presencia estatal en las zonas marginales del país. Pese a la mejoría que trajo a la región el aumento de presencia pública, implicó también más hechos de violencia generados a partir del interés de los grupos subversivos en mantener su dominio territorial y la cooptación que ejercían sobre la institucionalidad pública, que otrora era manipulada a su conveniencia. Frente a esto, la inversión de recursos en mejoras con respecto a la cobertura de los servicios institucionales, fue afectada negativamente por la inversión que debe hacer el gobierno nacional para garantizar la seguridad en la región.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
	Además de fortalecer las aptitudes de la población en cuanto a sus roles cívicos, el Estado se encargó de fortalecer sus capacidades humanas, de gestión y de apropiación del territorio en procura de consolidar comunidades autónomas y autogestoras. Con este tipo de liderazgos, se impulsó el sector educativo en la región, se establecieron programas que dinamizaron la oferta formativa en los niveles técnicos.	ende la infraestructura institucional mantuvo sus precarias condiciones y no logró satisfacer las demandas comunitarias. Sobre esta condición también influyó la escasa capacitación y poco empoderamiento que tuvieron los líderes regionales por lo tanto las iniciativas de proyectos que se establecieron no atendieron las demandas comunitarias y fueron inoportunos ante los nuevos retos que trajo al Catatumbo la incursión de nuevos actores en el entorno que demandaban una institucionalidad más fuerte.	
Falta de desarrollo de proyectos de infraestructura estratégica	La paz y el desarrollo en el país exigieron garantías para incentivar las inversiones de capitales, por lo cual la conectividad vial -que representaba una de las principales falencias del país- fue tratada mediante inversiones público-privadas mejorando consigo las condiciones de movilidad terrestre de la región y facilitando la presencia institucional para la atención a necesidades de la población. Esto fue posible gracias a que las autoridades municipales y nacionales estuvieron más capacitadas frente a la coherencia de los proyectos que formulaban y, además, fueron mucho más visionarias en la articulación	La firma del acuerdo de paz, conllevó a que se fortalecieran los programas de orden social que hacían frente a las condiciones estructurales para la generación de violencia, acceso a salud, educación, agua potable, etc. Sin embargo el Gobierno Nacional no logró concretar los proyectos para el mejoramiento de la infraestructura estratégica y las vías de cuarta generación que se habían propuesto para mejorar la conectividad de la región aún no han sido ejecutados. Lo anterior ha conllevado a que las actividades económicas de la región pierdan competitividad pues	El desarrollo económico nacional tuvo como uno de sus principales pilares la conectividad nacional. Fueron ejecutados macro proyectos de infraestructura vial que penetraron el territorio e impactaron positivamente la economía y gobernabilidad. Con este tipo de proyectos, la reducción en los costos de insumos y de transporte de personas y carga generaron el crecimiento de la industria nacional, mejorando la situación laboral y la calidad de vida de las comunidades. Pese a esto, las estructuras armadas ilegales en frecuentes manifestaciones de dominación territorial,

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
	de los instrumentos de política pública, lo que afectó favorablemente la consolidación de infraestructura estratégica que demandaba la región luego de los acuerdo de paz. En este aspecto fue importante el rol que jugó Ecopetrol como núcleo de desarrollo regional, pues mediante iniciativas propias, logró consolidar sinergias intersectoriales cuyo resultado fue la articulación de proyectos estratégicos de beneficio común, lo que además redundó en el fortalecimiento de las capacidades de sus proveedores en la región. En este proceso, también se articularon sectores sociales que motivaron la inversión para el fortalecimiento de programas que impulsaran la ciencia y la tecnología para, además de fortalecer la conectividad vial del municipio, esta trascendiera a aspectos tecnológicos acordes a la globalización.	aún no existe una ruta para evacuar su producción a menores costos. Además, la conectividad que respecta a los aspectos tecnológicos no se ha concretado y los programas estatales aún son incipientes y no tienen el impacto suficiente, por lo que aún en ese aspecto, el Catatumbo es un referente de aislamiento territorial.	han atentado contra la infraestructura vial; obligando a las autoridades competentes a volcar sus esfuerzos en la vigilancia y mantenimiento de los buenos índices de seguridad que se han percibido en estos últimos años y rezagando otros asuntos como el mejoramiento de las vías terciarias. A pesar de la continuación del conflicto armado, las inversiones del Estado en vías de penetración generaron diversos impactos positivos en la región, cristalizados en una mayor presencia institucional que gestionara la consolidación territorial propuesta por el gobierno.
Dinámicas tensas en materia política y socioeconómica en la frontera colombo-venezolana.	Las tensiones con Venezuela han generado frecuentemente afectaciones a la economía fronteriza que históricamente ha sido dependiente de aspectos financieros y económicos. Con el fortalecimiento de las autonomías regionales y	La cesación del conflicto armado si bien implicó la reducción de acciones violentas en la región, hubo estructuras que luego de la desmovilización optaron por vincularse al negocios del contrabando de combustible y de narcóticos, este última por considerar a Venezuela	La no finalización del conflicto ha implicado que los grupos ilegales consoliden al territorio venezolano como una zona estratégica para evadir el control militar. En este sentido, pese a que la actividad delictiva continúa e incluso algunas veces ha

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
	las políticas estatales orientadas hacia el fortalecimiento de la periferia, las zonas de frontera con un alto grado de dependencia de las dinámicas comerciales transfronterizas, consolidaron procesos productivos en los que desmarcaron esta dinámica y fortalecieron los lazos comerciales con el centro del país. Entre tanto, las afectaciones que se derivan desde el territorio Venezolano son difíciles de prever, sin embargo, las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos, pese a tu tensa calma, han logrado mantener la tranquilidad gracias a una buena labor diplomática en la que se han articulado medidas que enaltecen el respeto por la diferencia, conllevando al diálogo coherente y continuo Como consecuencia de esto, tiempo después, y por medio del desarrollo de políticas fronterizas con países vecinos, se lograron avances en acuerdos para el uso de territorio extranjero con fines comerciales.	una plataforma para exportar alcaloides directamente a Europa. Las restricciones fronterizas han incrementado por causa de la crisis económica que ha vivido el país vecino. Afectando las actividades, legales e ilegales, que se asientan en la región. Al ser el país vecino una retaguardia estratégica para bandas criminales, se han visto incrementadas las manifestaciones de protesta del gobierno venezolano ante la ineficaz gestión de los organismos de seguridad del gobierno colombiano.	sido ejecutada desde el territorio venezolano, las afectaciones son mínimas por la preparación que han tenido las autoridades nacionales y locales para sobrellevar una contingencia como las provocadas por la intempestiva forma de actuar del gobierno Venezolano.
Influencia territorial histórica de grupos insurgentes en el territorio	La firma de los acuerdos para finalizar el conflicto armado entre el Gobierno y organizaciones subversivas, condujo a la desarticulación de sus estructuras militares,	El cese del conflicto armado, no significó mayores avances en el desarrollo municipal. Pues no se lograron articular programas efectivos para la inserción de personas desmovilizadas	Al no haber ningún acuerdo para el cese del conflicto armado las organizaciones subversivas, han mantenido su influencia sobre la región. Sin embargo, el gobierno, buscando

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
	aunque su proceso fue lento y tuvo grandes opositores, quienes no veían con buenos ojos los procesos de reinserción a los que debían someterse antiguos excombatientes de estas organizaciones. La mala percepción del proceso de paz, logró contrarrestarse de alguna forma mediante estrategias de comunicación en la que se involucró a la población de las áreas con mayor incidencia del conflicto en los diálogos, incluso se hicieron jornadas de socialización para explicar las medidas que se tomaron conjuntamente entre el gobierno y las organizaciones subversivas para ponerle fin al conflicto. En este sentido, con el cese de hostilidades de parte de los grupos subversivos, la infraestructura petrolera dejó de sufrir atentados, por lo que las afectaciones ambientales por derramamiento de crudo dejaron de ser parte de la cotidianidad de la región, esto influenció a la opinión pública para desestigmatizar a la región y revertir su categorización de “Zona Roja” a “Zona Blanca” que, entre otras, truncaba cualquier tipo de interés inversionista a gran escala.	y desvinculadas a la vida civil, por tanto, la falta oportunidades laborales generó que los antiguos subversivos optaran por vincularse al negocio del narcotráfico para conseguir su sustento, gestándose bandas criminales que han querido cooptar el negocio del narcotráfico e incluso se han visto enfrentadas con antiguas estructuras paramilitares para consolidar su poderío en la región. Por otro lado, la premisa existente en el Catatumbo en la que se aduce que la presencia subversiva correspondía al volcamiento a las armas al que tuvo que optar el campesino prevaleció, pues el sentimiento de abandono estatal ha perdurado incluso después de la firma de los acuerdos y las políticas públicas que surgieron muchos antes de esto como el CONPES de fronteras.	contrarrestar las motivaciones que han llevado a que las comunidades se vinculen a su pie de fuerza o sus dinámicas sean coartadas, ha incrementado la presencia de fuerza pública, lo que además ha permitido que otras instituciones estatales hagan presencia en la región y articulen programas para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la zona. La confianza en las instituciones se ha incrementado, los habitantes de la región ante la presencia estatal perciben mejoras en la seguridad, aunque persisten las zonas vedadas para el libre tránsito, lo que dificulta, entre otras cosas, la inversión y establecimiento de nuevos actores económicos. En aras de contrarrestar los impactos del conflicto armado, el gobierno nacional impulsó su Programa de Consolidación Territorial, lo que implicó un mayor acercamiento de las instituciones a las comunidades del Catatumbo que, además de sentirse abandonadas, son coartadas por el dominio que ejercerse, en algunas zonas de la región, las organizaciones subversivas ante la precariedad estatal y que se han visto

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
	Cesaron los índices de reclutamiento de estas organizaciones subversivas; lo que permitió que la mano de obra existente en la región se concentrara en las actividades económicas que se impulsaron desde distintas instancias. Frente al proceso de paz, es importante señalar que si bien los grupos armados dejaron de cometer acciones violentas luego de la firma de los acuerdos, su influencia permaneció a nivel político capitalizando la base social que durante muchos años mantuvieron cooptada. Este proceso, fue fácil de asimilar para algunas personas y como ya se subrayó, tuvo bastantes contradictores, sin embargo, logró motivar a los insurgentes a involucrarse de las dinámicas del entorno a través de métodos participativos, acordes con el ideal de paz que durante mucho tiempo anhelo la población de la región.		cristalizados con atentados terroristas y extorsiones. .
Uso inadecuado del suelo que no fomenta el desarrollo sostenible de la región	El fin del conflicto armado implicó un máximo aprovechamiento de las riquezas que brindan los suelos de la región permitiendo que se consolidaran las actividades agrícolas y agroindustriales gracias al respaldo brindado a través de las políticas públicas, como el documento CONPES 3805, cuyo propósito fue el de	Pese al fin del conflicto armado, la débil presencia estatal que propendiera por mejores condiciones de desarrollo regional, desestimuló el crecimiento de la actividad agrícola y agroindustrial en la región. Por consiguiente, no hubo un acompañamiento técnico eficaz que impulsara el potencial agrícola y silvopastoril del Catatumbo,	El desarrollo de la actividad agrícola y agroindustrial se vio respaldada por los programas de consolidación territorial. Con estos, además de la presencia de fuerza pública, se fortaleció la presencia de otras instituciones estatales que desarrollaron proyectos para mejorar la productividad de los suelos e impulsaron el interés

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
	mejorar las condiciones de competitividad de las zonas fronterizas del país. Con ello, se tuvo en cuenta los usos del suelo de acuerdo a los pisos térmicos y por tanto se diversificaron las actividades agrícolas y pastoriles que sirvieron de sustento para la población campesina, por tanto, en las zonas bajas – menos de 2000 m.s.m. – se impulsó el desarrollo pecuario, y en las zonas más altas se impulsaron proyectos forestales, agroforestales y silvopastoriles. Con el desarrollo de estas actividades, la industria maderera recobró la importancia de hace muchos años y se convirtió en la actividad económica por excelencia de la región del Catatumbo, desdibujando la dependencia que algunas comunidades tenían sobre la industria petrolera.	rezagándola a las actividades agrícolas de "pan coger" e incipientes modelos de asociatividad que se habían venido dando incluso antes del acuerdo de paz. Entre tanto, las actividades intensivas como el cultivo de palma, presentes en la región mucho antes de la firma de los acuerdos de La Habana, continuaron expandiéndose por la región sin un control técnico y ambiental de parte de las autoridades competentes. Esto, generó afectaciones ambientales porque este tipo de cultivos empezó a expandirse incluso a zonas altas donde este era perjudicial. Las expectativas generadas por el acuerdo de paz, en el que se visionaba la exportación de los productos que producía la zona se fueron truncando, pues los suelos no llegaron a ser lo suficientemente productivos y las comunidades interesadas fueron incapaces para competir en mercados internacionales.	inversionista gracias a que el Gobierno Nacional garantizó un clima de tranquilidad en la región. Se estableció una política agraria que mejoró las condiciones económicas y sociales de la población campesina, lo que ha venido contrarrestando los argumentos sociales que usa la insurgencia para legitimar su presencia en el territorio, aun así, la situación de orden público es delicada y afecta el interés inversionista en el territorio. Los suelos de la región no han logrado ser lo suficientemente competitivos, pues los campesinos han visto truncadas sus actividades por los permanentes hostigamientos de las FARC y el ELN, por lo que temen hacer grandes inversiones que los haga vulnerables u objeto de intereses extorsionistas.
Corrupción a diferentes niveles	La paz, el desarrollo y la gobernabilidad fueron aspectos que mejoraron al tiempo. Si bien la corrupción constituyó una problemática que a nivel institucional permeó casi la totalidad del Estado, los requerimientos de las empresas, el control social	Frente a la ausencia del Estado durante los años que la ilegalidad imperó en el territorio, la firma del acuerdo de paz no genero mayor vigilancia de los recursos, por lo que siguieron desviándose para la satisfacción de intereses particulares.	El fortalecimiento institucional generó un leve incremento en la inversión económica desde distintos sectores. Sin embargo, la permanencia del conflicto, además de ser una amenaza para la integridad física de los actores interesados, también

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
	a los funcionarios públicos y la elección consciente de candidatos generó una modificación frente a la aceptación de conductas corruptas.	Como consecuencia de este descuido, se generó una mayor conflictividad entre comunidades y el resto de los actores del territorio lo que provocó algunos niveles ingobernabilidad en la región, impulsada, entre otras cosas, por el abandono estatal y permitiendo con esto la cooptación de la institucionalidad por parte de las bandas criminales quienes sólo estaban interesadas en obtener beneficios económicos ya fuese, a través del desvío de recursos girados a los municipios o el fortalecimiento del narcotráfico.	suscitó riesgos a sus inversiones por las prácticas corruptas que ejecutan los GAI gracias a la cooptación que ejercen sobre la institucionalidad.
Riesgo ambientales transfronterizos en la cuenca del río Catatumbo	La cesación de los ataques terroristas a la infraestructura petrolera presente en la región permitió la implementación de programas para atender de forma coordinada los impactos ambientales causados por los derrames de crudo del pasado. A su vez, esto implicó la recuperación de la confianza en el territorio que derivó en el fortalecimiento de otras actividades como la pesca, que hoy día es un renglón importante en la economía local y que permitió la consolidación de asociaciones de pescadores y la diversificación de las actividades económicas	La finalización del conflicto armado no implicó la mejora en las condiciones bióticas del el Rio Catatumbo pues no ha tenido la intervención técnica suficiente para garantizar los niveles productivos que se ajusten a la competitividad que pretenden los pescadores de la región. Dicho esto, pese a que es notoria su recuperación frente a los constantes derramamientos de petróleo que fueron provocados por los atentados al Oleoducto Caño Limón – Coveñas, las comunidades que obtenían su sustento de la actividad pesquera no han logrado ser competitivos y su actividad económica se limitó al mercado local.	El aprovechamiento del potencial regional en materia de recursos naturales contribuyó a una mayor presencia de industrias extractivas como la del petróleo, el carbón, la madera, entre otras, apoyadas por la fuerza pública. Lo anterior incrementó los impactos y afectaciones negativas generadas al medio ambiente y al Rio Catatumbo, debido a la inadecuada disposición de desechos y vertimientos y la deficiente atención de las autoridades locales que se justifican en la cooptación del interés sobre el conflicto armado para las autoridades públicas y

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
	que le dieron cada vez mayor relevancia al turismo como fuente de sustento de la población del Catatumbo.		rezagando de la agenda los temas medioambientales.
Reclamaciones de Autonomía Regional	La gobernabilidad se vio fortalecida por la autonomía que tuvieron los entes territoriales a la hora del manejo de regalías, dándole potestad a instituciones regionales pero con controles rigurosos a su destinación. Ello implicó el ingreso de capitales privados que potenciaron la economía y convirtieron al Catatumbo en una región competitiva gracias al desarrollo de una eficiente infraestructura vial. Además, Los Gobiernos de turno contaron con mayor legitimidad y mayor respaldo de su gestión, pues impulsaron la participación comunitaria para ser tenida en cuenta a la hora de priorizar y ejecutar los presupuestos impulsando, entre otras cosas, el sentido de arraigo a la región	A pesar del fin del conflicto armado, la falta de inversiones debido a la priorización de inversión estatal en otras regiones, generó un descontento social y empresarial por el aislamiento espacio temporal de la región del Catatumbo. Por ello, se fomentaron liderazgos locales que buscaron la autonomía en el manejo de recursos y proyectos, e hicieron frente a la historia de políticas hechas desde Bogotá, lo que repercutió de una u otra forma en el desaceleramiento de la economía y los sectores agroindustrial, agrícola y minero-energético Por otro lado, Los grupos armados desmovilizados que migraron por razones económicas a la región aprovecharon la situación para aumentar su base social y tener involucramiento en la toma de decisiones.	El desarrollo de la región y la gobernabilidad que se desarrolló en el Catatumbo, gracias al fortalecimiento institucional que impulsó el Gobierno Nacional, permitió que aumentara el arraigo de las personas a la región a través de programas de acompañamiento en educación y tecnificación, los cuales incentivaron el buen aprovechamiento de los recursos provenientes por regalías. Bajo estas condiciones, los líderes locales aprovecharon el contexto para promover la autonomía de la región y generar inversiones que trataran las necesidades de la comunidad y les otorgaran una base social, aunque estas tuvieron que enfrentarse a la presencia de la actividad subversiva y a su actividad ilegal
Proyectos en curso para creación y formalización de zonas de reserva campesina	Las Zonas de Reserva Campesina no han sido ningún obstáculo para el desarrollo de actividades económicas de la región. Al contrario, al ser legitimadas a través de los acuerdos que se firmaron en La Habana, lograron convertirse en escenarios de inclusión y participación	Las ZRC generaron renuencia en alguna parte de la población pues no eran claros los propósitos de su creación. Con esta percepción, se impulsó la idea de que este tipo de jurisdicciones sólo serían un territorio vedado para la institucionalidad pública.	La continuidad del conflicto armado, generó que las zonas de reserva campesina, al ser una idea amparada por las FARC, no fueran legitimadas en la región. Sin embargo, la situación socioeconómica del Catatumbo mejoró en razón del fortalecimiento institucional, lo que además

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
	de los campesinos, donde tuvieron la garantía de la consulta previa como una herramienta que ha sido usada, cada vez con menor frecuencia, para asegurar su participación en la toma de decisiones y no para obstaculizar proyectos. Con el establecimiento de la ZRC, se crearon programas que impulsarían el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos. Esto se materializó en proyectos económicos que impulsaron tanto la diversificación como la asociatividad de distintos sectores campesinos que convergen en la región	La animadversión tanto de sectores políticos como sociales, impidió que las zonas de reserva campesina sirvieran para que la población campesina lograra encontrar mejoría en sus condiciones económicas, implicando con ello un rezago en la calidad de vida de gran parte de la población de la región.	permitió la particularización del sector campesino para con ello formular políticas públicas específicas orientadas a satisfacer sus demandas particulares.
Fuerte identidad colonizadora frente a presencia de asentamientos tradicionales indígenas	El ímpetu colonizador de la población que habita en el Catatumbo permitió durante años que se consolidaran zonas propicias para la explotación de recursos naturales y el asentamiento de la agroindustria. Así pues, con la finalización del conflicto, este tipo de actividades tuvo un espaldarazo de parte del Gobierno Nacional, aunque también un estricto control para que no se afectaran los ecosistemas ni reservorios de agua que existen en la región.	La finalización del conflicto armado permitió la libre movilización por toda la región del Catatumbo, anteriormente limitada por la presencia de grupos ilegales. Con ello, se consolidaron asentamientos humanos cerca de fuentes de explotación de recursos naturales, lo que implicó el fortalecimiento económico de la región. Pese a que la economía mejoró por la dinamización que permitió el cese del conflicto, el descontrol de estas dinámicas afectó paulatinamente los ecosistemas regionales a lo que se le suma la presencia de cultivos ilícitos que durante años han afectado directa e indirectamente la	La continuación del conflicto armado implicó que en la región aun existiesen zonas vedadas para el libre tránsito y donde no se pudieran explotar los distintos recursos naturales que ofrece el Catatumbo, por tanto, se fortalecieron actividades económicas intensivas, como la agricultura y la ganadería que contrarrestaron la frustración de la población de la zona al no poder movilizarse libremente por el resto de la región y buscar nuevas alternativas económicas.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
		actividad agrícola y los recursos naturales de la región.	
Economía influenciada por las dinámicas de los cultivos ilícitos (bonanza y depresión)	Con la finalización del conflicto armado, en la región del Catatumbo hubo una atenuación del accionar de estructuras guerrilleras que aún tenían presencia en la zona. Esta situación, lejos de desincentivar la presencia de grupos criminales, así como la continuación de actividades de narcotráfico, incentivó la presencia de grupos de delincuencia común que aprovecharon el desarrollo de infraestructura y de condiciones de movilidad para acceder a mejores mercados para el microtráfico de estupefacientes. En este sentido, las industrias que han llegado a la región han tenido que compartir vías de acceso y movilización con el narcotráfico, aunque su presencia es menos influyente por el incremento de la fuerza pública que ha tenido la región con miras a impulsar la consolidación institucional como uno de los pilares fundamentales para contrarrestar las causas del conflicto.	Una vez iniciado el proceso de finalización del conflicto armado, la región del Catatumbo se convirtió en la retaguardia estratégica de los grupos criminales, conocidos como las BACRIM producto, tanto de anteriores procesos como el que se llevó a cabo con los paramilitares como los que surgieron de las negociaciones con las FARC y el ELN, y la delincuencia común, valiéndose de su aislamiento institucional como ventaja para desarrollar sus actividades criminales. De igual forma, y teniendo en cuenta que esta región no supo aprovechar las oportunidades de desarrollo formuladas desde el gobierno central, como el CONPES de fronteras , no se realizaron esfuerzos para el mejoramiento de la infraestructura vial ni la conectividad de la región con el resto del país. Esta situación contribuyó a que los grupos criminales encontraran en los pequeños municipios de la zona un refugio desde el cual seguir delinquiendo sin mayores consecuencias, utilizando las rutas tradicionales para el tráfico	La no finalización del conflicto armado gracias, entre otras cosas, a las disidencias al interior de alguna de las partes, conllevó al afianzamiento de los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo, quienes ante la imposibilidad de una salida negociada, buscaron consolidar su control territorial. A pesar de que la región atravesó un proceso de crecimiento económico derivado del establecimiento de la industria minera como de la consolidación de la industria petrolera y agroindustrial, como parte de un modelo de desarrollo para la región, la persistencia del conflicto incidió en el afianzamiento de dinámicas como el narcotráfico que impidieron procesos de desarrollo integral.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
		de drogas sin algún tipo de implicaciones.	
Zona de tradición petrolera y minera	Las comunidades y autoridades municipales tuvieron en cuenta la histórica tradición petrolera de la región como sustento para el fortalecimiento de las relaciones con la industria y conllevando a la creación de oportunidades de valor compartido para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos de la región. Motivadas por esto, las compañías petroleras impulsaron el desarrollo de proyectos productivos que desincentivaran la histórica dependencia económica de los recursos petroleros. En este sentido, se impulsó la actividad agrícola teniendo como referente al Departamento de Arauca, donde las compañías petroleras fueron los principales gestores de proyectos cacaoteros. Entre tanto, la actividad minera se adaptó a las necesidades del mercado, migrando tecnológicamente hacia prácticas ambientalmente más amigables, impulsando la competitividad en la cadena energética del Departamento.	Las comunidades asumieron una postura renuente frente a las actividades minero-energéticas, relacionando su histórica presencia con la conflictividad política y social que ha vivido la región. A partir de esta asunción, las comunidades usaron las vías de hecho para obstaculizar las operaciones localizadas en la región y así demandar una infundada reivindicación por sus históricos padecimientos.	Las comunidades asumiendo una actitud mucho más participativa y generando mayores espacios de diálogo, aprovecharon el impulso económico que trajo consigo la actividad minero-energética que se desarrolló en la región. Con ello, desvirtuaron la idea que responsabilizaba a estas actividades como causantes de las afectaciones del orden público. Se articularon proyectos que buscaron contrarrestar la histórica dependencia de los recursos que generaba el petróleo, por tanto, el sector agrícola se vio impulsado tomando como ejemplo otras regiones del país que fortalecieron dinámicas agrícolas con el impulso de la industria petrolera. Pese a esto, existen brotes de violencia enmarcados en el conflicto armado y que en ocasiones suscitan señalamientos hacia la industria como agente causal de estas afectaciones.
Alto riesgo de desastres naturales	Con la finalización del conflicto armado se amplió la agenda temática sobre la cual se concentraba el mayor foco de atención de parte de las instituciones	La desarticulación institucional frente a la atención de emergencias es tal que aún la región está en mora de establecer un comité regional de atención	Las autoridades locales y las comunidades fueron previsivas e impulsaron la creación de un comité regional de emergencias. En sus EOT y Planes de

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, con conflicto armado
	públicas tanto nacionales como locales, permitiendo, entre otras cosas, que se contrarrestaran los posibles riesgos que generaba para la región su alta sismicidad. Frente a ello, las autoridades nacionales consolidaron el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que elaboraría un programa preventivo y particularizado para la región. Además, las autoridades locales implementaron políticas que se ajustaban a las medidas preventivas por lo que sus Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial incluyeron medidas que permitieron volcar recursos a la gestión del riesgo de desastres naturales	de desastres; ni los EOT ni en los Planes de Desarrollo parecen contemplar en su formulación la alta sismicidad de la región. En este sentido, las comunidades han vivido en la zozobra de evidenciar un desastre de grandes magnitudes, pues nunca se han preparado para atender eficaz y oportunamente este tipo de situaciones.	Desarrollo se impulsó la implementación de las medidas de sismo resistencia. Sin embargo, por la persistencia del conflicto estas medidas no han sido implementadas, pues el foco de interés de las autoridades tanto nacionales como regionales ha sido la de contrarrestar las consecuencias derivadas del orden público y el conflicto armado.

SUBREGION COVEÑAS

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
Corrupción administrativa + Cooptación del poder por grupos de autodefensa y BACRIM	La capacidad institucional para asumir los compromisos derivados del proceso de paz implicó una transformación político institucional y de cultura política exitosa. Por parte de la comunidad, se desarrolló junto a las entidades académicas y el Estado programas de fomento de la cultura de rendición de cuentas y recibimos los lineamientos para inhibir la cultura de corrupción y del interés personal. El clientelismo tradicional de la política fue arrinconado cuando las organizaciones ciudadanas de las regiones y de los municipios hicieron sentir su presencia y su presión. Cuando grupos de la sociedad civil nos organizamos, buscamos representatividad en los cargos públicos, para velar que estos repiten los modelos desgastados de hacer política. La esperanza que resulto de los acuerdos de paz impulso esta nueva dinámica para erradicar la	Para las administraciones locales no fue prioridad implementar los planes de desarrollo territorial (Plan Departamental de Desarrollo de Sucre, o de Córdoba) establecidos para el manejo y control de las coyunturas de postconflicto. Ante un sistema judicial ineficiente, falta de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia persistieron los fenómenos de corrupción administrativa. El manejo del poder para beneficio de pocos siguió caracterizando a la cultura política de la región. La evasión de impuestos, la complicidad con el narcotráfico, el tráfico de influencias y la manipulación de procesos de rehabilitación y de restitución de tierras permaneció, a pesar de declaraciones solemnes de la clase política celebrando el acuerdo de paz con los grupos insurgentes.	El fracaso del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las guerrillas afligió poco la región, que históricamente estaba afectada por la presencia de grupos paramilitares y bandas criminales. Sin embargo, el sobresalto nacional que siguió el hundimiento de las negociaciones de la Habana impulso a la región y sus instituciones. Ante la exasperación de una población agobiada por la malversación de los recursos públicos, la clase política tradicional fue sancionada en las elecciones locales. Una nueva generación de líderes comunitarios y de empresarios locales empoderó sus circunscripciones. Las comunidades del departamento, fortalecidas por dinámicas de asociatividad y alianzas de la sociedad civil, reclamaron rendiciones de cuentas regulares, sanciones contra funcionarios culpables de malversación, y una

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	influencia de los grupos armados en las instituciones locales. Actores políticos tradicionales vinculados con Grupos Armados Ilegales (GAI) fueron expuestos como tal, y perdieron su influencia gracias a la normalización del juego electoral y político. Este esfuerzo de normalización de la vida política de la región fue acompañado por las instituciones nacionales como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del pueblo, que beneficiaron de un mayor apoyo del gobierno central para garantizar su independencia y capacidades. El esfuerzo dio sus frutos y la sociedad civil pudo contar con un gobierno legítimo que representara sus intereses. La presión ciudadana, aceptada como mandato necesario en los más altos niveles, indujo formas nuevas en la administración pública y en la organización de los partidos y generó una nueva clase de liderazgo. Nuevos líderes políticos que tenían como bandera	Se le suma, que ante la desaparición del conflicto armado, el gobierno central destino mayores recursos para inversión local. Pero estos recursos fueron desviados por las administraciones corruptas y las redes de malversación que ya habían desfalcada las iniciativas de restitución de tierras a víctimas del conflicto.	supervisión meticulosa de sus representantes electos. Este nuevo escrutinio del sector público por la población, apoyado por campañas locales de “auditorias ciudadanas” de proyectos de inversión, garantizo un mejor uso de los recursos públicos, incluso de las regalías. El mayor control del sector público por los residentes, los medios y la sociedad civil permitió un crecimiento de los servicios públicos y una reducción de las Necesidades Básicas Insatisfechas en la región. Los avances de gobernabilidad y transparencia por presión ciudadana purgaron las instituciones locales de las antiguas influencias de Grupos Armados Ilegales (GAI) e individuos corruptos.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	el seguimiento de políticas de pacificación del conflicto fueron elegidos.		
Fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley, especialmente autodefensas y/o bandas de crimen organizado	La presencia histórica de grupos de auto-defensa, y de bandas criminales posteriormente a la desmovilización de 2006 desvaneció significativamente a medida que el Estado y la comunidad actuaron como unidad para enfrentar los principales obstáculos para el desarrollo regional. Por un lado, nosotros la comunidad hemos ejercido nuestro derecho a la denuncia y rechazo comunitario a cualquier acto de guerra o violencia en la región, poniendo fin a la impunidad criminal en la región. La generación de ingresos, el acceso a vivienda, salud, educación, espacios culturales, recreativos, deportivos y sociales de los desmovilizados fue una oportunidad para su inclusión. Se le sumó el ejercicio constante del gobierno municipal y departamental en la buena implementación de sus políticas ambientales y tributarias, especialmente	En la región ya hemos vivido una situación de postconflicto tras la desmovilización de los bloques paramilitares “Héroes de los Montes de María” en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2005. Fue una experiencia que nos ha dejado con un sinsabor. Pues por un lado, reconocemos que disminuyeron los ataques terroristas contra la población civil que allí habitaba y regresaron familias desplazadas a sus tierras. Sin embargo surgieron otros problemas que no se previeron por parte de las instituciones del Estado, generando otra clase de conflictos sociales. Es decir, el conflicto social no se terminó, sino que cambio su naturaleza. Las AUC se desintegraron pero no desparecieron, al contrario, se atomizaron en bandas criminales que hoy en día siguen afectando la vida civil de la	En aras de proteger las inversiones en infraestructura e industriales de la región, el Estado invierte sumas significantes en ampliar el pie de fuerza del ejército y de la policía. La presencia contundente del ejército en la región, desintegro el accionar de los grupos armados ilegales. Golpeados militar y financieramente, los grupos armados de paramilitares disminuyeron sus acciones. Se vivía una tensa calma, pues la presencia del ejército creo en la comunidad una sensación de autoridad y seguridad. Pero la recuperación de territorios antiguamente controlados por grupos armados permitió un desarrollo de las vocaciones productivas tradicionales (agropecuarias) y nuevas en la región (como la expansión del turismo). Los fenómenos de extrusión y de captación

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	para la erradicación de la minería ilegal y otras fuentes de enriquecimiento de grupos ilegales en la región.	comunidad en la región, ejerciendo presión sobre el poder de la tierra y acudiendo a la minería ilegal y vacunas extorsivas como forma de subsistencia. Ahora bien, el fin del conflicto armado con las guerrillas, negociado por el presidente Santos en el año 2014, se dio lo que la comunidad temía. Y es la repetición de los conflictos resueltos a medias. La falta de gobernabilidad y presencia estatal en las regiones rurales de Sucre y Córdoba no fueron coherentes con la situación del postconflicto. Por eso es que aún existen grupos armados en la región que continúan los asesinatos selectivos de líderes comunitarios, extorsión a empresarios, ataques a la infraestructura del sector de hidrocarburos, y continúan las amenazas a las organizaciones y a sus dirigentes. Por eso resulta difícil tratar a esta región como zona en postconflicto. Ante este escenario, perdimos la confianza en las instituciones. Las negociaciones con unos y	ilegal de recursos económicos públicos disminuyeron, diluyendo la influencia de los actores ilegales en la región.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
		con otros han afectado la credibilidad de la comunidad hacia el Estado.	
Antecedentes de usurpación, despojo y desplazamiento forzado	Después del acuerdo de paz, y con la permanencia de grupos armados ilegales en la región, el estado concentro mayor recursos para una buena aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas articularon sus intervenciones con el apoyo de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, para garantizar una restitución eficiente de sus predios a las verdaderas víctimas de despojo de tierras. Adicionalmente, las autoridades públicas sancionaron los nexos de manipulación de medidas de restitución a personas y entes que no eran las victimas originales del conflicto, incluso	El acuerdo de paz con las guerrillas no oporto solución al problema del despojo de tierras en la región. El alcance limitado (en el tiempo y la definición de los beneficiarios) de la Ley de Victimas no permitió un acceso suficiente a los mecanismos de reparación previstos en ella, por ejemplo excluyendo a las victimas recientes de grupos paramilitares que el estado considero desmovilizados desde el año 2003. Persistió la violencia contra las victimas que reclamaron restitución de tierras, golpeando a los sectores más vulnerables de la población. Aumentó la situación de inseguridad para los líderes sociales y defensores que participaban en dichos procesos. La presencia continua de bandas criminales y de actividades ilegales en esas regiones cerró el paso a los retornos de desplazados y a la posibilidad de	A pesar del fracaso del proceso de paz, el gobierno proporciono un mayor apoyo administrativo a los procesos de reparación previstos por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para seguir socavando el apoyo popular a los grupos insurgentes. Grupos de campesinos, victimas del despojo y desplazamiento forzado atrapados entre el fuego de guerrilleros, paramilitares y criminales, exigieron el respeto a la inmunidad de la población civil y denunciaron la corrupción administrativa que minaba los procesos de restitución de tierras. Esta dinámica de restablecimiento transparente y reconocido de la propiedad rural fue apoyada por la empresas inversionistas en la región, quien buscaban una mayor seguridad jurídica para los títulos de constitución de

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	sancionando a los funcionarios que facilitaron la desviación de información confidencial sobre las víctimas. Estos campañas, articuladas con programas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural permitieron un reasentamiento durable y productivo de las familias expulsadas por actores armados (paramilitares, guerrillas o bandas criminales). Se aplicó el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, una política de estado que permitió regularizar con transparencia las intervenciones sobre predios de origen baldíos, la asignación de tierras a los campesinos, y la redistribución de la propiedad. Las prácticas de concentración o fragmentación abusivas de terrenos fueron remplazadas por una estrategia productiva y de transformación económica, política y social no solo para las víctimas del	reconstruir el tejido social en dichas zonas. El Estado no logro desarrollar políticas efectivas dirigidas a garantizar los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. No pudo sostener la carga administrativa y burocrática de las medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto. Los programas sociales para atender los problemas del momento fueron soluciones transitorias que se desarrollaron con el apoyo de algunos organismos internacionales con los que se firmaron compromisos efímeros y débiles de protección a la infancia, alimentación, empleo, agricultura, reforma agraria, educación o derechos humanos.	plantaciones y operaciones productivas.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	despojo, sino para toda la población rural.		
Presencia de diversas cadenas de producción y tráfico de estupefacientes	Los procesos de modernización e incorporación de la economía campesina y de la exportación de alimentos supusieron una transformación fuerte del campo. La agricultura se volvió el factor principal de desarrollo de la región rural, donde el acceso a la tierra, la compatibilidad de usos y vocación del suelo y la distribución de la propiedad son ahora satisfactoriamente reconocidos. Esta recuperación productiva del territorio permitió una fuerte disminución de los cultivos ilícitos, remplazados por siembras de hierbas aromáticas y vegetales de mayor valor de exportación. Se combatieron, desde las instancias legales y el mismo gobierno, los fortines políticos que el narcotráfico había instalado en el poder. La influencia del dinero del narcotráfico fue atenuándose a medida que la impunidad fue reducida. También fue notable la aparición de	La falta de alternativas productivas en una región altamente agrícola, donde la persistencia de la inseguridad limitó el desarrollo de proyectos turísticos y de reorganización de la propiedad rural, no suscito una disminución del narcotráfico. Ante la ausencia institucional, los corredores estratégicos del narcotráfico permanecieron en la costa Caribe. Por falta de entidades de control costera, también se involucraron en el tráfico a comunidades que carecen de oportunidades laborales, como los pescadores o lancheros, ahora incluidos en las cadenas de comercialización de droga La región sigue siendo una de las zonas más pobre del país. La corrupción que se vivía fue aprovechada por los narcotraficantes para darle a sus dineros una cierta legitimación, mientras algunos empresarios y	La decepción que siguió el fracaso de las negociaciones de paz generó un sobresalto de consciencia de parte de las poblaciones de la región, que proclamaron su exasperación ante el narcotráfico, factor determinante del nivel de muertes violentas en el territorio. La inseguridad relacionada con las Bandas Criminales (Urabeños y Rastrojos) en los municipios de Tolú, Coveñas, San Onofre, Sincelejo, Guaranda, San marcos y Majagual, para el control de zonas propicias para el narcotráfico y micro tráfico de drogas, fue disminuida por la permanente presencia de la Fuerza Pública que ha permitido la seguridad con el respaldo de las comunidades. La solución militar al conflicto con los grupos insurgentes se enfocó en la debilitación de los recursos económicos de las guerrillas, principalmente el

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	gobiernos locales que, bajo la presión ciudadana y con el apoyo de grupos opuestos al sistema derrotaron la corrupción. La sociedad civil consciente del daño tremendo que hizo a toda su estructura social la presencia extendida del narcotráfico, recuperó su sentido ético y le cerró las puertas.	capitales legales huían hacia el exterior. Así es que el narcotráfico aprovechando el desorden institucional, continuó corrompiendo múltiples instancias de poder público.	narcotráfico y la minería ilegal.
Vocación turística creciente	Restablecida la confianza de la sociedad y garantizada la seguridad de inversionistas y empresarios, el gobierno nacional y local identificaron y provecharon las ventajas comparativas de la región en materia de turismo, valorando a la Ciénaga de san Marcos, las playas de Coveñas, el Golfo de Morrosquillo o San Benito Abad. Con alianzas estratégicas entre organizaciones académicas, Estado y comunidad, se desarrollaron opciones de capacitación del sector turístico para los residentes. La vocación de eco-turismo del territorio, elemento fundamental del mantenimiento de los	El fin del conflicto armado genero altas expectativas a los empresarios del turismo en Coveñas. Ante una región en paz, aumentaría significativamente el turismo en la región. Sin embargo, esto no sucedió. El estado local y departamental a pesar de ver el potencial turístico de la región (Ciénaga de san Marcos, las playas de Coveñas, el Golfo de Morrosquillo o San Benito Abad), no pudo llevar a cabo los proyectos de mejoramiento de infraestructura vial, salud y restauración de playas afectadas por la erosión. E ignoró que el grueso de su población vivía bajo serias condiciones de pobreza y	Con la permanencia del conflicto, los gobiernos locales decidieron articular una estrategia de desarrollo y empleo local inclusivo a través de apoyos institucionales al sector del turismo. Esta generación de vocaciones económicas de baja calificación, pero respetuosos del modelo cultural y del medio ambiente de la región se convirtió en la mayor fuente de devisas del departamento, beneficiando del atractivo turístico internacional de Cartagena. Modelando la estructura del sector sobre la legislación y prácticas de Costa Rica, un país líder en eco-turismo, se

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	procesos ecológicos y conservación de la biodiversidad local, benefició a los desmovilizados del proceso de paz, muchos de poca educación formal. La expansión de la oferta de turismo aprovecho la mejora de infraestructura regional con la modernización de los aeropuertos, barrios, acueductos y alcantarillados, escuelas y centros de salud. La dinámica de una ciudadanía presente, enriquecida por un proceso educativo integral, repercutió en la economía turística de la región, con la provisión de empleos locales, bienes y servicios.	atraso, los peores estándares de cobertura y calidad en servicios públicos. El diseño de sus planes de desarrollo no contemplaba el turismo como una actividad sostenible que requería del trabajo conjunto entre empresarios, comunidad y estado. Cada actor trabajaba aisladamente y no se percibían de manera efectiva los esfuerzos de cada uno.	despliego un programa de créditos y micro-créditos para la industria hotelera y de hospitalidad, acompañado de un sistema de certificación de las prácticas ambientales y sociales del sector. Gracias a las altas tasas de crecimiento del país, se disminuyeron las tensiones sociales debidas a la brecha entre las distintas clases sociales de la región. Este modelo de desarrollo inclusivo fue alentador para las cifras macroeconómicas, y los indicadores sociales generando confianza de turistas nacionales e internacionales.
Sensible patrimonio ambiental del Golfo de Morrosquillo, las islas y las ciénagas	A pesar que dentro de los acuerdos no se tocaron los elementos esenciales del modelo de sostenibilidad, el Estado colombiano reconoció la necesidad de fortalecer las autoridades ambientales, nacionales, regionales y locales para cumplir sus funciones de control y de implementación de proyectos ambientalmente	La realidad, es que no estábamos preparados, ni las instituciones, ni la comunidad para enfrentar los efectos que trae un periodo de postconflicto. Por el lado de los gobiernos locales, se limitaron a resolver los problemas de cada día y desechó las soluciones ambiciosas y con visión de futuro, incluso con respeto al daño al patrimonio	Ante el escenario de desaliento por el fracaso de la negociación de paz con las Farc y el ELN, el Estado instauró un modelo en que situó a la economía sostenible y el desarrollo respetuoso del medio ambiente como eje central de las agendas públicas. Así se pudo frenar la dinámica de deforestación en el departamento, que alcanzaba las 5.000

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
+ Centro estratégico de exportación de petróleo - llegada de oleoducto, gran capacidad de almacenamiento y puerto de buques tanque + Alto impacto del Canal del Dique por transporte de material sólido suspendido proveniente de la cuenca degradada del río Magdalena.	sostenibles con la comunidad. Recursos adicionales y esfuerzos de capacitación de la Corporación Autónoma de Regional de Sucre, las gobernaciones y las alcaldías de la región permitieron desarrollar diagnósticos ambientales profundizados y actualizados. Junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ejecutaron planes para mitigar la erosión del Golfo de Morrosquillo. Con los pequeños agricultores de la región y organizaciones ambientalistas de la región, se realizan planes de incorporación y adaptación de la pesca deliberada a la pesca artesanal. Los gremios económicos asumieron el compromiso de cuantificar los costos que su actividad tiene por los usos de los recursos ambientales, y el sector privado está contribuyendo a un manejo más eficiente del agua, de la energía y de los desechos.	ambiental del Golfo de Morrosquillo. La afectación de recursos como el agua, el aire, la fauna y flora crecieron. El vertimiento de aguas servidas, la inadecuada disposición de residuos sólidos, los derrames de hidrocarburo, la emisión de partículas nocivas (en los municipios de Coveñas y Tolú que son puertos de embarque, petróleo y cemento), la explotación de canteras de piedra caliza para la producción de cemento gris y cal y la utilización de arados y agroquímicos en las actividades agrícolas y pecuarias aumentaron significativamente por las siguientes razones: • el desarrollo como enfoque central de políticas públicas con altos costos ambientales; • el fenómeno de la minería ilegal; • la entrada de excombatientes a la vida civil que por falta de oportunidades laborales, incurren en actividades económicas como la pesca indiscriminada y la minería ilegal. • el afán por el desarrollo de parte de las administraciones locales y	hectáreas al año para la explotación maderera y la producción agropecuaria. Las tierras anteriormente deforestadas - parte de ellas con alto grado de deterioro (municipios Los Palmitos, San Pedro y Buenavista) en virtud de la explotación agrícola intensiva de yuca, sorgo, maíz, algodón, y la explotación ganadera - fueron recuperadas gracias al apoyo institucional y financiero a las explotaciones exentas de agroquímicos y los procesos productivos respetuosos de los suelos, el aire, el agua (superficial y subterránea), la flora y la fauna.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
		departamentales no invierte recursos en instituciones que ejerzan control sobre los recursos ambientales a sectores económicos como los ganaderos y arroceros de la región. • la negligencia por parte de empresas del sector de hidrocarburos y las autoridades ambientales para evitar derrames en el golfo de Morrosquillo genera alta probabilidad de ocurrencia de este riesgo.	
Tensiones interculturales + Importante colonización antioqueña	A pesar que los conflictos con los grupos étnicos no fueron analizados con profundidad en las negociaciones de La Habana, el Estado garantiza la protección de los derechos de los grupos ancestrales de la siguiente manera: • el Estado, la comunidad y ONGs avanzaron hacia la igualdad de oportunidades en el acceso a activos productivos (tierra, capital, crédito) y a bienes públicos bajo principios de un Estado de derecho. • Educación de paz, y de promoción de la identidad cultural y	Ante el estado de ingobernabilidad y la ausencia estatal, las comunidades étnicas empezaron a ejercer su propia autonomía debido a la confianza perdida hacia las instituciones públicas y con la premisa de “sálvese quien pueda”. El sentimiento de abandono del Estado por parte de comunidades indígenas de San Antero, ha generado un rechazo hacia proyectos del sector minero energético y otros proyectos que generan impactos en su vida cotidiana, por lo que	Con el fracaso del proceso nacional de paz, las instituciones representativas de minorías étnicas (indígenas y negritudes), el segmento de la población más victimizada por el conflicto, abandonaron cualquier expectación de mejoramiento institucional en la región. Esta nueva realización genero un sobresalto de las comunidades, que reclamaron mayor transparencia y profesionalismo de parte de sus instancias representativas. Resguardos y tierras comunitarias

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	coexistencia pacífica; de manera que los diferentes grupos étnicos presentes en la región les permita seguir construyendo su identidad propia. Se multiplicaron y fortalecieron las organizaciones sociales indígenas, que con el esfuerzo de ONG, representaron de manera eficaz los intereses de la comunidad. Este mayor reconocimiento de las particularidades étnicas del territorio generó oportunidades económicas para los residentes tradicionales con apoyo de inversionistas nacionales interesados en el potencial (turístico y agropecuario) de la región.	acuden a vías de hecho como primer única forma de presión para obtener apoyos económicos y como manifestación de su inconformidad hacia el Estado. La presencia de empresas en la región, generan en el imaginario colectivo, la noción que estas reemplazan las responsabilidades del estado.	implementaron políticas de crecimiento económico sostenible e inclusivo, que no implicaban la explotación de recursos ambientales. El fortalecimiento de las identidades regionales se tradujo en el fin del asistencialismo, supuesto durante muchos años. Inversionistas antioqueños y otros aprovecharon las políticas sociales diseñadas desde la comunidad, para capacitar y emplear mano de obra local y compartir los beneficios económicos de la región con sus nativos.

SUBREGION GUAJIRA

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
Influencia en mecanismos de protección y regulación de la comunidad	El fin del conflicto armado ha generado la tranquilidad necesaria, frente a la coerción por la insurgencia, de líderes sociales y actores políticos, para emprender un ejercicio vigilante y crítico sobre las dinámicas propias de la región. En este sentido, se articularon todos los movimientos y filiaciones políticas para establecer modelos de convivencia y atención a problemáticas sociales y delictivas que pudieran afectar a la región luego del proceso de desmovilización de las estructuras militares de los grupos subversivos. La materialización de estas discusiones derivó en la formulación de los planes de convivencia por cada uno de los municipios que componen la región del Sarare. Además, la incorporación a la base política y social de antiguos miembros de las organizaciones subversivas implico una legitimización de su rol como actores influyentes en la región. Entre tanto, las instituciones que velan por la protección de los derechos humanos, han hecho más visible su actividad, lo que se ha impulsado a través de las comisiones de la verdad que se articularon como parte de los acuerdos que se firmaron en La Habana.	La finalización del conflicto armado creó un escenario donde diversos actores competían electoralmente por el liderazgo social y político de la región, conllevando a que se conformaran zonas vedadas para la correcta implementación de los acuerdos que se dieron en La Habana. Las disputas por reconocimiento generaron conflictos intersectoriales entre las nuevas fuerzas políticas que se conformaron durante la etapa de negociación. Los nuevos actores políticos desmovilizados polarizaron los debates hasta llevar a una situación de ingobernabilidad que truncó la formulación de políticas. Dado que los consensos no se han dado, algunos sectores políticos y sociales no están a favor de los roles decisorios que algunos ex-insurgentes, como parte de los acuerdos de la Habana, asumieron. Una muestra adicional de la polarización política postconflicto es la desarticulación para la presentación de proyectos de cooptación de recursos de regalías.	Las políticas impulsadas por el gobierno para la consolidación territorial fueron mucho más robustas dado el fracaso de la negociación para ponerle fin al conflicto armado. Esto implicó el volcamiento del interés por robustecer la presencia de entidades garantes y de protección de derechos humanos. Así mismo la comunidad, en aras de mejorar la situación de convivencia en el municipio, tomó conciencia y planteó escenarios para discutir la eventual implementación de políticas que regularan la convivencia. Entre tanto, las ONG y fundaciones de base social mantienen su preponderancia en el entorno y han visibilizado de manera más eficiente la problemática que se extiende por toda la región en cuanto al acceso de la población, especialmente de las zonas rurales, a los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos. Esto ha conllevado a que se impulse continuidad de estrategias de asociatividad y cooperativismo como

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	Las instituciones locales - gobernación y alcaldía - fortalecieron su rol en el desarrollo territorial gracias al apoyo reforzado del gobierno central a la institucionalidad regional. Esto además impactó positivamente en la actuación eficiente y transparentes, que además fue avalada por los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas que fueron favorecidos durante la fase de postconflicto Gracias al nuevo ambiente que se percibe en el Sarare con respecto a la convivencia y a la confianza que generaron los acuerdos que firmó el gobierno con las FARC y el ELN, las comunidades tomaron mayor conciencia de la administración eficiente de los recursos públicos, incluso las regalías, constriñendo las condiciones que permitían la corrupción y malversación.	Los proyectos de desarrollo e infraestructura, como los planes de seguridad y convivencia en los municipios no han logrado tener el trámite necesario para su estructuración. De otro lado, la institucionalidad pública no se ha robustecido en zonas periféricas de la región y prevalece la precariedad de los mecanismos para la protección de los derechos humanos. Esta ausencia ha sido utilizada por ONG y Colectivos de base social para emprender una cruzada en contra del gobierno nacional que ha evidenciado el abandono al que aún tienen sometidas a las comunidades.	factores que fortalezcan la resiliencia comunitaria y le permita soportar los embates del conflicto que aún, después de tanto tiempo, permanece latente. Frente a esto, la región del Sarare se ha vuelto mucho más visible en el escenario nacional, conllevando incluso a que con regularidad se elaboren documentos que registren la actual situación de seguridad y convivencia que hacen vulnerable a la comunidad. En este tema en particular, la defensoría del pueblo ha asumido un rol fundamental con la elaboración de los Informes de Alertas Tempranas donde se registran la coyuntura frente a estos aspectos.
Cooptación de las instituciones por grupos ilegales / Fuerte Influencia de FARC y ELN	El marco de postconflicto disminuyo la cooptación de las instituciones públicas y la incidencia de acciones intimidantes por parte de grupos armados a las autoridades municipales y los líderes comunitarios de la zona, liberando un espacio de debate democrático pacifico sobre los temas sociales. Esta situación empezó a desdibujarse desde la firma del acuerdo de paz, volcándose hacia prácticas legales y legítimas en las que los desmovilizados tuvieron la	El acuerdo de paz firmado por las dos principales guerrillas del departamento conllevó a la dejación de armas sin establecer reglas claras para la participación política de los desmovilizados. Unos antiguos actores armados del departamento siguieron utilizando la intimidación para acondicionar las discusiones en las que quieren participar.	A pesar de la continuación del conflicto en la región, el Gobierno central volcó una mayor cantidad de recursos, tanto económicos como institucionales, para incentivar el desarrollo económico y social de la región, y combatir los argumentos que invocaban las estructuras subversivas para ejercer dominio territorial. En este sentido, además de fuerza pública para prevenir y combatir las acciones violentas de

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	oportunidad de participar activamente en la política regional, permitiéndoles asumir un rol decisorio sobre el desarrollo de la región. Las autoridades regionales fueron verdaderamente autónomas en la toma de sus decisiones, integrando los antiguos líderes subversivos en la participación política democrática que permitió acuerdos consensuados de desarrollo económico y social inclusivo par todo el departamento.	A esta problemática se le sumió la persistente debilidad institucional y la escasa cobertura de la agencias del Estado, fomentando la corrupción y la malversación de los recursos públicos señalados para el desarrollo económico y social de la región. Los procesos de desmovilización no apoyaron la reinserción económica y psicosocial de los ex-combatientes, derivando en una falta de oportunidades laborales y una estigmatización por parte de la comunidad que desustancia los esfuerzos de rehabilitación. La reincidencia en hechos violentos de miembros de las antiguas estructuras subversivas acompaña la permanencia de actividades económicas ilegales como el narcotráfico y contrabando de combustible.	FARC y ELN, el Gobierno Nacional y Departamental implementaron con más rigor y celeridad el plan de consolidación territorial, que entre otras cosas dio vial libre a proyectos de inversión y programas sociales que poco a poco han ido deslegitimando la lucha armada. La alineación de políticas empresariales de responsabilidad social localizadas y de largo plazo benefició los residentes del Sarare, proporcionando mayor empleo y productividad de las iniciativas productivas en la región, y disminuyendo el impacto de discursos subversivos opuestos a la industria petrolera.
Pobreza Extrema	Los indicadores de pobreza extrema en la región han ido disminuyendo en la medida que se ha fortalecido la presencia institucional. Esto indica que no sólo ha incrementado el pie de fuerza para contrarrestar eventuales manifestaciones violentas de parte de actores que aún	En el ideario de la población, la finalización del conflicto implicó un incremento de recursos por parte del gobierno central que combatieran los altos índices de pobreza en la región. Sin embargo, la comunidad del Sarare continúa albergando sentimiento	Una de los mayores condicionantes para la situación de pobreza extrema radica en precaria institucionalidad para atender las necesidades de la población. En este orden, si bien prevalecen situaciones violentas que por ende conlleven a la restricción en la movilidad

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	continúan ejerciendo dominio territorial, sino Entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) articularon sus intervenciones, logrando un mejoramiento notable de los indicadores sociales. Los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas que rondaban en 2014 el 35% para el área urbana y el 65% para las áreas rurales, han venido descendiendo sustancialmente por el impacto favorable que ha traído el fortalecimiento institucional y el acompañamiento, formulación y financiación de proyectos productivos que ha impartido el sector privado.	de marginalización de parte de las políticas que el Gobierno Central implementó como resultado de los acuerdos de La Habana. En zonas como Samoré y Cubará, todavía se percibe el descontento frente a la falta de resultados que dejaron las negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados. La situación de aislamiento económico e institucional y la precariedad económica sigue prevaleciendo. Los indicadores de pobreza extrema aún siguen posicionando a esta región como una de las más pobres del país. La escasez de proyectos productivos sostenibles mantiene la población en actividades económicas se sobrevivencia, y en situaciones de desnutrición en la población rural. El déficit de acceso a servicios públicos domiciliarios y agua potable suscitan reiteradamente manifestaciones de parte de las comunidades.	que posibilite a las instituciones públicas la atención de las necesidades de la población, el Gobierno Central ha dispuesto de gran cantidad de recursos para mitigar estas condiciones. Así pues, el plan de consolidación territorial y el CONPES de frontera, han sido dos de los instrumentos con los que el Estado ha incursionado en el territorio. Instituciones como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) articularon sus intervenciones, han robustecido sus funciones en el territorio y contrarrestado indicadores como la desnutrición o la mortalidad infantil.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
Conflicto de jurisdicciones entre gobierno central y resguardos Resguardo indígena importante (U'wa)	El cese del conflicto armado permitió que los niveles de diálogo entre el gobierno y las autoridades de todos los sectores indígenas que convergen en la región del Sarare aumentaran, garantizando el verdadero reconocimiento institucional de un Estado multicultural y pluriétnico y la implementación adecuada de las medidas del *Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales* o la *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. El mejoramiento del diálogo ha permitido el abordaje de las consultas previas con mayor facilidad. Con el beneficio de no tener a actores armados reivindicando los derechos culturales de las comunidades indígenas, se lograron capitalizar iniciativas de cooperación. La extracción de petróleo en la zona, por la que se habían antiguamente suscitado la mayoría de los conflictos, genero dinámicas productivas que involucraron las etnias locales, proporcionando más empleos directos e indirectos, compras locales y capacitaciones productivas. Entre tanto, las comunidades indígenas han ido fortaleciendo sus capacidades de autogestión, consolidando el liderazgo de sus líderes para formular políticas de desarrollo desde sus perspectivas tradicionales. Se impulsaron	El fin del conflicto armado de ninguna manera supuso la anuencia de las autoridades indígenas para la explotación de los recursos naturales de la región. La coerción que ejercieron particulares sobre los indígenas exacerbo el conflicto histórico entre el gobierno y los indígenas por el uso del suelo. Las consultas previas fueron utilizadas como instrumentos de presión en las relaciones cada vez más transaccionales con el sector extractivo. Las exigencias de comunidades indígenas afectadas no brindaron beneficios de largo plazo sus poblaciones. Las contribuciones socio-económicas de las empresas, como las transferencias del gobierno fueron dilapidadas sin apoyar inversiones sociales, educativas, productivas o de salud. El antagonismo entre la visión ancestral del "buen vivir" de los pueblos indígenas (la conservación del entorno natural para satisfacer necesidades básicas de vida) y los modelos de desarrollo impuestos por	Los actores subversivos continúan reivindicando de forma violenta algunos intereses de la población indígena, y presionándola para que usen la consulta previa como un mecanismo que trunque cualquier tipo de interés inversionista o actividad económica que se pretenda desarrollar. Sin embargo el Gobierno ha adelantado acercamientos con la comunidad U'wa para fortalecer los canales de diálogo y solucionar los conflictos existentes sobre la jurisdicción de territorios. Además de esto, dada la prevalencia del conflicto en la zona, la presencia de las ONG y la cooperación internacional ha sido mucho más activa, brindando a las comunidades herramientas para fomentar su liderazgo, autogestión y sustentabilidad. Las instituciones indígenas se fortalecieron, desarrollando e implementando en los resguardos Planes de Vida basados en los principios del Buen Vivir: 1. Vivir en paz y con control sobre los territorios y sus tierras como base espiritual y material de su existencia. 2. Respetar y cuidar a al medio ambiente que sufre cada día el impacto y los

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	programas productivos que permitieron la sustentabilidad económica y social de los resguardos. El fortalecimiento del conocimiento tradicional vigorizó instituciones como los mercados para el trueque, y preservo el modelo de agricultura tradicional (mejores semillas, mayor productividad) bajo el control cultural de iniciativas entrando a las comunidades indígenas. Los programas estatales de alimentos donados fueron eventualmente rechazados porque amenazaban la soberanía alimentaria, generando una dependencia económica nefasta.	políticas públicas del Estado permaneció.	daños generados por la humanidad. 3. Reconocer y valorar en pie de igualdad las identidades y culturas indígenas. 4. Participar en las decisiones sobre los asuntos que conciernen los pueblos indígenas. 5. Configurar libremente el modelo de administración adecuado a sus instituciones tradicionales.
Impacto ambiental por derrames de petróleo	Con el cese de acciones violentas de parte los grupos subversivos en contra de la infraestructura petrolera, los derrames de crudo disminuyeron significativamente. Además, el Gobierno Nacional y las empresas explotadoras de crudo crearon comisiones técnicas para dar una respuesta rápida y oportuna a las afectaciones ambientales sucedidas por fallas técnicas. Por tanto, las fuentes hídricas han logrado recuperarse. Esto significó incrementos productivos en actividades como la pesca y la agricultura que históricamente eran las mayores perjudicadas por el derrame de crudo. El apoyo	Pese al cese de hostilidades de parte de los grupos subversivos, aún persistieron las afectaciones a la industria petrolera generadas por la delincuencia común. La falta de oportunidades económicas de reinserción para los desmovilizados alimentó dinámicas extorsivas por parte de grupos criminales que siguen atentando a la infraestructura industrial del departamento. El conflicto de interés de comunidades locales, afectadas por los derrames de petróleo pero contratadas para los	Los derrames de petróleo provocados por acciones violentas de parte de grupos subversivos, ahora son generados por las prácticas de la delincuencia común que busca obtener beneficios económicos. Para mitigar esto, el Estado fomentó sinergias intersectoriales para la formulación de programas productivos de la región, impulsando proyectos productivos para contrarrestar la dependencia de las comunidades sobre la industria petrolera, exhortándolas a que

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	institucional y del sector privado a estas actividades económicas creo una dinámica de intereses compartidos entre las empresas extractivas (de petróleo o de minería) y la población. Residentes locales se convirtieron en custodios de los oleoductos para proteger la viabilidad de sus vocaciones productivas. Los afluentes hídricos cómo el Río Róyota y sus cuencas han empezado a recuperarse de la contaminación causada por los derrames de petróleo lo que dio tranquilidad a las comunidades sobre la potabilidad del agua que consumían.	labores de descontaminación, mantuvo una posición ambigua de los sarareños frente a los atentados. En este sentido, si bien los derrames de crudo han disminuido ostensiblemente, se mantiene la preocupación general sobre la contaminación de los afluentes hídricos de los que se abastece la comunidad de agua para consumo y uso en sus actividades económicas.	vuelquen su mano de obra hacia actividades agrícolas y pecuarias que dinamicen la economía de la región. Poco a poco ha logrado fortalecer la conciencia ambiental y generar alternativas laborales, disminuyendo los atentados.
Conflicto de jurisdicción con frontera de Venezuela y competencia por recursos del suelo	El fortalecimiento de la presencia estatal que surgió luego de la firma de los acuerdos de paz, permitió un mayor control de la frontera, y una recuperación de las instituciones locales, de ambos lados de la frontera. La penetración de gobiernos locales por grupos armados en Arauca y en el estado venezolano de Apure disminuyo, fomentando una mayor cooperación institucional y económica transfronteriza. Medidas para contrarrestar actividades como el tráfico de gasolina y bienes de consumo desde Venezuela a Colombia,	A pesar del acuerdo de paz, las dinámicas transfronterizas de contrabando (gasolina y mercancías desde Venezuela; drogas y armas desde Colombia) se mantuvieron. La falta de fortalecimiento del control y la supervisión de las fuerzas públicas en ambos lados de la frontera no permitió reducir las actividades ilegales. Los procesos de reinserción no brindaron oportunidades laborales atractivas para ex-guerrilleros. Las estructuras criminales, alimentadas por el rango de grupos armados desmovilizados, consolidaron su control sobre las instituciones regionales para seguir	La continuidad del conflicto implicó que el gobierno elaborara programas binacionales con los países donde se presumía que existía influencia de las organizaciones Subversivas. En este sentido, las relaciones con Venezuela, que se articularon con base en el respeto por la diferencia, esta vez trascendieron a la materialización de medidas de choque para contrarrestar las dinámicas ilegales que históricamente habían afectado a la región. A partir de ello, se ha evidenciado como la fuerza pública, tanto colombiana

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	o de armas y estupefacientes desde Colombia a Venezuela, se impusieron de manera más eficiente que en el pasado. La supervisión de la fuerza pública colombiana y venezolana en la frontera redujo las arbitrariedades en contra de la población fronteriza gracias a una mayor cooperación entre cancillerías.	aprovechando la bonanza económica de los varios tráficos transfronterizos.	como venezolana, han permanecido en la zona y han combatido conjuntamente la presencia de actores ilegales.
Ausencia del Estado y Servicios públicos	La precariedad institucional que caracterizaba a la región y que incluso servía de argumento para la lucha subversiva fue mitigada gracias a la labor que se propuso el gobierno nacional para impulsar la gobernabilidad en las regiones periféricas del país. En este sentido se volcaron recursos públicos en procura de atender las demandas institucionales de la población y por ello hoy día es más fácil acceder a servicios como los microcréditos y la ayuda técnica para la estructuración de proyectos productivos, incluso el acceso a las instituciones se hizo más fácil y benevolente para la población. Por otro lado, los servicios públicos domiciliarios, fundamentales para el desarrollo integral de las comunidades, han ido	La finalización del conflicto armado no trajo consigo la institucionalidad que anheló la población del Sarare durante muchos años. A pesar de ser una de las zonas de consolidación territorial, esta sólo se materializó con el incremento de fuerza pública. No se tuvo en cuenta que, más allá de un problema de orden público que afectara la seguridad de la población, prevalece un problema estructural que debe ser atendido con medidas políticas e institucionales que contrarresten métodos y reivindicaciones de grupos armados ilegales.	La presencia del Estado se vio fortalecida ante la continuidad del conflicto armado. El Departamento para la Prosperidad Social, la Cancillería, el Ministerio del Interior y sus dependencias, entre otros, volcaron sus funciones hacia la estructuración de un plan de desarrollo regional que contemplara la permanencia del conflicto y se pudiese adaptar a las coyunturas que generaba la presencia de Guerrillas en el Sarare. Además se priorizó en la ejecución de los programas establecidos en la política de consolidación territorial y el CONPES de fronteras, lo que ahondó en cantidad y calidad de iniciativas para el desarrollo regional. El gobierno empezó a combatir las causas estructurales de violencia y las cuales son esgrimidas por la subversión para afianzar su control territorial.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	ampliando su cobertura; las autoridades nacionales y municipales han formulado proyectos coherentes y sostenibles para mitigar, sobre todo, el déficit de agua potable que tiene la región. Entre tanto, la cobertura del servicio de energía se universalizó, pues las compañías prestadoras del servicio pudieron extender el tendido eléctrico con temor de enfrentar acciones violentas que afectasen su infraestructura.		

SUBREGION MAGDALENA MEDIO

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
Gran Acuerdo Social - Política de integración regional a largo plazo	En un escenario de fin del conflicto armado, el Magdalena Medio como región se fortaleció desde su dimensión institucional, y logró canalizar de manera adecuada los espacios y políticas de integración y desarrollo regional, aprovechando las ventajas comparativas de cada uno de los municipios, en virtud de los grandes proyectos de desarrollo que gravitan en la zona. En este sentido, el Gran Acuerdo Social como iniciativa de prospectiva de desarrollo y que inicialmente nació en torno del municipio de Barrancabermeja, se hizo extensivo a toda la región del Magdalena Medio. Adicionalmente, esta iniciativa fue complementada bajo un enfoque integral donde se articuló el crecimiento económico de la región con el desarrollo social. Esta iniciativa fue capaz de trascender las diferentes transiciones gubernamentales y se mantuvo el compromiso de todos los actores involucrados; el Gran Acuerdo Social fue actualizado periódicamente de acuerdo a la coyuntura, más su naturaleza como política pública de integración a largo plazo de la región.	A pesar del fin del conflicto armado sin la generación de condiciones de desarrollo, el Magdalena Medio no logra apropiar una política de integración regional a largo plazo. En este sentido, la visión y objetivos trazados en el marco del gran acuerdo social, se debilitaron y no lograron trascender a un escenario regional, y su implementación se limitó al municipio de Barrancabermeja. Adicionalmente, los nuevos gobernantes no dieron importancia a esta iniciativa y por tal motivo, con los cambios de gobierno sus principios fundacionales se tambalearon y fueron modificados. Esta situación profundizó la separación y desarticulación de los diferentes municipios de la región y por tanto impidió el aprovechamiento de las diferentes potencialidades de cada uno de manera articulada.	En un escenario de no terminación del fin del conflicto armado, pero con la presencia de condiciones de desarrollo, el Gran Acuerdo Social se fortaleció en la medida en que pudo hacerse extensivo a los demás municipios de la región. Sin embargo, su relevancia fue disminuyendo con el paso de los años pues los esfuerzos de los gobiernos locales en materia de política pública siguieron enfocados a temas únicamente relacionados con el conflicto armado, dejando de lado la necesidad de integrarse como región. Así, si bien mediante el Gran Acuerdo el Magdalena Medio alcanzó unos niveles de integración superiores a los que tenía en el 2014, estos no fueron plenamente aprovechados para la maximización de su potencial como región.
Diversidad de visiones de desarrollo	Una vez iniciada la transición hacia el fin del conflicto armado, desde el	El Magdalena Medio es una región compuesta por municipios pertenecientes	La región del Magdalena Medio adoptó, mediante un acuerdo regional y ante

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
según departamentos	gobierno central se dio más prelación a un enfoque de desarrollo endógeno y descentralizado, el cual fue muy bien acogido por la región, conllevando a la generación de procesos de integración entre las diferentes entidades territoriales del Magdalena Medio. Lo anterior mejoró la presencia institucional, al haber un acuerdo sobre los límites territoriales de la región y un consenso sobre el concepto de región. Así, como parte de los procesos de desarrollo de la región, el Magdalena Medio amplió la inversión en proyectos de infraestructura vial que permitieron una mejor comunicación entre los diferentes municipios que componen la región, aumentando su capacidad de integración. Se fortaleció la red de vías terciarias y secundarias, mejorando a la vez la articulación de los diferentes mercados locales, entre ellos y con el resto del país.	a seis departamentos distintos. Tradicionalmente ha sido una región fragmentada institucionalmente debido a la falta de un consenso sobre criterios de integración. Una vez se estableció el tránsito hacia la finalización del conflicto armado tras el logro de un acuerdo de paz, se presentó una agudización de los conflictos sociales y políticos de la región, hecho que contribuyó a profundizar la fragmentación del territorio, debido a la imposibilidad de generar acuerdos entre todas las instancias en materia de desarrollo regional y ordenamiento territorial. En este sentido, y ante la ausencia de consensos entre las administraciones locales, se generó una competencia entre los municipios por los recursos para el financiamiento de sus propios procesos de desarrollo, sin contar con una visión articulada de desarrollo regional. Adicionalmente contribuyó a aumentar las disparidades entre los diferentes municipios, los cuales poco a poco fueron rezagados ante el	el fracaso de los acuerdos de paz, un enfoque propio de desarrollo endógeno que se encargó de articular las visiones de los diferentes entes territoriales que componen la región. Esto tuvo lugar tras muchos años de desacuerdo y debilidades de la gestión debido a la ausencia de un concepto y una visión conjunta de lo que era el Magdalena Medio. Este modelo fue concebido de manera autónoma, sin mayor influencia del gobierno central, quien centró toda su gestión en políticas públicas adecuadas a la contención del conflicto armado. A pesar de la ausencia de respaldo de parte del gobierno nacional, los municipios de la región supieron generar un proceso propio de integración que, aunque al margen de los lineamientos nacionales, les ha permitido mejorar la gestión de los asuntos críticos de la región tales como la infraestructura vial y la atención conjunta de problemáticas sociales. El Magdalena Medio acabó generando un modelo de integración regional para el país, el cual además fue

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	De igual forma la región encontró la manera de aprovechar los procesos de crecimiento y desarrollo de sus mayores centros urbanos, que poco a poco fue integrando a los diferentes municipios a sus dinámicas, con el fin de democratizar los beneficios de este crecimiento entre todos los municipios de la región.	crecimiento económico de Barrancabermeja, como ciudad principal de la región.	logrado de manera autónoma.
Biodiversidad y la minería - rol del Estado	Con la finalización del conflicto armado, y la mejora de las condiciones de desarrollo, el país en general amplificó su conciencia ambiental en torno a la protección del Medio Ambiente y un aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Así, el Estado no solo endureció sus normativas en lo referente a los sectores extractivos, especialmente la minería, sino que también reforzó sus mecanismos de cumplimiento de las mismas en los entornos. Así, el Magdalena Medio logró conservar su biodiversidad, mediante la implementación de proyectos de reforestación y protección de especies en vía de extinción. Así mismo, en la región se desarrollaron importantes procesos educativos frente al cuidado del medio ambiente. Todos los municipios de la región vieron avances hacia la implementación exitosa de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y se consolidó un esquema	A pesar de la terminación del conflicto armado, el Gobierno nacional no logra la consolidación de un modelo exitoso de desarrollo para las regiones. Así, el sector minero energético sigue siendo la principal locomotora del Estado, pero este no se encargó de regularlo de manera tal que sus actividades no impactaran el medio ambiente y los ecosistemas locales. Así, el Gobierno decidió seguir dando prioridad a las concesiones mineras pactadas con particulares y estas se desarrollaron en condiciones desfavorables para la biodiversidad, ocasionando contaminación y desequilibrios ambientales irreversibles. Adicionalmente, y como consecuencia de lo anterior surgieron nuevos focos de conflictividad y la riqueza obtenida producto de dicha actividad, no fue gestionada adecuadamente de modo tal que compensara o reparara el daño ambiental ocasionado.	A pesar de la continuidad del conflicto armado, y gracias a una creciente conciencia ambiental en las comunidades derivada de tendencias globales, el Estado se encargó de fortalecer los controles ambientales a la actividad extractiva, especialmente la minería, para favorecer y proteger la biodiversidad de la región. Adicionalmente, la no terminación del conflicto armado como consecuencia de los fallidos procesos de negociación de La Habana, consolidó a presencia de grupos armados ilegales en la región, lo que impidió una explotación a gran escala de recursos naturales como el carbón, el coltán entre otros. No obstante, esta situación favoreció en cierto grado la explotación ilegal del oro, especialmente en municipios del sur de Bolívar, donde hay alta presencia de grupos armados ilegales.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	regional de manejo de residuos sólidos.		
M Medio como eje de integración regional (río y vías)	El Magdalena Medio como región tomó conciencia de su potencial como zona geográfica estratégica para el país. En este sentido la región implementó y aprovechó iniciativas que le permitan explotar esta posición tales como la de la construcción e implementación de la Plataforma Logística Multimodal, la cual permitió el pleno aprovechamiento de la navegación del río Magdalena como ruta de integración con Venezuela y el Pacífico, con Cartagena y Barranquilla, y con Buenaventura. Gracias a esto, la economía de la región se dinamizó debido a la facilidad en el acceso a nuevos mercados internos y externos que permitieron a los productores locales ampliar su oferta. Así mismo, Barrancabermeja se consolidó como el gran centro urbano de la región, cuyas dinámicas fueron trasladándose a los demás municipios que la componen, gracias a la facilidad de comunicación entre uno y otro.	El Magdalena Medio no supo incorporar adecuadamente las iniciativas de desarrollo asociadas al aprovechamiento de su posición estratégica para la conexión del país. En gran medida, esto se debe a que estas iniciativas no fueron planeadas mediante procesos participativos que permitieran que los habitantes de la región las aprehendieran como parte fundamental de su desarrollo. En este sentido, la oferta educativa de los municipios de la región no se orientó a la preparación de profesionales para su vinculación a iniciativas como la de la Plataforma Logística Multimodal, por lo que cuando está llegó a la región, su impacto en la mejora de las condiciones de la población fue mínimo. Finalmente, esta situación contribuyó a acentuar la fragmentación de los municipios que componen la región, quienes no encontraron un objetivo común en materia de desarrollo económico.	Al Magdalena Medio llegaron iniciativas planteadas desde el nivel central que buscaban aprovechar su posición geográfica estratégica para la integración del país, las cuales fueron acogidas positivamente por la población. Lo anterior permitió que los habitantes de los diferentes municipios contaran con mejores condiciones para la comercialización de sus productos a diferentes mercados, y se propició la llegada de nuevos sectores económicos a la región. Sin embargo, la permanencia del conflicto armado ante las fallidas negociaciones de paz que tuvieron lugar a partir del año 2012, dieron lugar a un recrudecimiento del enfrentamiento entre Grupos Armados Ilegales por el control del territorio, especialmente de los bloques 20,29 y 33 de las FARC, que a pesar de tener una presencia limitada e intermitente intentaron recuperar parte del control territorial que tenían en la zona en los años 80. Esta situación impidió el pleno aprovechamiento del proyecto de navegabilidad

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
			del río Magdalena y generó situaciones de extorsiones a comerciantes y productores de la zona.
Pertinencia del modelo actual educativo y necesidad de armonizarlo con la región	Una vez terminado el conflicto armado, y en el marco de un proceso de posconflicto, la región del Magdalena Medio aprovechó la oportunidad de la coyuntura para ajustar el modelo educativo que venía implementando, de modo tal que permitiera aprovechar plenamente los nuevos procesos de desarrollo que empezaban para la región. Así, no solo la educación como elemento movilizador del desarrollo cobró especial importancia dentro de la agenda de la política pública de la región, sino que todos los municipios incorporaron en sus planes de desarrollo la consolidación modelos educativos integrales, articulados con otras políticas sociales que permitieron favorecer la inserción en el mercado laboral a la población más pobre. De igual forma la región logró fortalecer la Universidad Regional y mejorar considerablemente la calidad de educación superior, contribuyendo a la retención de talentos locales.	A pesar del fin del conflicto armado, el Magdalena Medio no supo aprovechar el contexto para ajustar su modelo educativo bajo un enfoque regional e integral que permitiera preparar a las nuevas generaciones para los procesos de la región. En este sentido, las autoridades nacionales y municipales presentaron deficiencias en la planeación de los procesos de educación y no lograron articular los currículos con las necesidades reales de la región. Así, el Magdalena Medio incrementó el número de jóvenes formados en temas relación con la industria extractiva, al mismo tiempo que aumentó sus índices de informalidad y migración de población joven hacia el centro del país en búsqueda de oportunidades.	Tras los fracasos de las negociaciones sobre el fin del conflicto en La Habana en el 2014, la región del Magdalena Medio logró aprovechar las potencialidades de iniciativas regionales tales como el Gran Acuerdo Social, para la consolidación de un modelo educativo integral y ampliado a toda la región. Así, la región logró formar y dotar a su población, especialmente a la población joven, de capacidades y competencias suficientes para aprovechar los grandes proyectos de desarrollo que llegaron a la región.
Integración de la región en la representación política	La terminación del conflicto armado trajo consigo una transformación profunda del sistema electoral colombiano y la concepción de representación política que se tenía tradicionalmente. Estos cambios favorecieron la	Con la terminación del conflicto armado se abrió la posibilidad de reforma del sistema electoral y los modelos tradicionales de representación. Sin embargo, esta terminación no contribuyó al fortalecimiento de la	La no finalización del conflicto armado truncó las esperanzas locales de contar con un sistema electoral más representativo e incluyente de las necesidades regionales

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	consolidación de formas mucho más elaboradas de integración regional, y aprovechando el marco normativo de ordenamiento territorial. Al mismo tiempo, la población logró obtener mayor conciencia de la necesidad de contar con buenos representantes en los niveles gubernamentales centrales y consiguió presentar posiciones articuladas, bajo un enfoque de región en el congreso, contribuyendo a la formulación de políticas públicas favorables para el Magdalena Medio.	gobernabilidad a nivel nacional y por ende tampoco a nivel regional. En este sentido, la región del Magdalena Medio siguió siendo un imaginario, y fue imposible avanzar hacia la construcción de sistemas asociativos entre los diferentes municipios que lo componente. En este sentido, prevalecieron las diferencias e intereses políticos por mantener los municipios dependientes de las cabeceras departamentales y se truncó la posibilidad de mejorar la formulación de políticas públicas ajustadas a las necesidades de la población.	Así, si bien el sistema como tal no tuvo modificaciones en el nivel político, en la región los sectores sociales y productivos en la región, se encargaron de abrir nuevos canales de diálogo con el fin de poder orientar de la mejor manera los procesos de desarrollo que tuvieron lugar. En este sentido, y a pesar de la falta de integración regional en cuanto a representación política, sí se logró la integración de los diferentes actores con presencia en la región tales como organizaciones sociales, campesinos, empresas, entre otros, lo que terminó favoreciendo la integración política de la región.
Capacidad local de respuesta al desarrollo: desempleo, emprendimiento e ingresos	La región del Magdalena Medio aprovechó de manera adecuada las diferentes iniciativas formuladas desde los distintos niveles de gobierno, y se preparó para acoger nuevas dinámicas de desarrollo de la región. Adicionalmente, y como consecuencia del establecimiento de los acuerdos de terminación del conflicto armado, derivados del fin exitoso de las negociaciones iniciadas en 2012, las diferentes instituciones del Estado lograron articular su oferta en temas que trascendieran la atención	El Magdalena Medio fue objeto de muchas iniciativas de desarrollo que no lograron ser apropiadas adecuadamente debido a la falta de preparación de sus dirigentes, y que conllevaron a la salida de algunas industrias de la región, ante las posibilidades de invertir en otras zonas más atractivas, y al fracaso de grandes macro proyectos de infraestructura. Esta situación contribuyó a la agudización de las tasas de desempleo en la región, pues la disminución de la	La región del Magdalena Medio fue testigo de cómo en los últimos años diferentes industrias fueron aumentando su presencia en la zona, con el fin de explotar las potencialidades existentes en materia de recursos naturales. Si bien esta situación generó mayor demanda de trabajadores locales, estos no se encontraban muy preparados para asumir este tipo de trabajos. Lo anterior se explica en que, gracias a la imposibilidad de finalizar el conflicto armado mediante un acuerdo negociado, el

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	del conflicto, tales como la educación. De igual forma, lo anterior fue fundamental para que en la región se lograra la presencia permanente de la institucionalidad pública que se encargó de prestar asistencia técnica, tecnológica y financiera para que las empresas de la región generaran empleos sostenibles, a los que se pudieran vincular los habitantes, quienes contaban con la formación adecuada para acceder a estos. En este sentido, la región implementó proyectos de gran impacto regional que lograron movilizar y mejorar los índices de empleo en la región, aunado a lo anterior en el marco de los procesos de definición de políticas públicas regionales, se establece como prioritario desarrollar programas de Generación de Ingresos y apoyo a iniciativas productivas y la innovación como aspectos determinantes en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.	presencia de la industria extractiva, dejó a una generación entera formada en aspectos técnicos, sin la posibilidad de vincularse a proyectos. Adicionalmente, ante la finalización del conflicto armado, la atomización de las estructuras guerrilleras, y la ausencia de oportunidades laborales, se incrementaron de manera casi que inmediata los índices de delincuencia común y seguridad ciudadana. No obstante, y ante la incapacidad de generar procesos de desarrollo, la región siguió supeditada a la dependencia de las actividades extractivas, que limitó la diversificación en materia de formación para el empleo. En este sentido, no se desarrollaron programas alternativos para buscar la inserción laboral en otros sectores de la economía, generando desempleo en la región. La falta de pertinencia de los programas de generación de ingresos y el sistema de intervención de los mismos a través de operadores trivializaron la efectividad dichos programas. Así mismo, la falta de programas de reinserción a la vida civil de los combatientes desmovilizados, generaron difíciles problemáticas sociales, a raíz de la falta de	Estado se vio en la necesidad de volver a centrar sus políticas públicas en el tema de seguridad y contención del conflicto, dejando a un lado el tema de educación y generación de empleo. Por tanto, y ante la imposibilidad de encontrar gente capacitada en la región, se aumentaron considerablemente los flujos migratorios hacia la región, que de igual forma contribuyeron al aumento de los índices de inseguridad y delincuencia común.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
		oportunidades laborales y de generación de ingresos, en consecuencia aumentando los niveles de delincuencia e inseguridad ciudadana en la región.	
Sistema hídrico, actividad pesquera y cambio climático	La región del Magdalena Medio acordó aprovechar su potencial en recursos naturales no renovables mediante la explotación de recursos minero-energéticos tales como carbón, coltán, níquel y petróleo. Adicionalmente se incrementó la extracción de recursos forestales, integrando la producción maderera a mercados nacionales e internacionales. Esta situación impactó de manera considerable el manejo del Río Magdalena pues aumentó el vertimiento de desechos y residuos, contribuyendo a su contaminación y a la generación de erosión en zonas contiguas y afectando la actividad pesquera. Sin embargo, tras la finalización del conflicto armado, la sociedad incrementó la presión por el endurecimiento de las normas de protección del medio ambiente y la explotación responsable. Lo anterior conllevó al incremento de las	Una vez finalizado el conflicto armado, la atención de las grandes industrias extractivas se centró en otras regiones del país donde antes, por la presencia y control de los grupos armados ilegales, no podían operar. Lo anterior conllevó a que el Magdalena Medio perdiera interés para la industria minero-energética, incidiendo en la reducción de la intensidad de las actividades en la región, y con ello los impactos sobre el medio ambiente se redujeron. Como consecuencia de la apertura de la agenda pública a otros temas de interés para la población, la región del Magdalena Medio fue formando poco a poco una conciencia ambiental que contribuyó al endurecimiento de la normatividad y el incremento de los movimientos civiles, haciendo incluso más difícil la llegada de nuevas actividades de explotación de sus recursos naturales. Adicionalmente, la finalización de las expresiones armadas del conflicto hizo consciente a la región de su deficiente	El aprovechamiento del potencial regional en materia de recursos naturales contribuyó a aumentar la presencia de industrias extractivas como la del petróleo, el carbón, el níquel, el coltán, la madera, entre otras, apoyadas por la fuerza pública. Esto incrementó los impactos y afectaciones negativas generadas al medio ambiente y al río Magdalena, debido a la inadecuada disposición de desechos y vertimientos y la deficiente atención de las autoridades locales. La normatividad ambiental no ha tenido cambios significativos que permitan robustecer el esquema de protección del medio ambiente basado en seguimiento de las autoridades, debido a que la permanencia del conflicto ha copado la agenda pública. Lo anterior ha impedido destrabar el choque de intereses entre las

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	demandas sobre el gobierno nacional, departamental y sobre las mismas empresas presentes en la región por el aumento de las áreas protegidas y mayores sanciones ante impactos generados. También se realizaron esfuerzos institucionales y presupuestales para la atención del sistema hídrico. En relación con la actividad pesquera, el Magdalena Medio desarrolló oportunidades para las familias que dependen de la pesca artesanal, mediante la creación de esquemas asociativos.	preparación para enfrentar los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, y si bien algunos proyectos como el de navegabilidad del río Magdalena generaron crecimiento económico para ciertos sectores, la población asentada sobre el margen del río, no obtuvo ningún tipo de desarrollo. En este sentido, la actividad pesquera fue monopolizada y las familias que vivían de la pesca artesanal no mejoraron en sus condiciones de vida.	diferentes industrias tales como la ganadera y la extractiva frente a asuntos relacionados a la descarga a fuentes de agua y mecanismos de producción limpia, impidiendo a la vez la disminución y efectiva atención a los impactos medioambientales derivados de sus actividades.
Narcotráfico, microtráfico, bandas emergentes y disputas territoriales	Con el inicio del proceso de finalización del conflicto armado, gracias a los resultados de la negociación establecida en 2012 por el gobierno nacional, en el Magdalena Medio hubo una atenuación del accionar de estructuras guerrilleras que aún tenían presencia en su zona de influencia. No obstante, este desmonte significó en gran medida la atomización de estas estructuras en agrupaciones criminales sin control en la región, y el crecimiento desordenado de asentamientos en las riberas del Río Magdalena.	Una vez iniciado el proceso de finalización del conflicto armado, la región del Magdalena Medio se convirtió en la retaguardia estratégica de los grupos criminales, conocidos como BACRIM y la delincuencia común. Lo anterior, se explica en el anterior proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, que derivó en la descentralización de estas estructuras, que se asentaron en la región, valiéndose de su aislamiento institucional como ventaja para desarrollar sus actividades criminales.	La no finalización del conflicto armado, como consecuencia del fracaso de las negociaciones de paz establecidas en 2012 y el incremento de las disidencias al interior de sus partes, conllevó al afianzamiento de los grupos armados ilegales en la región del Magdalena Medio, quienes, ante la imposibilidad de una salida negociada, buscaron consolidar su control territorial. A pesar de que la región atravesó un proceso de crecimiento económico derivado del incremento

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	Adicionalmente, y gracias al aprovechamiento de las iniciativas de desarrollo regional que permitieron aprovechar los potenciales de recursos naturales y posición geoestratégica, la región mejoró su infraestructura vial, logró avanzar en la navegabilidad del río Magdalena y se convirtió en un foco de conexión del país hacia adentro y hacia afuera. Esta situación, lejos de desincentivar la presencia de grupos criminales, así como la continuación de actividades de narcotráfico, incentivó la presencia de grupos de delincuencia común que aprovecharon el desarrollo de infraestructura y de condiciones de movilidad para acceder a mejores mercados para el microtráfico de estupefacientes. En este sentido, y si bien las industrias llegaron a la región, han tenido que compartir vías de acceso y movilización con el narcotráfico.	De igual forma, y teniendo en cuenta que esta región no supo aprovechar las oportunidades de desarrollo formuladas desde el gobierno central, tales como la Plataforma Logística Multimodal y otros macro proyectos, no se realizaron esfuerzos para el mejoramiento de la infraestructura vial ni la conectividad de la región con el resto del país. Esta situación contribuyó a que los grupos criminales encontraran en los pequeños municipios de la región un refugio desde el cual seguir delinquiendo sin mayores consecuencias, utilizando las rutas tradicionales para el tráfico de drogas sin mayores implicaciones, en el contexto de un Estado que no supo aprovechar el proceso de transición hacia el post-conflicto.	de la presencia de la industria, como parte de un modelo de desarrollo para la región, la persistencia del conflicto incidió en el afianzamiento de dinámicas como el narcotráfico que impidieron procesos de desarrollo integral. Esta situación impactó la construcción de confianza entre la población y el optimismo por la reconstrucción del tejido social entre la población. Adicionalmente, las actividades de las industrias presentes en la región se vieron afectadas por constantes extorsiones y vacunas para su desarrollo. Ante esta situación, el Gobierno Nacional incrementó los controles en materia de orden público y aplicó, mediante esfuerzos de consolidación militar de soberanía, las políticas de desarrollo impuestas sobre la región desde el centro del país. Los indicadores económicos macro mejoraron, al costo

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
			del desarrollo de las vocaciones regionales.
Desarrollo de competencias y liderazgo en función del potencial de la región	La región del Magdalena Medio ha tenido históricamente una fuerte participación ciudadana y activismo social, debido a que ha sido objeto de programas y proyectos de paz, financiados por la cooperación internacional desde hace varias décadas. Ante la transición hacia la finalización del conflicto armado, con la firma de un acuerdo de paz, la región se consolidó como un ejemplo de iniciativas de reparación del tejido social y fomento de la participación ciudadana, en un escenario de posconflicto. En respuesta a esto, en la región se consolidaron programas de fomento de competencias y liderazgo, donde las organizaciones sociales se vieron empoderadas frente a los actores que tradicionalmente impedían el efectivo ejercicio de la participación y el control social, por lo que consolidaron su posicionamiento como	Una vez finalizado el conflicto, el país atravesó un proceso de fortalecimiento e impulso a los procesos de participación ciudadana y activismo social, mediante el desarrollo de competencias que permitieran orientar estas iniciativas. Sin embargo, estos procesos fueron focalizados desde el gobierno central en aquellos territorios donde las FARC y el ELN tenían fuerte presencia, no siendo el Magdalena Medio uno de estos. Por lo anterior, todo el conocimiento construido en la región a través de la presencia histórica de programas y proyectos de paz, derivados de la situación de posconflicto que atravesó la región luego de la desmovilización de los paramilitares, fue descartado y las buenas prácticas no fueron aprovechadas por las distintas regiones del país. Lo anterior contribuyó a la agudización de las críticas de parte de las organizaciones sociales de base a los gobiernos	A pesar del fracaso de las negociaciones de paz iniciadas en el año 2012, la región del Magdalena Medio atrajo a grandes industrias que optaron por invertir en una región donde la presencia de las guerrillas no era tan fuerte y había un resurgimiento de la actividad paramilitar. Lo anterior intensificó los procesos de activismo social y sindical de parte de organizaciones sociales de base y sindicales, que abogaron por la implementación de procesos de desarrollo de competencias que permitieran aprovechar las potencialidades de la región, así como de modelos de gestión responsables con el medio ambiente y los entornos que incluyeran, cada vez más, las demandas de la población en materia de empleo, adquisición local de bienes y servicios, y aportes al desarrollo. Estos procesos no contaron con el respaldo de la institucionalidad

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	actores fundamentales del desarrollo de la región. Como resultado de esto se fortalecieron en la región los escenarios de planeación participativa, logrando que las discusiones y toma de decisiones sobre el desarrollo contaran con la participación y legitimación de diferentes sectores sociales.	locales y demás actores políticos y empresariales, ante la ausencia de condiciones de desarrollo de la región, y a la poca atención prestada a estas reivindicaciones de parte de las administraciones locales, que no contaban con las capacidades necesarias para el fortalecimiento de la participación ciudadana y su incidencia en la gestión de lo público.	municipal, departamental o nacional, pues ante el recrudecimiento de la confrontación armada, los conflictos sociales pasaron a ser vistos como amenazas, y no como oportunidades de construcción de consensos entre la población.
Depresión de agroindustria y oportunidades para unidades agrícolas	Con la culminación exitosa de las negociaciones de La Habana en el 2014 y la consecuente terminación del conflicto armado, el Estado impulsó la formulación de políticas y procesos que permitieran la recuperación de la agroindustria y el fortalecimiento de las unidades agrícolas en las diferentes regiones. Así, el Magdalena Medio logró implementar proyectos de recuperación de su debilitada agroindustria, que permitieron el crecimiento económico de la región, al no concentrarlo únicamente en el sector extractivo, al mismo tiempo que se mejoraron las condiciones de vida de la población.	El Magdalena Medio, a pesar de la terminación del conflicto armado, no logró consolidar procesos de desarrollo que contribuyeran al crecimiento económico y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. En este sentido, y bajo el impulso del Estado, la región siguió enfocada a la implementación de proyectos para la agroindustria enfocados a los monocultivos, tales como la palma y el caucho, cuyo objetivo principal era la producción por parte de empresas multinacionales. Así, el Magdalena Medio fue testigo de la profundización de la depresión de su sector agroindustrial, no solo	A pesar de la no terminación del conflicto armado, el Magdalena Medio logró aprovechar los diferentes procesos de desarrollo que se proyectaron en todos los niveles de gobierno para la región. Uno de los más importantes fue el de la potencialización de la agroindustria, fortaleciendo un esquema de producción en pequeña escala por minifundios. Así, la dependencia del sector extractivo y de producción por monocultivos disminuyó y la región dio pasos importantes hacia la recuperación de la profunda depresión agroindustrial por la que atravesaba. No obstante, y como consecuencia de la permanencia del conflicto armado, este modelo de producción por minifundios no pudo articularse con otros mercados del país, pues la presencia de grupos armados ilegales dificultó la conectividad de las regiones entre sí.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	Estos proyectos se concentraron en la consolidación de modelo de producción del agro basados en el minifundio, donde los pequeños campesinos tuvieron la oportunidad de asociarse para la comercialización de sus distintos productos. Adicionalmente, la región logró generar las capacidades de aprovechamiento de la tecnología que trajo consigo la industria extractiva para la transformación de la agricultura en alimentos, que contribuyan a la sostenibilidad alimentaria de la región.	estancando el desarrollo económico sino también agudizando las problemáticas sociales asociadas a esta. Adicionalmente, la región empezó a dar señales de crisis de abastecimiento, pues al no tener una industria del agro lo suficientemente robusta, su dependencia de alimentos traídos desde otras partes del país tendió a aumentar.	
Debilidad en procesos de transformación productiva, desarrollo endógeno y diversificación	Tras la terminación del conflicto armado, el país logró reorientar su modelo de desarrollo, trascendiendo la mirada exclusiva a la industria extractiva, y generando iniciativas que permitieran la diversificación de las economías de las diferentes regiones del país. Así, el Magdalena Medio consolidó un modelo propio de desarrollo, compartido	A pesar de la finalización del conflicto armado, el Magdalena Medio siguió siendo percibido por el Estado central como una región cuyo potencial estaba enfocado únicamente a la industria extractiva. En este sentido, la región desaprovechó las oportunidades de articular un modelo de desarrollo propio, ajustado a sus necesidades y percepciones, sino que siguió acogiéndose a las directrices e imposiciones del gobierno central. Esta situación contribuyó a la profundización de	Las negociaciones para finalizar el conflicto armado no culminaron exitosamente y aunque las repercusiones para el país y las regiones fueron grandes, aun así se logró la consolidación de un modelo de desarrollo distinto al que se había venido implementando. En este sentido, la región logró armonizar la política de desarrollo extractivo con tímidos esfuerzos para impulsar el desarrollo agroindustrial, los cuales se vieron en alguna medida entorpecidos por la permanencia de estructuras armadas ilegales en los territorios.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	por todos los municipios que la componen, donde se le dio prioridad al fortalecimiento de otros sectores productivos más allá de las industrias del petróleo y la minería. Este modelo permitió aprovechar de mejor manera los beneficios del crecimiento económico, los cuales se transformaron en reales mejoras de las condiciones de vida de la población.	problemáticas sociales, tales como la ausencia de una seguridad alimentaria, la informalidad y la fuga de población económicamente activa en búsqueda de oportunidades de inclusión.	
Desarrollo del M Medio en ciencia y tecnología	Tras la finalización del conflicto armado, el presupuesto nacional fue redistribuido pues la necesidad de inversión en el sector defensa era menor. Así, tanto a nivel nacional como regional, y atendiendo las nuevas tendencias globales, se incrementaron los montos correspondientes a la ciencia y la tecnología. Esta situación permitió la implementación de programas y proyectos más ambiciosos en materia de ciencia y tecnología que permitieron la generación de valor agregado mediante el aumento de la productividad, el trabajo especializado y la innovación. Así, la región se volvió altamente competitiva y productiva en términos económicos y aumentó sus índices de generación de empleo, logrando a la vez	A pesar de la finalización del conflicto armado, y a pesar de la disminución de la inversión pública en el sector defensa, la región no supo aprovechar estos nuevos recursos disponibles para potenciar la ciencia y la tecnología. En este sentido, el Magdalena Medio, en lugar de enfocar sus esfuerzos en implementación de programas que permitieran innovar y aumentar la competitividad de la región, siguió estancada en los enfoques tradicionales, y apalancada en el conocimiento de otras regiones del país, especialmente de la capital. Así, la población no se preparó adecuadamente ni desarrolló sus competencias para poder aprovechar y maximizar las ventajas que los nuevos procesos de desarrollo traían consigo. En	La no finalización del conflicto armado, tras el fracaso de los procesos de paz de La Habana en el 2014, el Estado colombiano se vio en la necesidad de enfocar todos sus esfuerzos y recursos en la salida armada al conflicto. Por tal motivo, el presupuesto destinado al sector defensa incrementó aún más, en detrimento de los montos invertidos en ciencia y tecnología. Así, la región del Magdalena Medio no logró implementar programas y proyectos que permitieran el desarrollo de procesos de innovación para un pleno aprovechamiento de las iniciativas de desarrollo establecidas para la región. Esta situación implicó que si bien se produjo crecimiento económico, este no se tradujo en beneficios

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	retener a la población económicamente activa, que ahora contaba con competencias y capacidades de vincularse a las nuevas industrias.	consecuencia, estos nuevos proyectos no tuvieron el impacto que se esperaba y no contribuyeron a la mejora de las condiciones de la región.	tangibles para la población. Así, la región no fue exitosa en crearen sus habitantes las capacidades necesarias para vincularse a los proyectos que llegaron, por lo que se incrementó la llegada de población foránea y se profundizó la dependencia de la región de la tecnología de otras partes del país, especialmente la capital.
Alta dependencia de actividades del sector extractivo **Influencia del sector extractivo minero-energético**	Durante años se consideró al Magdalena Medio como el corazón de la actividad petrolera del país, debido al gran desarrollo que durante la década de los 80 y 90 tuvo la región, especialmente en zonas como Barrancabermeja, Puerto Boyacá y Puerto Triunfo. Sin embargo, con el decrecimiento de los índices de producción, y la finalización del conflicto armado, la industria petrolera fue intensificando sus actividades en otras zonas donde antes era impensable operar de manera efectiva, tales como el Vichada, Arauca y Putumayo. Esta situación de "salida" de la industria de la región, dio paso al fortalecimiento de otras industrias extractivas tales como el oro, el carbón, el níquel, el coltán e incluso la madera,	Con la firma de los acuerdos de paz, derivados de las negociaciones iniciadas en el año 2012, la industria petrolera tuvo la oportunidad de explorar otros territorios del país donde la presencia guerrillera hacía imposible la operación. Las actividades exploratorias fueron exitosas y la atención se enfocó en estas nuevas regiones. Esta situación, sumada a la madurez de las facilidades petroleras existentes en el Magdalena Medio, contribuyó a un decaimiento de la economía regional, redundando en el incremento de los índices de desempleo, pobreza y desigualdad. De igual forma, la región no supo explotar	El fracaso de las negociaciones de paz derivó en un escalamiento de las confrontaciones armadas en aquellas zonas de control histórico territorial por parte de grupos guerrilleros incluyendo disputas territoriales entre los grupos armados ilegales. Esta situación impidió la incursión de la industria petrolera en nuevos territorios, debido a los constantes ataques a la infraestructura que afectaban de manera considerable sus metas de producción. Por tal motivo, las grandes empresas petroleras decidieron implementar procesos de mejoramiento tecnológico de la recuperación de crudo (fracking) que les permitiera aprovechar las

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del Conflicto Armado
	que se encargaron de jalonar el proceso de desarrollo del Magdalena Medio. Poco a poco, la región perdió el título de corazón de la actividad petrolera del país, pero ganó la posibilidad de aprovechar todo su potencial, mediante la generación de dinámicas incluyentes en todo el territorio	adecuadamente su riqueza en recursos naturales, ni su posición geoestratégica, por lo que la región entró en un letargo que impidió tanto el crecimiento económico, como el mejoramiento de la condiciones de vida de la población.	facilidades existentes y darles un nuevo impulso. Lo anterior implicó, si bien no necesariamente el aumento de la industria en la región, sí su consolidación en la misma y al aumento de sus ingresos, contribuyendo al mismo tiempo a la cristalización de la creencia de que la región seguía siendo el corazón de la industria petrolera, con metas de producción mayores, pero basadas en tecnologías de alto riesgo ambiental.
Firma de acuerdos de la Habana (oportunidad)	La firma del acuerdo de paz en la Habana como hito fundamental de la terminación del conflicto armado, abrió las posibilidades a la región de poner nuevos temas en la agenda, ampliar y robustecer los procesos de participación social y de aprovechar las lecciones aprendidas de la desmovilización de los paramilitares en el pasado al servicio de la convivencia en la región. Así, los niveles del Estado fueron más eficientes para la atención de las necesidades de sectores que tradicionalmente habían sido marginados, especialmente el sector rural y se logró una articulación integral de la región. Y se abre un nuevo camino de desarrollo y convivencia para la región, como resultado del mismo el Estado interviene sectores comúnmente marginados, especialmente el sector rural.	En el 2014 se logró firmar los acuerdos de La Habana para marcar el fin del conflicto armado; sin embargo, el Magdalena Medio no supo aprovechar la posibilidad que este contexto le presentaba a nivel regional. Así, la región se quedó enfrascada en discusiones que tradicionalmente han truncado el desarrollo de la región, en lugar de promover la preparación de la población para aprovechar las diferentes iniciativas que se proyectaron para la región. Adicionalmente, y ante el temor de que se repitieran los errores del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, la población rechazó las iniciativas de participación social y no fue incluyente con las personas que se reintegraron a la sociedad, profundizando las divisiones entre municipios y especialmente aquellas con trasfondo ideológico.	Se agudiza el conflicto en la región, El Tras el fracaso de las negociaciones de La Habana en el 2014 y la no finalización del conflicto armado, el Magdalena Medio adopta una visión pesimista del futuro, a pesar de que el Estado y los gobiernos locales logran dar continuidad a los procesos de desarrollo de la región. Este pesimismo se explica en la profundización de las problemáticas sociales como consecuencia de un crecimiento económico que no estuvo acompañado por políticas sociales que permitieran asumir adecuadamente sus impactos. Así, la participación social fue débil y la sociedad perdió interés en participar de los temas que copaban la agenda pública, pues al estar limitados principalmente al conflicto armado, excluían sus verdaderas preocupaciones.

SUBREGION META

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
Conflicto entre concepciones de desarrollo	El ingreso de las actividades económicas estuvo acompañado de una acción institucional y una conciencia de sostenibilidad, lo que condujo a un diálogo efectivo entre actores receptores y nuevos actores, procurando y logrando notables avances al conciliar las visiones del desarrollo y establecer salvaguardas para su coexistencia o para la aceptación progresiva de nuevas formas de producción, que a su turno han significado nuevos hábitos de vida • Los planes de vida fueron de gran relevancia a la hora de construir los Planes de Desarrollo. Las comunidades indígenas partían de la pauta que "*no solo ellos están obligados a saber cómo pensamos nosotros, sino nosotros a saber cómo piensan ellos"*. • La asociatividad fue uno de los principales problemas tratados, buscando además generar sentido de pertenencia. • Por medio del CONPES de la Altillanura se fomentó el desarrollo una considerable parte de la infraestructura vial,	Se "impuso" una visión de desarrollo sobre la otra, debido a la masiva y arrolladora incursión de capitales y personas sin conciencia de interculturalidad e inclusión de los habitantes receptores del territorio. De esta manera se constituyó una nueva fuente de conflicto deteriorando las condiciones de vida de los pueblos indígenas. • Las comunidades indígenas no contaron con representación real frente a los procesos económicos, por lo que su visión de desarrollo no fue respetada, generando grandes pérdidas culturales y sociales, acabando paulatinamente con los indígenas. • La falta de presencia institucional pública generó un detrimento de la cultura indígena, reduciendo la probabilidad de interés de generaciones de relevo que buscasen mantener su cultura. • El poco conocimiento y capacitación que tenían los habitantes para formular proyectos de impacto, se mantuvo por el desinterés público a	La incursión progresiva de agentes económicos continuó, en especial en el sector de hidrocarburos y, en menor intensidad a la esperada –dadas las incertidumbres legales sobre los derechos reales- y con mayores ambivalencias y dificultades, en el sector agroindustrial. Aunque para estas actividades se hicieron consultas previas y procesos de socialización -en cumplimiento de los preceptos legales- los efectos reales fueron los de la imposición y el desplazamiento de las costumbres regionales y las formas primigenias de concebir el desarrollo. • La concentración de instituciones en esos dos centros urbanos, mantuvo el statu quo rural, controlado por actores ilegales. • Las relaciones entre indígenas/colonos y las empresas privadas se enmarcaron en el dinero, suscitando problemas sociales internos.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	sobretodo vías primarias y secundarias, facilitando la movilización de insumos y productos a través del departamento, convirtiéndolo en corredor estratégico. • Las unidades de consolidación territorial se centraron en municipios con un mayor impacto del postconflicto –Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Gaitán-.	fomentar procesos de educación.	
Conectividad deficiente por falta de infraestructura.	El fin del conflicto armado y el desarrollo del país se enmarcaron en la generación de garantías para incentivar las inversiones de capitales privados, por lo cual la conectividad vial -que representaba una de las principales falencias de Colombia- fue tratada mediante inversiones público-privadas. • La navegabilidad de los ríos tomó gran importancia en el país. La altillanura se vio beneficiada con reducciones de precios a la hora de movilizar productos e insumos. • A largo plazo, y por medio del desarrollo de políticas fronterizas con países vecinos, se lograron avances en acuerdos para el uso de territorio extranjero con fines comerciales. • El desarrollo de aeropuertos en lugares estratégicos, además de la mejora y	El fin del conflicto armado benefició a los departamentos y regiones históricamente afectadas por la guerrilla, pero sacó de la lupa a departamentos como el Meta. Esto significó un mantenimiento de la deficiente infraestructura vial, aumentando la vulnerabilidad de la población, altos costos para los insumos y salida de las inversiones de proyectos económicos que existían en ese entonces.	El desarrollo económico nacional tuvo como uno de sus principales pilares la conectividad nacional. Fueron ejecutados macro proyectos de infraestructura vial (terrestre, aérea y fluvial) que penetraron el territorio e impactaron positivamente la economía y gobernabilidad. • La reducción en los costos de insumos y de transporte de personas y carga generaron el crecimiento de la industria nacional, mejorando la situación laboral y la calidad de vida de las comunidades. • Las facilidades de movilización aproximaron al Estado y sus instituciones a las comunidades, mejorando la calidad y cobertura de salud y educación. • Las estructuras armadas ilegales en la altillanura vieron afectadas sus acciones por la presencia institucional y satisfacción de las necesidades por

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	mantenimiento de vías terrestres, facilitaron la presencia institucional y atención a necesidades de la población.		parte del Estado central, generando una apatía a la ilegalidad y poco a poco debilitando sus estructuras sociales.
Corrupción.	El fin del conflicto armado, el desarrollo y la gobernabilidad fueron aspectos que mejoraron al tiempo. Si bien, la corrupción constituyó una problemática que a nivel institucional permeó casi la totalidad del Estado, los requerimientos de las empresas, el control social a los funcionarios públicos y la elección consciente de candidatos generó una modificación en la aceptación de conductas corruptas. La participación de comunidades en la definición de prioridades de inversión y el condicionamiento de las regalías, generó la legitimización de los proyectos. • Se dieron procesos controlados para la formación de funcionarios públicos en seguimiento y evaluación de proyectos. Además la población se interesó y aprendió el uso de controles ciudadanos sobre la gestión de los dirigentes.	Frente a la ausencia del Estado durante años. La ilegalidad imperó en el territorio, el fin del conflicto armado no generó mayor vigilancia de los recursos, por lo que siguieron desviándose para la satisfacción de intereses particulares. • Se generó una mayor conflictividad entre comunidades y el resto de los actores del territorio. • La continuación de la ingobernabilidad en municipios receptores de regalías, como lo fue Puerto Gaitán, incitó a que las diferentes Bacrim permearan ámbitos de toma de decisiones públicas y económicas del departamento. • La diversificación de actores con interés de cooptar recursos, generó problemas entre la comunidad.	Las capacidades institucionales en el departamento fueron reforzadas, enalteciendo el papel del Estado como uno de derecho. • Llevaron a una cohabitación de la presencia real de instituciones públicas y actores interesados en el mantenimiento de un statu quo a su favor. • A pesar del aumento de inversiones económicas, la permanencia de controles territoriales ejercida por antiguos paramilitares o GAI presentes generaron una dinámica de gobernabilidad a favor de sus intereses particulares. • El crecimiento económico por sí solo no se tradujo en desarrollo social.
Transformación de las vocaciones de desarrollo tradicional regional.	Las vocaciones tradicionales de la región, centradas tradicionalmente en la ganadería extensiva y cultivos agrícolas, se transformaron para ser compatibles con proyectos	El departamento no vio modificadas sus vocaciones productivas a pesar del fin del conflicto armado. Los recursos y el acompañamiento técnico fueron destinados a	Las inversiones económicas acompañadas del fortalecimiento de la educación, salud y satisfacción de necesidades básicas por parte del Estado, incitaron mejoras en la

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	agroindustriales, una ganadería intensiva y actividades del sector de hidrocarburos. También, la región fue objeto de un proceso de industrialización de productos agropecuarios, que en la actualidad continua en crecimiento, además unido al aprovechamiento del potencial turístico que la región, ha mantenido mejoras de gobernabilidad y desarrollo en la región • Aprovechando las grandes extensiones de tierra se fomentó la ganadería intensiva, los cultivos agroindustriales y proyectos forestales -mediante la asociación de pequeños y medianos campesinos-. • El Estado hizo parte esencial del desarrollo económico siendo garante de la inclusión de la población, además de proporcionar la asistencia técnica requerida.	departamentos receptores de desmovilizados, dejando a la región en manos de actividades productivas, que en su mayoría no tuvieron en cuenta las afectaciones ambientales, sociales y económicas, además de la continuación de la ganadería extensiva. • Los proyectos existentes al finalizar el conflicto armado continuaron, pero esto no significó un aumento en las inversiones en el departamento.	gobernabilidad y la calidad de vida de las personas. • Las asociaciones de pequeños y medianos campesinos para el desarrollo de proyectos agroindustriales, fortalecieron el tejido social y mejoraron las condiciones de empleabilidad. • A pesar de la continuación del conflicto armado los negocios continuaron, la prosperidad económica derivada del comercio y el eslabonamiento en cadenas de valor (petróleo y agroindustria) se mantuvo, pero no se dieron condiciones institucionales que permitieran la mejora en la redistribución del ingreso y recursos públicos, para atender las necesidades de la población en condición de marginalidad.
Centralismo vs. Mayor autonomía. (Tensiones en la distribución de rentas fiscales)	La gobernabilidad se vio fortalecida por la autonomía que tuvieron los entes territoriales a la hora del manejo de regalías, dándole potestad a instituciones regionales, pero con controles rigurosos a su destinación. • El buen manejo de las rentas fiscales (inversiones de infraestructura principalmente) permitió	A pesar del fin del conflicto armado, la falta de inversiones debido a la priorización en otras regiones, generó un descontento social y empresarial por el aislamiento de los llaneros. • Se fomentaron liderazgos locales que buscaron la autonomía en el manejo de recursos y proyectos, e hicieron frente a la	El desarrollo de la región y la gobernabilidad con la que gozó el Meta, a pesar del fracaso del fin del conflicto armado, permitió que aumentara el arraigo de las personas a la región. • Líderes locales aprovecharon el contexto para promover la autonomía de la región y generar inversiones que trataran las necesidades de la comunidad y les

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	el ingreso de capitales privados que potenciaron la economía. • La mayor autonomía regional fue fomentada por liderazgos políticos y sociales, lo cual les permitió garantizar rentabilidad en sus inversiones. • El acompañamiento institucional que generó aprovechamiento de las regalías impulso el sentido de arraigo a la región, sumado a desarrollos integrales para los habitantes. • Con el paso de los años, se aprovecharon los recursos del petróleo para la formación de líderes locales con conocimiento de manejo de recursos públicos y representan a sus comunidades realmente.	historia de políticas hechas desde Bogotá. • Los grupos armados desmovilizados que migraron por razones económicas a la región, aprovecharon la situación para aumentar su base social y tener involucramiento en la toma de decisiones. • Se generó un desaceleramiento de la economía. • La autonomía se enmarcó en la transferencia de recursos y no en el impulso de desarrollo integral, abriendo brechas de inequidad en las oportunidades que tenían pequeños y medianos campesinos, frente a grandes campesinos. • El reducido acompañamiento a la población para aprovechar las nuevas actividades económicas, generó un desaprovechamiento de los recursos para apalancar procesos de desarrollo endógeno.	otorgaran una base social. • La entrada de nuevas actividades económicas tomada por los habitantes como un impulso para buscar la autonomía desligándose del Estado central. • Se generaron procesos de acompañamiento en educación y tecnificación los cuales incentivaron el buen aprovechamiento de los recursos provenientes por regalías. • El aumento de inversiones foráneas al departamento generó migraciones inesperadas, aumentando el desarraigo y la conciencia sobre los bienes públicos.
Tradición de conflicto con el estado central, rebeldía.	El abandono que había sufrido el departamento y la región generó el abanderamiento de una verdadera descentralización económica y política. Los líderes departamentales, aprovechando las inversiones privadas, buscaron la reestructuración de temas	A pesar de la firma del fin del conflicto armado, las reducidas inversiones en la región aumentaron el sentimiento de abandono y conflictividad con el estado central. • Las movilizaciones sociales se presentaron no solo en el Meta, sino en todos los	Por medio de la protección a la población de los impactos que nuevas actividades económicas pudieran llegar a generar, el Estado mejoró su relación con las diferentes regiones. • Se articularon escenarios en los que convergieran los intereses endógenos de la región y los del

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	económicos, sociales y de gestión pública. • Los recursos públicos y su gestión quedaron en manos de los entes territoriales descentralizados (departamento y municipios), supeditados únicamente a la revisión y/o acompañamiento técnico de la nación. • El desarrollo económico y la autonomía aumentaron el sentido de pertenencia, dejando a un lado la tradición de conflicto con el estado central. • El acompañamiento para incentivar los procesos de desarrollo endógenos de la región permitió la atención de necesidades que tenían las comunidades en la Altillanura.	departamentos que se vieron afectados por el enfoque de atención, a departamentos receptores de desmovilizados. • La clase política se abanderó en este problema para evadir sus responsabilidades y adjudicárselas al gobierno nacional. • Las actividades económicas no tuvieron controles, lo que ha generado a través de los años un aumento en el descontento social y la brecha entre ricos y pobres.	Estado, a la hora de buscar inversiones extranjeras y desarrollar políticas públicas. • El manejo de recursos por parte de los municipios no dejo a la Nación a un lado, más bien aumento los controles, evaluaciones y acompañamiento para generar impactos positivos. • El desarrollo económico y las migraciones modificaron la cultura regionalista que se vivía en el país, generando un sentido de pertenencia nacional. • El discurso en pro de las autonomías regionales fue aceptado por la sociedad, aun así los controles se dieron en torno a los recursos y no la capacidad real de aprovechamiento de estos, por lo que intereses particulares aprovecharon la situación en busca de réditos alejados del bienestar social.
Incertidumbre sobre posesión de tierras, catastro no fiable.	Los acuerdos firmados, consideraron modelos de asociatividad de inversionistas privados con musculo financiero y técnico, con grupos poblacionales campesinos, indígenas, colonos e incluso excombatientes para desarrollar proyectos	El fin del conflicto armado no estuvo reforzado con el acompañamiento institucional en todo el país. • La incertidumbre sobre los derechos reales continuó, lo cual generó el desaceleramiento de la economía departamental y regional.	La continuación del conflicto no fue un impedimento para el desarrollo de herramientas fiables y una presencia estatal que garantizara el esclarecimiento sobre la incertidumbre en los derechos reales. • Al solventarse las incertidumbres, aumentó

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	agroindustriales a gran escala, capaces de generar ingresos estables y posibilidades de acumulación a sus asociados. • La seguridad jurídica con certificados de catastro fiables, fue uno de los principales requisitos del sector privado para garantizar inversiones a largo plazo en el país. Lo anterior se dio buscando evitar problemas jurídicos cómo los que tuvieron algunas empresas agroindustriales y forestales en el pasado. • Las APP se convirtieron en el modelo principal de gestión utilizado por el Estado, generando respuestas a las necesidades de la población y apalancando en éstas el desarrollo.	• Las reducidas inversiones privadas y la falta de capacidad del Estado para garantizar el empleo en el departamento aumentaron el descontento de la población.	la inversión privada con requerimientos de mejoras en salud y educación en el departamento. • El arraigo generado por procesos productivos acompañados de satisfacción de expectativas se vio reflejado en la gobernabilidad. Con esto se redujo en una gran mayoría el poder restante de algunos grupos armados. • La asociatividad cumplió la generación de acumulación para todos los habitantes, propendiendo por reinversiones y crecimiento del departamento. • La aclaración sobre los resguardos indígenas, los derechos reales y problemas similares incentivaron el ingreso de capitales privados, reduciendo, de cierta manera, la influencia en zonas pobladas de grupos armados ilegales.
Migración laboral.	El desarrollo y la gobernabilidad, además del fin del conflicto, se convirtieron en la receta ideal para la generación de migraciones al departamento, debido a que generaron un ambiente propicio para el arraigo de la población flotante, garantizando la	El fin del conflicto armado no fue suficiente para el desarrollo de la región. La falta de una presencia institucional que velara por los intereses y necesidades de la población, además de una representación política real, fueron factores constitutivos del atraso que ha vivido el Meta.	Luego del fracaso del fin del conflicto armado en 2014 el desarrollo del país benefició a departamentos que no convivieron con la guerrilla. • El ingreso de capitales extranjeros a zonas que tenían potenciales ventajas para desarrollar proyectos, incitaron migraciones de mano de

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	calidad de vida de los habitantes. • La disponibilidad de tierras y el aumento de las inversiones volvieron llamativa a la región, aumentando exponencialmente el tamaño y necesidades de centros poblados. • La decisión de la región en convertirse en un polo de atracción de nuevos pobladores, el buen manejo de los recursos públicos y la planeación a mediano y largo plazo posibilitaron que a nivel rural y urbano se contara con buena prestación de los servicios públicos, sin importar las migraciones de otros departamentos. • Los reducidos índices de desempleo y la dignificación de los derechos de los trabajadores hicieron posible la construcción de tejido social entre colonos y migrantes.	• Las inversiones forestales y un par de empresas agroindustriales sobreviven en el departamento. • La actividad petrolera dejó un legado de migraciones a centros poblados, como Puerto Gaitán, con grandes necesidades en infraestructura, salud, educación y vivienda digna. • El relacionamiento entre colonos y la "población flotante" fue catastrófico, debido a la falta de oportunidades que percibieron los primeros y el colapso de las instituciones públicas a la hora de prestar sus servicios.	obra calificada y no calificada. • Los requerimientos del sector privado, al Estado, por inversiones para garantizar su rentabilidad, obligaron a planear juiciosamente las necesidades en infraestructura y cobertura del Meta. • El buen desarrollo económico modificó la estructura social, generando arraigo en los migrantes y tejido social con los colonos. • La cultura "traqueta" se vio acabada, mediante la concientización de las nuevas generaciones sobre sus impactos negativos. • La calidad en la educación y la salud incitó las reinversiones de capitales en el departamento.
Incertidumbres sobre nuevas perspectivas económicas (ejemplo los efectos inflacionarios de las nuevas actividades).	Las modificaciones económicas que se dieron por la globalización, como la entrada de nuevos capitales y visualización de nuevas actividades económicas, llevaron a generar incertidumbres entre la población y el Estado. • El fin del conflicto fortaleció las políticas estatales centradas en la educación, de esta forma, los habitantes del Meta	El fin del conflicto armado y el desamparo estatal en el departamento, ampliaron la brecha entre la comunidad y las empresas privadas. • El desinterés en los procesos del Meta por parte del Estado, generó un relacionamiento prácticamente nulo entre los nuevos agentes económicos y la sociedad. Esto suscitó volatilidad ante cualquier tipo de afectaciones	El Estado tomó el papel de garante de inversiones privadas, además de buscar la "armonía" entre las actividades económicas y las condiciones ambientales, sociales y productivas de la región. • El Estado buscó que el sector productivo privado asumiera las responsabilidades que este tenía, adjudicándoselas por

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	pudieron aprovechar el desarrollo de proyectos agroindustriales, forestales e incluso la actividad petrolera, aportaron para garantizar un buen nivel de vida de los llaneros generando arraigo. • Las inversiones económicas vinieron acompañadas de programas de un buen relacionamiento con las comunidades, haciendo entender su rol y necesidades, además de hablar sobre las posibles afectaciones al medio ambiente. De esta manera la comunidad en su totalidad accedió voluntariamente a la modificación o desarrollo de nuevas perspectivas económicas.	medioambientales, laborales, salariales, sociales o económicas -ya fuesen previstas o no-. • Los pocos desmovilizados de la guerrilla que estuvieron en el departamento, no vieron garantías para el desarrollo de una vida con calidad y dignidad, de esta manera algunos se movilizaron a otros departamentos, en otros casos retomaron las armas y volvieron a la delincuencia.	medio de la Responsabilidad Social Empresarial. • La satisfacción de las necesidades de los habitantes, ya fuese por el Estado o empresas privadas, dejó a un lado a estructuras ilegales interesadas en cooptar espacios de aceptación. • El relacionamiento con las minorías fue primordial para la gobernabilidad en la región. El Estado no se concentró en la generación de compromisos, sino que desarrolló inversiones por medio de Alianzas Público-Privadas.
Narcotráfico, contrabando, cartel de la gasolina.	El fin del conflicto armado supuso la atomización de los frentes que no se desmovilizaron, por lo cual, en una primera instancia, buscaron cooptar el poder territorial y el manejo de las actividades ilícitas que eran controladas por la guerrilla, aprovechando sus antiguos nexos. • El aumento de la presencia estatal fue paulatino, lo que generó condiciones de seguridad, convivencia y satisfacción de necesidades básicas que acabaron con incentivos	El fin del conflicto armado exacerbó las expectativas en los grupos armados, empresas privadas y de la sociedad en el territorio. A pesar de esto, el énfasis del Estado estuvo en departamentos que habían tenido fuerte presencia de los grupos guerrilleros, dejando la altillanura a un lado. • Las Bacrim (derivadas de grupos paramilitares o subversivos) tuvieron vía libre para traficar con drogas, contrabandear y mantener el control de los carteles de gasolina.	A pesar que no fue se materializó el fin del conflicto armado, el departamento no tuvo gran presencia guerrillera, por lo que gozó de buena gobernabilidad y un desarrollo sostenido. • El dinamismo económico de la región se encargó de fomentar micro empresas campesinas, reduciendo las filas de grupos ilegales y por ende su capacidad de desarrollar actividades ilegales. • Mejoras en las condiciones de salud, educación y satisfacción de necesidades básicas

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	para la participación de la población en acciones ilegales. • Las mejoras en gobernabilidad y desarrollo del departamento alejaron a los GAI de centros poblados como Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán.	• Las nuevas generaciones crecieron con el querer ser "traqueto", el dinero fácil, el poder y el respeto de los demás por cualquier medio. Esta situación imposibilito la construcción de tejido social y sentido de pertenencia. • El aumento de inversiones en otros departamentos fue directamente proporcional a la reducción de las inversiones en proyectos privados locales, dejando al Meta con atraso y sin desarrollo.	de la población generaron un rechazo a la cultura "traqueta", diezmando el poder que ostentaban los GAI.
Falta de seguridad alimentaria - especialmente para indígenas.	Las comunidades en los centros urbanos, y aún más en zonas rurales, eran afectadas por la inseguridad alimentaria. La falta de asistencia estatal y de actividades productivas constituían los factores principales de este problema. Con el fin del conflicto armado y la entrada de inversiones económicas se fue acercando la situación de poblaciones vulnerables a la seguridad alimentaria. • Los esfuerzos públicos y privados por el cuidado eco sistémico conllevaron a asegurar calidad y cantidad de agua potable disponible, además de garantizar la fertilidad de los suelos productivos. • La mejora en vías de acceso y el acercamiento	La falta de inversiones estatales generó un aumento en la problemática departamental de inseguridad alimentaria. A pesar del fin del conflicto armado, el interés estatal lo cooptaron departamentos que vivieron fuertes procesos de desmovilización de guerrilleros, por lo que el sector privado no invirtió en el resto de departamentos. Lo anterior generó un letargo en procesos de desarrollo a la par del resto del país. • El desmantelamiento de unidades productivas de pancoger, derivadas del exceso de liquidez proveniente del narcotráfico y la venta de tierras, fue una de las principales fuentes de inseguridad alimentaria	La inseguridad alimentaria, sobre todo de las comunidades indígenas, constituyó una gran problemática en la primera década del nuevo milenio. Este fue uno de los puntos discursivos utilizados por la guerrilla y otros grupos armados para obtener simpatizantes, por lo cual el gobierno buscó llevar la institucionalidad a las zonas históricamente abandonadas y garantizar una calidad de vida de sus habitantes. • La generación de empleo, capacitaciones en actividades productivas y concientización sobre el buen uso de los recursos naturales fueron una parte clave para poder garantizar la seguridad alimentaria.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	de instituciones públicas a las zonas que históricamente fueron abandonadas por el Estado generaron mejoras en la gobernabilidad y un proceso de mejores condiciones de mercado.	para los indígenas del departamento.	• El control del Estado sobre las actividades productivas buscando que generasen tejido social y condiciones propicias para habitar la región, generó mejoras en la gobernabilidad y redujo los incentivos de aceptación a la ilegalidad.
Extorsión, involucramiento de grupos ilegales en la actividad petrolera y de infraestructura.	Históricamente el departamento contó con presencia de la guerrilla, pero a través de los años se incrementó la actividad paramilitar –teniendo como uno de sus mecanismos de financiación las extorsiones-. Posterior a esos grupos las Bacrim -provenientes de antiguas estructuras paramilitares- utilizaron este tipo de acciones. Una vez finalizado el conflicto armado, con el paso de los años y grandes inversiones en macro proyectos, las instituciones públicas hicieron mayor presencia en la zona. • El fin del conflicto armado no generó modificaciones a mediano plazo debido a la reducida presencia guerrillera. • La presencia institucional y el desarrollo económico llevaron a la canalización de recursos del conflicto armado hacia el ataque a estructuras criminales atomizadas. • La gobernabilidad y apoyo social a la gestión pública generaron un	El fin del conflicto armado buscó atacar la ilegalidad, por lo cual pretendió la generación de condiciones por parte del Estado para el desarrollo regional. • A pesar de esto, las bajas inversiones para satisfacer necesidades básicas de la población, generaron una aceptación e involucramiento de segmentos de la población con los GAI como forma de subsistencia. • Una deficiente gestión pública ayudó al mantenimiento de fenómenos como la corrupción y la impunidad legal, generando fragmentaciones en el tejido social. • La desinstitucionalización de los territorios y falta de cumplimiento en la totalidad de los acuerdos firmados, sumó integrantes a los GAI –interesados en los réditos económicos- a actividades ilegales.	La falta del fin del conflicto armado no se convirtió en un impedimento para el cambio de las condiciones que permitían la extorsión e involucramiento de GAI en la actividad petrolera. • El desarrollo económico, a pesar de aumentar los incentivos para que los GAI extorsionaran, ayudó a la mejora en la calidad de vida de la población, involucrándola en actividades productivas. • Los últimos 16 años se vieron permeados por una actividad política, que representaba los intereses de la población y entendía las necesidades de la misma, otorgándole buena gobernabilidad. El desarrollo de inversiones públicas y privadas enfocadas en la construcción de tejido social terminaron por acabar con la cultura “traqueta” y así disminuyeron el interés de los jóvenes para involucrarse en actividades ilícitas.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	rechazo institucional y cultural a las dinámicas ilegales, encaminando los esfuerzos a la mejora del entorno.		
Despojo y usurpación de tierras.	El fin del conflicto armado generó la necesidad de concentrar las instituciones alrededor de la atención a las necesidades de desmovilizados y víctimas. Estas últimas, en el marco de la verdad y resarcimiento de las afectaciones sufridas en el conflicto, constituyendo un punto de importancia en la negociación y posterior firma del fin del conflicto armado. • En el proceso de verdad y reparación las victimas tuvieron espacio para exponer sus casos y obtuvieron respuesta de los excombatientes. La devolución de tierras y acompañamiento para la generación de proyectos productivos, constituyó uno de los pilares de desarrollo económico del Meta. • El sector empresarial también fue atendido como una víctima, debido a que se vio involucrado en la negociación de tierras provenientes de despojo y posterior freno a sus actividades productivas. • Una reforma agraria fue planteada como instrumento del Estado para proteger la vida de las personas. Sin tener	La firma del fin del conflicto armado no supuso mejoras frente al despojo y la usurpación de tierras. • La falta de institucionalidad y énfasis en el departamento generó una desatención a las víctimas en zonas de baja presencia histórica de las guerrillas. • Los actores violentos que habían despojado a propietarios en el pasado quedaron impunes, lo que generó grandes inconformidades sociales. • Los problemas e incertidumbres sobre las tierras y su historia generaron reducciones en las inversiones privadas, hecho que tuvo como efecto la desaceleración de la economía. • El intento de hacer una reforma agraria se enfrentó al aislamiento institucional del departamento, destacándose que "*la solución no es dar la tierra y ya, es el acompañamiento para generar proyectos productivos*".	Los grupos empresariales, con intereses particulares, influyeron en el Estado para generar una claridad en los derechos reales y sobre la relación de grupos armados ilegales en este problema. • La continuidad del conflicto amedrentó a afectados del despojo y usurpación en zonas que tenían presencia de la guerrilla. • Exhaustivas investigaciones judiciales frente a procesos de reparación con paramilitares e investigación de despojos generados por otros actores, otorgaron garantías a empresas privadas para invertir en el Meta. • La lenta atención a problemas de pequeños y medianos resguardos indígenas constituía una bomba de tiempo, sumado al uso de la fuerza pública que aumentaba la resistencia frente al sector público dejo una división permanente entre los colonos e indígenas.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	mucho éxito, al menos sirvió para obtener apoyo de entidades internacionales garantizando procesos transparentes y seguros. • Los grandes resguardos indígenas vieron oportunidades en la firma de convenios por empresas privadas, para el uso de sus recursos sin perder la propiedad o el control.		
Sostenibilidad ambiental (Ganadería, deforestación, agua, actividades económicas y tráfico de fauna).	La presencia institucional reforzada en el departamento generó procesos económicos ambientalmente sostenibles. • Una mayor capacidad técnica y el aumento de recursos financieros de las autoridades locales, permitió organizar una respuesta coordinada a la destrucción ambiental. • Indígenas nativos del Meta desarrollaron, con la asistencia de organismos de cooperación internacional, proyectos acordes a las vocaciones productivas aprovechando sus conocimientos médicos, alimentarios y ambientales. • Entre los programas de reinserción a desmovilizados, se estableció capacitarlos para la volverse guardabosques, protegiendo zonas forestales y generando una considerable cantidad de empleos.	El fin del conflicto armado sin acompañamiento institucional, generó un aprovechamiento de las empresas y terratenientes para desarrollar actividades económicas sin importar los efectos negativos que tuvieran en el medio ambiente. • La deforestación por ganadería extensiva, aumentó en ha. Óptimas para proyectos agroindustriales y forestales. • Luego del fin del conflicto armado surgieron grupos atomizados similares a las conocidas Bacrim, que utilizaron, en poca medida, el tráfico de fauna como mecanismos de financiación de sus actividades. • La falta de controles medioambientales por las instituciones a actividades productivas, limitaron la dinámica de reconversión del	La negativa a acabar con el conflicto armado por parte de los grupos armados, incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas, que circunscribieron los insurgentes a zonas delimitadas del departamento. Además de generar controles para inversiones en proyectos productivos regionales • La deforestación, la ganadería extensiva y el tráfico de fauna fueron controlados, debido a la permanencia de GAI que utilizaban estas actividades para financiar sus acciones y aumentar su patrimonio. • La generación de proyectos productivos en el marco de la sostenibilidad ambiental, generó la capacidad de convertir a la altillanura en una zona de interés eco turístico.

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
		departamento a vocaciones productivas favorables a los ecosistemas.	

SUBREGION NARIÑO

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
Zona de producción, procesamiento y tráfico de coca.	La Fuerza Publica doblo los esfuerzos para combatir los reductos de los Grupos Armados Ilegales (GAI) presentes en el territorio. Se dieron procesos de desmovilización de las bases de los frentes de las FARC, aunque en un principio los desmovilizados engruesarían las líneas de grupos como el ELN o las BACRIM.	A pesar de que el proceso de paz con los grupos insurgentes fue exitoso, el gobierno nacional no emprendió una estrategia de fortalecimiento institucional en las zonas de frontera. Sin oportunidades económicas alternas, los productores de coca siguieron el negocio, esta vez con apoyo de las BACRIM que ahora tienen más injerencia en la región.	A pesar de la permanencia del conflicto armado, el gobierno nacional implementa una estrategia de fortalecimiento institucional eficiente. La gobernanza y gobernabilidad de las regiones fortalecida permite el desarrollo de nuevas vocaciones productivas, que atraen a la mano de obra de los campos de coca.
Fuerte influencia de actividades del ciclo de producción y distribución de estupefacientes - graves problemas de orden público en Tumaco y otros municipios.	El fortalecimiento institucional en la región limito las actividades de cultivos de coca, microtráfico y narcotráfico de los GAI que no se vincularon al proceso de paz. Las acciones del ejército nacional, nuevas oportunidades económicas en el territorio y una nueva cultura política para exaltar y premiar la legalidad, apaciguaron el conflicto que hoy es historia. Ciudades como Tumaco recuperaron el comercio y la seguridad en el espacio público. La población ya no	A pesar que las FARC se desmovilizaron, muchos de los integrantes de sus filas terminaron migrando a otros grupos armados presentes en la región. Esta situación se presentó debido a que la débil presencia del estado no extendió programas y proyectos económicos para desincentivar las actividades ilegales en el territorio. La cadena de cultivos, producción y exportación de coca y el control territorial está en manos de las BACRIM, fortalecidas por antiguos guerrilleros del Frente 29 de las FARC. Las acciones de la Fuerza Pública no se adaptaron a estas nuevas amenazas, y las problemáticas de seguridad y convivencia en	Los actores armados ilegales, incluso las FARC que no firmaron la paz con el gobierno, siguen queriendo ejercer control territorial. Sin embargo, la estrategia del gobierno de llegar a todos los rincones del país por medio de su presencia institucional - siendo la Fuerza Publica su punta de lanza - en las regiones fronterizas y con mayores conflictos triunfa. La pacificación del conflicto por la vía armada implica constantes enfrentamiento con los GAI, pero la violencia se aisló poco a poco a bolsillos de territorio remoto. La avalancha de programas y proyectos por parte del gobierno nacional es un obstáculo para que los grupos

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	tiene miedo de emprender un negocio, y la ciudad se convirtió en un puerto atractivo para jalonar el comercio exterior y posicionar sus zonas marítimas como ejemplo del crecimiento de la pesca sostenible. La alta oferta institucional permitió crear escenarios productivos que otorgaron la vinculación de actividades legales en los diferentes territorios. El robo de hidrocarburos, la siembra de cultivos ilícitos y las acciones delictivas pasaron a un segundo plano.	el departamento se acrecentaron. La subregión de Telembi sigue siendo una zona que vive de esa actividad ilegal. Siguen llegando actores externos legales e ilegales que degradan el territorio, debido La débil presencia institucional acrecienta otras problemáticas de orden público. El robo de Hidrocarburos al Oleoducto Transandino OTA entre Orito (Tumaco se incrementa, debido a que surgen y se fortalecen GAI en el territorio que siguen viendo como opción las actividades ilegales como dinámica económica en la región.	armados puedan ampliar su control en el territorio. El Frente 29 de las FARC disminuye sus acciones y ataques a la infraestructura estratégica de la región, por falta de recursos. La disminución de influencia de los grupos al margen de la ley mejora la confianza en las regiones en cuanto a la movilidad y la activación de procesos que dinamicen la economía en la región. Los programas de sustitución de cultivos de coca por el café y hierbas aromáticas de valor añadido competitivo fueron un éxito gracias a las obras de infraestructura que permitieron un acceso fácil al mercado nacional, y a posibilidades de exportación por la región costera.
Dicotomía político-institucional entre la cordillera (fuerte) y la costa (débil).	La política nacional de reconstrucción regional coordinó adecuadamente el interés local, departamental y nacional a través de planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT, EOT) articulados con las autoridades y comunidades afectadas para garantizar una presencia estatal uniforme en todo el territorio.	El proceso de paz pretendía la consolidación de sus regiones, pero la débil presencia institucional no logro la tan anhelada consolidación en una región tan diversa como Nariño. La política nacional de reconstrucción regional, centralizando los recursos en la capital del departamento, fracasó por falta de recursos y apoyo central. Se incrementó la diferencia entre los indicadores sociales y	El gobierno nacional implementa la estrategia de descentralización de los procesos de planeación nacional, donde las mismas regiones son las formuladoras del desarrollo local. Los Planes y las políticas responden a las necesidades del territorio. La consolidación territorial sigue, a pesar de unas acciones dispersadas de los

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
		económicos de la región de cordillera y la zona costa pacífica.	grupos armados ilegales en la región.
Altos niveles de pobreza extrema en la zona costera.	Nariño al ser un departamento con gran variedad de climas (zonas andinas, zonas marítimas y zonas de bosque amazónico) posee fortalezas ambientales que fueron aprovechadas económicamente. En las áreas de llanura costera y en sus zonas montañosas, se fortalecieron cultivos de coco, cacao y café. Gracias a la Alianzas del Pacifico la cadena de comercio de estos productos fue asegurada y fomentó un mayor abastecimiento interno, y una creciente exportación de la producción a los países aliados. De los 15 sectores de la economía del Nariño, los 4 principales (Café, Lácteo, Hortofrutícola y Turismo) se volvieron el motor de desarrollo económico inclusivo de toda la población, y de una mayor integración comercial con el vecino país de Ecuador. La brecha de infraestructura estratégica se mejoró con la vía panamericana a doble calzada conectando Ecuador con Ipiales, Pasto y Popayán,	La región pacifico azotada desde tiempo atrás por la ilegalidad sigue siendo fortín de las BACRIM. Los motores del desarrollo humano como la educación, la salud y los servicios públicos siguen víctimas de la corrupción administrativa y de la influencia de los grupos armados. La calidad de vida de la población costera es cada vez peor, y la crisis sanitaria viene acompañada de la devastación de los recursos naturales de la zona.	Los grupos armados ilegales siguen presentes en la región costera, donde manejan la exportación de drogas. Sin embargo, el gobierno nacional y departamental llega a todos los rincones del departamento mediante los diferentes programas y proyectos que impulsen la economía territorial. La continuidad del conflicto armado no sigue siendo un obstáculo para el desarrollo y crecimiento económico de la región.
La infraestructura estratégica del departamento no está consolidada.		La red vial departamental y nacional quedó paralizadas en procesos paquidérmicos por el abandono institucional y la corrupción. Las necesidades de infraestructura estratégica del departamento (como el puerto de Tumaco y su carretera, o el eje vial Mocoa - Pasto - Tumaco) nunca fueron una prioridad del gobierno nacional o local. El potencial de la región de Ipiales para el cultivo de flores no se realizó debido a la conectividad rezagada. Los aportes del ingreso nacional a	El desarrollo del puerto de Tumaco y su carretera dinamizaron la economía, ofreciendo un eje de exportación internacional a la producción del departamento. Los ejes viales departamentales que conectaron con Ecuador y el Putumayo apoyaron los procesos económicos en la región. La investigación agropecuaria permitió alterativas productivas que dinamicen la economía en la región.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	el eje vial Mocoa - Pasto - Tumaco. La construcción y el mantenimiento de vías secundarias y terciarias crearon verdaderas arterias para dinamizar la conectividad comercial del departamento con sus mercados nacionales e internacionales. Las relaciones comerciales con Ecuador se ampliaron, con el fin de las restricciones de transporte de productos colombianos hasta Ecuador. El turismo incrementó en la región, dinamizando los sectores comerciales hotelero, de restaurantes y atractivos culturales.	la región siguieron insuficientes.	
Gran diversidad étnica - ascendencia indígena al oriente, andina en el centro y afro en la costa.	El plan de competitividad regional ayudo las ciudades principales (Pasto, Ipiales y Tumaco) a generar sinergias económicas inclusivas de todas las poblaciones campesina, grupos indígenas y de negritudes.	Después del acuerdo de paz, el desarrollo siguió sin pensarse desde las regiones. La población sigue eligiendo a líderes que no representan a la comunidad y sus intereses diversos. No se consultó a los campesinos para decisiones en las zonas rurales. La consulta previa para los grupos étnicos no garantiza el mayor interés de las poblaciones afectadas por	Los esfuerzos de planeación participativa, conjuntamente con ofensivas coordinadas de las Fuerzas Armadas permitieron recuperar territorios bajo control de los grupos armados ilegales. La población campesina y los diferentes grupos étnicos presentes en la región aprovecharon el nuevo espacio de debate y deliberación para definir sus propios procesos de desarrollo regional.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
		grandes proyectos de infraestructura. Los procesos fueron utilizados como modo extorsivo, en el más del 75% del territorio nariñense que es territorio colectivo (tierras de comunidades negras y resguardos indígenas).	
Tensiones fronterizas con Ecuador en zonas continentales y costeras.	El Tratado de Esmeraldas sobre el tránsito de personas y vehículos entre Ecuador y Colombia impulso un crecimiento de las trans-fronterizas dinámicas económicas y comerciales reciprocas. Las alianzas binacionales hicieron que la gobernanza y la institucionalidad estén fortalecidas en la zona de frontera. El corredor de narcotráfico existente entre los dos países perdió fuerza por las medidas de ambos gobiernos y la presencia institucional del Estado Colombiano. Los flujos migratorios laborales de colombianos a Ecuador en cultivos agrícolas y floricultura aún persisten, sin embargo Ipiales se convierte en una región prospera debido al impulso de la floricultura y la facilidad de sacar el producto, ya sea por	El conflicto armado continúa con las BACRIM, y estas ocasionan desplazamiento poblacional en condición de refugiados de colombianos en Ecuador. El gobierno nacional no tiene en cuenta los grupos étnicos para la planeación y las apuestas del desarrollo nacional y regional. Las políticas transnacionales no fortalecieron las dinámicas comerciales. Los comités técnicos binacionales de pesca artesanal se siguen haciendo en Bogotá sin lograr mayor avances. Las relaciones con el vecino ecuatoriano siguen tensas, y no se logró una agenda de discusiones más allá del tema de la seguridad que afecta ambos países.	El alineamiento de las políticas de desarrollo de la zona fronteriza por Ecuador y Colombia fue clave para el desarrollo en la región. Se fortaleció la presencia institucional de ambos lados de la frontera, quitándole espacio a los grupos armados ilegales que siguen en la región. El fortalecimiento de convenios trasnacionales con Ecuador ha dinamizado nuevas actividades en el territorio, como el avance del sector pesquero en las costas de Tumaco y el Pacifico colombiano.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	Ecuador o por la gran arteria vial hacia el puerto de Tumaco. El comité técnico binacional de pesca artesanal alterna su realización entre Tumaco y Esmeraldas. La pesca en el pacifico colombiano se volvió un oficio dignificante, donde el pescador es sinónimo de estabilidad y calidad de vida.		
Alta diversidad ambiental por variedad de regiones (amazónica, andina y pacifica)	Con el fin del conflicto armado el Gobierno decidió que las principales zonas para posicionar la gobernabilidad y las instituciones del Estado eran los territorios de frontera, zonas de abandono histórico. Se adoptó una visión de desarrollo económico en concordancia con la conservación y recuperación de los recursos ambientales y agropecuarios. El papel histórico de Corponariño se vio reforzado por un mayor apoyo del Ministerio del Ambiente, con herramientas y recursos de monitoreo y planeación adicionales. Nariño pasó de ser el departamento con mayores especies amenazadas y con mayor deforestación a un departamento líder en temas de conservación y de actividades productivas	A pesar de que el conflicto armado con las FARC haya culminado, la debilidad institucional se agravo en el departamento. El nuevo escenario no contó con el apoyo del gobierno nacional, y actividades como el cultivo de coca y la minería ilegal se desbordaron, afectando los recursos ambientales de los territorios ya amenazados. Las reservas naturales de bosque, agua y la soberanía alimentaria entraron aún más en conflicto con la expansión de las actividades del sector minero-energético, debido a que no hay un alineamiento ni unas alianzas estratégicas con las empresas que llegan al territorio. La conservación de entornos como bosque de niebla, paramos y zonas forestales no	El conflicto armado continuo en el país. El gobierno nacional incremento su acción armada, y los programas y proyectos nacionales llegaron a las regiones como estrategia para cooptar espacios y disminuir escenarios que podrían ser influenciadas por los actores armados ilegales. El gobierno, consciente que el desarrollo regional es la sinergia entre lo económico, los recursos ambientales y agropecuarios, impulso una mejor conservación de entornos como bosque de niebla, paramos y zonas forestales está definida en el departamento. Los Grupos Armados Ilegales intentaron imponerse como

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	sostenibles en sus áreas rurales. La Ley 2 de 1959 (sobre la conservación de recursos naturales renovables) dejo de ser una talanquera para la consolidación de la región. Hoy si bien los controles aumentaron, la ley contempla unos procesos participativos donde la conservación va de la mano del desarrollo regional sin sacrificar los recursos naturales. Las actividades y las empresas que llegaron al departamento cada día buscan más sinergias con las regiones, con el fin de poder hacer operaciones limpias y sostenibles con programas de recuperación ambiental y productiva de regiones devastadas en el pasado por las actividades ilegales. Los cultivos de coca son reducidos y las grandes plantaciones de palma se restringieron a zonas de amortización con el fin de frenar la descontrolada expansión de la frontera agrícola que estaba acabando con los bosques nativos. La recuperación de los bosques, la sostenibilidad acuífera y la	se defino claramente en el departamento. Nariño sigue siendo el departamento con mayores especies amenazadas. Las posibilidades de impulsar el ecoturismo en la región no contaron con el apoyo y respaldo de las autoridades departamentales y nacionales. La deforestación por los cultivos de coca, el cultivo de palma y otros cultivos extensivos siguieron dañando los ecosistemas de las diferentes regiones. La ampliación de la frontera agrícola, ganadera y cultivos ilícitos va en aumento, los complejos de páramo se están acabando. El Pacto Intersectorial por la Madera Legal, convenio interinstitucional creado unos años atrás en el cual se buscó una ruta para responsabilizar el sector de la madera, tuvo poco impacto en la región. La falta de apoyo institucional y el surgimiento de nuevos Grupos Armados Ilegales incremento el negocio maderero como otra actividad más en la cadena de la ilegalidad, incrementando el riesgo ambiental del departamento y la región.	obstáculo al desarrollo, manteniendo las afectaciones ambientales producto de sus actividades ilegales. Pero la lucha contra los cultivos ilícitos, apoyada por programas de sustitución y proyectos agrícolas asociativos, fue exitosa. La reducción de los cultivos ilícitos ralentiza la deforestación. Las tentativas por grupos armados ilegales de impedir la ejecución, el control y seguimiento de este tipo de programas fueron derrotadas en enfrentamientos con la fuerza pública y la presencia creciente del Estado en la región. El Oleoducto Transandino (OTA), que los GAI ven como un proveedor de insumos para el procesamiento de coca, además de un objetivo militar de bajo costo, está afectado por menos ataques y robos de hidrocarburos. La disminución de los atentados a la infraestructura reducen los derramamientos de crudo en el territorio. Por otra parte, el Pacto Intersectorial por la Madera

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	soberanía alimentaria fueron programas y proyectos vitales que, apoyados por el sector minero-energético, trazaron una línea de responsabilidad y desarrollo en el departamento. Las autoridades ambientales nacionales y departamentales impusieron como política pública la recuperación, mantenimiento y desarrollo de los manglares. La puesta en marcha de proyectos de cultivos de restablecimiento de especies marinas renovó el sector pesquero en la región costera. Tomando el modelo Ecuatoriano, se establecieron zonas de veda y áreas de arrecifes artificiales para la cría de especies endémicas y zonas especiales para el cultivo del camarón, sin atentar con el equilibrio de los manglares. La explotación minera fue controlada y las sanciones son cada vez más estrictas por parte de las autoridades nacionales y departamentales. La conservación de entornos como bosques de niebla, paramos y zonas forestales es hoy una realidad. El impulso del aviturismo y ecoturismo	En la zona costera, el deterioro de los manglares avanza, y el cultivo de camarón solo satisface los intereses económicos de unos pocos. Sin control de las autoridades ambientales se acabó con una gran parte del lecho marino, afectando la diversidad de fauna en el Pacifico y los ingresos de los pescadores en la costa.	Legal, convenio interinstitucional que pretende la legalización de la madera en la región, siguió dando una pelea constante al tratar de imponer una cultura de la legalidad y respeto por la conservación de este recurso. Las comunidades se acogieron voluntariamente a estos lineamientos para conservar los bosques y el ecosistema.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	en el departamento ha incrementado la llegada de extranjeros y nacionales en la búsqueda de parajes turísticos en la región. El Pacto Intersectorial por la Madera Legal, convenio interinstitucional creado en el 2012, otorgo los lineamientos necesarios para que las comunidades respetaran la explotación de este recurso. Hoy la tala de bosques es controlada y respeta los ciclos eco sistémicos y frecuencias de reforestación.		
Débil presencia Institucional del Estado.	El fin del conflicto puso como prioridad el reto por mejorar la institucionalidad, donde las condiciones de desarrollo se marcaron desde los conceptos de equidad y calidad de vida de todas sus poblaciones. Se dieron procesos de descentralización administrativa y política donde la participación y el entendimiento de las regiones surgieron desde las mismas. El fortalecimiento de lo institucional en lo local, el cambio de mentalidad y la reducción de la corrupción administrativa fueron los ejes principales para avanzar. La nación y el departamento se	La paz no fue de la mano con el acompañamiento institucional, por tal motivo los actores ilegales presentes en el territorio siguieron imponiéndose. La institucionalidad en general siguió politizada y clientelista. El gobierno nacional sigue formulando políticas nacionales desde el centro, y las regiones no reciben el adecuado apoyo central. Las instituciones municipales siguieron en crisis, permeadas por los grupos armados ilegales y la corrupción.	Aunque el proceso de paz no llego a buenos términos, la nación impulso el fortalecimiento de las instituciones de todos los rincones del país. El acompañamiento a la gestión de la gobernación y de los municipios empodera a los gobernantes, otorgándoles credibilidad. Los programas y proyectos nacionales trascendieron en lo regional. La población civil apoyo esta nueva institucionalidad, protectora de las vocaciones productivas licitas del departamento.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	alejaron de las practicas clientelistas y politizadas. *(Ver Variable "La infraestructura estratégica del departamento no está consolidada.")*		Nariño rechazo a los actores ilegales, activos pero arrinconados y con poco control territorial para seguir con el narcotráfico.
La planificación del departamento no ha contado con procesos participativos donde se incluyan todas las visiones.	En el departamento se potencializaron los instrumentos administrativos de seguimiento, planeación y geo-referenciación de las actividades económicas de desarrollo. La descentralización de los procesos de planeación nacional fue una realidad. La dinámica de los escenarios de participación con las comunidades fue el elemento clave para la gobernanza y el desarrollo institucional. Las mismas regiones se empoderaron y fueron las formuladoras del desarrollo local. Se alejaron prácticas como la aplicación de planes y políticas estandarizadas, que no respondían a las necesidades del territorio. La reconstrucción del quehacer institucional fue una tarea desde lo local a lo nacional.	En el departamento aún no existen suficientes instrumentos de seguimiento y planificación regional. A pesar que el proceso de paz término en un acuerdo, la institucionalidad del Estado se alejó de las regiones y los escenarios de participación no contaron con el apoyo necesario para pensar las regiones desde su base. Los esfuerzos de desarrollo participativo de políticas públicas con contaron con capacidad técnica suficiente. Consejos comunitarios y juntas de acción comunales no lograron profesionalizarse para un mayor entendimiento de sus entornos y retos. Las comunidades étnicas siguen marginalizadas.	El cambio de estrategia del gobierno nacional dinamizo los escenarios de participación en la región, empoderando a los gobernantes y a sus comunidades en el desarrollo de programas y proyectos adecuados para el territorio. Esta mayor gobernanza descentralizada se basó en el fortalecimiento de instrumentos de seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas por parte de la población. Este mayor control de los administrados fue un elemento importante para blindar a las administraciones departamentales y municipales de los actores armados ilegales.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	La capacidad técnica existe hoy en todas las instancias de participación como los consejos comunitarios y las juntas de acción comunal, en las comunidades étnicas y en poblaciones de todas las regiones.		

SUBREGION PUTUMAYO

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
Dinámicas socioeconómicas ligadas a modelos productivos ilegales, y actividades que no corresponden a las condiciones naturales y culturales del entorno.	Con el objeto de sustituir las economías ilícitas y capacitar a la población para la creación de modelos de empresas apropiadas para la región, el Estado diseñó políticas ambientales de conservación y programas educativos para las comunidades campesinas e indígenas, en los cuales, se aprovechó la diversidad biológica y cultural del territorio. Debido al fortalecimiento de dicho proyecto educativo regional, los campesinos erradicaron los monocultivos e implementaron sistemas productivos sostenibles, lícitos, coherentes con el entorno y acompañados del fortalecimiento, legitimidad y autonomía del Estado, así como de las comunidades. La restitución de tierras se reorganizó y fomento el desarrollo agrícola. Los proyectos de caucho y palmito se realizaron con seguimiento y capacitaciones técnicas que optimizaron la producción y los ingresos de las familias y	No se lograron diseñar sistemas productivos integrales, lícitos, sostenibles y alternativos a los cultivos de uso ilícito. El Estado continuó con la fumigación de los mismos con glifosato, metodología que siguió siendo cuestionada por los efectos que causó sobre el medio ambiente y la salud de los habitantes del departamento. Aumentó la deforestación de los bosques tropicales por la fumigación, al mismo tiempo que incrementó el número de residuos tóxicos causados por la presencia activa de laboratorios ilegales para el procesamiento de la hoja de coca; generando contaminación en vertientes y ríos. Se mantuvo la presencia de las actividades ilícitas así como la ilegitimidad del Estado en el territorio. Como consecuencia de la persistencia de tales cultivos, aumentó también el despojo de personas de sus tierras, la frecuencia de amenazas a la población, el número de	A pesar de que no se logró el fin del conflicto armado, se establecieron sistemas productivos sostenibles y líticos con ayuda del Estado, logrando el aumento de los ingresos económicos, el mejoramiento de la calidad de vida y cohesión de las comunidades. La situación anterior se convirtió en una oportunidad para ampliar la economía regional a partir del biocomercio, los servicios ambientales, y el fortalecimiento de la producción agrícola y piscícola. Y aunque se mantuvo la presencia de actores armados ilegales que amenazaban a la población, y la obligaba a sembrar coca, las comunidades en articulación con la Fuerza Pública y apoyo del Estado lograron superar esta

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	población beneficiada por estas actividades. Así, las líneas de desempleo disminuyeron y se implementaron procesos de capacitación a la población. En el campo se empezó a cultivar lo necesario y se recuperaron los conocimientos tradicionales para la siembra y cuidado de los cultivos de uso lícito. Se aprovechó la producción agrícola y piscícola que los propios putumayenses realizaban; también se manejó de manera sostenible los recursos del bosque como la madera, fibra, semillas, etc. Con todo lo anterior, disminuyó la dependencia hacia economías ilegales; se incentivaron modelos productivos y comerciales alternativos y la concepción de desarrollo de los grupos indígenas, campesinos y mestizos, basada en la participación de los procesos de crecimiento del territorio fue un elemento clave para el avance regional y la conservación cultural del departamento. Finalmente, se logró la posibilidad de que la Universidad Pública del	homicidios, extorsiones y secuestros. Los Grupos Armados Ilegales como las Farc, reorganizaron sus líneas de mando, cambiaron el nombre de sus organizaciones como una forma de evidenciar la "desmovilización" de sus integrantes, pero continuaron intimidando a la población que seguía abandonada por el Estado. Así, el Estado perdió toda su legitimidad y los cultivos de uso ilícito lograron absorber la mayor parte de la mano de obra en la región. No se impulsaron investigaciones sobre las potencialidades de la tierra para la promoción de cultivos alternativos a la coca y las que se hicieron, no recibieron el apoyo para financiarlas, situación por la cual las comunidades se vieron en la necesidad de continuar con la siembra de cultivos de uso ilícito, pues necesitaban llevar a sus casas dinero para el sustento diario. Los niños dejaron de ir a la escuela y junto con sus padres' siguieron el mismo camino.	situación. Pues mejoró la seguridad y algunos integrantes de los GAI se vieron en la necesidad de dejar las armas porque ya no era rentable el negocio. Así, la sociedad civil muy organizada centró su interés en trabajar de forma auto sostenible, empezando a fortalecer la seguridad alimentaria. En poco tiempo se produjeron en forma limpia y orgánica tantos alimentos nativos que alcanzaron de sobra para todo el departamento. Mejoraron los ingresos económicos de la población, y se abrió la oportunidad para que el departamento se convirtiera en una de las despensas más importantes de productos agrícolas y ambientales a nivel nacional; en el cual, el sector privado, público y la base social se articularon para

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	Putumayo junto con la Universidad del Amazonas se convirtiera en un modelo a seguir a nivel nacional e internacional. Así, se impulsó la investigación en torno a los conocimientos relacionados con las ingenierías ambientales, zootecnia, agro ecología, biocomercio, etc. Los cuales siempre se desarrollaron teniendo en cuenta las condiciones propias de la selva amazónica y cultura de las comunidades del departamento. Las sedes de ambas universidades y los programas académicos, se asentaron en los 13 municipios del departamento. Esto contribuyó aún más en el fortalecimiento de modelos productivos distintos a la dependencia en la economía ilegal. Incluso, surgió la posibilidad de que la comunidad putumayense convocara a un referendo sobre la legalización del cultivo de coca, con el objetivo de hacer un uso		generar opciones alternativas a la siembra de cultivos de uso ilícito.

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	diferente a la generación de estupefacientes, aprovechando el conocimiento adquirido en el manejo de este cultivo y sobre las propiedades alimenticias y nutricionales que posee[2].		
Debilitamiento de las instituciones sociales y públicas, acompañada de una fuerte ilegitimidad del Estado en el territorio	El fin del conflicto armado aumentó el interés del Estado respecto a la prevención, investigación y sanción de la corrupción; lo cual contribuyó a un impacto directo sobre las finanzas públicas, al crecimiento económico y la legitimidad de sus actuaciones en el territorio. Las políticas y estrategias empezaron dar como resultado la reducción de los actos de injusticia y mejoramiento de la calidad de vida. Así, los ciudadanos se sintieron más atraídos a ejercer el derecho y cumplir el deber de participar en la vida política, social y económica del país, fortaleciéndose la naturaleza de las instituciones sociales. Lo anterior conllevó a una mejor distribución de los recursos públicos,	A pesar de la finalización del conflicto armado a nivel nacional. Las instituciones públicas del Putumayo siguieron actuando de forma descoordinada y desligada de los intereses de la comunidad en general; los representantes políticos actuaron orientados por sus intereses propios, situación que no permitió una cohesión de la sociedad en general. La distribución de los recursos para los diferentes programas sociales en el departamento siguieron estando permeados por los intereses particulares de una clase política corrupta. La debilidad del Estado en el territorio generó una serie de dificultades en tanto no se gobernó el territorio y no se plantearon soluciones compartidas de la visión de futuro del departamento.	A pesar de que no se logró el fin del conflicto armado, se fortaleció la legitimidad y autonomía del Estado; las instituciones públicas se articulación para diseñar propuestas viables de desarrollo, coherentes con las realidades socioeconómicas y culturales del departamento; Estas se articularon con el fin de prevenir, controlar e investigar la corrupción, ganando de esta manera legitimidad al ampliar sus capacidades de respuesta a las demandas sociales, y mejorando la gestión y transparencia de los procesos públicos. Hubo un fortalecimiento de las

[2]Castro, C. (2007) *Retos y tendencias para el Putumayo al 2030 ¿qué nos están dejando para el futuro?* Corpoamazonía e Instituto Tecnológico del Putumayo.

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	orientados al bien común, reflejándose en la mejora del bienestar social de las comunidades putumayenses y en la garantía y protección de los derechos humanos. Así mismo, se desvirtuaron las prácticas de clientelismo que se venían realizando históricamente y que propiciaban corrupción al interior de las instituciones públicas; la contratación local y departamental dejó de ser una práctica para el lucro de unos pocos y se tomó la conciencia de la responsabilidad de inversión de los recursos. Uno de los cambios sustanciales que afianzó estas buenas prácticas en el departamento fue la alta observancia de las normas, de la constitución y la ley, este cambio alineó al departamento en temas metodológicos y lo organizó en su planificación y creación de proyectos claves para el desarrollo de la región.	A pesar de haber terminado el conflicto armado, la competencia regional por apropiarse de los recursos públicos en los procesos de contratación fue una constante que aumentó los niveles de pobreza, la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, el deterioro de los valores humanos en las instituciones sociales[3] y públicas, y los abusos de poder. Los recursos económicos para el Putumayo continuaron siendo irrisorios, los temas de consolidación territorial se volvieron imposibles debido a que la región no obtuvo un mejoramiento de los procesos de gobernabilidad para generar escenarios de desarrollo e institucionalidad. Los mayores problemas relacionados con la ilegitimidad del Estado derivaron de las decisiones políticas tomadas de forma arbitraria desde el centro del país, las cuales fueron en contravía de los intereses de los habitantes del departamento. La debilidad institucional, por su parte, se evidenció en los altos niveles	veedurías ciudadanas que sirvieron de mecanismo esencial para realizar control social estatal. Allí participaron diferentes organizaciones, sectores y gremios, incluidos representantes de la academia y población civil en general. Las instituciones sociales y públicas concertaron y sincronizaron medios y esfuerzos para generar valor en la gestión pública. De este modo mejoró el acceso y calidad de la información para la prevención de la corrupción y las comunidades fueron capacitadas en torno a los mecanismos y escenarios con los que cuentan para ejercer control sobre las entidades públicas. Así, la sociedad civil comenzó a realizar control social a los gobernantes; esto permitió disminuir los

[3] De acuerdo con Castro, C. (2014) por institución se entiende el conjunto de reglas de juego que operan en un contexto en específico. Con base en esta afirmación las instituciones pueden ser de tipo estatal (o pública), social, religioso, etc.

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
		de corrupción y politiquería que demostraron la ineficiente ejecución de las inversiones tanto a nivel departamental como municipal. Las personas que resultaron elegidas para ocupar los cargos públicos no contaron con la adecuada experiencia y conocimiento para direccionar el desarrollo del Putumayo. Persistió la descoordinación entre las instituciones públicas, y las instituciones sociales no hicieron control social a las actuaciones de los corruptos; así la debilidad de gobierno se vio no solo como producto de la ineficiencia del sector público, sino de la base social. La gobernabilidad se convirtió entonces en una herramienta no para que la gente pudiera alcanzar sus metas colectivas, sino para que los políticos aseguraran su bienestar.	niveles de corrupción y clientelismo, fortalecer la institucionalidad social y aumentar la legitimidad del Estado en el territorio. Y a pesar de que el conflicto armado no cesó, el Estado y la sociedad siguen sumando esfuerzos para mejorar las condiciones estructurales de la población putumayense.
Persistencia de modelos económicos de enclave “booms” (quina, caucho, petróleo, pieles, maderables, coca, pirámides y oro) que generan procesos	Con el fin del conflicto armado, las instituciones del Estado en articulación con las empresas del sector minero energético, impulsaron el crecimiento de otros sectores económicos con grandes apuestas productivas en el departamento.	Las dinámicas económicas del departamento siguieron siendo de enclave, de tal forma que no se generaron encadenamientos productivos que permitieran potenciar el crecimiento económico del territorio. En este sentido, la principal contribución de la extracción de recursos como el petróleo y la minería legal,	La persistencia de economías relacionadas con la extracción de petróleo y materiales mineros posibilitó estimular el crecimiento de otros sectores productivos de la economía departamental tales como: el palmito,

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
migratorios al territorio.	La presencia de industria y actividades minero energéticas en la región se convirtió en una oportunidad para afianzar y trabajar en el mejoramiento de las condiciones estructurales de la población. Así se dinamizó el comercio, el bioturismo y se mejoró la calidad de vida de los habitantes de la región. Los proyectos de caucho y palmito fueron claves para impulsar el desarrollo regional. Éstos estuvieron acompañados del seguimiento y capacitaciones técnicas a la población, que optimizaron la producción y los ingresos de las familias beneficiadas por estas actividades. Las líneas de desempleo disminuyeron y se implementaron procesos de capacitación en la siembra de cultivos alternativos. Las actividades agrícolas se hicieron teniendo en cuenta la conservación y dignidad de los pueblos indígenas; así como el respeto por sus tradiciones y su cultura económica y social. Motivo de lo anterior, las economías ilegales	se limitó a las regalías pagadas a favor del bienestar social de la población local. Bajo este contexto, se produjo una alta dependencia hacia dicho beneficio fiscal, lo cual no permitió el fortalecimiento de otros sectores con grandes apuestas productivas en el Putumayo. Los recursos de las regalías no generaron un impacto sustancial sobre el bienestar de la población debido a problemas adicionales relacionados con la corrupción e ineficiencia de las autoridades municipales y departamentales. Así, las otras dinámicas económicas del departamento estuvieron enmarcadas en un contexto de ilegalidad, influenciado por la alta presencia de cultivos de uso ilícito y minería ilegal. Situación que obligó a las familias a hacer parte de la cadena de valor de estas actividades ilícitas.	pimiento, vainilla, estevia, arniz, entre otros. Al mismo tiempo, las autoridades locales en coordinación con la sociedad civil y las empresas del sector minero energético impulsaron la creación de un proyecto educativo universitario que tuvo como propósito capacitar a la población en la siembra de cultivos alternativos. Con lo anterior, disminuyó paulatinamente la dependencia hacia el sector minero energético y a la siembra de cultivos de uso ilícito. Si bien, este último fenómeno no se logró abolir por completo, debido a la presencia activa de Grupos Armados Ilegales, la población tuvo la oportunidad de adquirir nuevas fuentes de ingreso diferentes a las ya mencionadas. Situación que estimuló el crecimiento

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	relacionadas con la producción de la hoja de coca, disminuyeron de forma ostensible debido al incremento de la inversión en otros sectores productivos.		económico a nivel departamental.
Relacionamiento histórico y corredores estratégicos entre Perú, Ecuador y Colombia.	Los gobiernos de Ecuador y Colombia implementaron el "Acuerdo de Esmeraldas", con el cual se logró incentivar la actividad turística, industrial y comercial en la zona fronteriza. Este acuerdo binacional generó divisas y aumentó la inversión extranjera en el territorio colombiano. Colombia, Ecuador y Perú fortalecieron también sus áreas protegidas fronterizas en el río Putumayo, situación que contribuyó a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible de la cuenca medio del río Putumayo. A la vez que se realizó el cuidado y protección de las áreas naturales, se estimuló el crecimiento de las actividades pesqueras y forestales de las comunidades asentadas en las zonas de frontera. Situación que mejoró sustancialmente la calidad	Con el fin del conflicto armado, las relaciones de Colombia con los países vecinos, en especial con Ecuador se deterioraron, debido a que los procesos de desmovilización trasladaron problemáticas sociales al vecino país, incrementando la ilegalidad en el comercio y trascendiendo el narcotráfico en otras regiones. Los Grupos Armados Ilegales se asientan y refugian en el territorio vecino, lo cual genera efectos perversos en las relaciones con los países vecinos y un aumento en los índices de seguridad, en las zonas de frontera. Así, el sueño de la conectividad por la cuenca de las amazonas es cada vez más lejano, debido a que el control territorial por parte de la fuerza pública es precario y las condiciones de orden público son tensionantes.	A pesar de que no se logró la finalización del conflicto armado, los gobiernos de Ecuador y Perú, en coordinación con el gobierno colombiano, implementan una serie de acuerdos que mejoran las fuentes de ingreso de las comunidades asentadas en las zonas de frontera. Se incentivan así las actividades pesqueras y forestales, que permiten mejorar la calidad de vida de la población putumayense. Y aunque las dinámicas del conflicto armado siguen trascendiendo y avivando conflictos sociales, y comerciales. Se fortalecen otros sectores económicos legales que posibilitan un mejoramiento de las

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	de vida y la sostenibilidad financiera de la población; y disminuyó la dependencia de la población en las dinámicas económicas ilícitas.		relaciones entre los países vecinos.
Cuenca alta del río amazonas – patrimonio amazónico y biodiversidad como oportunidad	Con el fin del conflicto armado, se consideró por parte del Estado la necesidad de preservación y cuidado del medio ambiente. Esto trajo consigo la implementación de estrategias educativas de conservación, erradicación manual de los cultivos de uso ilícito y una actitud de profundo respeto con el entorno natural y las culturas tradicionales. Bajo este contexto, la sociedad civil logró un nivel de consolidación regional tan fuerte que fue capaz de proponer, adoptar y ejecutar de manera responsable y consensuada, una propuesta legítima para la conservación y cuidado del entorno natural. Así, se garantizaron y aprovecharon de manera sostenible las potencialidades y ofertas de esta parte de la amazonia colombiana.	Con la ausencia de controles por parte de las autoridades locales y el Estado central respecto a las actividades realizadas por los GAI (minería y extracción de petróleo de forma ilegal en el Oleoducto Trasandino), continuó la tala indiscriminada de bosques, deterioro y contaminación de ríos. Se empezó a notar la disminución del agua por efecto de la extracción indiscriminada de petróleo, la tala aleatoria de bosques y la ausencia de controles ambientales. Así mismo, los cultivos ilícitos aumentaron de forma considerable, de tal forma que incrementó la fumigación con glifosato, lo que generó efectos perversos sobre el medio ambiente. Bajo este contexto, no se impulsaron medidas integrales que velaran por el cuidado del entorno ni que hicieran viable y sostenible el aprovechamiento de los recursos naturales de esta	A pesar de que el conflicto armado continuó, el Estado recuperó su legitimidad en el territorio a través de la implementación de un plan regional para la conservación y cuidado del entorno ambiental. Empero, en el territorio hubo presencia permanente de Grupos Armados Ilegales, lo cual puso en riesgo la seguridad de la población, la infraestructura empresarial y de vivienda, y algunas zonas de reserva ambiental. El narcotráfico, los cultivos ilícitos y la minería ilegal continuaron como actividades de sustento de los GAI, por ello, los recursos naturales siguieron expuestos a impactos considerables. Sin embargo la sociedad

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	Desde entonces, aquel interés por conservar la diversidad biológica y cultural se tradujo en un marco legal e institucional cada vez más sólido. Así se mitigaron al máximo los daños causados por las actividades ilegales y economías de enclave, asegurándose que se renovaran permanentemente los recursos. Por otro lado, se estableció la creación de nuevas zonas de reserva forestal destinadas al desarrollo de la economía de esta especie, la producción de los suelos, las aguas y la vida silvestre. Se incluyó además a los pueblos indígenas en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. De esta manera, la diversidad biológica se convirtió en un elemento clave para fomentar el desarrollo y el turismo; así como la calidad de vida de los habitantes.	parte de la amazonia colombiana.	civil organizada, en coordinación con el Estado, se articularon para disminuir los impactos de las actividades ilegales sobre el medio ambiente e implementar medidas para el tratamiento y cuidado adecuado del entorno natural.

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
Explotación ilegal de madera local y transfronteriza con controles ineficientes.	El gobierno central en coordinación con las autoridades departamentales y municipales fortaleció la implementación del Pacto Contra el Tráfico Ilegal de Manera en el sector de Villa Garzón y en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Con lo anterior, se disminuyó el riesgo de la extinción de bosques naturales de la selva amazónica del departamento y se controló la explotación ilegal de manera local. Al mismo tiempo se aseguró la recuperación de los bosques afectados por la deforestación, en el pasado. El Pacto permitió controlar el corte, transformación y comercialización de la madera de forma ilegal. Y logró, gracias al trabajo realizado por diferentes ONG, transportadores, fabricantes y comerciantes del sector maderero, la compra y venta de madera legal. Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios	La finalización del conflicto armado no trajo consigo la disminución del mercado de madera ilegal en las zonas de frontera del departamento. Persistió la ausencia de controles por parte de las autoridades públicas y ambientales (de orden nacional, departamental y/o local) para controlar el fenómeno. Como consecuencia de lo anterior, se aceleró la desaparición de la masa forestal de la región, así como los grandes sumideros naturales de carbón que absorben el CO^2 de la atmósfera y renuevan el aire. Los terrenos de árboles talados se destinaron para la explotación agrícola y ganadera, disminuyendo en gran medida la capacidad de los suelos para controlar el clima del departamento. Situación que trajo consigo la emergencia de desastres naturales.	A pesar de la continuación del conflicto armado en el territorio, las instituciones del Estado aúnan sus esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de manera. La sociedad civil se articula con el gobierno departamental y local para incentivar procesos alternativos de producción, que permitan mejorar la fuente de ingresos de las comunidades que antes se beneficiaban por esta labor. Empero, los Grupos Armados Ilegales continúan ejerciendo monopolio del tráfico ilegal de madera, y algunas zonas de la selva amazónica siguen viéndose perjudicadas por dicha actividad. Al igual que el narcotráfico, la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería ilegal; el tráfico ilegal de madera se constituye como una

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	Ambientales (IDEAM) lograron consolidar dos nuevas zonas de conservación ambiental. Así, se impulsaron proyectos sostenibles que contribuyeron a la disminución de tala indiscriminada árboles en las zonas con mayor influencia de este tipo de actividad en el Putumayo.		de las actividades de sustento de los GAI, por ello, los recursos naturales aún siguen expuestos a impactos considerables, relacionados principalmente, con la deforestación.
Cooptación de poderes locales por expresiones ilegales basadas en violencia.	Los niveles de gobernanza se aumentaron debido a que el fortalecimiento institucional copto los espacios que históricamente estaban abandonados por el Estado. La toma de decisiones en temas de cultura electoral se fortaleció y la elección es estudiada por parte de los ciudadanos. La disminución de la corrupción en los procesos de contratación hizo que el avance en los proyectos de infraestructura vial y estratégica fuera palpable	Los recursos económicos para el Putumayo siguen siendo irrisorios, los temas de consolidación territorial se vuelven imposibles debido a que la región no tiene el espaldarazo económico para generar escenarios de desarrollo e institucionalidad. Los líderes políticos son refundacionistas, siguen pensando que “la historia del municipio empieza con ellos, *“hoy y conmigo es el desarrollo y futuro”.* La distribución de los recursos para los diferentes programas sociales en el departamento sigue permeados por los	El Estado se readecuó para llegar a los territorios e implementó una estrategia de permanencia en la cual creó condiciones de desarrollo, que lo legitimaron y a su vez deslegitimaron a los actores armados y sus causas. La política limpia es un obstáculo para los actores armados ilegales, la descentralización administrativa fracasa y la centralización se acentúa debido a que

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	en la región; los planes de desarrollo y ordenamiento territorial fueron vitales para la consolidación de las vías de comunicación. Por otra parte la extorsión a los proyectos de desarrollo se acabó debido a que los actores armados se desmovilizaron y acabaron con ese tipo de prácticas. Al no estar presente el conflicto ya no hubo excusa para sacar los temas de ordenamiento territorial y saneamiento y regulación de la propiedad de la tierra. En pocas palabras, se acabaron las excusas para avanzar "…Se acabó la rumbita en la que estábamos, y nos pusimos a trabajar" sabiendo gobernar la diversidad y acabando el conflicto entre las relaciones autonómicas y la visión central.	intereses particulares de una clase política corrupta. La debilidad del Estado en el territorio genera una serie de dificultades en tanto no se gobierna el territorio, no se plantean soluciones compartidas de la visión de futuro del departamento. A pesar de haber terminado el conflicto armado, la competencia regional por apropiarse de los recursos públicos en los procesos de contratación es una constante, que acrecienta la división política y fortalece los caudillismos en la región. El rezago de la infraestructura estratégica del departamento llego a niveles insospechados y las oportunidades de comercializar y movilizar productos dentro y fuera del país es cada vez más difícil.	los grupos armados siguen permeando la clase política local. El Estado se volcó a los territorios para tener procesos más descentralizados desde lo administrativo. Los consejos municipales de planeación tienen peso y convergen con el plan de desarrollo y la visión técnica y programática del territorio, aunque el conflicto continuo, la región concibe su desarrollo desde la periferia y no desde el centro. Se miran las experiencias en lo local que requieren asideros más institucionales, con esto, el fortalecimiento institucional se acentúa. La redistribución de los recursos es óptima a pesar que el conflicto sigue.
Ascendencia social de la insurgencia, ejercicio de autoridad y	El fin del conflicto armado propició escenarios de participación social y política en la región, donde ahora la población se puede expresar sin temor	La herencia de la violencia fue disminuyendo, debido a que los agentes históricos que la propiciaban se desmovilizaron. Sin embargo, la baja presencia institucional	La pacificación por la vía armada obliga al Estado desplegar instituciones a las regiones especialmente las

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
organización comunitaria.	amenazas o retaliaciones. El mejoramiento de la gobernabilidad y oferta institucional en la región disminuyó de forma ostensible las prácticas extorsivas de grupos ilegales en la región. Los procesos electorales son ahora garantía de la democracia en la región. Las campañas políticas se realizan sin el temor del pasado donde todo era manipulado por los intereses de turno en la región; hoy, el ejercicio político es dignificante, transparente y sinónimo de interés y aporte al desarrollo del departamento. Por otra parte, la policía recupero su estatus de función de policía civil y las fuerzas armadas se dedican a realizar soberanía en la región, ayudando a la gobernanza y confianza en las fronteras de un territorio que es ejemplo de superación a nivel nacional. La población indígena es un actor importante para el ejercicio de la gobernanza, sin la presión de los Grupos Armados Ilegales, las acciones de las autoridades indígenas van en la línea de	y la falta de programas que incentivaran otras dinámicas económicas en la región, hizo que los actores desmovilizados terminaran engruesando las filas de las BACRIM presentes en el territorio. La minería ilegal y los cultivos de coca son actividades que se salieron de control y siguen propiciando la violencia en el territorio debido a que estos actores ejercen un control territorial en la zona con el fin de poder sacar su mercancía al exterior.	referentes a la FFPP. El gobierno nacional y departamental cambia la visión en la toma de decisiones de la inversión del territorio y se focaliza la inversión a las vocaciones del entorno. El Narcotráfico y la minería ilegal siguen como actividades de sustento de los grupos armados ilegales quienes demuestran su control territorial mediante ataques a la infraestructura estratégica de la región, afectando así a la población civil.

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	la conservación y sostenibilidad que la región ha acogido como estandarte de su desarrollo.		
Retaguardia estratégica de las FARC – riesgo de atomización.	La política antidroga a nivel nacional presentó un giro drástico. Hoy no se ve como un problema de orden público, terrorismo y narcotráfico, sino se toma como una problemática de salud pública. A partir de ese cambio de visión los controles y políticas públicas nacionales sustituyeron los cultivos de coca por proyectos agrícolas atractivos a la población, disminuyendo y convirtiendo el cultivo de coca como un producto tradicional de la cultura y necesidad medicinal de los pueblos indígenas de la región. Así mismo, en la ruta hacia el fin del conflicto armado, el Estado y las autoridades ambientales del departamento; tomaron el control de los recursos mineros, dejando atrás la época donde grupos armados ilegales eran dueños y señores de la minería. Así mismo, donde la contaminación ambiental, los conflictos entre la población y los abusos a los	La herencia de la violencia fue disminuyendo, debido a que los agentes históricos que la propiciaban se desmovilizaron. Sin embargo, la baja presencia institucional y la falta de programas que incentivaran otras dinámicas económicas en la región, hizo que los actores desmovilizados terminaran engruesando las filas de las BACRIM presentes en el territorio. La minería ilegal y los cultivos de coca son actividades que se salieron de control y siguen propiciando la violencia en el territorio debido a que estos actores ejercen un control territorial en la zona con el fin de poder sacar su mercancía al exterior.	La pacificación por la vía armada obliga al Estado desplegar instituciones a las regiones especialmente las referentes a la FFPP. El gobierno nacional y departamental cambia la visión en la toma de decisiones de la inversión del territorio y se focaliza la inversión a las vocaciones del entorno. El Narcotráfico y la minería ilegal siguen como actividades de sustento de los grupos armados ilegales quienes demuestran su control territorial mediante ataques a la infraestructura estratégica de la región, afectando así a la población civil.

Variable	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	DDHH eran la constante al interior de esta actividad.		

SUBREGION SARARE

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
Influencia en mecanismos de protección y regulación de la comunidad	El fin del conflicto armado ha generado la tranquilidad necesaria, frente a la coerción por la insurgencia, de líderes sociales y actores políticos, para emprender un ejercicio vigilante y crítico sobre las dinámicas propias de la región. En este sentido, se articularon todos los movimientos y filiaciones políticas para establecer modelos de convivencia y atención a problemáticas sociales y delictivas que pudieran afectar a la región luego del proceso de desmovilización de las estructuras militares de los grupos subversivos. La materialización de estas discusiones derivó en la formulación de los planes de convivencia por cada uno de los municipios que componen la región del Sarare. Además, la incorporación a la base política y social de antiguos miembros de las organizaciones subversivas implico una legitimización de su rol como actores influyentes en la región. Entre tanto, las instituciones que velan por la protección de los derechos humanos, han hecho más visible su actividad, lo que se ha impulsado a través de las comisiones de la verdad que se articularon como parte de	La finalización del conflicto armado creó un escenario donde diversos actores competían electoralmente por el liderazgo social y político de la región, conllevando a que se conformaran zonas vedadas para la correcta implementación de los acuerdos que se dieron en La Habana. Las disputas por reconocimiento generaron conflictos intersectoriales entre las nuevas fuerzas políticas que se conformaron durante la etapa de negociación. Los nuevos actores políticos desmovilizados polarizaron los debates hasta llevar a una situación de ingobernabilidad que truncó la formulación de políticas. Dado que los consensos no se han dado, algunos sectores políticos y sociales no están a favor de los roles decisorios que algunos ex-insurgentes, como parte de los acuerdos de la Habana, asumieron. Una muestra adicional de la polarización política postconflicto es la desarticulación para la presentación de proyectos de cooptación de recursos de regalías. Los proyectos de desarrollo e infraestructura, como los planes de seguridad y	Las políticas impulsadas por el gobierno para la consolidación territorial fueron mucho más robustas dado el fracaso de la negociación para ponerle fin al conflicto armado. Esto implicó el volcamiento del interés por robustecer la presencia de entidades garantes y de protección de derechos humanos. Así mismo la comunidad, en aras de mejorar la situación de convivencia en el municipio, tomó conciencia y planteó escenarios para discutir la eventual implementación de políticas que regularan la convivencia. Entre tanto, las ONG y fundaciones de base social mantienen su preponderancia en el entorno y han visibilizado de manera más eficiente la problemática que se extiende por toda la región en cuanto al acceso de la población, especialmente de las zonas rurales, a los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos. Esto ha conllevado a que se impulse continuidad de estrategias de asociatividad y cooperativismo como factores que fortalezcan la resiliencia comunitaria y le permita soportar los embates del conflicto que aún,

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	los acuerdos que se firmaron en La Habana. Las instituciones locales - gobernación y alcaldía - fortalecieron su rol en el desarrollo territorial gracias al apoyo reforzado del gobierno central a la institucionalidad regional. Esto además impactó positivamente en la actuación eficiente y transparentes, que además fue avalada por los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas que fueron favorecidos durante la fase de postconflicto Gracias al nuevo ambiente que se percibe en el Sarare con respecto a la convivencia y a la confianza que generaron los acuerdos que firmó el gobierno con las FARC y el ELN, las comunidades tomaron mayor conciencia de la administración eficiente de los recursos públicos, incluso las regalías, constriñendo las condiciones que permitían la corrupción y malversación.	convivencia en los municipios no han logrado tener el trámite necesario para su estructuración. De otro lado, la institucionalidad pública no se ha robustecido en zonas periféricas de la región y prevalece la precariedad de los mecanismos para la protección de los derechos humanos. Esta ausencia ha sido utilizada por ONG y Colectivos de base social para emprender una cruzada en contra del gobierno nacional que ha evidenciado el abandono al que aún tienen sometidas a las comunidades.	después de tanto tiempo, permanece latente. Frente a esto, la región del Sarare se ha vuelto mucho más visible en el escenario nacional, conllevando incluso a que con regularidad se elaboren documentos que registren la actual situación de seguridad y convivencia que hacen vulnerable a la comunidad. En este tema en particular, la defensoría del pueblo ha asumido un rol fundamental con la elaboración de los Informes de Alertas Tempranas donde se registran la coyuntura frente a estos aspectos.
Cooptación de las instituciones por grupos ilegales / Fuerte Influencia de FARC y ELN	El marco de postconflicto disminuyo la cooptación de las instituciones públicas y la incidencia de acciones intimidantes por parte de grupos armados a las autoridades municipales y los líderes comunitarios de la zona, liberando un espacio de debate democrático pacifico sobre los temas sociales. Esta situación	El acuerdo de paz firmado por las dos principales guerrillas del departamento conllevó a la dejación de armas sin establecer reglas claras para la participación política de los desmovilizados. Unos antiguos actores armados del departamento siguieron utilizando la intimidación para acondicionar las	A pesar de la continuación del conflicto en la región, el Gobierno central volcó una mayor cantidad de recursos, tanto económicos como institucionales, para incentivar el desarrollo económico y social de la región, y combatir los argumentos que invocaban las estructuras subversivas

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	empezó a desdibujarse desde la firma del acuerdo de paz, volcándose hacia prácticas legales y legítimas en las que los desmovilizados tuvieron la oportunidad de participar activamente en la política regional, permitiéndoles asumir un rol decisorio sobre el desarrollo de la región. Las autoridades regionales fueron verdaderamente autónomas en la toma de sus decisiones, integrando los antiguos líderes subversivos en la participación política democrática que permitió acuerdos consensuados de desarrollo económico y social inclusivo par todo el departamento.	discusiones en las que quieren participar. A esta problemática se le sumió la persistente debilidad institucional y la escasa cobertura de la agencias del Estado, fomentando la corrupción y la malversación de los recursos públicos señalados para el desarrollo económico y social de la región. Los procesos de desmovilización no apoyaron la reinserción económica y psicosocial de los ex-combatientes, derivando en una falta de oportunidades laborales y una estigmatización por parte de la comunidad que desustancia los esfuerzos de rehabilitación. La reincidencia en hechos violentos de miembros de las antiguas estructuras subversivas acompaña la permanencia de actividades económicas ilegales como el narcotráfico y contrabando de combustible.	para ejercer dominio territorial. En este sentido, además de fuerza pública para prevenir y combatir las acciones violentas de FARC y ELN, el Gobierno Nacional y Departamental implementaron con más rigor y celeridad el plan de consolidación territorial, que entre otras cosas dio vial libre a proyectos de inversión y programas sociales que poco a poco han ido deslegitimando la lucha armada. La alineación de políticas empresariales de responsabilidad social localizadas y de largo plazo benefició los residentes del Sarare, proporcionando mayor empleo y productividad de las iniciativas productivas en la región, y disminuyendo el impacto de discursos subversivos opuestos a la industria petrolera.
Pobreza Extrema	Los indicadores de pobreza extrema en la región han ido disminuyendo en la medida que se ha fortalecido la presencia institucional. Esto indica que no sólo ha incrementado el pie de fuerza para contrarrestar eventuales manifestaciones violentas de parte de actores que aún continúan	En el ideario de la población, la finalización del conflicto implicó un incremento de recursos por parte del gobierno central que combatieran los altos índices de pobreza en la región. Sin embargo, la comunidad del Sarare continúa albergando sentimiento de marginalización de parte de las políticas que el Gobierno	Una de los mayores condicionantes para la situación de pobreza extrema radica en precaria institucionalidad para atender las necesidades de la población. En este orden, si bien prevalecen situaciones violentas que por ende conlleven a la restricción en la movilidad que posibilite a las instituciones públicas la

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	ejerciendo dominio territorial, sino Entidades como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) articularon sus intervenciones, logrando un mejoramiento notable de los indicadores sociales. Los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas que rondaban en 2014 el 35% para el área urbana y el 65% para las áreas rurales, han venido descendiendo sustancialmente por el impacto favorable que ha traído el fortalecimiento institucional y el acompañamiento, formulación y financiación de proyectos productivos que ha impartido el sector privado.	Central implementó como resultado de los acuerdos de La Habana. En zonas como Samoré y Cubará, todavía se percibe el descontento frente a la falta de resultados que dejaron las negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados. La situación de aislamiento económico e institucional y la precariedad económica sigue prevaleciendo. Los indicadores de pobreza extrema aún siguen posicionando a esta región como una de las más pobres del país. La escasez de proyectos productivos sostenibles mantiene la población en actividades económicas se sobrevivencia, y en situaciones de desnutrición en la población rural. El déficit de acceso a servicios públicos domiciliarios y agua potable suscitan reiteradamente manifestaciones de parte de las comunidades.	atención de las necesidades de la población, el Gobierno Central ha dispuesto de gran cantidad de recursos para mitigar estas condiciones. Así pues, el plan de consolidación territorial y el CONPES de frontera, han sido dos de los instrumentos con los que el Estado ha incursionado en el territorio. Instituciones como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) articularon sus intervenciones, han robustecido sus funciones en el territorio y contrarrestado indicadores como la desnutrición o la mortalidad infantil.
Conflicto de jurisdicciones entre gobierno central y resguardos	El cese del conflicto armado permitió que los niveles de diálogo entre el gobierno y las autoridades de todos los sectores indígenas que convergen en la región del Sarare aumentaran,	El fin del conflicto armado de ninguna manera supuso la anuencia de las autoridades indígenas para la explotación de los recursos naturales de la región.	Los actores subversivos continúan reivindicando de forma violenta algunos intereses de la población indígena, y presionándola para que usen la consulta previa como un mecanismo

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
Resguardo indígena importante (U'wa)	garantizando el verdadero reconocimiento institucional de un Estado multicultural y pluriétnico y la implementación adecuada de las medidas del *Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales* o la *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. El mejoramiento del diálogo ha permitido el abordaje de las consultas previas con mayor facilidad. Con el beneficio de no tener a actores armados reivindicando los derechos culturales de las comunidades indígenas, se lograron capitalizar iniciativas de cooperación. La extracción de petróleo en la zona, por la que se habían antiguamente suscitado la mayoría de los conflictos, genero dinámicas productivas que involucraron las etnias locales, proporcionando más empleos directos e indirectos, compras locales y capacitaciones productivas. Entre tanto, las comunidades indígenas han ido fortaleciendo sus capacidades de autogestión, consolidando el liderazgo de sus líderes para formular políticas de desarrollo desde sus perspectivas tradicionales. Se impulsaron programas productivos que permitieron la sustentabilidad	La coerción que ejercieron particulares sobre los indígenas exacerbo el conflicto histórico entre el gobierno y los indígenas por el uso del suelo. Las consultas previas fueron utilizadas como instrumentos de presión en las relaciones cada vez más transaccionales con el sector extractivo. Las exigencias de comunidades indígenas afectadas no brindaron beneficios de largo plazo sus poblaciones. Las contribuciones socio-económicas de las empresas, como las transferencias del gobierno fueron dilapidadas sin apoyar inversiones sociales, educativas, productivas o de salud. El antagonismo entre la visión ancestral del "buen vivir" de los pueblos indígenas (la conservación del entorno natural para satisfacer necesidades básicas de vida) y los modelos de desarrollo impuestos por políticas públicas del Estado permaneció.	que trunque cualquier tipo de interés inversionista o actividad económica que se pretenda desarrollar. Sin embargo el Gobierno ha adelantado acercamientos con la comunidad U'wa para fortalecer los canales de diálogo y solucionar los conflictos existentes sobre la jurisdicción de territorios. Además de esto, dada la prevalencia del conflicto en la zona, la presencia de las ONG y la cooperación internacional ha sido mucho más activa, brindando a las comunidades herramientas para fomentar su liderazgo, autogestión y sustentabilidad. Las instituciones indígenas se fortalecieron, desarrollando e implementando en los resguardos Planes de Vida basados en los principios del Buen Vivir: 1. Vivir en paz y con control sobre los territorios y sus tierras como base espiritual y material de su existencia. 2. Respetar y cuidar a al medio ambiente que sufre cada día el impacto y los daños generados por la humanidad. 3. Reconocer y valorar en pie de igualdad las identidades y culturas indígenas. 4. Participar en las decisiones sobre los asuntos

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	económica y social de los resguardos. El fortalecimiento del conocimiento tradicional vigorizó instituciones como los mercados para el trueque, y preservo el modelo de agricultura tradicional (mejores semillas, mayor productividad) bajo el control cultural de iniciativas entrando a las comunidades indígenas. Los programas estatales de alimentos donados fueron eventualmente rechazados porque amenazaban la soberanía alimentaria, generando una dependencia económica nefasta.		que conciernen los pueblos indígenas. 5. Configurar libremente el modelo de administración adecuado a sus instituciones tradicionales.
Impacto ambiental por derrames de petróleo	Con el cese de acciones violentas de parte los grupos subversivos en contra de la infraestructura petrolera, los derrames de crudo disminuyeron significativamente. Además, el Gobierno Nacional y las empresas explotadoras de crudo crearon comisiones técnicas para dar una respuesta rápida y oportuna a las afectaciones ambientales sucedidas por fallas técnicas. Por tanto, las fuentes hídricas han logrado recuperarse. Esto significó incrementos productivos en actividades como la pesca y la agricultura que	Pese al cese de hostilidades de parte de los grupos subversivos, aún persistieron las afectaciones a la industria petrolera generadas por la delincuencia común. La falta de oportunidades económicas de reinserción para los desmovilizados alimentó dinámicas extorsivas por parte de grupos criminales que siguen atentando a la infraestructura industrial del departamento. El conflicto de interés de comunidades locales, afectadas por los derrames de petróleo pero contratadas para los labores de descontaminación, mantuvo una posición ambigua de los	Los derrames de petróleo provocados por acciones violentas de parte de grupos subversivos, ahora son generados por las prácticas de la delincuencia común que busca obtener beneficios económicos. Para mitigar esto, el Estado fomentó sinergias intersectoriales para la formulación de programas productivos de la región, impulsando proyectos productivos para contrarrestar la dependencia de las comunidades sobre la industria petrolera, exhortándolas a que vuelquen su mano de obra hacia actividades agrícolas y

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	históricamente eran las mayores perjudicadas por el derrame de crudo. El apoyo institucional y del sector privado a estas actividades económicas creo una dinámica de intereses compartidos entre las empresas extractivas (de petróleo o de minería) y la población. Residentes locales se convirtieron en custodios de los oleoductos para proteger la viabilidad de sus vocaciones productivas. Los afluentes hídricos cómo el Río Róyota y sus cuencas han empezado a recuperarse de la contaminación causada por los derrames de petróleo lo que dio tranquilidad a las comunidades sobre la potabilidad del agua que consumían.	sarareños frente a los atentados. En este sentido, si bien los derrames de crudo han disminuido ostensiblemente, se mantiene la preocupación general sobre la contaminación de los afluentes hídricos de los que se abastece la comunidad de agua para consumo y uso en sus actividades económicas.	pecuarias que dinamicen la economía de la región. Poco a poco ha logrado fortalecer la conciencia ambiental y generar alternativas laborales, disminuyendo los atentados.
Conflicto de jurisdicción con frontera de Venezuela y competencia por recursos del suelo	El fortalecimiento de la presencia estatal que surgió luego de la firma de los acuerdos de paz, permitió un mayor control de la frontera, y una recuperación de las instituciones locales, de ambos lados de la frontera. La penetración de gobiernos locales por grupos armados en Arauca y en el estado venezolano de Apure disminuyo, fomentando una mayor cooperación institucional y económica transfronteriza.	A pesar del acuerdo de paz, las dinámicas transfronterizas de contrabando (gasolina y mercancías desde Venezuela; drogas y armas desde Colombia) se mantuvieron. La falta de fortalecimiento del control y la supervisión de las fuerzas públicas en ambos lados de la frontera no permitió reducir las actividades ilegales. Los procesos de reinserción no brindaron oportunidades laborales atractivas para ex-guerrilleros. Las estructuras criminales, alimentadas por el rango de grupos armados desmovilizados, consolidaron	La continuidad del conflicto implicó que el gobierno elaborara programas binacionales con los países donde se presumía que existía influencia de las organizaciones Subversivas. En este sentido, las relaciones con Venezuela, que se articularon con base en el respeto por la diferencia, esta vez trascendieron a la materialización de medidas de choque para contrarrestar las dinámicas ilegales que históricamente habían afectado a la región.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	Medidas para contrarrestar actividades como el tráfico de gasolina y bienes de consumo desde Venezuela a Colombia, o de armas y estupefacientes desde Colombia a Venezuela, se impusieron de manera más eficiente que en el pasado. La supervisión de la fuerza pública colombiana y venezolana en la frontera redujo las arbitrariedades en contra de la población fronteriza gracias a una mayor cooperación entre cancillerías.	su control sobre las instituciones regionales para seguir aprovechando la bonanza económica de los varios tráficos transfronterizos.	A partir de ello, se ha evidenciado como la fuerza pública, tanto colombiana como venezolana, han permanecido en la zona y han combatido conjuntamente la presencia de actores ilegales.
Ausencia del Estado y Servicios públicos	La precariedad institucional que caracterizaba a la región y que incluso servía de argumento para la lucha subversiva fue mitigada gracias a la labor que se propuso el gobierno nacional para impulsar la gobernabilidad en las regiones periféricas del país. En este sentido se volcaron recursos públicos en procura de atender las demandas institucionales de la población y por ello hoy día es más fácil acceder a servicios como los microcréditos y la ayuda técnica para la estructuración de proyectos productivos, incluso el acceso a las instituciones se hizo más	La finalización del conflicto armado no trajo consigo la institucionalidad que anheló la población del Sarare durante muchos años. A pesar de ser una de las zonas de consolidación territorial, esta sólo se materializó con el incremento de fuerza pública. No se tuvo en cuenta que, más allá de un problema de orden público que afectara la seguridad de la población, prevalece un problema estructural que debe ser atendido con medidas políticas e institucionales que contrarresten métodos y reivindicaciones de grupos armados ilegales.	La presencia del Estado se vio fortalecida ante la continuidad del conflicto armado. El Departamento para la Prosperidad Social, la Cancillería, el Ministerio del Interior y sus dependencias, entre otros, volcaron sus funciones hacia la estructuración de un plan de desarrollo regional que contemplara la permanencia del conflicto y se pudiese adaptar a las coyunturas que generaba la presencia de Guerrillas en el Sarare. Además se priorizó en la ejecución de los programas establecidos en la política de consolidación territorial y el CONPES de fronteras, lo que ahondó en cantidad y calidad de iniciativas para el desarrollo regional. El gobierno empezó a combatir las causas estructurales de violencia y las cuales son esgrimidas por la subversión para afianzar su control territorial.

Variables	Escenario 1: Fin del conflicto + Desarrollo / Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del conflicto sin Desarrollo	Escenario 3: Desarrollo sin Fin del conflicto
	fácil y benevolente para la población. Por otro lado, los servicios públicos domiciliarios, fundamentales para el desarrollo integral de las comunidades, han ido ampliando su cobertura; las autoridades nacionales y municipales han formulado proyectos coherentes y sostenibles para mitigar, sobre todo, el déficit de agua potable que tiene la región. Entre tanto, la cobertura del servicio de energía se universalizó, pues las compañías prestadoras del servicio pudieron extender el tendido eléctrico con temor de enfrentar acciones violentas que afectasen su infraestructura.		

VICHADA

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
Conflicto entre concepciones de desarrollo	Mejoras en el desarrollo y la gobernabilidad regional se dieron por medio del tratamiento a problemas sociales, económicos y culturales. En el Vichada estos problemas, en parte, se generaban por las diferencias en la cosmovisión de los pueblos indígenas, colonos y migrantes. • El ingreso de actividades económicas estuvo acompañado de acciones institucionales, enmarcadas en la conciencia de sostenibilidad, llevando a establecer diálogos permanentes entre las comunidades. • La conciliación entre las visiones de desarrollo fue fundamental para la construcción de tejido social, aceptándose nuevas formas de producción y modificando hábitos de vida, sin dejar a un lado su cosmovisión.	El fin del conflicto armado impuso una visión de desarrollo sobre la otra, primando la "occidental" centrada en la obtención de réditos económicos por medio de la explotación de recursos naturales. • Si bien no llegaron grandes capitales, la falta de institucionalidad generó una pérdida paulatina de valores indígenas, segregando la población más joven a dinámicas de salud y educación impropias de su cultura.	La incursión progresiva de agentes económicos no se hizo esperar, especialmente en actividades de hidrocarburos, agroindustriales y forestales. • Las actividades económicas contaron con consultas previas y procesos de socialización, aun así, la imposición del modelo centrado en la rentabilidad de capitales invertidos, suscito discordias entre colonos e indígenas. • La representatividad en el departamento se vio dividida entre los abanderados de las causas indígenas y los abanderados de la rentabilidad del capital.
	• El desarrollo se apalanco en las oportunidades laborales, fomentadas por el Estado, para garantizar el relevo generacional en	• El desinterés, que mostraban las generaciones de relevo en 2014, ante las labores tradicionales del campo aumentó. Las actividades productivas necesitaron	• Los cultivos de pancoger para la subsistencia de los terratenientes volvieron a darse en el departamento, a pesar de esto, los altos impuestos a la tierra y la

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	actividades agrícolas y pecuarias. • Se incentivó la integración de jóvenes colonos e indígenas, buscando mantener la cultura milenaria de los últimos, enfocando parte de su educación a su lengua, cosmovisión y saberes ancestrales. • Las empresas forestales y agroindustriales ayudaron a fortalecer las dinámicas de asociatividad en el departamento, agregándole la capacidad de mejorar las condiciones de empleabilidad y rentabilidad de los negociosos para los llaneros.	de migraciones masivas para garantizar mano de obra que viabilizara sus negocios.	falta de mano de obra para trabajarla generaron desplazamientos y ventas voluntarias a grandes empresas privadas. • El apoyo Estadal se dio con maquinaria y recursos en infraestructura, pero al no capacitar en el mejoramiento técnico de los procesos, las inversiones se desaprovecharon y la rentabilidad no mejoro para los terratenientes.
Solo 4 municipios para la mayor extensión del territorio: falta de control territorial.	El departamento del Vichada con sus 100.000 kms2 (aprox.) constituye uno de los departamentos más grandes de Colombia. A pesar de su gran extensión, solo contaba con cuatro centros poblados para el 2014. • La falta de control territorial fue atacada por medio de la construcción de vías de penetración, las cuales posibilitaron mejoras en la presencia institucional, aumentando la gobernabilidad en el	El fin del conflicto armado direccionó recursos a centros poblados, generando mejoras al acceso de la población a instituciones públicas. • La falta de infraestructura para la conectividad del departamento y el desinterés del Estado por zonas alejadas como el Vichada, generaron descontento en la población y los desmovilizados. • Las actividades ilícitas continuaron desarrollándose en	La continuación del conflicto armado con la guerrilla incentivó al aumento de presencia estatal en zonas históricamente desprovistas de control. • Las inversiones privadas incentivaron la creación de vías de penetración, pero el desarrollo de tales obras de infraestructura ha sufrido grandes retrasos, debido a la extensión del territorio y los costos de insumos para esto. • Con la ayuda de las TIC -Tecnologías de Información y

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	departamento y sus municipios. • Las inversiones económicas estuvieron supeditadas a las garantías del Estado sobre el control territorial, por lo cual, al finalizar el conflicto armado se hizo énfasis en la necesidad de tener presencia de la fuerza pública y de esta manera garantizar la seguridad ciudadana. • Como una primera medida el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación buscó llevar a la totalidad del territorio, acceso y capacitaciones enfocadas en el uso de herramientas tecnológicas. De esta manera, aprovechando los sistemas que se crearon para agilizar trámites en línea, los habitantes redujeron la necesidad de movilización a centros poblados –como Villavicencio y Puerto Carreño- alejados para realizar trámites dispendiosos.	zonas de difícil acceso para la fuerza pública. • Las inversiones privadas se estancaron generando un desaceleramiento en la incipiente economía del departamento y fomentando migraciones a zonas con mayores posibilidades.	Comunicación- fue medianamente posible acercar a las instituciones públicas a los habitantes del departamento. A pesar de esto, el control real de los territorios –presencia de la fuerza pública, mejoras en salud y educación entre otras necesidades- se mantuvo en manos de actores ilegales.
	• Las mejoras en infraestructura vial han sido lentas, debido a la extensión del territorio, pero en la mayoría de las vías principales se cuenta con terraplenes en buen estado.	• Los cuatro principales centros poblados –Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía- se desarrollaron lentamente, debido a que actividades petroleras,	

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	• El eje de conexión vial por el Orinoco no fue el único que se buscó explotar, el uso de vías terrestres compartidas con Venezuela constituyó una buena opción para la reducción de sobrecostos en los insumos.	agroindustriales y forestales buscaron la constitución de nuevos asentamientos cercanos a sus áreas de influencia.	
Debilidad institucional.	La firma del fin del conflicto armado posibilitó la modificación presupuestal, incentivando el acercamiento de la institucionalidad a toda la población. Uno de los principales ejes para esto, fue la construcción y mejora de las vías de penetración primarias, secundarias y terciarias. • La confianza inversionista creció, reflejándose en grandes proyectos agroindustriales y forestales en el departamento. • La situación geoestratégica del departamento cómo limítrofe con Venezuela, le concedieron necesidades institucionales, tratadas en una primera instancia, por medio de vías de penetración e inversiones en necesidades sociales utilizando las APP como	Al firmarse un acuerdo para el fin del conflicto armado, los recursos se concentraron en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la guerrilla, convirtiendo a departamentos que tuvieron alta presencia subversiva en el centro de desarrollo económico. El departamento del Vichada no recibió una fuerte atención ya que, en el 2014, no contaba con una fuerte presencia e influencia de la guerrilla. • El aislamiento del departamento se mantuvo a través de los años, las empresas privadas invirtieron los recursos justos para el mantenimiento de las vías que afectaban con sus actividades. La navegabilidad de los ríos y el uso de vías siguió dependiendo del invierno o el verano. • Las pocas inversiones privadas que existían buscaron sacar el	A pesar de la continuación del conflicto armado, las inversiones del Estado en vías de penetración generaron impactos positivos en el departamento. • Las inversiones privadas aumentaron, aprovechando la reducida presencia que tenían los grupos guerrilleros en el Vichada. • Las instituciones públicas se concentraron en centros de urbanos, pudiendo satisfacer las necesidades de los habitantes. • Las inversiones en cobertura e infraestructura de salud y educación se dieron por medio de APP. • Las mejoras en atención a las necesidades de la población, mejoraron la gobernabilidad en algunas zonas del departamento, pero en las más alejadas siguió

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	mecanismo de financiación. • El relacionamiento entre Estado, empresas y comunidades -inclusión y armonización entre colonos, negritudes e indígenas-, se dio en el marco de la formulación de políticas de desarrollo integral a corto, mediano y largo plazo, enfocadas en las necesidades y capacidades reales del territorio.	máximo de provecho a sus inversiones, pero paulatinamente se fueron trasladando a otros departamentos que les ofrecían garantías estatales para percibir rentabilidad de sus negocios. • La debilidad institucional se mantuvo, generando descontentos sociales y migraciones a zonas que contaran con presencia real del Estado y garantizaran el futuro de sus familias.	imperando la cultura de la ilegalidad.
	• La política enfocada a generar claridad por la situación de los derechos reales, implementada en el postconflicto, tuvo en cuenta los derechos de los colonos y comunidades indígenas, sin tener prelación por las necesidades de los actores que buscaban acceso al territorio.	• El desconocimiento de la situación de los derechos reales por parte de los tomadores de decisiones, suscitó inconformidades con los colonos ya que la informalidad de las transacciones generó pérdidas a muchos, puesto que sus predios eran considerados baldíos.	
Deforestación por actividades económicas legales e ilegales. Ganadería y narcotráfico.	La deforestación en el Vichada, fue resultado de la falta de presencia estatal y de controles a los impactos medioambientales. • Mejoras en la capacidad técnica y aumento de recursos financieros de las autoridades locales permitieron la organización de controles medio	El fin del conflicto armado no involucró a la totalidad de los miembros de la guerrilla, el narcotráfico y otras actividades ilícitas de gran rentabilidad fueron un factor determinante para esto. • La deforestación por siembra de cultivos ilícitos continúo. • El desmantelamiento de unidades productivas	La negativa de la guerrilla a un proceso para finalizar el conflicto armado incrementó la presencia de las fuerzas armadas en el territorio nacional, sumado a la presencia institucional que garantizó condiciones mínimas de vida para los Vichadenses. • La deforestación por ganadería o por

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	ambientales y de fuerza pública. • Los bosques de galería y la riqueza del Vichada fue protegía por medio de acuerdos internacionales para la conservación de las especies nativas. • Indígenas del Vichada, con la asistencia de organismos de cooperación internacional, aprovechando sus saberes ancestrales en medicina, alimentos y equilibrios medioambientales, desarrollaron proyectos productivos indígenas, que fortalecieron su economía y mejoraron las condiciones de calidad de vida de sus miembros.	de pancoger, derivadas del exceso de liquidez proveniente del narcotráfico y la venta de tierras, generó un aumento de la inseguridad alimentaria para los indígenas del departamento. • La falta de controles medioambientales de las instituciones públicas a empresas privadas y la reducida concientización, de los habitantes, sobre los impactos de la deforestación sin control, limitaron la dinámica de reconversión del departamento a vocaciones productivas compatibles con sus capacidades.	narcotráfico fue limitada. • La disminución del control territorial de la guerrilla y otros grupos armados ilegales permitió la reconversión de las actividades económicas, a unas equilibradas con el medio ambiente. • El ingreso de capitales, las inversiones en infraestructura y gobernabilidad en el departamento lo convirtieron en un sitio de interés turístico internacional. • Los reductos de guerrilleros y Bacrim mantuvieron, durante un periodo, su control territorial en zonas alejadas de centros poblados y de la institucionalidad pública.
Corrupción.	El fin del conflicto armado, el desarrollo regional y la gobernabilidad fueron aspectos que mejoraron al tiempo. • Los requerimientos de las empresas privadas para invertir, el control social a los funcionarios públicos y la elección consciente de candidatos, generó una modificación en la aceptación de conductas corruptas. • La participación de comunidades en la	El Vichada aprovechó la firma del fin del conflicto armado para buscar agotar la incidencia de la guerrilla en el sector público, puntualmente en municipios que tuvieron fuerte presencia de la guerrilla. • La ingobernabilidad y reducido desarrollo en los municipios modificó los actores que cometían acciones corruptas, pasando de los actores armados ilegales a líderes y funcionarios públicos,	Las capacidades institucionales en el departamento aumentaron, reforzando el papel del Estado de derecho. • Llevaron a una cohabitación de la presencia real de instituciones públicas y actores interesados en el mantenimiento de un statu quo a su favor. • Los controles a los recursos públicos favorecieron las inversiones en infraestructura, aunque

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	definición de prioridades de inversión y el condicionamiento de las regalías, generó la legitimización de los proyectos.	debido a reducidos controles a la inversión de recursos. • La satisfacción de intereses particulares sobre los intereses comunitarios generó conflictividad en el territorio.	el control territorial seguía siendo de los GAI.
	• El seguimiento de los recursos se convirtió en un tema prioritario, principalmente los recursos provenientes de las consultas previas.	• No hubo fortalecimiento a los dirigentes indígenas manteniéndose la corrupción local, por ejemplo la alcaldía de Cumaribo.	
Dinámicas del narcotráfico, minería ilegal, deforestación ilegales y otros.	Con el fin del conflicto armado, la institucionalidad pública tuvo una mayor capacidad para controlar los cultivos ilícitos, atacando estructuras armadas organizadas y generando atención a las necesidades de sus bases sociales. • El desarrollo de infraestructura, capacitaciones técnicas e inversiones privadas en el departamento generaron oportunidades económicas viables para los habitantes, por lo que su subsistencia dejo de depender del narcotráfico. • La atención a la población mediante garantías de educación, salud y servicios públicos básicos desincentivo el relacionamiento de	Luego del fin del conflicto armado, los grupos armados desmovilizados apoyaron la prohibición de los cultivos ilícitos, en aplicación del acuerdo "*Solución al problema de las drogas ilícitas*", firmado por el gobierno colombiano y la guerrilla en 2014. • El departamento no vio atendidas las necesidades de sus habitantes, ni un desarrollo económico que generará mejorías regionales. • La atomización de estructuras guerrilleras no participantes del fin del conflicto armado, permitió la continuación de flujos económicos ligados al narcotráfico y la cultura "traqueta" en algunas zonas.	La continuación del conflicto armado con la guerrilla, incentivó al Estado para agotar física y económicamente las estructuras ilegales. • Se reforzó la poca capacidad institucional que se tenía, buscando imponer el Estado de derecho y atacando la corrupción, con lo que se debilitaron las estructuras que fortalecían al narcotráfico y la ilegalidad. • El desarrollo de las vocaciones productivas pertinentes en el territorio y las inversiones extranjeras privadas, convirtieron la mayoría de superficies de cultivos ilícitos en áreas de cultivos legales rentables. • La despenalización y legalización de los

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	comunidades con la ilegalidad.		estupefacientes en varios países de América Latina impuso una competencia devastadora a los narcotraficantes de países prohibicionistas, resultando en una disminución sustancial de los cultivos ilícitos en Colombia.
Suelos pobres.	Las deficientes condiciones minerales de los suelos demandaban altas inversiones de dinero debido al fin del conflicto armado, capitales económicos se volcaron al Vichada, invirtiendo para el desarrollo de proyectos agroindustriales, de ganadería intensiva y proyectos forestales. • Los programas de reinserción direccionaron recursos para la mejora de la calidad mineral de las tierras, buscando, de esta manera, generar proyectos asociativos forestales o agrícolas que permitieran la construcción de tejido social en el Vichada.	El fin del conflicto armado generó mejoras en las condiciones de seguridad del departamento, pero la falta de inversiones económicas públicas desincentivaron la llegada de proyectos que invirtieran en la mejoría de los suelos del departamento. • Las debilidades en infraestructura vial y presencia estatal llevaron al mantenimiento del control territorial, en algunas zonas, de las Bacrim.	El desarrollo de infraestructura vial redujo el precio de los insumos, facilitando las inversiones para mejorar la composición mineral de los suelos. • Las inversiones económicas posibilitaron esquemas de asociatividad con grandes terratenientes y empresas privadas. Los pequeños y medianos campesinos no tuvieron la capacidad económica o técnica para obtener rentabilidad en sus cultivos. • El paulatino ingreso de instituciones públicas, que atendieran las necesidades de la población, generó arraigo en centros productivos, aun así, zonas alejadas de vías primarias e incluso secundarías siguen siendo controladas por actores ilegales.
Relacionamiento con las	La población indígena del departamento constituye	El fin del conflicto armado sin un acompañamiento	La continuación del conflicto armado no afectó

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
poblaciones indígenas.	más de una tercera parte del total de habitantes. El fin del conflicto armado supuso cambios positivos frente a sus condiciones de vulnerabilidad. • El interés del Estado en garantizar el buen desarrollo de las regiones incentivó la aplicación real de herramientas como la consulta previa, buscando armonizar los conceptos de desarrollo, satisfacer las necesidades de los indígenas y alejándolos de su condición de vulnerabilidad. • Las inversiones económicas estuvieron supeditadas a los controles de entidades encargadas del relacionamiento con minorías, lo cual generó espacios de entendimiento entre las necesidades y manejo del territorio indígena, con las actividades económicas extractivas. • El papel del estado como garante de seguridad física, social y económica de los pueblos indígenas, ayudo a dejar a un costado los conflictos que tenían las comunidades indígenas y los colonos.	institucional e inversiones, mantuvo las condiciones de ingobernabilidad del territorio. • Los conflictos entre colonos e indígenas se centraron en la explotación de recursos escasos para satisfacer intereses personales. • El reducido aumento de presencia estatal mantuvo a los GAI con el control territorial de algunas zonas, dejando vulnerables a grupos étnicos ante las actividades económicas ilegales. • El bajo desarrollo de infraestructura, para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes del departamento, generó grandes pérdidas culturales.	negativamente a las poblaciones indígenas, debido al aumento de inversiones económicas y el acompañamiento estatal. • Las inversiones económicas, generadas en el marco del relacionamiento con las comunidades indígenas, supusieron una mejora en sus condiciones de vida. • El paulatino acercamiento a zonas rurales por el desarrollo de proyectos productivos, mejoró los réditos económicos de las comunidades. Aun así, en zonas distantes para el Estado, siguen persistiendo problemas para satisfacer necesidades básicas. • El control territorial de Bacrim en territorios dedicados al narcotráfico, además del aumento de los enfrentamientos con el ejército, ha dejado a algunas poblaciones en medio de toda la problemática.
	• La protección cultural de los pueblos indígenas fue	• La falta de oportunidades educativas y laborales,	• La continuación del conflicto armado mantuvo un

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	enfatizada por actores locales e internacionales.	empodero a los actores ilegales, manteniendo el interés –o necesidad- de involucrarse en actividades ilegales.	involucramiento de jóvenes indígenas y colonos con grupos armados ilegales. El dinero fácil y el "poder", continuaron constituyendo el querer ser de las generaciones que precedieron el fracaso del fin del conflicto armado.
Eje de acceso al Orinoco y salida al Caribe.	El fin del conflicto armado suscitó nuevas inversiones para el desarrollo del país, pero estas exigieron garantías para la obtención de réditos económicos, debido a las deficientes condiciones de accesibilidad. • La navegabilidad de los ríos tomó gran importancia en el país. La altillanura se vio beneficiada con la reducción de precios para transportar productos e insumos. • A largo plazo, y por medio del desarrollo de políticas fronterizas con países vecinos, se lograron avances en acuerdos para el uso de territorio extranjero –zonas del Orinoco de Venezuela- con fines comerciales. • La Orinoquia como salida al Caribe fue uno de los centros de desarrollo económico, pero ha estado supeditada a las buenas	Las inversiones y el foco de atención dado por el fin del conflicto armado, beneficiaron a departamentos que tuvieron presencia de la guerrilla. • La navegabilidad de los ríos fue incentivada, buscando conectar los centros poblados entre sí, con otros departamentos y (dependiendo de las relaciones con Venezuela) con otros países por el Caribe. • A pesar del fin del conflicto armado, la falta de inversiones para la satisfacción de las necesidades de la sociedad, aumentó el sentimiento de aislamiento de Vichadense.	El desarrollo económico nacional tuvo como uno de sus principales pilares la conectividad nacional. Fueron ejecutados macro proyectos de infraestructura. En el departamento, se destacó como la mejor opción, aprovechar los canales fluviales para conectar al departamento interna y externamente. • La reducción en los costos de los insumos, el transporte de personas y carga generaron el crecimiento de las industrias e inversiones sociales. • Las facilidades de movilización aproximaron al Estado y sus instituciones a las comunidades, mejorando la calidad vida. • Las estructuras armadas ilegales en la altillanura vieron afectadas sus acciones, en algunas zonas, por el

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	relaciones con el vecino país.		aumento de la fuerza pública en polos de desarrollo.
	• El aprovechamiento de las similitudes culturales con los venezolanos de la Orinoquia, además de la venta de productos colombianos en el vecino país, genero mejoras en las condiciones de los vichadenses.		• La construcción de centros de acopio estuvo en manos de actores privados, agregando valor a los productos del Vichada y mejorando la rentabilidad de las actividades económicas tradicionales.
Fuerte impacto de actividades económicas externas en sus tradiciones productivas - migraciones etc.	Las vocaciones tradicionales de la región, centradas en la ganadería extensiva y cultivos agrícolas, se vinieron transformando por proyectos agroindustriales, ganadería intensiva, proyectos forestales y actividades del sector de hidrocarburos. • Con inversiones en vías de penetración e inversiones privadas se generó el aprovechamiento del potencial turístico regional como resultado del fin del conflicto armado. • Aprovechando las grandes extensiones de tierra, se fomentó la ganadería intensiva, los cultivos agroindustriales y proyectos forestales, involucrando a pequeños y medianos terratenientes por medio de asociaciones.	El departamento percibió algunos esfuerzos para fomentar el desarrollo económico, aun así, el interés en otras zonas productivas que no requerían grandes inversiones, mantuvo las pocas actividades productivas que se tenían a 2014. • Los grandes proyectos forestales, impulsados por empresas que ostentaban una gran liquidez, fueron de gran rentabilidad, dejando al pequeño y mediano terrateniente sin posibilidades de competir. • El lento desarrollo de infraestructura que permitiera conectividad, mantuvo los insumos con elevados precios. • Se generó una desaceleramiento de la economía y un descontento social, lo	Las inversiones económicas acompañadas del fortalecimiento de la educación, salud y satisfacción de necesidades básicas por parte del Estado, incidieron en la mejoría de la gobernabilidad y la calidad de vida de las personas. • Las asociaciones de pequeños y medianos campesinos, para el desarrollo de proyectos agroindustriales, fortalecieron el tejido social y mejoraron las condiciones de empleabilidad. • A pesar de la continuación del conflicto armado las actividades económicas continuaron. La prosperidad económica derivada del comercio y el eslabonamiento en cadenas de valor se mantuvo, pero no se acompañó con

Variables	Escenario 1: Fin del Conflicto Armado + Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 2: Fin del Conflicto Armado sin Desarrollo/Gobernabilidad	Escenario 3: Desarrollo y gobernabilidad, sin Fin del Conflicto Armado
	• El Estado hizo parte esencial del desarrollo económico, convirtiéndose en de la inclusión de la población, además de proporcionar la asistencia técnica requerida para el crecimiento económico del departamento.	que conllevo a la dependencia de actividades ilegales como el narcotráfico, empoderando y manteniendo el control territorial de los GAI.	presencia institucional que permitiera mejoras en la redistribución de los ingreso y de los recursos públicos, resolviendo necesidades de la población en condición de marginalidad.
	• Los grandes proyectos agroindustriales, forestales y la explotación petrolera en el departamento llevo a mantener un ambiente de incertidumbre frente a los impactos de estas actividades en el medio ambiente.		

ANEXO: CONSOLIDADO DE VARIABLES SUBREGIONALES

CAQUETA

Expectativas de reservas de hidrocarburos, pobreza, presiones regionales por autonomía, influencia social e institucional de grupos insurgentes, narcotráfico, flujos migratorios, deforestación por ganadería extensiva, influencia militar de grupos insurgentes, educación, salud, desarrollo agropecuario, explotación de maderables, retorno al área rural.

CASANARE

Dependencia del sector petrolero, Presiones regionales por autonomía, Influencia política del paramilitarismo, Corrupción, Estructuras criminales, Administración de los recursos hídricos, Afectación del medioambiente por actividad industrial, Acumulación de la propiedad de la tierra, Flujos migracionales, Expectativa de crecimiento económico multisectorial, Participación ciudadana, Alteración del orden público por conflicto social, Movilización de organizaciones sociales en contra de la actividad petrolera, Pobreza, Educación, Salud

CATATUMBO

Producción Agrícola, Contaminación Cuenca del Rio Catatumbo, Influencia Militar del ELN, Influencia Social del ELN, Influencia Militar de FARC, Influencia Social de FARC, Aislamiento Institucional, Presiones regionales por autonomía, Corrupción, Aislamiento geográfico, Bonanza y depresión de los cultivos ilícitos, Flujos migracionales, Expectativas por conformación de Zonas de Reserva Campesina, Tensiones Fronterizas con Venezuela, Movilización de organizaciones sociales, Pobreza, Educación, Salud

COVEÑAS

Corrupción, Influencia política del paramilitarismo, estructuras criminales con influencia socioeconómica, Restitución de tierras, Desplazamiento forzado, Vocación turística, Estado del recurso marítimo y costero, Áreas estratégicas de exportación de petróleo, Impacto ambiental sobre el Canal del Dique, Tensiones interculturales, Colonización antioqueña, Minería ilegal e informal, Pobreza, educación, Salud.

GUAJIRA

Manejo sostenible del agua, Multiculturalidad, Modelo económico extractivista, Soberanía alimentaria, Cultural de ilegalidad, Dependencia de economía ilegal, Contrabando, Generación de empleo, aislamiento Institucional, Cooptación del poder local por intereses ilegales, Tensiones fronterizas con Venezuela, Pobreza, Educación, Salud.

MAGDALENA MEDIO

Política de integración regional a largo plazo, Diversidad de visiones de desarrollo, Biodiversidad, Infraestructura para la integración regional, Calidad del modelo educativo, Integración de la región en la representación política, Desempleo, Actividad Pesquera, Narcotráfico, Competencias y liderazgo político, Agroindustria, Procesos de transformación productiva y diversificación, Desarrollo de ciencia y tecnología, Dependencia de actividades del sector extractivo, Influencia del sector extractivo minero-energético, movilización de organizaciones sociales, Pobreza, Educación, Salud.

META

Conflicto entre concepciones de desarrollo, Conectividad vial, corrupción, Transformación de las vocaciones económicas, Presiones regionales por autonomía, Posesión de tierras, Flujos migracionales, Cultura de la ilegalidad, Seguridad alimentaria, Presiones de grupos ilegales a la actividad petrolera, Despojo y usurpación de tierras, Impacto ambiental de actividades económicas, Impacto de recursos petroleros en el desarrollo, Pobreza, Educación, Salud.

NARIÑO

Producción de coca, Conflicto entre concepciones de desarrollo, Niveles de pobreza extrema en la zona costera, Infraestructura de conectividad, Comunidades indígenas, Comunidades afrodescendientes, Tensiones fronterizas con Ecuador, Diversidad ambiental, Presencia institucional, Inclusión social, Desempleo, Competitividad, Actividad pesquera, Maderables, Pobreza, Educación, Salud.

PUTUMAYO

Explotación ilegal de maderables, Patrimonio ambiental y biodiversidad, Influencia social de las FARC, Gestión institucional, influencia política de las FARC, ilegitimidad de las instituciones públicas, Capacidad de Organización de las FARC, Flujos migracionales, Dependencia de las economías informales e ilegales, Desarraigo por factores de violencia, Desconocimiento de la ley y cultura de ilegalidad, Multiculturalidad, Corredor estratégico de integración nacional, Tensiones fronterizas con Ecuador y Perú, Investigación y tecnología, Movilización de organizaciones sociales, Pobreza, Educación.

REGION DEL SARARE

Influencia socioeconómica, política y militar de las guerrillas FARC y ELN, Conflicto de jurisdicciones entre Estado y resguardos indígenas, Impacto ambiental por derrames de petróleo, Multiculturalidad, Ausencia del Estado, Influencia del sector extractivo minero-energético, Tensiones fronterizas con Venezuela, Tasa de desempleo, Movilización de organizaciones sociales, Pobreza, Educación, Salud.

VICHADA

Conflicto entre concepciones de desarrollo, Infraestructura de conectividad, Debilidad institucional, Deforestación, corrupción, Narcotráfico, Productividad de los suelos, Eje de acceso al Orinoco y salida al Caribe, Transformación de las vocaciones económicas tradicionales, Propiedad y tenencia de la tierra, Restitución de tierras, Pobreza, Educación, Salud.